

Prospecto

BANCOPATAGONIA

BANCO PATAGONIA S.A.

(constituido de conformidad con las leyes de la República Argentina)

US\$ 500.000.000

Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples

(No Convertibles en Acciones)

El presente prospecto (el “Prospecto”) de Banco Patagonia S.A. (“Patagonia”, el “Banco” o el “Emisor”), una sociedad anónima constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina (“Argentina”), describe los términos y condiciones del programa (el “Programa”) global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) (los “Títulos” o las “Obligaciones Negociables”) por hasta US\$ 500.000.000 o su equivalente en pesos o en otras monedas. Bajo el Programa, el Emisor podrá emitir periódicamente Obligaciones Negociables en una o más clases y/o series (las “Clases” y/o “Series”) como se estipule en cada suplemento de precio de este Prospecto (cada uno, un “Suplemento de Precio”) y hasta el monto nominal máximo en circulación en cualquier momento indicado precedentemente. Cada Suplemento de Precio describirá los términos y condiciones específicos de cada Clase y/o Serie de los Títulos que se emitan bajo el Programa, que podrán complementar y/o modificar los términos y condiciones contenidos en este Prospecto, pero en el caso de realizarse modificaciones no podrán éstas resultar menos favorables para los inversores que los términos y condiciones establecidos en el Prospecto.

Los Títulos que se emitan bajo el Programa podrán (i) ser denominados en la moneda o unidad de moneda, o en las monedas o unidades de moneda, que se convengan, (ii) tener el vencimiento mínimo desde la fecha de emisión que autorice la normativa vigente, (iii) emitirse a la par o con prima o descuento sobre la par, (iv) devengar intereses sobre una tasa fija o variable (o en relación con una base) o emitirse a una base totalmente descontada sin devengar intereses, (v) establecer que el monto anual pagadero por rescate sea fijo o en relación con un índice o fórmula, (vi) estar garantizados o subordinados, y/o (vii) establecer que el pago del capital y/o de los intereses deberá hacerse en una moneda o en monedas que no sea la moneda original de emisión.

Véase la sección “FACTORES DE RIESGO” con referencia a ciertos riesgos a ser considerados antes de realizar una inversión en los Títulos. El respectivo Suplemento del Precio podrá detallar otros riesgos que deberán también considerarse.

Oferta pública autorizada por resolución N° 16.950 del 25 de octubre de 2012 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”). Ampliación del monto y prórroga del plazo del Programa autorizada por resolución N° RESFC-2017-18933-APN-DIR#CNV del 14 de septiembre de 2017 de la CNV. Estas autorizaciones sólo significan que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en este Prospecto. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en este Prospecto es exclusiva responsabilidad del directorio del Emisor y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización del Emisor y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados contables que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley N° 26.831. El directorio del Emisor manifiesta, con carácter de declaración jurada, que este Prospecto contiene, a la fecha de su publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera del Emisor y de toda aquélla que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.

A la fecha de este Prospecto, ni el Emisor, ni sus beneficiarios finales, ni las personas físicas o jurídicas que tienen como mínimo el 20% de su capital o de los derechos a voto, o que por otros medios ejercen el control final, directo o indirecto sobre el Emisor, registran condenas por delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y/o figuran en las listas de terroristas y organizaciones terroristas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Banco Patagonia S. A. domicilio social en Av. De Mayo 701 piso 24°. Ciudad Autónoma de Buenos Aires; CUIT: 30-50000661-3, sitio web: www.bancopatagonia.com.ar.

Este Programa no cuenta con calificación de riesgo. Las calificaciones de riesgo serán solicitadas al momento de la emisión de cada Clase o Serie según se determine en el Suplemento de Precio respectivo, y conforme a lo que requieran las leyes y reglamentaciones aplicables.
--

Por asamblea ordinaria de accionistas del Banco de 26 de abril de 2012 se aprobó la creación del Programa y sus términos y condiciones. Por asamblea ordinaria de accionistas del Banco de 26 de abril de 2017 se aprobó la ampliación del monto y la prórroga del plazo del Programa, y la delegación en el directorio del Banco (con facultades a su vez de subdelegar) de los restantes términos y condiciones del Programa y de cada Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables a emitirse bajo el mismo. Por resolución de directorio de fecha 9 de mayo de 2019 se aprobó la actualización del Prospecto del Programa.

Los Títulos que se emitan constituirán obligaciones negociables de conformidad con la Ley N° 23.576 y sus modificatorias (la “Ley de Obligaciones Negociables”), tendrán derecho a los beneficios allí estipulados y estarán sujetos a los requisitos de procedimientos de dicha norma. Las Obligaciones Negociables que se emitan se colocarán conforme a la Ley N° 26.831, incluyendo el Decreto N° 1023/2013 (la “Ley de Mercado de Capitales”), y a las pautas y exigencias dispuestas en el Capítulo IV, Título VI de las Normas de la CNV (texto año 2013) (las “Normas CNV”), y cualquier otra ley y/o reglamentación aplicable.

El Banco podrá solicitar la autorización de listado y de negociación de las Obligaciones Negociables de una Clase y/o Serie en una o más bolsas y/o mercados bursátiles y/o extrabursátiles del país y/o del exterior, tales como listar en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) en virtud del ejercicio de la facultad delegada por la primera a la segunda, conforme lo dispuesto por la Resolución N° 18.629 de la CNV, y negociar en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”), según se especifique en el Suplemento de Precio aplicable.

Los Títulos podrán ser obligaciones simples, sin garantía e incondicionales del Emisor y tendrán rango *pari passu* sin ninguna preferencia entre ellas, o bien podrán ser subordinados o avalados o garantizados de conformidad a las disposiciones aplicables del Banco Central de la República Argentina (el “Banco Central” o el “BCRA”), según se disponga en el Suplemento de Precio respectivo. De conformidad con la legislación argentina, los depositantes del Banco tienen ciertos derechos de prioridad en el pago respecto de todos los otros acreedores quirografarios del Banco (incluyendo los tenedores de los Títulos) con el alcance establecido en la sección “*INFORMACIÓN DEL EMISOR - Marco Regulatorio del Sistema Financiero Argentino – Privilegios de los depositantes*”.

La emisión cumplirá con los requisitos establecidos en la Comunicación “A” 3046 del Banco Central, sobre colocación de títulos valores de deuda por entidades financieras y sus modificatorias.

Las Títulos se encuentran excluidos del sistema de seguro de garantía de depósitos establecido por la Ley N° 24.485 y sus modificatorias, y del régimen exclusivo y excluyente de privilegios de los depósitos previsto en el inciso (e) del artículo 49 y en el inciso (c) del artículo 53 de la Ley N° 21.526 y sus modificatorias (la “Ley de Entidades Financieras”).

El Banco es una sociedad anónima constituida de acuerdo con la ley argentina, conforme a la cual los accionistas del Emisor limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas de acuerdo a la Ley N° 19.550 y sus modificatorias (la “Ley General de Sociedades” o “LGS”). Por consiguiente, y en cumplimiento de la Ley N° 25.738, se informa que ningún accionista del Banco (ya sea extranjero o nacional) responde en exceso de la citada integración accionaria, por obligaciones emergentes de las operaciones concertadas por el Banco.

Los Títulos podrán ser colocados oportunamente por el Banco o a través de uno o más colocadores (cada uno, un “Colocador” y en conjunto los “Colocadores”), expresión ésta que incluirá cualquier Colocador oportunamente designado por el Banco.

Este Prospecto se encontrará a disposición de los interesados en las oficinas del Emisor y/o del/los Agente/s Colocador/es de conformidad con lo que se indique para cada Serie. Asimismo, este Prospecto se encontrará a disposición de los interesados en la página web de la CNV: www.cnv.gov.ar en el ítem “Información Financiera” bajo el Emisor.

**Organizador
Banco Patagonia**

Prospecto de fecha 5 de julio de 2019

AVISOS A LOS INVERSORES

Información relevante

El Prospecto ha sido confeccionado exclusivamente para ser utilizado en relación con el Programa y la emisión de Títulos. Cualquier consulta o requerimiento de información adicional con respecto al Prospecto o a las operaciones aquí contempladas, deberá dirigirse al Banco, al domicilio y teléfonos indicados en la sección “*Información Adicional - Documentos a Disposición*”.

El contenido del Prospecto y de cada Suplemento de Precio no deberá interpretarse como asesoramiento legal, impositivo o de inversión. Todo potencial inversor deberá consultar a sus propios abogados, contadores y demás asesores profesionales con respecto a cualquier aspecto jurídico, cambiario, impositivo, comercial y/o financiero relacionado con el Programa o los Títulos.

La información contenida en este Prospecto con respecto a la situación política, social, económica y legal de Argentina ha sido obtenida de fuentes gubernamentales y otras fuentes públicas. El Banco y su directorio sólo serán responsables por la obtención de dicha información de manera precisa. No podrá considerarse que la información contenida en el Prospecto constituye una promesa o garantía, ya sea con respecto al pasado o al futuro. Además, el Banco no garantiza que sea correcta cualquier información obtenida de fuentes gubernamentales u otras fuentes públicas, como ser el BCRA o el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (el “INDEC”). El Prospecto contiene resúmenes con respecto a términos y condiciones de ciertos documentos propios (por ejemplo, el estatuto social del Banco), que el Banco considera precisos. Copias de dichos documentos serán puestas a disposición del inversor, si así lo solicitara, para completar la información resumida en el Prospecto. Tales resúmenes se encuentran condicionados en su totalidad a dichas referencias.

La información contenida en el Prospecto y en cada Suplemento de Precio corresponde o corresponderá, según el caso, las fechas consignadas en los mismos y dicha información podrá sufrir cambios en el futuro. La entrega de este Prospecto y/o de un Suplemento de Precio no implicarán, bajo ninguna circunstancia, que no se han producido cambios en la información incluida en el Prospecto y/o en dicho Suplemento de Precio en la situación del Banco con posterioridad a la fecha del Prospecto y/o Suplemento de Precio. El Banco no tiene obligación de actualizar la información incluida en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio después de la fecha de cada uno.

Ni este Prospecto ni los Suplementos de Prospecto que se emitan constituirán una oferta de venta, y/o una invitación a formular ofertas de compra, de los Títulos en aquellas jurisdicciones en que la realización de dicha oferta y/o invitación no fuera permitida por las normas vigentes. El público inversor deberá cumplir con dichas normas en cualquier jurisdicción en que comprara, ofreciera o vendiera los Títulos o en la que poseyera o distribuyera este Prospecto o un Suplemento de Precio y deberá obtener los consentimientos, las aprobaciones/o los permisos para la compra, oferta o venta de los Títulos requeridos por las normas vigentes en cualquier jurisdicción a la que se encontraran sujetos y/o en la que realizaran dichas compras, ofertas y/o ventas. Ni el Emisor ni los correspondientes Colocadores tendrán responsabilidad alguna por incumplimientos a dichas normas.

Se informa que según lo dispuesto en el artículo 119 de La Ley de Mercado de Capitales, los emisores de valores, juntamente con los integrantes de los órganos de administración y fiscalización, éstos últimos en materia de su competencia, y en su caso los oferentes de valores con relación a la información vinculada a los mismos, y las personas que firmen el prospecto de una emisión de valores con oferta pública, serán responsables de toda la información incluida en los prospectos por ellos registrados ante la CNV. Conforme lo dispuesto en el artículo 120 de La Ley de Mercado de Capitales, las entidades y agentes intermediarios en el mercado que participen como organizadores, o colocadores en una oferta pública de venta o compra de valores deberán revisar diligentemente la información contenida en los prospectos de la oferta. Los expertos o terceros que opinen sobre ciertas partes del prospecto sólo serán responsables por la parte de dicha información sobre la que han emitido opinión.

LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES NO HAN SIDO REGISTRADAS BAJO LA SECURITIES ACT OF 1933 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (LA “LEY DE TÍTULOS VALORES”). LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES NO PODRÁN SER OFRECIDAS, VENDIDAS Y/O ENTREGADAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y/O A PERSONAS ESTADOUNIDENSES, EXCEPTO A (I) COMPRADORES INSTITUCIONALES CALIFICADOS EN VIRTUD DE LA EXENCIÓN DE REGISTRO ESTABLECIDA POR LA NORMA 144A BAJO LA LEY DE TÍTULOS VALORES, Y (II) A CIERTAS PERSONAS QUE NO SEAN PERSONAS ESTADOUNIDENSES EN TRANSACCIONES FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN LOS TÉRMINOS DE LA REGULACIÓN S BAJO LA LEY DE TÍTULOS VALORES.

Posición en el mercado

El Banco realiza declaraciones en el Prospecto con relación a su posición competitiva y su participación en el mercado del sistema financiero argentino, así como respecto del tamaño de dicho mercado. Las declaraciones se realizaron sobre la base de las estadísticas y la información proporcionadas por terceros tal como el BCRA, entre otros, que el Banco, considera confiables. Si bien no existen motivos para suponer que dicha información o informes son inexactos en algún aspecto sustancial, el Banco y los Colocadores no han verificado en forma independiente los datos relativos a la posición competitiva del Banco, su participación en, y el tamaño y crecimiento del mercado, y cualquier otra información que el Banco ha obtenido de fuentes públicas o gubernamentales, los cuales fueron suministrados por terceros o por publicaciones específicas o generales del sector.

Prácticas contables

El Banco lleva sus libros y registros contables en pesos argentinos y prepara y publica estados financieros consolidados y no consolidados en la Argentina, de conformidad con el marco de información contable del BCRA. Los estados financieros del Banco contienen una descripción de las principales políticas contables aplicables. Los estados financieros del Banco y la información contable incluidos en este Prospecto se presentan en forma consolidada del Banco, con sus sociedades controladas: Patagonia Valores S.A., Patagonia Inversora S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, Banco Patagonia (Uruguay) S.A. I.F.E., y GPAT Compañía Financiera S.A.U

Se aclara que en virtud del marco de información contable del BCRA, los resultados de las operaciones del Banco hasta el 28 de febrero de 2003, se ajustaron a fin de tener en cuenta los efectos de la inflación por precios mayoristas en la Argentina durante esos períodos. Durante los períodos siguientes al 28 de febrero de 2003, se suspendió el ajuste por inflación a los estados contables. En función de la vigencia de la Comunicación “A” 6651 del BCRA la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 29 (NIC 29) “Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias” será aplicable para los ejercicios económicos que se inicien a partir del 1 de enero de 2020.

Las referencias en el Prospecto a “pesos”, “Pesos”, “Ps.” y “\$” son a la moneda de curso legal en Argentina. Las referencias a “dólares estadounidenses”, “dólares” “Dólares Estadounidenses”, “Dólares” y “US\$” son a la moneda de curso legal en Estados Unidos. Las referencias a “reales”, “Reales”, y “R\$” son a la moneda de curso legal en Brasil.

Redondeo

Algunas de las cifras que se incluyen en el Prospecto han sido redondeadas. En consecuencia, es probable que las cifras que figuran como totales en algunos cuadros no sean la suma aritmética de las cifras que las preceden. En particular, respecto de la información contable contenida en el Prospecto, en línea con lo dispuesto en el marco de información contable del BCRA, los importes se registran en miles de pesos, sin decimales. A los fines del redondeo de las magnitudes se incrementan los valores en una unidad cuando el primer dígito de las fracciones sea igual o mayor que 5, desechando las que resulten inferiores.

Nota especial referida a declaraciones sobre el futuro

En el Prospecto se han incluido declaraciones a futuro, que se basan fundamentalmente en opiniones, expectativas y proyecciones actuales del Banco y sus administradores respecto de los acontecimientos, y las tendencias operativas y financieras que incidirán en el futuro en el negocio del Banco. Muchos factores importantes, además de los que se analizan en otras secciones del Prospecto (como las secciones “Factores de Riesgo” y “Reseña y Perspectiva Operativa Financiera”), podrían generar resultados reales marcadamente diferentes a los previstos en las declaraciones a futuro, incluidos entre otros:

- cambios generales económicos, financieros, políticos, legales, sociales o de cualquier otra índole en Argentina o en otros países de América Latina o cambios en mercados desarrollados o emergentes;
- cambios en los mercados de capitales que puedan afectar las políticas o actitudes hacia los préstamos a la Argentina o las empresas argentinas o la inversión en ellas;
- inflación;
- variaciones en las tasas de interés y en los costos de los depósitos;
- normativas del gobierno argentino que afecten las operaciones del Banco;
- fallos adversos en procesos legales;
- riesgos de crédito en general, como por ejemplo el aumento de los incumplimientos en el pago por parte de los prestatarios;
- incrementos inesperados en costos de financiamientos u otros costos;

- inhabilidad del Banco para obtener financiamiento adicional bajo términos favorables;
- fluctuaciones o reducción del valor de la deuda soberana que detenta el Banco en tesorería;
- competencia en el mercado bancario, financiero y otros relacionados en Argentina;
- retiros de depósitos por clientes del Banco;
- deterioro en la situación comercial y económica en el plano regional, nacional e internacional; y
- fluctuaciones en el tipo de cambio del peso.

El Prospecto incluye información relevante en relación con el desempeño operativo y financiero del Banco. Al analizar esa información, el inversor deberá considerar el hecho de que los resultados pasados no son, necesariamente, una indicación de resultados futuros, no pudiendo asegurarse que el Banco obtendrá resultados comparables. Las proyecciones del Banco son, en general, basadas inicialmente en la opinión de los administradores del Banco. Estas proyecciones son apenas estimativas de resultados futuros, fundamentalmente en premisas hechas al momento en que fueron desarrolladas. De esta forma, no se puede garantizar que los resultados proyectados serán alcanzados o que los resultados calculados no variarán significativamente en relación a las proyecciones respectivas. Además de eso, condiciones futuras podrán exigir acciones diferentes de las tenidas en consideración en la información, no garantizando que las proyecciones de resultados futuros serán alcanzadas. Podrán existir diferencias entre las proyecciones y los resultados efectivamente calculados porque hechos y circunstancias no ocurren conforme lo esperado y estas diferencias pueden ser significativas y tener un efecto adverso y material para el Banco y sus operaciones y estado financiero. Asimismo, las condiciones económicas en general, que no son previsibles, también pueden tener un efecto negativo adverso en las proyecciones efectuadas por los administradores del Banco. El inversor no debe tomar como fundamento para la decisión de invertir en Títulos, cualquier información contenida en este Prospecto referida a resultados futuros.

Los términos “se considera”, “podría”, “sería”, “se estima”, “continuaría”, “se prevé”, “se pretende”, “se espera”, “se pronostica”, “se cree” y otros similares se utilizan para identificar declaraciones a futuro. En dichas declaraciones se incluye información relativa a los resultados de las operaciones, las estrategias comerciales, los planes de financiamiento, la posición competitiva, el entorno del sector, posibles oportunidades de crecimiento (tanto orgánico como por adquisiciones), los efectos de las reglamentaciones futuras y los efectos de la competencia que posiblemente o supuestamente podrían producirse en el futuro. Estas declaraciones tienen validez únicamente en la fecha en que fueron realizadas y el Banco no asume obligación alguna de actualizarlas en forma pública o de revisarlas después de la distribución del Prospecto y del Suplemento de Precio respectivo debido a nueva información, hechos futuros u otros factores. Además, el Banco ha basado estas declaraciones respecto del futuro en gran parte en sus expectativas y proyecciones corrientes acerca de hechos y tendencias futuros que afectan sus actividades. Estas expectativas y proyecciones están sujetas a significativos riesgos e incertidumbres y podrían no resultar exactas o cambiar significativamente. En vista de los riesgos e incertidumbres mencionados más arriba, los hechos y circunstancias futuros que se analizan en este Prospecto no constituyen una garantía del desempeño futuro.

Mecanismo de colocación primaria

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Capítulo IV, Título VI de las Normas de la CNV, para la colocación primaria de las Obligaciones Negociables podrá optarse por los mecanismos de: a) formación de libro o b) subasta o licitación pública. Ver al respecto, Capítulo IX “De la Oferta y del Listado para la Negociación - Colocación” del Prospecto.

Operaciones destinadas a estabilizar el precio de mercado

La CNV ha reglamentado en el artículo 12, Sección III, Capítulo IV, Título VI de las Normas CNV los aspectos relacionados con las operaciones efectuadas por quienes participen en un proceso de colocación de valores negociables o las propias emisoras, con el propósito de estabilizar el mercado de dichos valores. En efecto, cuando estas operaciones se realicen conforme a dicha reglamentación no se considerarán comprendidas en las conductas descriptas en el artículo 117(b) de la Ley de Mercado de Capitales como de *manipulación y engaño al mercado* con los efectos que de dicha calificación se derivan.

Los agentes que participen en la organización y coordinación de la colocación y distribución, una vez que los valores negociables ingresan en la negociación secundaria, podrán realizar operaciones destinadas a estabilizar el precio de mercado de dichos valores, únicamente a través de los sistemas informáticos de negociación bajo segmentos que aseguren la prioridad precio tiempo y por interferencia de ofertas, garantizados por el Mercado y/o la Cámara Compensadora en su caso.

En este marco, se deberán seguir las siguientes condiciones:

- a) El prospecto correspondiente a la oferta pública en cuestión deberá haber incluido una advertencia dirigida a los inversores respecto de la posibilidad de realización de estas operaciones, su duración y condiciones.

- b) Las operaciones podrán ser realizadas por agentes que hayan participado en la organización y coordinación de la colocación y distribución de la emisión.
- c) Las operaciones no podrán extenderse más allá de los primeros 30 días corridos desde el primer día en el cual se haya iniciado la negociación secundaria del valor negociable en el Mercado.
- d) Sólo podrán realizarse operaciones de estabilización destinadas a evitar o moderar alteraciones bruscas en el precio al cual se negocien los valores negociables que han sido objeto de colocación primaria por medio del sistema de subasta o licitación pública.
- e) Ninguna operación de estabilización que se realice en el período autorizado podrá efectuarse a precios superiores a aquellos a los que se haya negociado el valor en cuestión en los Mercados autorizados, en operaciones entre partes no vinculadas con las actividades de organización, colocación y distribución.
- f) Los Mercados deberán individualizar como tales y hacer públicas las operaciones de estabilización, ya fuere en cada operación individual o al cierre diario de las operaciones.

ÍNDICE

INFORMACIÓN DEL EMISOR	8
DATOS ESTADÍSTICOS Y PROGRAMA PREVISTO PARA LA OFERTA	61
FACTORES DE RIESGO	65
POLÍTICAS DEL EMISOR	98
INFORMACIÓN SOBRE LOS DIRECTORES, GERENTES, MIEMBROS DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN y COMITÉ DE AUDITORÍA (TITULARES Y SUPLENTE)	101
ESTRUCTURA DEL EMISOR, ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS	120
ACTIVOS FIJOS Y SUCURSALES DE LA EMISORA	126
ANTECEDENTES FINANCIEROS	127
DE LA OFERTA Y DEL LISTADO PARA LA NEGOCIACIÓN	152
INFORMACIÓN ADICIONAL	165

INFORMACIÓN DEL EMISOR

General

La denominación social del Banco es “Banco Patagonia S.A.”, su sede social está ubicada en Avenida de Mayo 701, Piso 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1084AAC), Argentina, su número de teléfono es +54 (11) 4323-5000 y su sitio web es www.bancopatagonia.com.ar. El CUIT del Banco es 30-50000661-3. La información consignada en o a través del sitio web del Banco no ha sido incorporada por referencia a este Prospecto y no debe considerarse parte del mismo o en relación con la decisión de invertir. Banco Patagonia es una sociedad anónima constituida el 4 de mayo de 1928 de acuerdo con las leyes de la República Argentina, y registrada el 18 de septiembre de 1928 ante el Registro Público de Comercio bajo el N° 13.424 del Libro N° 36 de Sociedades por Acciones. Con fecha 29 de agosto de 1939 y producto de una modificación en el estatuto social, inscripta bajo el número 89, tomo 38 del libro 45, tomo A de Estatutos Nacionales, el período de duración del Banco asciende a 99 años contados a partir de dicha fecha (vencimiento el 29 de agosto de 2038).

El accionista controlante del Banco es Banco do Brasil S.A., que es un banco múltiple con sede en Brasilia, Distrito Federal, y tiene presencia significativa en todos los estados brasileiros, además de realizar actividades en importantes centros financieros mundiales. El accionista controlante de Banco do Brasil S.A. es el Estado Nacional de la República Federativa del Brasil. Véase la sección “*ESTRUCTURA DEL EMISOR, ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS*”.

A) RESEÑA HISTÓRICA

Banco Patagonia es continuador de una serie de bancos de histórica presencia en Argentina. Hoy Banco Patagonia suma la experiencia de más de 90 años de trayectoria en el mercado financiero argentino.

Entre los Bancos antecesores podemos mencionar el Banco Mercantil Argentino (pionero en el negocio de Plan Sueldo), que en 1999 concreta la fusión por absorción de Banco Caja de Ahorro (precursor en la incorporación del negocio de seguros al sector bancario) adoptando esta última denominación; y en el año 2000 se produce la fusión por absorción del Banco Sudameris Argentina adoptando la entidad continuadora esta última razón social.

En el año 2003, Banco Sudameris Argentina absorbe a Banco Patagonia S.A. (que luego se disolvió sin liquidarse), y cambia su denominación a Banco Patagonia Sudameris.

Ese Banco Patagonia había surgido de la fusión en 1997 del Banco Mildesa y el Banco Río Negro, manteniendo el nombre de este último hasta que en el año 2000 cambia su denominación por la de Banco Patagonia (cuya disolución sin liquidación fue inscripta en septiembre de 2004).

En el año 2004, Banco Patagonia Sudameris adquiere los negocios de Lloyds TSB Bank plc Sucursal Argentina, que registraba más de 140 años en el país, y vuelve a adoptar el nombre Banco Patagonia.

En 2007 Banco Patagonia abre su capital en las Bolsas de Comercio de Buenos Aires y San Pablo, siendo la primera empresa que, sin tener operaciones en Brasil, cotiza sus acciones en la Bolsa de San Pablo (BOVESPA). En el año 2010, el Banco adquiere el 99% del capital accionario de GPAT Compañía Financiera S.A. (ex GMAC Compañía Financiera S.A.) con el objetivo de ampliar su horizonte de negocios.

Durante 2011, el 58,96% del capital social de Banco Patagonia pasó a manos del accionista controlante, Banco do Brasil S.A., institución financiera con más de 200 años de historia en el mercado financiero brasileño, que cuenta también con presencia en otros países.

En 2018 fue ejercida la opción de venta por parte de los accionistas minoritarios a Banco do Brasil S.A. quien aumentó su participación en Banco Patagonia S.A., pasando a ser titular del 80,39% del capital social y votos en circulación.

Los legados de estas instituciones y las demás que forman parte hoy de Banco Patagonia, representan un activo de gran valor para la Entidad y un elemento competitivo diferenciador.

Cotización de las acciones del Banco

Desde el año 2007, el Banco tiene acciones clase “B” negociadas en el ByMA bajo el símbolo BPAT y como certificados de depósito en Brasil (BDRs) -cada uno de éstos a su vez representando 20 acciones clase “B” del Banco - en B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”)-; éstos últimos, a su vez, y hasta el año 2017, como *American Depositary Shares* (ADSs) Rule 144A / Regulation S se negociaron en el mercado estadounidense. Asimismo, a partir del año 2015 el Banco fue autorizado al listado de las referidas acciones en el MAE.

Los BDRs se encuentran emitidos en virtud de un contrato de depósito del Banco de acciones y emisión de BDRs en Brasil con Banco Itaú S.A., y las ADSs se encontraban emitidas en virtud de un contrato de depósito del Banco de BDRs y emisión de ADRs en Estados Unidos con The Bank of New York Mellon. Asimismo, en 2010 el Banco había registrado en Estados Unidos un programa de ADSs Nivel 1 con subyacente en acciones clase “B”.

En la reunión del Directorio del 27 de abril de 2017 el Banco resolvió cancelar los Programas de Certificados de Depósito en Custodia de American Depositary Receipts (-ADR-): (i) ADR – Rule 144; (ii) ADR – Regulation S; y (iii) ADR – Level I. A la fecha del presente Prospecto dichos programas se encuentran cancelados.

Por último, en virtud de la decisión aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del Banco el 25 de abril de 2019, con fecha 3 de mayo de 2019 el Banco presentó ante B3, un plan para cancelar el Programa de BDRs del Banco, que a la fecha de este Prospecto aún no ha sido aprobado. Una vez concluida la cancelación del Programa de BDRs, el Banco tomará las medidas para la baja de su registro ante la CVM como emisor extranjero registrado como compañía abierta categoría “A”, así como la consiguiente cancelación de la admisión para la negociación de los BDRs y del listado de la Compañía en la B3.

B) DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y NEGOCIOS

Oportunidades de mercado

El Emisor considera que los bajos índices de penetración de servicios financieros en el país y su sólida posición de mercado ofrecen una gran oportunidad para acelerar su crecimiento. A continuación se destacan las oportunidades de mercado clave de las cuales se beneficiará:

Solvencia del sistema financiero argentino

Si bien el sistema financiero argentino experimentó inestabilidad como resultado de la crisis de 2001-2002 y la inestabilidad macroeconómica durante los últimos cinco años, el sistema financiero argentino ha mantenido altos niveles de rentabilidad y una sólida calidad de activos y capitalización. Desde 2011 hasta 2016, según datos del Banco Central, el sistema financiero argentino registró un retorno sobre el patrimonio (“ROE”) anualizado promedio del 29.2%, un índice de préstamos de cumplimiento irregular promedio del 1,7%, una capitalización regulatoria total (como porcentaje de los activos ponderados por riesgo) del 14,9% y una relación entre depósitos y préstamos promedio del 144,6%. El sistema financiero argentino registraba un ROE anualizado del 34.4% por el período finalizado el 31 de diciembre de 2018, un índice de préstamos de cumplimiento irregular del 1,3%, un índice de capitalización regulatoria total (como porcentaje de los activos ponderados por riesgo) del 15,8% y una relación entre depósitos y préstamos del sector privado del 72% al 31 de diciembre de 2018, indicando niveles de liquidez confortables. Asimismo, al 31 de marzo de 2019, los activos y pasivos del sistema financiero se encuentran mayormente denominados en pesos (69,3% y 69,4%, respectivamente), lo que limita la exposición del sistema financiero a fluctuaciones de los tipos de cambio. El relativamente corto plazo de los préstamos del sistema financiero local resulta en un descalce entre activos y pasivos de baja liquidez, protegiendo al sistema de una contracción inesperada de los depósitos.

Sistema financiero estable y bien regulado

El sector financiero argentino está regulado por diversas agencias gubernamentales. La regulación bancaria en Argentina sufrió profundas reformas en la última década e implementó las normas de Basilea III desde 2012. Según cifras del Banco Central, al 31 de diciembre de 2018, el sistema bancario argentino registraba un índice de capital total del 8,8%, por encima del umbral el 3% exigido por el Banco Central y los lineamientos internacionales de Basilea III.

Fortalezas competitivas

La actual recuperación de la economía argentina, sus efectos sobre el sistema financiero, como así también los bajos niveles de penetración y concentración, presentan grandes oportunidades de crecimiento para el Emisor.

Dentro de este contexto de crecimiento, el Emisor goza de ventajas competitivas que considera le otorgan una posición favorable para beneficiarse de las oportunidades de crecimiento, entre las cuales se incluyen:

Red de distribución física y canales alternativos de alcance nacional

Su red de distribución es una de las pocas redes del sistema financiero que abarca todas las provincias argentinas, con una presencia equilibrada en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, así como también en todas las demás provincias del país, y con oficinas en todas las grandes ciudades de Argentina. Esta plataforma le permite continuar aumentando el volumen de sus actividades sin necesidad de realizar inversiones adicionales significativas. Además dedica esfuerzos a desarrollar su red de canales digitales y alternativos. Los clientes del segmento Personas, micro y pequeñas empresas a menudo eligen utilizar sus servicios de banca electrónica. Al 31 de diciembre de 2017, el Emisor mantenía su presencia a través de 205 puntos de atención, 596 cajeros automáticos, 348 terminales de autoservicio, su Centro de Contacto con Clientes y sus servicios de banca electrónica y móvil. Al 31 de diciembre de 2018, el Emisor mantenía su presencia a través de 215 puntos de atención, 607 cajeros automáticos, 394 terminales de autoservicio, su Centro de Contacto con Clientes y sus servicios de banca electrónica y móvil.

Liderazgo en segmentos de productos y negocios atractivos dentro del mercado local.

Según cifras publicadas por el Banco Central, al 31 de diciembre de 2018, el Emisor ocupaba el séptimo lugar en términos de préstamos totales, sexto lugar en patrimonio neto, octavo lugar en depósitos totales y el octavo lugar en términos de activos totales entre los bancos privados.

El Emisor mantiene posiciones de liderazgo en los atractivos segmentos de banca minorista y créditos para el consumo. Al 31 de marzo de 2019, contaba con 1.195.860 clientes de banca minorista o Personas, que representaban depósitos por un valor de Ps. 57.694,0 millones. Al 31 de diciembre de 2018, sus préstamos a clientes del segmento minorista (préstamos personales brutos y tarjetas de crédito) representaban el 3,84% de los bancos privados argentinos, ocupando el octavo puesto entre 50 bancos privados de Argentina, según datos del Banco Central.

También es prestador líder de servicios y productos financieros específicamente diseñados para el sector de empresas, con un foco en particular en las PyME y Grandes Empresas. Al 31 de diciembre de 2018, el Emisor tenía una participación de mercado del 5,09% en términos operaciones de leasing, y ocupaba el quinto puesto entre los bancos privados, según sus estimaciones basadas en información publicada por la Asociación de Leasing de Argentina. El Emisor es uno de los líderes en la prestación de servicios integrales en el segmento de fideicomisos financieros, que incluye la estructuración de operaciones financieras, la venta de títulos fiduciarios a inversores y la administración de activos mantenidos en fideicomiso, según la CNV. En marzo de 2006, el Emisor se transformó en el primer banco de Argentina clasificado como “excelente” por Standard & Poor’s, y ha mantenido esta clasificación a través de los años.

El Emisor considera que su amplia base de clientes del segmento minorista y comercial le permite hacer cross-selling de productos y servicios financieros complementarios, aumentando su participación de mercado, reforzando la fidelización del cliente y alcanzando mayor eficiencia y rentabilidad operativa.

Historial de crecimiento rentable

El Emisor ha demostrado sistemáticamente su capacidad para generar crecimiento rentable. Sus activos totales, préstamos netos, depósitos y patrimonio neto total crecieron 54,5%, 52,7%, 76,6% y 69,8% entre 2017 y 2018, respectivamente. El retorno sobre el activo promedio (“ROAA”) fue del 4,7% en diciembre 2018, en comparación con el ROAA del 4,7% y 5,5% en diciembre de 2017 y diciembre de 2016, respectivamente.

Prácticas de gestión de riesgo sólidas y eficientes

A lo largo de su trayectoria, el Emisor ha implementado y mantenido prácticas contables, de gestión de riesgo y liquidez conservadoras.

El Emisor ha registrado niveles estables y generalmente decrecientes en los índices de préstamos de cumplimiento irregular a pesar del fuerte crecimiento de su cartera de préstamos. Al 31 de diciembre de 2018, el índice de préstamos de cumplimiento irregular (de conformidad con las Normas del Banco Central) era del 2,25%, en comparación con el 1,7% al 31 de diciembre de 2017, según cifras publicadas por el Banco Central. Al 31 de diciembre de 2017, el índice de préstamos de cumplimiento irregular del Emisor fue el octavo más bajo del sistema financiero argentino. Al 31 de diciembre de 2018, el índice de cobertura de préstamos de cumplimiento irregular (que es el índice de provisiones por riesgo de incobrabilidad respecto de préstamos de cumplimiento irregular) fue del 207,2%, en comparación con el índice de cobertura de préstamos de cumplimiento irregular del sistema financiero argentino del 120,2%. Como parte de sus políticas de gestión de riesgos, el Emisor cubre su exposición al riesgo de tipo de cambio equilibrando los activos y pasivos en moneda extranjera.

Sólida posición financiera, capitalización y liquidez

Al 31 de diciembre de 2018, los préstamos al sector privado no financiero (según definición del Banco Central) representaban el 50,2% de sus activos totales, lo que fortalecía la liquidez de la estructura de activos del Emisor. También mantiene niveles de capital saludables y una estructura de obtención de fondos resiliente. Al 31 de diciembre de 2018, el coeficiente de capital total según el Banco de Pagos Internacionales (“BPI”) del Emisor se situó en el 24,3%, muy por sobre el nivel regulatorio mínimo del 8,0% establecido por el Banco Central. Su principal fuente de obtención de fondos son los depósitos locales, que representaron Ps. 109.117.039 millones, o el 80,11% de sus pasivos totales al 31 de diciembre de 2018, de los cuales el 49,88% eran cuentas corrientes y cajas de ahorro (con un menor costo financiero en comparación con los depósitos a plazo fijo u otros instrumentos de financiación). El Emisor considera que su enfoque de riesgos conservador, que contempla la estricta gestión del riesgo crediticio, riesgo de moneda extranjera, riesgo de tasas de interés y riesgo de plazos le ha permitido mantener alta calidad de activos a lo largo de los diversos ciclos económicos de Argentina.

Equipo gerencial con amplia experiencia e historial de operaciones

La gerencia del Emisor ha sorteado exitosamente los diversos ciclos económicos que ha atravesado Argentina en los últimos 40 años. Su equipo gerencial está altamente capacitado y cuenta con vasta experiencia en la actividad financiera que se ha conformado principalmente con las sucesivas fusiones y adquisiciones que ha concretado el Banco. La gerencia y sus directores tienen un alto grado de involucramiento en las operaciones del Banco, y un fuerte sentido de pertenencia y responsabilidad que se transmite a todas las líneas del Banco. Esta cultura determina políticas y prácticas que priorizan la excelencia, la eficiencia, la responsable utilización de recursos y la cuidadosa gestión de los riesgos. Desde sus comienzos, su gerencia se ha distinguido por su versatilidad y aptitud para aprovechar oportunidades de crecimiento en distintas áreas y negocios, lo que ha resultado esencial para su desarrollo y para la constante mejora de sus operaciones y rendimiento financiero.

Estrategia

Como lo demuestra la alta rentabilidad y crecimiento de sus principales líneas de negocios, el Emisor considera que sus estrategias de multiplicidad de segmentos y de canales han sido un éxito. Se propone seguir aprovechando sus ventajas competitivas para ampliar sus negocios en los segmentos más rentables y dinámicos de la economía, concentrándose en el crecimiento de los depósitos y préstamos y expandiendo su liderazgo en Argentina, al mismo tiempo que se concentra en un sostenido crecimiento y rentabilidad. Se propone lograr estos objetivos a través de las siguientes estrategias:

Consolidar su posición como uno de los principales bancos privados de Argentina con altas métricas de rentabilidad

El Emisor se propone continuar ofreciendo productos y servicios a los segmentos de banca minorista de todo el espectro socioeconómico. Las soluciones personalizadas para estos clientes incluyen cuentas corrientes y cajas de ahorros, tarjetas de crédito y débito, préstamos personales, seguros y programas de fidelización de clientes. Asimismo, el Emisor se propone posicionar sus productos y servicios para beneficiarse con el crecimiento de los segmentos de personas de altos y medios ingresos. Es su intención también hacer uso de los principales servicios transaccionales y de cash management para PyME, y servirse de la potencial demanda de fondos para infraestructura. Al dirigirse a estos clientes, el Emisor busca aumentar sus ingresos, mejorar su rentabilidad y crear valor para sus accionistas.

Aprovechar su proximidad a los clientes y aumentar la participación de mercado

Dada su red geográfica y presencia en regiones comercialmente importantes de Argentina, el Emisor considera que está bien posicionado para beneficiarse de las economías de escala a través del aumento de sus ingresos sin grandes inversiones en la mejora de plataformas adicionales. Es intención del Emisor ampliar de manera selectiva su red de sucursales en toda Argentina y aumentar su acceso a sus actuales clientes no bancarizados, desarrollando su plataforma digital y canales alternativos, así como alianzas con comercios minoristas claves para ofrecer servicios bancarios. Entiende que la segmentación efectiva, el análisis de riesgo adecuado y un equipo de ventas motivado y capacitado serán clave para el crecimiento de la base de clientes de mercado abierto.

A través de iniciativas estratégicas de la segmentación de su base de clientes en actividades minoristas, y aprovechando su enfoque continuo en los servicios de alta calidad e individualizados para clientes, aspira a convertirse en uno de los bancos más innovadores de Argentina en términos de experiencia de cliente. Entiende que estos desarrollos estratégicos lo ayudarán a ampliar el conocimiento de su base de clientes y, junto con la modernización de su modelo de servicios para clientes, transformar la experiencia bancaria y mejorar el reconocimiento de la marca.

Por otra parte, se propone continuar ampliando su fuerza de ventas especializada, con foco en nuevos servicios para emprendedores, pequeñas empresas y agronegocios y servicio de pago de sueldos, como motor de los ingresos e indicadores de cross-selling.

Implementación de las mejores prácticas de gestión

La sólida cultura de excelencia en el servicio de atención al cliente ofrece una ventaja competitiva entre sus competidores.

El Emisor entiende que su foco en la tecnología ha sido un motor clave para generar eficiencias operativas. También ha implementado una estrategia de reducción de costos, que le ha permitido alcanzar mayores márgenes de ganancias en sus productos y servicios. En 2018, su coeficiente de eficiencia (definido como gastos de administración (la suma de gastos en personal, depreciación, amortización de bienes intangibles, pérdida por incobrabilidad de otros créditos y otros gastos operativos) dividido los ingresos operativos totales antes de la provisión para pérdidas por desvalorización de activos financieros) era del 53,84%

Lograr un desarrollo sostenible y saludable

El Emisor continúa monitoreando cuidadosamente la calidad crediticia de su cartera de activos, en particular, los activos de los segmentos de clientes de alta renta, como es el caso de Personas y PyME, al mismo tiempo que diversifica su balance. Se propone mantener un perfil de desarrollo equilibrado con marcado énfasis en la liquidez y una base de operaciones de financiación estable y de bajo costo. También mantiene un enfoque con conciencia en los costos de su plan de expansión analizando cuidadosamente la potencial rentabilidad de la ubicación de cada nueva sucursal. Asimismo, prevé hacer uso eficiente de la tecnología para desarrollar aún más sus canales de banca electrónica, a fin de controlar los gastos asociados con la continua expansión de su red de distribución.

Incrementar la productividad comercial y hacer foco en tecnología e innovación

El Banco procurará aumentar la productividad comercial optimizando el tiempo de ventas mediante el uso de operaciones en línea y banca móvil, en respuesta a los cambios demográficos de jóvenes que ingresan al mercado laboral. También se propone continuar trabajando con herramientas comerciales inteligentes de primera línea para aumentar la productividad de ventas y mejorar las relaciones con los clientes a través de mejores acciones y comunicaciones predictivas.

Asimismo, su alianza estratégica de largo plazo con Mercado Libre, Inc. (“Mercado Libre”), la mayor plataforma online de América Latina, y MasterCard, facilitará y promoverá el comercio electrónico a través de un método de pago accesible para todos los usuarios. Por medio de estas alianzas, el Banco prevé obtener acceso a los millones de clientes de Mercado Libre a los cuales ofrecerá precios diferenciados, promociones especiales, entre otros beneficios.

Su sólida cultura de innovación respalda sus actividades centradas en las necesidades del cliente y las tendencias globales, creando e implementando eficientes soluciones centradas en las preferencias del cliente local. El

Emisor se propone continuar incrementando la cantidad de usuarios en línea activos y ampliar el canal de banca virtual y electrónica, lo que permitirá aumentar la distribución a bajo costo. La meta es ofrecer una experiencia digital excepcional a sus clientes. También, prevé lanzar otras aplicaciones de banca móvil, servicios financieros en cualquier lugar y momento y ofrecer alertas y mensajes a clientes para lograr una mejor relación costo-eficiencia a través de publicidad en las redes sociales a bajo costo.

Descripción del negocio

El Emisor es una de las entidades financieras privadas líderes dentro del sistema financiero argentino. Opera como banco universal y cuenta con una red de distribución de alcance nacional, con una presencia líder en el mercado de personas, empresas, finanzas y sector público. A través de su amplia red de distribución, el Emisor ofrece una variada gama de productos y servicios financieros a los siguientes segmentos de clientes.

Segmento Personas

El Emisor presta servicios de banca comercial a sus clientes personas segmentando su base de cliente y ofreciendo atractivos productos y servicios adecuados a las necesidades de cada segmento de clientes. Este enfoque le permite adoptar diferentes estándares crediticios para cada subsegmento, mejorando de esa forma la calidad de su cartera de préstamos y la rentabilidad de su actividad de banca comercial.

Argentina tiene una de las tasas de penetración de mercado más bajas del sector de servicios financieros de América Latina. De acuerdo con datos publicados por el Banco Central y el INDEC, los préstamos al sector privado como porcentaje del PBI fueron del 18,0% al 31 de diciembre de 2018, que representa una oportunidad significativa para atraer nuevos clientes, y una oportunidad de realizar cross-selling de productos y servicios adicionales, entre otros, tarjetas de crédito, préstamos personales y seguros, a los clientes existentes.

Los clientes Personas se dividen en tres subcategorías en base a ingresos y calificaciones crediticias:

- Alta Renta y Patagonia Plus Premium (altos ingresos): ofrece cuentas corrientes, cajas de ahorro, tarjetas de débito y tarjetas de crédito. (Visa Signature, Visa Platinum, MasterCard Black y MasterCard Platinum).
- Patagonia Plus, Global y Personal (ingresos medios): ofrece cuentas corrientes, cajas de ahorro, tarjetas de débito y tarjetas de crédito Gold e internacionales.
- Patagonia Integral, Universitaria & Productos Personas (bajos ingresos): ofrece cuentas corrientes, cajas de ahorro, tarjetas de débito y tarjetas de crédito.

Al 31 de marzo de 2019, de los clientes del segmento Personas del Banco, el 48,7% correspondía a clientes de mercado abierto, el 30,0% correspondía a cuentas sueldo y el 21,3% a cuentas para jubilados.

El Banco ofrece a sus clientes minoristas una amplia gama de productos bancarios, entre otros, préstamos personales, anticipo de haberes, pago de sueldos a través del paquete Plan Sueldo, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, cajas de ahorro, depósitos a plazo fijo, cuentas corrientes, cobertura de seguro y servicios de inversión, entre otros.

Los clientes también reciben diversos beneficios al operar con el Banco. Patagonia ofrece a todos sus clientes la posibilidad de adherirse a dos programas (i) Patagonia Más, un atractivo programa de lealtad que permite acceder a beneficios y premios abonando con las tarjetas de débito y crédito del Banco, y (ii) el programa Club Patagonia, un programa de premios, por el cual los clientes suman puntos con cada transacción o compra que realizan con tarjetas de débito o crédito del Banco que pueden canjear por descuentos en futuras compras o a través de programas de premios de diversos minoristas o proveedores de servicios, incluso millas del Programa Smiles de GOL Linhas Aéreas.

Segmento Empresas

El Emisor brinda servicios bancarios a sus clientes empresas, grandes empresas, agronegocios y PyME. Ofrece una amplia gama de productos y servicios para el segmento Empresas, incluyendo préstamos comerciales, depósitos, leasing, cash management, comercio exterior y pago de sueldos. Los clientes del segmento Empresas se dividen en cuatro subcategorías:

- **Corporate:** esta subcategoría incluye empresas multinacionales. Al 31 de marzo de 2019, este subsegmento tenía 375 clientes. Los clientes Corporate están clasificados en función del sector en el que participan. El Emisor cuenta con equipos de venta especializados para cada sector en el que presta servicios: (1) automotrices, (2) comercios, (3) agronegocios, alimentos e industria, (4) productos químicos/farmacéuticos, laboratorios y petróleo; (5) infraestructura, minería, siderúrgicas, tecnología y servicios.
- **Grandes Empresas:** esta subcategoría incluye empresas con ingresos anuales entre Ps. 180 millones y Ps. 4.000 millones. Al 31 de marzo de 2019, este subsegmento tenía 3.010 clientes.
- **Agronegocios:** esta subcategoría incluye empresas agrícolas, productores y proveedores (los clientes del segmento agronegocios se clasifican por actividad, más que por ingresos anuales). Al 31 de marzo de 2019, agronegocios tenía 1.047 clientes. El Emisor atiende a los clientes Grandes Empresas y Agro a través de cuatro sucursales exclusivas y seis nodos de atención a empresas, cada uno de los cuales cuenta con un equipo comercial que se dedica a atender a los clientes de estos segmentos.
- **PyME:** esta subcategoría incluye empresas con ingresos anuales inferiores a Ps. 180 millones y personas por encima de Ps. 5,8 millones, así como personas con planes sueldo u otros servicios de tarjetas de crédito. Al 31 de marzo de 2019, este subsegmento tenía 42.021 clientes. Los clientes del segmento PyME son atendidos a través de ejecutivos exclusivos de banca PyME en toda su red de sucursales.

El Emisor pone a disposición de sus clientes del segmento Empresas una amplia gama de productos y servicios bancarios, entre los cuales se destacan: plan sueldo, cash management, tarjetas comerciales, comercio exterior, préstamos comerciales, financiación de capital de trabajo y proyectos de inversión, leasing cobertura de seguros, plataformas electrónicas para gestionar la operatoria de negocios Datanet e interPyme y banca electrónica.

Segmento Finanzas y Sector Público

A través del Segmento Finanzas y Sector Público, el Banco brinda productos y servicios bancarios a diferentes tipos de clientes financieros y a entidades y a diversos organismos públicos de orden nacional, provincial y municipal (incluso la importante relación que mantiene con la Provincia de Río Negro) y a universidades nacionales. Al 31 de marzo de 2019, este segmento tenía 551 clientes.

Sus productos más destacados comprenden compraventa de títulos públicos y privados, inversiones y operaciones cambiarias mayoristas, depósitos a plazo fijo, préstamos comerciales y sindicados, compra de carteras de crédito, fideicomisos y planes sueldo.

El Emisor ha sido el Agente Financiero de la Provincia de Río Negro desde 1996. En tal carácter, presta numerosos servicios orientados a satisfacer las necesidades financieras y de servicios de organismos del sector público de la Provincia, tal como la gestión de cobranza de impuestos y pagos de sueldos. Su desempeño como Agente Financiero no lo obliga a prestar asistencia financiera a la Provincia de Río Negro más allá del alcance de las actividades de un banco privado.

La Provincia de Río Negro está ubicada en la región de la Patagonia y tiene una superficie de 203.013 kilómetros cuadrados, el 5% del territorio argentino. La Provincia está dividida en 39 municipalidades. Según datos del último censo realizado por el INDEC en 2010, la Provincia tenía 638.645 habitantes, o el 1,6% de la población del país, concentrada en las regiones de Alto Valle y Bariloche. La principal actividad de la Provincia es la producción de fruta, manzanas y peras, minería y exploración de petróleo y gas. La principal actividad industrial de la Provincia es la elaboración de productos agrícolas, que es la mayor actividad de exportación de la Provincia.

Segmentos operativos - Tesorería

Las actividades de Tesorería del Banco se enfocan en la administración de fondos, exceso de liquidez y la inversión del Emisor en títulos valores. Las actividades de este segmento se realizan a través de diferentes áreas, tales como: la sociedad de bolsa, división internacional y la mesa de cambios del Emisor.

Las actividades del segmento Tesorería del Emisor facilitan el marco para la asignación de fondos para préstamos e inversiones, brindando oportunidades para realizar inversiones rentables en los mercados locales y extranjeros en concordancia con sus políticas de gestión. El segmento Tesorería del Banco monitorea constantemente el canal de préstamos y la futura asignación de fondos para determinar los requerimientos de fondos totales y las mejores perspectivas de las opciones de financiación. El segmento Tesorería del Banco

también administra cualquier superávit o déficit de fondos de los segmentos de banca comercial, minorista, financiero y público, que asigne este sector para garantizar que cada uno de los segmentos de banca podrá contar con fondos para sus operaciones de préstamo. El segmento Tesorería tiene comunicación directa con las áreas de gestión de riesgos y negocios para conjugar las necesidades de sus clientes con sus requisitos regulatorios y en materia de riesgos. Las actividades del segmento Tesorería son desarrolladas por diferentes áreas operativas tales como: la sociedad de intermediación financiera, la división internacional, la mesa de operaciones y la división operaciones del Emisor.

Principales productos

Tarjetas de débito y crédito

El Emisor es una de las principales compañías emisoras de tarjetas de crédito y débito en Argentina de acuerdo con First Data (entidad emisora de las tarjetas de crédito MasterCard) y Visa. El Emisor tenía 651.167 cuentas de tarjetas de crédito y 2.051.480 de cuentas de tarjetas de débito al 31 de marzo de 2019.

El Emisor recibe ingresos por comisiones en relación con los siguientes servicios de tarjetas de crédito y débito:

- Tarjetas de crédito: cargos administrativos, cargos relacionados con la emisión de tarjetas (titular de la tarjeta principal y tarjetas adicionales), estado de cuenta y tarjetas adicionales, cargos por mora y otras comisiones. Asimismo, el Emisor recibe un porcentaje de las comisiones pagadas a los establecimientos comerciales en los que sus clientes utilizan las tarjetas de crédito del Banco, en contraprestación por los servicios en su carácter de entidad emisora y agente de pago.
- Tarjetas de débito: dependiendo del paquete de servicios, tipo de producto o cuenta, sus clientes pueden realizar una cantidad determinada de transacciones en sus terminales y en los cajeros automáticos adheridos a la red privada de cajeros automáticos que utiliza el Banco, operada por Banca Electrónica Compartida (BANELCO), sin costo alguno. Las transacciones adicionales y las transacciones realizadas en cajeros automáticos adheridos a otra red de cajeros automáticos y las compras con tarjeta de débito generan cargos.

Préstamos personales

Los préstamos personales son documentos a sola firma otorgados a clientes del segmento Personas. Existen diferentes opciones para la cobranza de las cuotas de los préstamos personales en función del tipo de cliente y relación con el Emisor, los más comunes se indican a continuación:

- Clientes de Mercado Abierto: el cliente paga las cuotas mediante un depósito en una cuenta relacionada.
- Clientes de Plan Sueldo con depósito directo: el pago de las cuotas mensuales se debita directamente de la cuenta sueldo del cliente.
- Clientes con código de descuento: las cuotas se cobran a través del empleador, quien retiene el monto de los haberes del empleado (a través de un código de descuento) y luego transfiere el importe para el pago de la cuota al Emisor en forma separada.

Al 31 de marzo de 2019, el Emisor posee un saldo de préstamos personales otorgados por un valor total de Ps. 9.821 millones, lo que representa una disminución del 6,6% respecto al ejercicio anual finalizado el 31 diciembre de 2018 y un 11,8% del total de la cartera de préstamos.

Cuentas corrientes y cajas de ahorro

Para todas las subcategorías de clientes el Banco ofrece cuentas corrientes y cajas de ahorro denominadas en pesos, dólares y euros. Al 31 de marzo de 2019, los clientes del Emisor tenían un total de 163.563 cuentas corrientes y 2.227.000 cajas de ahorro en las tres monedas. El siguiente cuadro muestra la evolución de las cuentas corrientes y cajas de ahorro del Emisor en y por los períodos indicados, así como también el de los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

	Por el período finalizado el 31 de marzo de	
	2019	2018
	(en miles de pesos, salvo los porcentajes)	
Cuentas⁽¹⁾:		
Cuentas corrientes:		
Monto en miles de pesos	10.353.341	8.595.265

% del total - depósitos	8,5%	13,3%
Cantidad de cuentas	163.563	170.441
Cajas de ahorro:		
Monto en miles de pesos	48.718.962	25.486.078
% del total - depósitos	40,0%	39,3%
Cantidad de cuentas	2.227.000	2.012.723
Depósitos totales en pesos	121.762.106	64.771.165

(1) Las cifras corresponden a depósitos del sector privado no financiero.

	Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de	
	2018	2017
	(en miles de pesos, salvo los porcentajes)	
Cuentas⁽¹⁾:		
Cuentas corrientes:		
Monto en miles de pesos.	10.149.168	15.950.534
% del total - depósitos	9,3%	23,10%
Cantidad de cuentas	165.751	171.601
Cajas de ahorro:		
Monto en miles de pesos	44.273.423	5.445.212
% del total - depósitos	40,6%	7,90%
Cantidad de cuentas	2.175.654	1.933.844
Depósitos totales en pesos	109.117.039	69.062.590

Seguros

El Emisor actúa en su carácter de agente institorio en la comercialización de seguros de las compañías, figura autorizada y aprobada por la SSN. Dentro de la oferta de productos se encuentran las coberturas de robo en cajero automático, vida, accidentes personales, combinado familiar, integral de comercio, robo en vía pública, desempleo, entre otros.

El Banco administra más de 983.000 pólizas de seguro. Desde febrero de 2016, el Emisor utiliza una nueva plataforma de administración y marketing de seguros con el propósito de hacer más eficientes los procesos de venta y atención en toda su red de sucursales.

El emisor cuenta con una amplia cartera de productos de seguros con la finalidad de satisfacer las necesidades de sus clientes.

El Emisor cobra comisiones sobre las pólizas de seguro que comercializa, pero no asume ningún riesgo de pago respecto de los titulares de las pólizas.

Cash management

El Emisor presta una serie de servicios transaccionales a sus clientes del segmento Corporate, Grandes Empresas, Agro, PyME y Finanzas y Sector Público, entre otros, cobranzas y pagos, saldos de cuentas y otras actividades relacionadas con la gestión de dinero. Al 31 de diciembre de 2018, el Emisor prestaba servicios de cash management a más de 788 clientes.

Los servicios y operaciones de pagos cash management del Banco están certificados por las normas de gestión ISO 9001:2015.

Pago de sueldos/haberes

El Emisor pone a disposición de sus clientes Corporate, Grandes Empresas, Agro, PyME y Finanzas y Sector Público servicios de pago de sueldos. Estos servicios están diseñados para facilitar y optimizar las operaciones diarias de sus clientes, reduciendo de esa manera el tiempo y costo de administración. Estos servicios sirven también para desarrollar relaciones con los empleados de sus clientes y aumentar las oportunidades de cross-selling. Al 31 de marzo de 2019, el Emisor tenía 566.189 cuentas individuales, de las cuales 161.493 corresponden al segmento de Empresas, 201 al segmento Personas, 3.332 al segmento Finanzas, 394.702 al segmento Sector Público, y 6.461 a Otros.

Los servicios y operaciones de Plan Sueldo del Banco están certificados por las normas de gestión ISO 9001:2015.

Préstamos comerciales y leasing

El Banco es líder en la prestación de servicios financieros y productos creados específicamente para el sector de empresas. Al 31 de diciembre de 2018, ocupaba el sexto puesto entre los bancos privados en términos de servicios de leasing según sus estimaciones basadas en los informes de la cartera de operaciones de arrendamiento financiero (“leasing”) publicados la Asociación de Leasing de Argentina

Comercio exterior

El Emisor tiene una sólida plataforma de operaciones de comercio exterior, con la cual abarca los procesos transaccionales y de otorgamiento de préstamos. A través de su plataforma de comercio exterior, el Emisor asesora a sus clientes y desarrolla y promociona su oferta de productos, entre otros, órdenes de pago, cobranzas de importaciones/exportaciones, transferencias al exterior, cartas de crédito y líneas de crédito.

El Emisor tiene una fuerte presencia regional con un modelo de atención personalizada a través de funcionarios capacitados situados en cada región en la que opera.

Es uno de los principales actores del mercado de operaciones de comercio exterior argentino. Los servicios y operaciones de comercio exterior han sido certificados con las normas de gestión de calidad ISO 9001:2015, lo que lo convierte en el único banco que ha implementado un sistema de gestión de calidad basado en la satisfacción del cliente y gestión de riesgos dentro del sistema financiero argentino.

Compraventa de títulos y acciones

El Emisor desempeña una función preponderante en el sector bancario local en el negocio de compraventa de títulos y acciones. Esta iniciativa está alineada con su estrategia de tener un perfil de riesgo equilibrado para cumplir con un plan comercial agresivo. Como parte de su operatoria diaria, el segmento Tesorería coloca Notas del BCRA de corto plazo en moneda local y bonos del gobierno nacional y bonos extranjeros, así como también una amplia gama de títulos valores provinciales y títulos privados.

En sinergia con su división Mercado de Capitales, actúa como formador del mercado de varios títulos valores privados, que representa una ventaja cuando se formula una estrategia basada en el cliente.

Mercado de capitales

El Emisor ofrece servicios integrales en relación con actividades de fideicomisos financieros, que incluyen la estructuración de operaciones financieras, la oferta del producto a los inversores y la administración de los bienes fideicomitidos. Es una de las entidades pioneras en esta línea de negocios en Argentina, y al 31 de diciembre de 2018, el Emisor había liderado aproximadamente 416 ofertas públicas de fideicomisos financieros por un monto de más de Ps. 29.800 millones. El Banco es uno de los principales bancos que presta servicios relacionados con fideicomisos financieros y diversos activos subyacentes en Argentina, incluso préstamos personales, préstamos de consumo, tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios, garantías y préstamos prendarios. En marzo de 2006, se transformó en el primer banco en Argentina que obtuvo la clasificación de Evaluación “Excelente” como Fiduciario en Argentina asignada por Standard & Poor's y ha mantenido dicha clasificación a lo largo de los años.

En el área de mercado de capitales, el Emisor ofrece servicios para la estructuración y colocación de títulos de deuda y préstamos sindicados, entre otros.

Con respecto a las operaciones de emisión de deuda, el Banco organizó y colocó 5 emisiones de obligaciones negociables durante 2018 por un valor de más de Ps. 2.250 millones. El Banco también participó de operaciones sindicadas por un monto total de Ps. 550 millones.

Títulos de inversión

Como parte de las operaciones del segmento Tesorería, el Emisor tiene inversiones en diferentes activos financieros como bonos emitidos por el gobierno nacional, letras provinciales, obligaciones negociables y letras

del BCRA de corto plazo. Esta amplia gama de activos, le permite al Banco tener posiciones activas con las que puede administrar los riesgos correspondientes.

Obtención de fondos

Los depósitos son la principal fuente de liquidez del Emisor, totalizando Ps. 121.762,1 millones al 31 de marzo de 2019. Estos depósitos incluían los depósitos generados por la red de sucursales del Emisor, de los clientes del segmento Financiero y Público y Corporate y los depósitos del sector público de la Provincia de Río Negro para la que actúa como Agente financiero.

La obtención de fondos al 31 de marzo de 2019, aumentó principalmente debido al incremento del total de depósitos, que pasaron de Ps. 109.117,0 millones al 31 de diciembre de 2018 a Ps. 121.762,1 millones al 31 de marzo de 2019. Estos depósitos se utilizaron principalmente para financiar la cartera de préstamos que totalizaron Ps. 78.659,8 millones de préstamos vigentes al 31 de marzo de 2019 en comparación con Ps. 82.549,3 millones al 31 de diciembre de 2018.

Red de distribución del Emisor

La red de distribución del Emisor presta a sus clientes diferentes soluciones bancarias dirigidas a satisfacer sus necesidades. Al 31 de diciembre de 2018, el Emisor tenía una red de 186 sucursales con todos los servicios, 19 centros de atención, 394 terminales de autoservicio y 607 cajeros automáticos. Los clientes del Banco pueden también acceder a sus productos y servicios a través de su Centro de Contacto con Clientes y la banca electrónica. La cantidad de clientes que utilizan la plataforma móvil a través de los servicios móviles creció más del 70% durante 2018. Según cifras del Banco Central, al 31 de diciembre de 2018, la red de sucursales del Emisor ocupaba el sexto lugar entre los bancos del sector privado de Argentina y la red de cajeros automáticos del Emisor ocupaba el quinto en cantidad de equipos.

Asimismo, al 30 de noviembre de 2018, en la Provincia de Río Negro, el Emisor tenía la mayor red de distribución según las cifras del Banco Central, con un 31% de participación de mercado de sucursales y un 50% de cajeros automáticos y terminales de autoservicio.

Red de sucursales y centros de atención

Al 31 de diciembre de 2018, las sucursales y centros de atención del Emisor, dispuestas en once regiones de todo el país, se concentraban en las tres regiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (80 sucursales y centros de atención) y en la región de Provincia de Buenos Aires (11 sucursales y centros de atención). El Emisor también tenía 27 sucursales y centros de atención en la Provincia de Río Negro y otras 68 sucursales en toda la Argentina.

Red de cajeros automáticos y terminales de autoservicio

Al 31 de diciembre de 2018, el Emisor tenía 1001 cajeros automáticos y terminales de autoservicio en todo el país.

Los clientes pueden retirar efectivo dentro de la red de cajeros automáticos del Emisor las 24 horas del día, los 365 días del año. Los cajeros automáticos de la red del Banco además permiten a sus clientes consultar saldos, hacer depósitos, transferencias y pagos de servicios. Además, con la tarjeta de débito Patagonia 24, sus clientes pueden operar en más de 10.000 cajeros automáticos de las redes BANELCO y LINK en Argentina y en más de 700.000 cajeros automáticos adheridos a la Red Visa Plus de todo el mundo.

Las terminales de autoservicio del Emisor están integradas en sus sucursales y, entre las operaciones disponibles, permiten a los clientes consultar saldos, hacer depósitos en cajas de ahorro y cuentas corrientes, pagar tarjetas de crédito, constituir plazos fijos, hacer transferencias de dinero. Estas terminales brindan un método de procesamiento eficiente y de bajo costo de un gran número de transacciones bancarias.

Al 31 de diciembre de 2018, la red de terminales de autoservicio y cajeros automáticos del Emisor se concentraba en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires (52%) y la Provincia de Río Negro (35%).

Canales electrónicos y alternativos

El Emisor también utiliza los siguientes canales de distribución:

- Centro de contacto con clientes: El servicio telefónico que se conoce como “Patagonia en Línea” permite a los clientes del Banco hacer consultas, transferir fondos, hacer pagos con tarjetas de crédito y aumentar el límite de las tarjetas de crédito con la asistencia de un operador. Patagonia en Línea también presta un servicio automático durante las 24 horas por medio del cual los clientes pueden hacer consultas relacionadas con tarjetas de crédito y débito y otros productos y servicios.
- Banca electrónica y banca móvil: El Emisor ofrece un servicio de banca electrónica que se conoce como “Patagonia e-bank” que permite a sus clientes acceder a sus cuentas por internet, consultar saldos, efectuar transacciones y contratar nuevos productos. También ofrece Patagonia Móvil, una aplicación que permite a los clientes visualizar la información sobre los saldos de sus cuentas y transacciones anteriores, efectuar pagos y transferencias, realizar inversiones y obtener préstamos a través de teléfonos celulares. El Banco está enfocado en la modernización de sus plataformas online y mobile para mejorar la usabilidad y la satisfacción del cliente en sus canales digitales, ofreciendo innovación y más funcionalidades para lograr la mejor experiencia al operar con la entidad.

Al 31 de diciembre de 2018, la banca online del Emisor fue utilizada por más de 500 mil clientes, que generaron más de un millón de transacciones monetarias por mes. En este sentido, se destaca la performance de la plataforma móvil, finalizando el año 2018 con más de 220.000 clientes activos en la aplicación, con un crecimiento mayor al 70% durante el periodo.

Competencia

La información incluida a continuación con respecto a la posición de mercado y rendimiento financiero del Emisor frente al sector financiero argentino se presenta, para su comparación, de conformidad con las Normas del Banco Central publicadas por el BCRA, y no puede ser comparada con los resultados del Emisor preparados de conformidad con las NIIF.

Al 31 de diciembre de 2018, el Emisor se encontraba entre los 10 principales bancos privados del sistema financiero argentino en términos de préstamos, depósitos, activos y patrimonio neto, según se refleja en los siguientes cuadros:

Al 31 de diciembre de 2018		
Activos Totales		
	Pesos (en millones)	Porcentaje del total (%)
	511.338	15,86%
Banco de Galicia y Buenos Aires	495.272	15,36%
Banco Santander Río S. A	354.667	11,00%
BBVA Banco Francés S. A	323.268	10,03%
Banco Macro S.A	224.828	6,97%
HSBC Bank Argentina S. A	184.180	5,71%
ICBC S. A	161.677	5,02%
Banco Credicoop Cooperativa Limitado	151.354	4,70%
Banco Patagonia S. A	133.177	4,13%
Supervielle S. A	103.184	3,20%
Citibank S. A	78.189	2,43%
Banco Hipotecario S. A	73.498	2,28%
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A	63.856	1,98%
Itaú Argentina	48.865	1,52%
Comafi S. A	39.245	1,22%
Otros	276.828	8,59%
Total	3.223.426	100%

Fuente: Banco Central

Al 31 de diciembre de 2018	
Préstamos Totales	

	Pesos (en millones)	Porcentaje del total (%)
Banco de Galicia y Buenos Aires	235.738	16,86%
Banco Santander Río S. A	202.183	14,46%
BBVA Banco Francés S. A	176.854	12,65%
Banco Macro S.A	164.522	11,77%
HSBC Bank Argentina S. A	83.652	5,98%
ICBC S. A	79.820	5,71%
Banco Patagonia S. A	78.273	5,60%
Supervielle S. A	68.182	4,88%
Banco Credicoop Cooperativa Limitado	44.567	3,19%
Banco Hipotecario S. A	37.763	2,70%
Itaú Argentina	32.347	2,31%
Nuevo Banco de Santa Fe S.A	30.082	2,15%
Citibank S. A	29.368	2,10%
Comafi S. A	22.402	1,60%
Banco del Tucumán S.A	13.731	0,98%
Otros	98.590	7,05%
Total	1.398.074	100%

Fuente: Banco Central

Al 31 de diciembre de 2018		
Depósitos Totales		
	Pesos (en millones)	Porcentaje del total (%)
Banco Santander Río S. A	381.794	16,78%
Banco de Galicia y Buenos Aires	361.446	15,88%
BBVA Banco Francés S. A	259.763	11,41%
Banco Macro S.A	219.726	9,66%
HSBC Bank Argentina S. A	163.633	7,19%
Banco Credicoop Cooperativa Limitado	134.641	5,92%
ICBC S. A	117.291	5,15%
Banco Patagonia S. A	108.184	4,75%
Supervielle S. A	94.025	4,13%
Nuevo Banco de Santa Fe S.A	59.558	2,62%
Citibank S. A	56.933	2,50%
Itaú Argentina	43.571	1,91%
Comafi S. A	34.972	1,54%
Banco Hipotecario S. A	30.402	1,34%
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A	26.903	1,18%
Otros	182.850	8,03%
	2.275.692	100%

Fuente: Banco Central

Al 31 de diciembre de 2018		
Patrimonio Neto Total		
	Pesos (en millones)	Porcentaje del total (%)
Banco Macro S.A	54.846	14,69%
Banco de Galicia y Buenos Aires	43.969	11,78%
Banco Santander Río S. A	43.125	11,55%
BBVA Banco Francés S. A	38.552	10,33%
Citibank S. A	21.555	5,77%
Banco Patagonia S. A	18.293	4,90%

ICBC S. A	17.601	4,71%
HSBC Bank Argentina S. A	16.486	4,42%
Banco Credicoop Cooperativa Limitado	15.512	4,16%
Banco San Juan S.A	13.516	3,62%
Supervielle S. A	13.185	3,53%
Banco Hipotecario S. A	9.799	2,62%
Nuevo Banco de Santa Fe S.A	9.660	2,59%
Itaú Argentina	7.822	2,10%
BSE S.A	7.318	1,96%
Otros	42.090	11,27%
Total	373.329	100%

Fuente: Banco Central

Al 31 de diciembre de 2018, el Emisor se encontraba entre los primeros 10 bancos privados del sistema financiero argentino en términos de préstamos personales, según se refleja en el siguiente cuadro:

Al 31 de diciembre de 2018		
Préstamos Personales		
	Pesos (en millones)	Porcentaje del total (%)
Banco Macro S.A	46.137	18,02%
Banco Santander Río S. A	29.601	11,56%
Banco de Galicia y Buenos Aires	25.312	9,89%
BBVA Banco Francés S. A	22.198	8,67%
Supervielle S. A	13.768	5,38%
Nuevo Banco de Santa Fe S.A	13.100	5,12%
Banco del Tucumán S.A	10.275	4,01%
Banco Patagonia S. A	9.829	3,84%
HSBC Bank Argentina S. A	7.743	3,02%
Banco Industrial S.A	7.666	2,99%
Banco Hipotecario S. A	7.413	2,90%
ICBC S. A	6.853	2,68%
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A	6.765	2,64%
Banco Credicoop Cooperativa Limitado	5.815	2,27%
Banco Piano S.A	5.580	2,18%
Otros	37.967	14,83%
Total	256.022	100%

Al 31 de diciembre de 2018, el Emisor se encontraba entre los primeros cinco bancos privados del sistema financiero argentino en términos de operaciones de leasing, tal como se refleja en el siguiente cuadro:

Al 31 de diciembre de 2018		
Leasing		
	Pesos (en millones)	Porcentaje del total (%)
Comafi S. A	3.945	20,40%
Supervielle S. A	3.346	17,30%
Banco de Galicia y Buenos Aires	2.345	12,12%
HSBC Bank Argentina S. A	2.331	12,05%
BBVA Banco Francés S. A	1.518	7,85%
Banco Patagonia S.A	984	5,09%
Banco Credicoop Cooperativa Limitado	837	4,33%
ICBC S. A	817	4,22%

Banco Santander Rio S. A	807	4,17%
Citibank S. A	553	2,86%
Banco Macro S.A	448	2,32%
Nuevo Banco del Chaco S.A	297	1,54%
Banco de San Juan S.A	226	1,17%
Itaú Argentina	201	1,04%
Banco Industrial S.A	178	0,92%
Otros	509	2,63%
Total	19.342	100%

Fuente: Banco Central

El Emisor enfrenta un alto grado de competencia prácticamente en todos los principales productos financieros en lo que respecta a la determinación de precios (tasas de interés o comisiones) y plazo. La estrategia del Emisor frente a esta competencia es mantener políticas comerciales agresivas, generar diferenciación en el modelo de productos y atención a clientes y rediseñar procesos para obtener una mayor productividad de las ventas.

Tecnología

Las cinco plataformas clave proveen la arquitectura de la aplicación bancaria: (i) la plataforma central del Banco (Bantotal) que es una aplicación on-line centralizada de tipo AS/400, con una base de datos única que provee de servicio a los diferentes productos bancarios, con interfaces para la plataforma comercial, la plataforma de cajeros y las plataformas de los departamentos centrales; (ii) la plataforma de canales automáticos, una plataforma multicanal u omnicanal de Technsys, que provee de un conjunto de aplicaciones de internet tanto para clientes minoristas como mayoristas, a través de una arquitectura orientada a servicios ("SOA") que también provee de una plataforma de banca móvil y puestos de autoservicio y respuestas e interacciones de voz provistas por la plataforma de centro de contactos (Genesys); (iii) la nueva plataforma de sucursal comercial, una plataforma en desarrollo que integra múltiples programas de respaldo (*back-ends*) a través de una arquitectura de TI omnicanal (que contiene todos los sistemas de TI necesarios para asegurar la percepción de marca uniforme a través de todos los canales) para soportar la automatización de procesos de sucursales, incluso gestión de imagen, gestión del proceso comercial (BPM), automatización del riesgo crediticio y entorno electrónico; (iv) la plataforma de inteligencia de negocios que contiene una base de datos empresarial (Teradata) cuyos datos se obtienen directamente desde la base de datos de la plataforma central del Banco, y un sistema de información de gestión (Microstrategy), con capacidades de minería de datos de tipo SPSS que soporta procesos de puntuación crediticia, cobranzas de préstamos en mora y actividades y gestión de las relaciones con los clientes; y (v) la plataforma de soporte empresarial que provee servicios para diversas áreas, entre otros, servicios contables, servicios del libro mayor, informes regulatorios, y protección contra lavado de activos.

Con respecto a las operaciones de tecnología de la información, el Banco ha celebrado un acuerdo estratégico de tercerización de los centros de datos con IBM, originalmente firmado en el año 2005 y renovado por cinco años en 2015. Es un acuerdo de tercerización de los centros de datos que incluye instalaciones, hardware, sistemas operativos, software, operaciones y soporte técnico, entre otros. El Banco cuenta con dos centros de cómputos para contingencias: uno pertenece al Banco y está situado en su casa central y el otro lo alquila a IBM.

Propiedad Intelectual

En Argentina, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) es el organismo estatal responsable del registro de marcas y patentes. Luego de la inscripción, el titular goza del uso exclusivo de la marca registrada durante diez años. Se puede renovar indefinidamente por períodos iguales, si el registrante demuestra que la ha utilizado en el lapso de los cinco años previos a cada vencimiento. El Emisor posee un gran número de marcas registradas, siendo la principal Banco Patagonia y las restantes, en su mayoría son marcas que designan sus productos o servicios.

Todas sus marcas importantes se encuentran registradas o han sido presentadas al INPI para su registro. Asimismo, el Emisor cuenta con la titularidad de la marca Banco Patagonia en Uruguay y en Brasil.

Procedimientos legales y administrativos

El Emisor es sujeto de procedimientos administrativos regulares relacionados con gestiones de cobranzas y otros procedimientos legales e investigaciones. No tiene conocimiento de ningún litigio, otro procedimiento o investigación, pendiente o inminente en su contra, que podría tener un efecto sustancial adverso sobre sus operaciones, ni de ninguna razón que pudiera originar cualquiera de dichos procedimientos. Sin perjuicio de ellos, periódicamente ha constituido provisiones por riesgo de incobrabilidad con respecto a litigios pendientes.

Al 31 de marzo de 2019, el monto reclamado con respecto a juicios laborales fue de Ps. 136,5 millones, un aumento de Ps. 2,1 millones desde el 31 de diciembre de 2018, y las provisiones de los estados financieros fueron de Ps. 49,5 millones, un aumento de Ps. 5,6 millones desde el 31 de diciembre de 2018. Asimismo, al 31 de marzo de 2019, el monto reclamado por cuestiones legales fue de Ps. 275,6 millones, una disminución de Ps. 25,7 millones desde el 31 de diciembre de 2018, y las provisiones correspondientes fueron de 219,0 millones disminuyendo en Ps. 3,2 millones desde el 31 de diciembre de 2018. Las provisiones para cuestiones impositivas al 31 de marzo de 2019 fueron de Ps. 130,3 disminuyendo Ps. 4,2 millones con respecto al 31 de diciembre de 2018 frente a las determinaciones en materia de impuestos de cuestiones administrativas provinciales y municipales que no fueron objeto de acciones legales en materia de impuestos en la actualidad. Como resultado de lo anteriormente indicado al 31 marzo de 2019, el monto total de provisiones reflejado en sus estados financieros fue de Ps. 398,8 millones.

El Emisor no tiene conocimiento de la existencia de ninguna disputa, procedimiento legal o investigación que, en caso de un resultado desfavorable, tendría un efecto sustancial adverso sobre sus operaciones y productos. Las provisiones se establecen cuando, a criterio de su gerencia y sus asesores legales, es probable que deriven en una obligación adicional y el monto pueda ser razonablemente estimado. De acuerdo con la gerencia y los asesores legales del Banco, no se establecieron provisiones para ninguna acción legal, distintas de aquellas descriptas en los estados financieros, dado que no resultarán en obligaciones adicionales aparte de las ya informadas ni tendrán un impacto sustancial sobre el Banco ni sobre los estados financieros consolidados.

C) MARCO REGULATORIO DEL SISTEMA FINANCIERO ARGENTINO

A continuación se resumen ciertos aspectos relacionados con el sistema financiero argentino. Este resumen no pretende ser un análisis exhaustivo de todas las leyes y normas aplicables a dichas entidades en la Argentina.

Descripción general

Fundado en 1935, el Banco Central es la principal autoridad monetaria y financiera de Argentina. Su misión es preservar el valor de la moneda y la estabilidad financiera, el trabajo y el desarrollo económico con equidad social. Opera de acuerdo con su carta orgánica, reformada en 2012 por Ley N° 26.739, y las disposiciones de la Ley de Entidades Financieras. Según los términos de su carta orgánica, el Banco Central debe operar independientemente del gobierno nacional.

Desde 1977, las actividades bancarias en Argentina han estado reguladas principalmente por la Ley de entidades Financieras, que faculta al Banco Central a regular el sector financiero. El Banco Central regula y supervisa el sistema bancario argentino a través de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias es responsable de hacer cumplir las leyes bancarias de Argentina, mediante el establecimiento de requisitos de suministro de información contable y financiera aplicable al sector bancario, la supervisión y reglamentación de las prácticas en materia de préstamos de las entidades financieras y el establecimiento de normas para la participación de las entidades financieras en el mercado cambiario y la emisión de bonos y otros títulos, entre otras funciones.

Las facultades del Banco Central incluyen fijar la base monetaria, establecer las tasas de interés, determinar las exigencias de capital mínimo, liquidez y solvencia, regular el crédito, aprobar fusiones bancarias, aumentos de capital y transferencias de acciones, otorgar y revocar licencias bancarias, autorizar el establecimiento de sucursales de entidades financieras extranjeras en Argentina y otorgar asistencia financiera a entidades financieras en casos de problemas temporarios de liquidez o solvencia.

El Banco Central establece diferentes “relaciones técnicas” que deben ser observadas por las entidades financieras con respecto a los niveles de solvencia, liquidez, créditos máximos a otorgar a los clientes y posiciones de activos y pasivos en moneda extranjera.

Además, las entidades financieras necesitan la autorización del Banco Central para la enajenación de sus activos, tal como es el caso de la adquisición de participaciones en otras sociedades financieras o no financieras y la constitución de gravámenes sobre sus activos, entre otros.

Como supervisor del sistema financiero, el Banco Central exige que las entidades financieras presenten información en forma diaria, mensual, trimestral, semestral y anual. Estos informes, que incluyen balances y estados de resultados, información relacionada con los fondos de reserva, destino de los depósitos, clasificaciones de calidad de cartera, (incluyendo detalles de los principales deudores y cualquier previsión por riesgo de incobrabilidad), cumplimiento de los requerimientos de capital y cualquier otra información pertinente, permiten al Banco Central monitorear las prácticas comerciales de las entidades financieras. Para confirmar la exactitud de la información suministrada, el Banco Central está autorizado a llevar a cabo inspecciones.

Si las normas del Banco Central no se cumplen, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias puede imponer diversas sanciones dependiendo de la gravedad de la infracción. Estas sanciones varían desde un aviso de incumplimiento a la imposición de multas o incluso, en casos extremos, la revocación de la licencia para operar de la entidad financiera. Además, el incumplimiento de ciertas normas puede dar lugar a la presentación obligatoria de planes de regulación y saneamiento ante el Banco Central. Estos planes deben ser aprobados por el Banco Central a fin de permitir que la entidad financiera permanezca en el negocio.

Regulación y supervisión bancaria

Supervisión del Banco Central

Desde septiembre de 1994, el Banco Central ha supervisado a las entidades financieras argentinas en forma consolidada. Dichas entidades financieras deben presentar periódicamente estados *financieros* consolidados que reflejen tanto las operaciones de su casa central o matriz, como también las de sus filiales en Argentina y en el exterior, y aquellas correspondientes a sus subsidiarias significativas, tanto nacionales como extranjeras. En consecuencia, los requisitos relacionados con liquidez y solvencia, capitales mínimos, concentración del riesgo y provisiones por riesgos de incobrabilidad, entre otros, deben ser calculados sobre una base consolidada.

Actividades e inversiones permitidas

La Ley de Entidades Financieras se aplica a todas aquellas personas humanas y jurídicas que actúan como intermediarios financiero y que, como tales, son parte del sistema financiero, incluyendo los bancos comerciales, bancos de inversión, bancos hipotecarios, compañías financieras, sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda y cooperativas de crédito. Excepto los bancos comerciales, que están autorizados a realizar todas las actividades financieras y prestar todos los servicios financieros que estén específicamente establecidos por la ley o las normas del Banco Central, las actividades que pueden ser llevadas a cabo por las otras entidades financieras argentinas están detalladas en la Ley de Entidades Financieras y las normas del Banco Central relacionadas. Algunas de las actividades permitidas a los bancos comerciales incluyen la capacidad para: (i) recibir depósitos del público tanto en moneda local como extranjera; (ii) suscribir, adquirir, colocar o negociar títulos de deuda, incluidos títulos públicos, tanto en el mercado cambiario como en el mercado abierto (sujeto a previa aprobación por parte de la CNV, si corresponde); (iii) otorgar y recibir préstamos; (iv) garantizar las deudas de los clientes; (v) llevar a cabo operaciones de cambio en moneda extranjera; (vi) emitir tarjetas de crédito; (vii) actuar, sujeto a determinadas condiciones, como intermediarios en operaciones de bienes inmuebles; (viii) llevar a cabo operaciones de financiamiento comercial; (ix) actuar como agentes de registro de letras hipotecarias, (x) realizar transacciones en moneda extranjera y (xi) actuar como fiduciario en fideicomisos financieros. Además, de acuerdo con la Ley de Entidades Financieras, y la Comunicación “A” 3086 del Banco Central, y modificatoria, los bancos comerciales están autorizados a participar en sociedades comerciales, industriales, agropecuarias y de otros tipos que no presten servicios complementarios a los servicios bancarios (según se define en las normas del Banco Central correspondientes) en tanto la participación del banco comercial en tales sociedades no supere el 12,5% de sus acciones con derecho de voto o de su capital social. No obstante, en caso de exceder los límites mencionados anteriormente, el banco deberá (i) solicitar autorización al Banco Central, o (ii) notificar dicha situación a la autoridad referida, según el caso. Sin embargo, aun cuando las participaciones de los bancos comerciales no alcancen tales porcentajes, éstos no tienen permiso para operar dichas sociedades si: (i) tales participaciones les permiten controlar una mayoría de votos suficientes para formar la voluntad social en una asamblea de accionistas o reunión del directorio, o (ii) el Banco Central no autoriza la adquisición.

Asimismo, de conformidad con la Comunicación “A” 5700, con sus modificaciones, los bancos comerciales pueden mantener participaciones en el capital de empresas del país o del exterior que tengan por objeto exclusivo una o dos de las actividades que se mencionan en el punto 2.2. de la Comunicación “A” 5700, cuando la participación del banco comercial fuera superior al 12,5% de las acciones con derechos de voto de dicha empresa o permitiera al banco comercial controlar la mayoría de votos en una asamblea de accionistas o reunión de Directorio. Si el objeto social de dichas empresas incluye dos de las actividades que se mencionan en el punto 2.2. de la Comunicación “A” 5700, se requerirá la autorización del Banco Central.

De conformidad con la Comunicación “A” 6129 del BCRA, los bancos comerciales se distinguen en: (i) de primer grado, que podrán realizar todas las operaciones activas, pasivas y de servicios en los términos del artículo 21 de la Ley de Entidades Financieras; y (ii) de segundo grado, que podrán realizar todas las operaciones activas, pasivas y de servicios que la ley y la normativa establecen para los bancos de primer grado, pero sólo podrán recibir depósitos del sector financiero del país y de bancos del exterior. Además estarán sujetos a las relaciones sobre el fraccionamiento del riesgo crediticio que disponga la reglamentación.

Bajo las normas del Banco Central, el monto total de las participaciones de un banco comercial en el capital social de terceros, incluidas las participaciones en fondos comunes de inversión, no puede superar el 50% de la Responsabilidad Patrimonial Computable (“RPC”) de dicho banco. Además, el monto total de las participaciones de un banco comercial, consideradas en conjunto, en: (i) acciones sin cotización, excluyendo las participaciones en sociedades que prestan servicios complementarios a la actividad financiera y participaciones en empresas del estado que prestan servicios públicos, (ii) acciones con cotización y cuotas partes en fondos comunes de inversión que no den lugar a requerimientos de capital mínimo sobre la base de riesgo de mercado, y (iii) acciones con cotización pública que no tienen un “precio de mercado disponible para el público en general,” está limitado al 15% de la RPC de dicho banco. A tal efecto, se considera que un determinado precio de mercado de las acciones está “disponible para el público en general” cuando se dispone de cotizaciones que midan el volumen diario de las operaciones significativas, y la venta de tales acciones en poder del banco no afectaría significativamente el listado de las acciones.

Operaciones y actividades prohibidas y limitadas

La Ley de Entidades Financieras prohíbe a los bancos comerciales: (a) constituir gravámenes sobre sus bienes sin previa autorización del Banco Central, (b) aceptar en garantía sus propias acciones, (c) operar con sus directores o administradores y con empresas o personas vinculadas con ellos, en condiciones más favorables que las acordadas de ordinario a su clientela, y (d) explotar por cuenta propia empresas comerciales, industriales, agropecuarias, o de otra clase, salvo con expresa autorización del Banco Central, excepto aquéllas consideradas actividades financieras según las normas del Banco Central. No obstante lo antedicho, los bancos podrán ser titulares de acciones de otras entidades financieras, siempre que medie autorización del Banco Central, y de acciones y obligaciones de empresas de servicios públicos en la medida en que sean necesarias para obtener su prestación.

El 26 de enero de 2017 el Banco Central emitió la Comunicación “A” 6167, mediante la cual estableció un nuevo régimen disciplinario “*Régimen disciplinario a cargo del Banco Central de la República Argentina, Leyes 21.526 y 25.065 y sus modificatorias*”, a cargo del Banco Central, que reemplaza las normas sobre “*Sustanciación y sanción en los sumarios previstos en el artículo 41 de la Ley 21.526.*”

Requisitos de liquidez y solvencia

Fondo de reserva legal

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Entidades Financieras y las normas del Banco Central, las entidades financieras deben destinar anualmente al fondo de reserva legal una proporción de sus utilidades del 20%. Esta reserva legal sólo puede ser utilizada cuando la entidad financiera ha incurrido en pérdidas y ha agotado todas las demás reservas. Si una entidad financiera no cumple con esta exigencia, no podrá pagar dividendos a sus accionistas. Para mayor aclaración, véase “*Reseña y Perspectiva Operativa y Financiera*”.

- ***Activos no líquidos***

A partir de febrero de 2004, los activos no líquidos (computados sobre la base del saldo al cierre al último día de cada mes, y neto de los activos que se deducen para computar el capital regulatorio) más el financiamiento otorgado a partes relacionadas con entidades financieras (computado sobre la base del saldo más alto durante

cada mes para cada cliente) no puede exceder el 100% del capital regulatorio de la entidad financiera, con excepción de ciertos casos particulares en los que se puede exceder hasta el 150%.

Los activos no líquidos consisten en activos y créditos diversos, mobiliario e instalaciones, activos dados como garantía de obligaciones, salvo las operaciones con swaps, futuros y derivados, determinados bienes intangibles y participaciones en otras sociedades sin listado o acciones con listado, si la tenencia supera el 2,5% del capital de la sociedad emisora. El incumplimiento de los índices produce un aumento en las exigencias de capital mínimo equivalente al 100% del exceso del índice.

Exigencias de capital mínimo

El Banco Central exige que las entidades financieras integren montos mínimos de capital sobre la base de los saldos al cierre de cada mes. Dicho monto mínimo de capital se define como el mayor valor que resulte de la comparación entre (i) la exigencia básica y (ii) la suma del riesgo de crédito, riesgo operacional y riesgo de mercado. Las entidades financieras (junto con sus sucursales en Argentina y en el exterior) deben cumplir con los requisitos de capital mínimo tanto en forma individual como consolidada.

El Banco debe satisfacer las exigencias de capital mínimo. El siguiente cuadro muestra las exigencias de capital mínimo consolidado que establece la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias en las fechas indicadas.

	31 de marzo		31 de diciembre	
	2019	2018	2018	2017
	(En millones de pesos)			
Cálculo del excedente de capital				
Riesgo de Crédito	7.567,4	5.506,1	7.659,2	5.551,9
Riesgo de Mercado - Títulos	71,2	79,5	68,5	35,9
Riesgo de Mercado - Monedas	160,0	88,2	113,7	46,6
Riesgo Operacional	2.238,7	1.554,6	1.963,1	1.465,5
Exigencia de Capital Mínimo	10.037,3	7.228,4	9.804,5	7.099,9
Capital Ordinario Nivel 1	19.501,3	12.179,2	16.110,6	10.640,1
Conceptos deducibles	(1.625,4)	(982,0)	(1.673,3)	(162,2)
Capital Ordinario Nivel 2	771,5	607,3	821,2	617,6
Responsabilidad Patrimonial Computable	18.647,4	11.804,5	15.258,5	11.095,5
Excedente de Capital	8.610,1	4.576,1	5.454,0	3.995,6
Ratios seleccionados patrimonio y liquidez				
Responsabilidad Patrimonial Computable /Activos de riesgo ponderados	15,2%	13,4%	12,7%	12,7%
Patrimonio Neto como porcentaje del total de Activos	12,1%	14,1%	11,8%	12,8%
Pasivo total como múltiplo del Patrimonio Neto total	7,3	6,1	7,5	6,8
Activos Líquidos como porcentaje del total de Depósitos	67,9%	39,0%	53,9%	40,6%
Préstamos como porcentaje del total de Activos	45,1%	64,1%	53,4%	63,3%

- (1) Activos Ponderados por Riesgo calculados conforme a la siguiente expresión: “APR = APRc + (Rm + Ro) x 12,5”, donde:
APRc = Activos Promedios Por Riesgo de crédito
Rm = Exigencia por Riesgo de mercado
Ro = Exigencia por Riesgo operacional

La integración del capital a ser considerada a los efectos de determinar el cumplimiento de los requerimientos de capital mínimo es la RPC de la entidad financiera (Comunicación “A” 5580, y modificatoria).

Asimismo, según la Comunicación “A” 5694, y modificatorias, del Banco Central, las entidades financieras calificadas como de D-SIB, que no es el caso del Banco a la fecha de este Prospecto, deberán observar una exigencia de capital mínimo adicional, equivalente al 1% del total de los APR, exclusivamente con capital ordinario de nivel uno (CO1).

Capital mínimo básico

La exigencia de capital mínimo básico varía según el tipo de entidad financiera y la jurisdicción en que se encuentre radicada su sede principal, Ps. 26 millones para los bancos en las categorías I y II (Ps. 12 millones para

las restantes entidades de esta categoría), y Ps. 15 millones para los bancos de las categorías III y IV (Ps. 8 millones para las restantes entidades de esta categoría).

Categorías	Bancos	Restantes Entidades (*) <i>(en millones de pesos)</i>
I y II	26	12
III y IV	15	8

(*) A excepción de las entidades de crédito.

Adicionalmente, las entidades con casas operativas ubicadas en puertos y aeropuertos internacionales deberán observar la exigencia que corresponde a la Categoría I. Las compañías financieras que realicen, en forma directa, operaciones de comercio exterior deberán observar las exigencias establecidas para los bancos en la respectiva categoría.

Descripción de las regulaciones de Capital Nivel 1 y Nivel 2

Las entidades financieras argentinas deben cumplir con lineamientos similares a los adoptados por el Comité de Basilea para la *Supervisión Bancaria y Prácticas de Supervisión*, modificados en 1995 (las “Normas de Basilea”). En ciertos aspectos, sin embargo, las regulaciones bancarias argentinas exigen coeficientes más altos que los establecidos por las Normas de Basilea.

El Banco Central toma en consideración la responsabilidad patrimonial computable o RPC de una entidad financiera para determinar el cumplimiento de las exigencias de capital. De conformidad con las Comunicaciones “A” 5369 y 5580, con sus modificaciones y normas complementarias, la RPC está representada por el capital nivel 1 (Patrimonio Neto Básico) y capital Nivel 2 (Patrimonio Neto Complementario).

El capital nivel 1 está compuesto por (i) el capital ordinario nivel 1 (COn1), (ii) conceptos deducibles del capital ordinario nivel 1 (CDCOn1), (iii) el capital adicional nivel 1 (CAN1) y (iv) conceptos deducibles del capital adicional nivel uno (CDCAn1)

El COn1 comprende: (i) el capital social (excluyendo acciones con preferencia patrimonial), (ii) los aportes no capitalizados (excluyendo las primas de emisión), (iii) los ajustes al patrimonio, (iv) las reservas de utilidades excluyendo la reserva especial para instrumentos de deuda, (v) los resultados no asignados, (vi) otros resultados positivos o negativos en los siguientes términos y proporciones:

- respecto de los resultados de ejercicios económicos anteriores, 100% de los resultados netos registrados hasta el último estado contable trimestral con informe limitado del auditor, por el último ejercicio económico completo y respecto del que el auditor no ha emitido informe de auditoría;
- 100% de los resultados netos registrados del ejercicio actual a la fecha de los estados *financieros* trimestrales auditados más recientes;
- 50% de las ganancias o 100% de las pérdidas por los estados *financieros* trimestrales o anuales auditados más recientes; y
- 100% de quebrantos no considerados en los estados *financieros* correspondientes a la cuantificación de los hechos informados por el auditor;
- Otros resultados integrales. i) 100 % de los resultados registrados en las siguientes partidas: – Revaluación de propiedad, planta y equipo e intangibles. – Ganancias o pérdidas por instrumentos financieros a valor razonable con cambios en otros resultados integrales. ii) 100 % del saldo deudor de cada una de las partidas registradas en otros resultados integrales no mencionadas en el acápite i). El reconocimiento de estos conceptos –registrados en cuentas de otros resultados integrales u otros resultados integrales acumulados, según corresponda– se realizará conforme a los términos de los puntos 8.2.1.5. o 8.2.1.6. TO Capitales Mínimos de las Entidades Financieras, según el caso.

(vii) primas de emisión resultantes de instrumentos incluidos en el COn1 y, en el caso de entidades consolidadas, las participaciones no controlantes (acciones ordinarias emitidas por las subsidiarias sujetas a supervisión consolidada y en poder de terceros, siempre que cumplan ciertas condiciones y requisitos.

Para que una acción sea considerada dentro del COn1, la entidad financiera se debe abstener de crear, en ocasión de su emisión, cualquier expectativa de que la acción será recomprada, rescatada o amortizada, y los términos contractuales no deberán contener cláusula alguna que pudiera originar tal expectativa

A los conceptos citados se les restarán, de corresponder, los conceptos deducibles previstos en el punto 8.4.1 y 8.4.2. (según corresponda) del T.O. Capitales Mínimos de las Entidades Financieras.

Los conceptos deducibles del (COn1) incluyen, entre otros: (a) saldos a favor por aplicación de retenciones al impuesto a la ganancias excedan el 10% del patrimonio neto básico correspondiente al mes anterior; (b) saldos en cuentas de corresponsalía respecto de entidades financieras del exterior que no cuenten con calificación internacional de riesgo comprendida en la categoría “investment grade”; (c) títulos valores, que físicamente no se encuentren en poder de la entidad, salvo que su registro o custodia se encuentre a cargo del Banco Central (“CRyL”), Caja de Valores S.A, Clearstream, Euroclear, Depositary Trust Company o Deutsche Bank, Nueva York; (d) títulos emitidos por gobiernos de países extranjeros, cuya calificación internacional de riesgo sea inferior a la categoría “investment grade” según la Comunicación “A” 5671; (e) instrumentos de deuda contractualmente subordinados a los demás pasivos, emitidos por otras entidades financieras; (f) accionistas; (g) inmuebles incorporados al patrimonio de la entidad financiera, cuya registración contable no se encuentre respaldada con la pertinente escritura traslativa de dominio debidamente inscripta en el respectivo Registro de la Propiedad Inmueble, excepto los adquiridos mediante subasta judicial; (h) llave de negocio; (i) gastos de organización y desarrollo; (j) partidas pendientes de imputación, saldos deudores y otras; (k) ante requerimiento que formule la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, los importes de determinados activos comprendidos, cuando surja que las registraciones contables efectuadas por las entidades no reflejan en forma precisa la realidad económica y jurídica de las operaciones o que se han llevado a cabo acciones o ardides para desnaturalizar o disimular el verdadero carácter o alcance de las operaciones; (l) diferencias por insuficiencia de constitución de las provisiones mínimas por riesgo de incobrabilidad determinadas por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias; (m) participaciones en empresas cuyo objeto social sea el desarrollo de las siguientes actividades: (i) asistencia financiera mediante operaciones de arrendamiento financiero de bienes de capital, durables e inmuebles, adquiridos con tal objeto (“leasing”) o sobre créditos provenientes de ventas (“factoring”), (ii) adquisición con carácter transitorio de participaciones en empresas para facilitar su desarrollo, con la finalidad de vender posteriormente las tenencias y (iii) la emisión de tarjetas de crédito o débito según establece la Comunicación “A” 5700; (n) el exceso a los límites para la afectación de activos en garantía según lo dispuesto en las normas del Banco Central; (o) el mayor saldo de la asistencia crediticia otorgada en el mes al sector público cuando se cumplan determinadas condiciones; (p) ganancias por ventas relacionadas con operaciones de securitización debido a ciertas circunstancias; (q) ganancias y pérdidas relacionadas con derivados debido a cambios en el riesgo de crédito de la entidad financiera; (r) pasivos por instrumentos derivados en determinadas circunstancias y (s) participaciones de capital en otras entidades argentinas o extranjeras sujeta a supervisión consolidada.

Asimismo, la Comunicación “A” 6008 estableció un cronograma a los efectos de deducir las inversiones de empresas de servicios complementarios de la actividad financiera no sujetas a supervisión consolidada y de compañías de seguro:

Fechas	Porcentaje a deducir
Desde diciembre de 2015 a diciembre de 2016	40%
Desde enero de 2017	70%
Desde enero de 2018	100%

Asimismo establece un cronograma a los efectos de imputar los conceptos deducibles de las participaciones en empresas cuyo objeto social sea el desarrollo de las siguientes actividades: servicios complementarios vinculados a la emisión de tarjetas de crédito o débito, según se indica a continuación:

Fechas	Porcentaje a deducir
Hasta mayo de 2015	0%
Desde junio de 2015	25%
Desde junio de 2016	50%
Desde junio de 2017	75%
Desde junio de 2018	100%

El capital adicional de nivel uno (CAN1) incluye determinados instrumentos de deuda emitidos por la entidad financiera que cumplan los requisitos previstos en el punto 8.3.2. de la Comunicación “A” 5580 emitida por el Banco Central (con sus modificaciones y normas complementarias) y no se hallen ya incluidos en el COn1, y primas de emisión resultantes de instrumentos incluidos en el CAN1. Además, en los casos de entidades consolidadas, incluye instrumentos emitidos por subsidiarias sujetas a supervisión consolidada y en poder de terceros, de acuerdo con los requisitos regulatorios aplicables.

Asimismo, los instrumentos de deuda incluidos en el CAN1 deberán observar los siguientes requisitos:

- Estar totalmente suscriptos e integrados.
- Estar subordinados a depositantes, acreedores quirografarios y a deuda subordinada de la entidad financiera. Deberán prever que, en caso de quiebra de la entidad y una vez satisfecha la totalidad de las deudas con los demás acreedores, los acreedores tendrán prelación en la distribución de fondos sólo y exclusivamente con respecto a los accionistas (cualquiera sea la clase de acciones), con expresa renuncia a cualquier privilegio general o especial.
- No estar asegurados ni cubiertos por alguna garantía del emisor o de un vinculado, ni ser objeto de cualquier otro acuerdo que mejore jurídica o económicamente el orden de prelación en el cobro para el caso de quiebra de la entidad.
- No prever pago de ningún tipo en concepto de capital, excepto en caso de liquidación de la entidad financiera. No podrán tener cláusulas de remuneración escalonada creciente ni otros incentivos para su amortización anticipada.
- Transcurridos cinco años desde su emisión, la entidad financiera podrá rescatar los instrumentos, siempre que: (i) cuente con autorización de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias; (ii) se abstenga de generar expectativas de que ejercerá la opción de compra; y (iii) sustituya el instrumento con RPC de igual o mayor calidad y en condiciones que sean sostenibles para su capacidad de generación de ingresos, o demuestre que, una vez ejercida la opción de compra, su RPC supera ampliamente al menos en un 20% los requerimientos mínimos de capital.
- Cualquier restitución de capital requerirá la autorización previa de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias y la entidad financiera no deberá tener la expectativa ni crearla en el mercado de que obtendrá dicha autorización.
- La entidad financiera podrá en todo momento y a su entera discreción cancelar pagos en concepto de dividendos o cupones de interés.
- El pago de dividendos/cupones se efectuará con cargo a partidas distribuibles, en los términos de las normas referidas a “Distribución de Resultados” (Sección III de las normas del BCRA).
- No incorporar un dividendo/cupón de interés que se reajuste periódicamente en función del riesgo de crédito de la entidad financiera.
- No haber sido comprados por la entidad financiera ni por otra entidad que ella controle o sobre la que ejerza influencia significativa.
- No haber sido comprados con la financiación directa o indirecta de la entidad financiera y no poseer características que dificulten la recapitalización.

Los instrumentos que son parte del pasivo deberán absorber pérdidas, una vez alcanzado un evento desencadenante prefijado (cuando el coeficiente de CON1 sea inferior al 5,125% de los APR), a través de su conversión en acciones ordinarias y un mecanismo que asigne pérdidas al instrumento con los siguientes efectos:

- a) Reducción de la deuda representada por el instrumento en caso de liquidación de la entidad;
- b) Reducción del importe a reintegrar en caso de ejercerse una opción de compra; y
- c) Reducción total o parcialmente los pagos de dividendos/cupones de interés del instrumento.

El capital nivel dos comprende los siguientes conceptos: (i) ciertos instrumentos de deuda emitidos por la entidad financiera no incluidos a categoría de capital de nivel 1 y que observen los requisitos previstos en el punto 8.3.3 de la Comunicación “A” 5580 (con sus modificaciones y normas complementarias) emitida por el Banco Central, (ii) primas de emisión resultantes de instrumentos incluidos en el capital de Nivel 2, y (iii) provisiones por riesgo de incobrabilidad sobre la cartera correspondiente a deudores clasificados “en situación normal” de las regulaciones del Banco Central sobre “Clasificación de deudores” y sobre las financiaciones que se encuentran cubiertas con garantías preferidas “A”, sin superar el 1,25 % de los activos ponderados por riesgo de crédito. Además, en los casos de entidades consolidadas, incluye: (iv) instrumentos de deuda emitidos por subsidiarias sujetas a supervisión consolidada en poder de terceros, que cumplan los criterios para su inclusión en el patrimonio neto complementario.

A los conceptos citados en los puntos precedentes se les restarán, de corresponder, los conceptos deducibles previstos en el punto 8.4.2 de la Comunicación “A” 5580 (con sus modificaciones y normas complementarias) del Banco Central, que se describen más abajo.

Por otra parte, los instrumentos incluidos en el patrimonio neto complementario deberán observar los siguientes requisitos:

- Estar totalmente suscriptos e integrados.
- Estar subordinados a depositantes, acreedores quirografarios y a deuda subordinada de la entidad financiera.
- No estar asegurados ni cubiertos por alguna garantía del emisor o de un vinculado, ni ser objeto de cualquier otro acuerdo que mejore jurídica o económicamente el orden de prelación en el cobro para el caso de quiebra de la entidad.
- Vencimiento: (i) plazo de vencimiento original no inferior a cinco años; (ii) no existir cláusulas de remuneración escalonada creciente u otros incentivos para su amortización anticipada; y (iii) a partir del comienzo de cada uno de los últimos cinco años de vida de cada emisión, el importe computable será disminuido en el 20% del valor nominal emitido. Transcurridos cinco años desde su emisión, la entidad financiera podrá rescatarlos siempre que cuente con autorización de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias en forma previa al ejercicio de la opción de compra; y se abstenga de generar expectativas de que ejercerá la opción de compra. El instrumento deberá ser sustituido con RPC de igual o mayor calidad y en condiciones que sean sostenibles para su capacidad de generación de ingresos, o si se demuestra que, una vez ejercida la opción de compra, su RPC supera ampliamente, como mínimo en un 20%, los requerimientos de capital mínimo.
- El inversor no tendrá ningún derecho a acelerar la devolución de los pagos futuros previstos, excepto en caso de quiebra o liquidación.
- No pueden incorporar un dividendo/cupón de interés que se reajuste periódicamente en función del riesgo de crédito de la entidad financiera.
- No puedan haber sido comprados por la entidad financiera ni por alguna entidad que ella controle o sobre la que ejerza influencia significativa
- No pueden haber sido comprados con la financiación directa o indirecta de la entidad financiera.

Además, los instrumentos incluidos en el capital Nivel 2 y CAn1 deberán observar los siguientes requisitos adicionales para garantizar su capacidad de absorción de pérdidas:

(a) Sus términos y condiciones deberán incluir una disposición en virtud de la cual los instrumentos deberán absorber pérdidas -a través de una quita o mediante su conversión en capital ordinario- en caso de que se produzca alguno de los eventos desencadenantes que se indican más adelante.

(b) Si hubiera compensación a los tenedores de estos instrumentos por la quita realizada, deberá llevarse a cabo en forma inmediata y sólo con acciones ordinarias, de acuerdo con la legislación que le resulte aplicable.

(c) La entidad financiera deberá contar en todo momento con las autorizaciones necesarias para poder emitir en forma inmediata la cantidad correspondiente de acciones ordinarias cuando suceda alguno de los eventos desencadenantes que se indican más adelante.

A continuación se detallan los eventos desencadenantes que tornarán operativa la disposición anteriormente: (i) estando afectada la solvencia y/o liquidez de la entidad financiera, el Banco Central rechace el plan de regularización y saneamiento, o revoque su autorización para funcionar, o autorice su reestructuración en defensa de los depositantes (lo que ocurra primero); o (ii) la decisión de capitalizar a la entidad financiera con fondos públicos.

A la fecha de este Prospecto, el Banco no tiene ninguna clase de obligaciones negociables subordinadas.

Deben seguirse criterios adicionales relacionados con los conceptos computables incluidos en el cálculo de la RPC según los requerimientos regulatorios de participaciones minoritarias y otros instrumentos computables emitidos por subsidiarias sujetas a supervisión consolidada en poder de terceros. Una participación minoritaria podrá reconocerse en el COn1 de la entidad financiera si el instrumento que la origina observa todos los requisitos para su clasificación como acción ordinaria a efectos de la RPC.

Conceptos deducibles aplicables a los distintos niveles de capital

Las inversiones en instrumentos computables como capital regulatorio de entidades financieras no están sujetas a supervisión consolidada, cuando la entidad posea hasta el 10% del capital social ordinario del Emisor, de acuerdo con los siguientes criterios: (i) las inversiones incluyen las participaciones directas, indirectas o

sintéticas; (ii) las inversiones incluyen la posición comprada neta; (iii) pueden no incluir las tenencias de títulos valores suscriptos para ser colocados en el plazo de cinco días hábiles. Cuando las participaciones en el capital de otras entidades financieras (que individualmente representen menos del 10% del CON1 de cada emisora) superen el 10% del CON1 de la entidad financiera, neto de las deducciones correspondientes, el importe por encima de este 10% deberá deducirse de cada uno de los niveles de capital en función de la siguiente metodología:

- Monto a deducir del CON1: total del exceso sobre el 10% multiplicado por la proporción que representan las tenencias de CON1 sobre el total de participaciones de capital.
- Monto a deducir del CAN1: total del exceso sobre el 10% multiplicado por la proporción que representan las tenencias de CAN1 sobre el total de participaciones de capital.
- Monto a deducir del patrimonio neto complementario: total del exceso sobre el 10% multiplicado por la proporción que representan las tenencias de patrimonio neto complementario sobre el total de participaciones de capital.

Las inversiones en instrumentos computables como capital regulatorio de entidades financieras no están sujetas a supervisión consolidada cuando la entidad posea hasta el 10% del capital social ordinario del Emisor, o cuando la emisora sea una subsidiaria de una entidad financiera, de acuerdo con los siguientes criterios: (i) las inversiones incluyen las participaciones directas, indirectas o sintéticas; (ii) las inversiones incluyen la posición comprada neta; (iii) pueden no incluir las tenencias de títulos valores suscriptos para ser colocados en el plazo de cinco días hábiles; iv) Las inversiones en instrumentos de capital que no cumplan con los criterios para ser clasificados como CON1, CAN1 o PNc de la entidad financiera serán considerados como CON1 -acciones ordinarias- a los efectos de este ajuste regulatorio. El importe de estas participaciones -teniendo en cuenta el tipo de instrumento de que se trate- deberá deducirse de cada uno de los correspondientes niveles de capital de la entidad financiera.

Si la entidad financiera carece de suficiente capital para efectuar la deducción de un nivel particular de capital, el remanente se deducirá del nivel inmediato superior.

Los instrumentos propios recomprados que cumplan con los criterios para su inclusión en el CAN1 o PNc deberán deducirse del nivel de capital que corresponda

Límites

La Comunicación “A” 5580 (con sus modificaciones y normas complementarias) del Banco Central, establece los límites mínimos en relación con la integración de capital: (i) para el CON1, el importe resultante de multiplicar 4,5% por los activos ponderados por riesgo (“APR”); (ii) para el patrimonio neto básico, el importe resultante de multiplicar 6% por los APR y (iii) para la RPC, el importe resultante de multiplicar 8% por los APR. Se considerará como activos ponderados por riesgo (APR) al importe resultante de multiplicar por 12,5 la exigencia de capital mínimo según las regulaciones del Banco Central. La falta de cumplimiento de cualquiera de estos límites será considerada incumplimiento de integración del capital mínimo.

En virtud de la Comunicación “A” 5867, los APR resultarán de aplicar la siguiente expresión:

$$APR = APRc + [(RM+RO) \times 12,5]$$

dónde:

“APRc”: activos ponderados por riesgo de crédito.

“RM”: exigencia por riesgo de mercado.

“RO”: exigencia por riesgo operacional.

Capital económico

El T.O. Lineamientos para la Gestión de Riesgos de las Entidades Financieras establece que es de fundamental importancia que las entidades financieras cuenten con un proceso interno, integrado y global, para evaluar la suficiencia de su capital económico en función de su perfil de riesgo (“*Internal Capital Adequacy Assessment Process*” - “ICAAP”) y con una estrategia para mantener sus niveles de capital a lo largo del tiempo. Si como resultado de este proceso interno se determina que el capital regulatorio es insuficiente, las entidades financieras deberán incrementarlo en base a sus propias estimaciones, para observar la normativa.

El capital económico de las entidades financieras es aquel que requieren para cubrir, no sólo las pérdidas inesperadas originadas por las exposiciones a los riesgos crediticio, operacional y de mercado, sino también las que provienen de otros riesgos a los que puede estar expuesta la entidad financiera.

Las entidades financieras deben demostrar que sus objetivos internos de capital están bien fundamentados y son acordes con su perfil general de riesgo y entorno operativo. El proceso de evaluación de la suficiencia del capital o ICAAP debe tener en cuenta todos los riesgos significativos a los que se enfrenta la entidad financiera. A este fin, las entidades financieras deben desarrollar un proceso integral para la gestión de, al menos, los riesgos de crédito, operacional, de mercado, tasa de interés, liquidez, securitización, graduación, reputacional y estratégico, empleando para ello pruebas de estrés para evaluar situaciones adversas pero posibles que puedan afectar su nivel de capital.

El ICAAP debe comprender pruebas de estrés que complementen y validen todo otro enfoque cuantitativo o cualitativo empleado por la entidad, de modo que el directorio y la gerencia de primera línea cuenten con una comprensión más acabada de la interacción entre los distintos tipos de riesgos en condiciones de estrés. Asimismo, el ICAAP debe considerar las necesidades de capital de corto y largo plazo y propender a la prudente acumulación de excedentes de capital en los períodos benignos del ciclo económico.

El nivel de capital de cada entidad debe determinarse con arreglo a su perfil de riesgo, teniendo en cuenta además factores externos como los efectos del ciclo económico y de la coyuntura económica.

Requisitos aplicables a la distribución de dividendos

El Banco Central impuso ciertas restricciones al pago de los dividendos, sujetando la capacidad de las entidades financieras para distribuir dividendos al cumplimiento de las normas T.O. Distribución de Resultados, bajo el criterio que el importe a distribuir no podrá afectar la liquidez y solvencia de la entidad, lo que se verificará del cumplimiento de ciertos requisitos, sobre base consolidada.

Dispone que el pago de dividendos –salvo que se trate de dividendos en acciones ordinarias–, las compras de acciones propias, los pagos sobre otros instrumentos de capital de nivel 1 –determinado conforme a lo establecido en las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”– y/o el pago de incentivos económicos (bonificaciones) al personal –en este caso, con sujeción a las regulaciones de orden público laboral (legales, convencionales y contractuales) que rigen las relaciones de las entidades financieras con su personal– estarán sujetos a estas normativas.

Las entidades podrán distribuir resultados hasta el importe positivo que surja del cálculo extracontable previsto en este punto, sin superar los límites establecidos en estas normas.

A ese efecto deberá computarse la sumatoria de los saldos registrados, al cierre del ejercicio anual al que correspondan, en la cuenta “Resultados no asignados” y en la reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados, a la que se deberán deducir los importes –registrados a la misma fecha– de las reservas legal y estatutarias –cuya constitución sea exigible– y de los conceptos que a continuación se detallan:

1. El 100 % del saldo deudor de cada una de las partidas registradas en el rubro “Otros resultados integrales acumulados”.
2. El resultado proveniente de la revaluación de propiedad, planta, equipo e intangibles y de propiedades de inversión.
3. La diferencia neta positiva resultante entre la medición a costo amortizado y el valor razonable de mercado que la entidad financiera registre respecto de los instrumentos de deuda pública y/o instrumentos de regulación monetaria del Banco Central para aquellos instrumentos valuados a costo amortizado.
4. Los ajustes de valuación de activos notificados por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) –aceptados o no por la entidad–, que se encuentren pendientes de registración y/o los indicados por la auditoría externa que no hayan sido registrados contablemente.

5. Las franquicias individuales –de valuación de activos– otorgadas por la SEFyC, incluyendo los ajustes derivados de no considerar los planes de adecuación concertados.

Adicionalmente las entidades financieras no podrán efectuar distribuciones de resultados con la ganancia que se origine por aplicación por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), debiendo constituir una reserva especial que sólo podrá desafectarse para su capitalización o para absorber eventuales saldos negativos de la partida “Resultados no asignados”.

El importe a distribuir, que no podrá superar los límites que el Banco Central establezca, no deberá comprometer la liquidez y solvencia de la entidad. Este requisito se considerará cumplido cuando se verifique la inexistencia de defectos de integración en la posición de capital mínimo –tanto individual como consolidada– del cierre del ejercicio al que correspondan los resultados no asignados considerados o en la última posición cerrada, de ambas la que presente menor exceso de integración respecto de la exigencia, recalculándolas computando además –a ese único fin– los siguientes efectos en función de los correspondientes datos a cada una de esas fechas:

1. Los resultantes de la deducción del activo de los conceptos mencionados en los puntos 1 a 5 arriba enumerados, de corresponder.
2. La no consideración de las franquicias otorgadas por la SEFyC que afecten las exigencias, integraciones o la posición de capital mínimo.
3. La deducción de los resultados no asignados de los importes correspondientes a los siguientes conceptos:
 - el importe a distribuir y, en su caso, el que se destine a constituir la reserva a los fines de retribuir instrumentos representativos de deuda, susceptibles de integrar la responsabilidad patrimonial computable;
 - saldos a favor por aplicación del impuesto a la ganancia mínima presunta –netos de las provisiones por riesgo de desvalorización– que no hayan sido deducidos del patrimonio neto básico, conforme a lo establecido en las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”; y
 - ajustes efectuados según los puntos 1 a 5 arriba enumerados
4. La no consideración del límite previsto en el punto 7.2. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”.

Sólo se admitirá la distribución de resultados en la medida que no se verifique alguna de las siguientes condiciones:

- se encuentren alcanzadas por las disposiciones de los artículos 34 “Regularización y saneamiento” y 35 bis “Reestructuración de la entidad en resguardo del crédito y los depósitos bancarios” de la Ley de Entidades Financieras;
- registren asistencia financiera por iliquidez del BCRA, en el marco del artículo 17 de su Carta Orgánica;
- presenten atrasos o incumplimientos en el régimen informativo establecido por esta Institución;
- registren deficiencias de integración de capital mínimo –de manera individual o consolidada– (sin computar a tales fines los efectos de las franquicias individuales otorgadas por la SEFyC);
- la integración de efectivo mínimo en promedio –en pesos, en moneda extranjera o en títulos valores públicos– fuera menor a la exigencia correspondiente a la última posición cerrada o a la proyectada considerando el efecto de la distribución de resultados;
- la entidad no haya dado cumplimiento a los márgenes adicionales de capital que les sean de aplicación conforme a lo previsto en la Sección 4 del Texto Ordenado “Distribución de Resultados”.

La norma mencionada estableció como disposición transitoria que hasta el 31 de marzo de 2020, las entidades financieras que, para determinar el resultado distribuible, no hayan incrementado los rangos de CON1 neto de deducciones (CDCON1) previstos en 1 punto porcentual, deberán contar con la autorización previa de la SEFyC

para la distribución de resultados. Este requerimiento también será de aplicación para el pago de los servicios financieros correspondientes a emisiones de instrumentos representativos de deuda.

La Comunicación “A” 5689 del Banco Central, de fecha 8 de enero de 2015, estableció que las entidades financieras deberán registrar y exponer contablemente las sanciones administrativas y/o disciplinarias, y las penales con sentencia judicial de primera instancia, que fueron aplicadas o iniciadas por el Banco Central de la República Argentina, la UIF, la CNV y la SSN. A partir de enero de 2015, el importe correspondiente al asiento contable incluirá todas las sanciones y deberá contemplar una previsión para el 100% de cada sanción que debe afrontar la entidad. Estos conceptos deberán mantenerse hasta tanto se proceda al pago o bien se cuente con sentencia judicial firme. De acuerdo con la Comunicación “A” 5707, modificada por Comunicación “A” 5827 del Banco Central, si se reparten dividendos, este importe también será deducido del monto distribuible. En abril de 2016, el Banco Central emitió la Comunicación “A” 5940, que modificó disposiciones de la Comunicación “A” 5689. Según dicha Comunicación, las entidades financieras que a la fecha de su emisión tengan saldos por estos conceptos registrados en la cuenta “Previsiones – Para sanciones administrativas, disciplinarias y penales”, deberán analizar, de acuerdo con los informes legales vigentes, si respecto de dichas sanciones se cumplen las condiciones para su registración contable total o parcial, de acuerdo con las disposiciones del Plan y Manual de Cuentas (es decir, que sean de probable concreción y que el monto pueda estimarse razonablemente).

En enero de 2015, la Comunicación “A” 5694 del Banco Central también estableció que las entidades financieras calificadas como de D-SIB deberán observar una exigencia de capital mínimo adicional equivalente al 1% de los activos ponderados por riesgo (APR), exclusivamente con capital ordinario de nivel uno (COn1).

En virtud de la Comunicación “A” 5827 del BCRA, a partir del 1º de enero de 2016, las entidades financieras deben mantener un margen de conservación de capital adicional a la exigencia de capital mínimo a efectos de garantizar que acumulen recursos propios que puedan utilizar en caso de incurrir en pérdidas. Cuanto mayor sea la utilización del margen, mayor será el porcentaje de los resultados que las entidades financieras deberán retener para recomponer dicho margen. El margen de conservación del capital será del 2,5% del importe de los APR, adicional a la exigencia de capital mínimo.

La aplicación del margen adicional de capital será gradual, ya que se introducirá progresivamente entre el 1 de enero de 2016 y fines de 2018, para entrar plenamente en vigor el 1 de enero de 2019. En consecuencia, el margen de conservación de capital fue del 0,625% de los activos ponderados por riesgo a partir del 1 de enero de 2016, que se incrementará cada año en 0,625 puntos porcentuales hasta alcanzar el 1 de enero de 2019 su nivel definitivo del 2,5 % de los activos ponderados por riesgo. En el caso de las entidades financieras calificadas como de D-SIB, que no es el caso del Banco a la fecha de este Prospecto, el margen de conservación de capital será del 3,5% de los APR.

Riesgo de crédito

El requerimiento de capital por riesgo de crédito de contraparte (“CRC”) se determinará aplicando la siguiente expresión:

$$\text{CRC} = (k * 0,08 * \text{APRc}) + \text{INC.}$$

La variable “k”: La exigencia de capital mínimo depende también de la calificación asignada a la entidad según la evaluación que efectúa la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC), la cual determina también el valor del coeficiente k. Esta es una calificación amplia del desempeño, los riesgos y las perspectivas de las entidades, en consonancia con el criterio internacional. Las entidades deben ajustar su exigencia de capital por los siguientes factores “k”:

Calificación asignada	valor de factor K
1	1
2	1,03
3	1,08
4	1,13
5	1,19

“APRc” significa activos ponderados por riesgo de crédito, determinados mediante la suma de los valores obtenidos luego de aplicar la siguiente expresión:

$$A \times p + \text{PFB} \times \text{CCF} \times p + \text{no DvP} + (\text{DVP} + \text{RCD} + \text{INC}(\text{inversiones significativas en empresas})) \times 12,5$$

La variable “A” representa activos computables/exposiciones, “PFB” son los conceptos computables no registrados en el balance de saldos (“partidas fuera de balance”), CCF es el factor de conversión crediticia y p es el ponderador de riesgo.

Por otro lado, “no DvP” designa operaciones sin entrega contra pago; DvP son operaciones de entrega contra pago fallidas; “RCD” hace referencia a la exigencia por riesgo de crédito de contraparte en operaciones con derivados extrabursátiles (“*over-the-counter*” - “OTC”).

INC(inversiones significativas en empresas): incremento por los excesos a los siguientes límites:

- participación en el capital de cada empresa: 15 %;
- total de participaciones en el capital de empresas: 60 %.

Los límites máximos establecidos se aplicarán sobre la responsabilidad patrimonial computable (RPC) de la entidad financiera del último día anterior al que corresponda.

INC: incremento por los siguientes excesos:

- en la relación de activos inmovilizados y otros conceptos, excluidos los computados para la determinación del INC (inversiones significativas en empresas);
- a los límites establecidos en las normas sobre “Financiamiento al sector público no financiero”, excluidos los computados para la determinación del INC (inversiones significativas en empresas);
- a los límites establecidos en las normas sobre “Grandes exposiciones al riesgo de crédito” –según lo previsto en el acápite ii), punto 2.1. de las normas sobre “Incumplimientos de capitales mínimos y relaciones técnicas. Criterios aplicables.”–, excluidos los computados para la determinación del INC (inversiones significativas en empresas);
- a los límites de graduación del crédito; y
- al límite de derivados sobre materias primas o productos básicos –“commodities”– previsto en el punto 1.2. de las normas sobre “Operaciones al contado a liquidar y a término, pases, cauciones, otros derivados y con fondos comunes de inversión”.

También se computará en esta expresión la exposición crediticia resultante de la utilización de los cupos crediticios ampliados a que se refieren los puntos 6.1.1.2. y 6.1.2.1.c) de las normas sobre “Financiamiento al sector público no financiero” (considerando, en su caso, lo establecido en la Sección 9. de las citadas normas respecto de la asistencia financiera otorgada y/o las tenencias de instrumentos de deuda de fideicomisos financieros o fondos fiduciarios a que se refiere el punto 5.1. de las normas sobre “Financiamiento al sector público no financiero” y el punto 3.2.4. del citado ordenamiento computadas conforme al siguiente cronograma, el cual operará a partir de que se hayan comenzado a utilizar económicamente las obras o el equipamiento genere ingresos al fideicomiso o fondo fiduciario a través de tarifas, tasas, aranceles u otros conceptos similares.

Cómputo como “INC” del uso del cupo ampliado –en % de dicha utilización–	A partir del
25	Primer mes
50	Séptimo mes
100	Décimo tercer mes

El sector público no financiero citado en estas normas es aquel definido en la Sección 1. de las normas sobre “Financiamiento al sector público no financiero”.

Cada tipo de activo se pondera de acuerdo con el nivel de riesgo asumido que se asociará con él. En términos amplios, los ponderadores asignados a los distintos tipos de activo son los siguientes:

Tipo de Activo	Ponderador (%)
<i>Tipo de activo</i>	
Efectivo en caja, en tránsito (cuando la entidad financiera asuma la responsabilidad y riesgo del traslado), en cajeros automáticos, en cuentas corrientes y en	0

Tipo de Activo	Ponderador (%)
cuentas especiales en el Banco Central, oro amonedado o en barras	
Partidas de efectivo que estén en trámite de ser percibidas, efectivo en empresas transportadoras de caudales y efectivo en custodia en entidades financieras.....	20
<i>Exposición a gobiernos y bancos centrales</i>	
Al Banco Central en pesos, cuando su fuente de fondos sea en esa moneda.....	0
Al Gobierno Nacional y a los gobiernos provinciales y municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en pesos, cuando su fuente de fondos sea en esa moneda	0
Al sector público no financiero por financiaciones otorgadas a beneficiarios de la seguridad social o a empleados públicos (con código de descuento y no exceda al momento de los acuerdos el 30% de los ingresos del prestatario).	0
Al sector público no financiero y al Banco Central. Demás.	

Calificación	AAA hasta AA	A+ hasta A-	BBB+ hasta BBB-	BB+ hasta B-	Inferior a B-	No calificado
Ponderador de riesgo	0%	20%	50%	100%	150%	100%

A otros estados soberanos (o sus bancos centrales)

Calificación	AAA hasta AA	A+ hasta A-	BBB+ hasta BBB-	BB+ hasta B-	Inferior a B-	No calificado
Ponderador de riesgo	0%	20%	50%	100%	150%	100%

Entes del sector público no financiero de otros estados.

Calificación	AAA hasta AA	A+ hasta A-	BBB+ hasta BBB-	BB+ hasta B-	Inferior a B-	No calificado
Ponderador de riesgo	20%	50%	100%	100%	150%	100%

Al Banco de Pagos Internacionales, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central Europeo y a la Comunidad Europea.

0

Al Sector público no financiero provincial, municipal y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la adquisición de títulos públicos emitidos en pesos por la administración central, cuando no cuenten con alguna de las garantías establecidas en el punto 4.1.1. de las normas sobre “Financiamiento al sector público no financiero”, conforme a la calificación crediticia asignada a la correspondiente jurisdicción.

Calificación	AAA hasta AA	A+ hasta A-	BBB+ hasta BBB-	BB+ hasta B-	Inferior a B-	No calificado
Ponderador de riesgo	20%	50%	100%	150%	200%	200%

Exposiciones a Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD)

Exposición a las siguientes entidades: Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD), Corporación Financiera Internacional (CFI), Banco Asiático de Desarrollo (ADB), Banco Africano de Desarrollo (AFDB), Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), Banco Interamericano de Desarrollo (IDB), Banco Europeo de Inversiones (BEI), Fondo Europeo de Inversiones (FEI), Banco Nórdico de Inversiones (NIB), Banco de Desarrollo del Caribe (CDB), Banco Islámico de Desarrollo (IDB) Facilidad Financiera Internacional para la Inmunización (IFFI), Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) y Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (BDCE).

0

Tipo de Activo						Ponderador (%)
Demás.....						
Calificación	AAA hasta AA	A+ hasta A-	BBB+ hasta BBB-	BB+ hasta B-	Inferior a B-	No calificado
Ponderador de riesgo	20%	50%	50%	100%	150%	50%

Exposiciones denominadas en pesos -cuya fuente de fondos sea en esa moneda- por operaciones cuyo plazo contractual original sea de hasta 3 meses. 20

Demás..... 100

Exposición a entidades financieras del exterior conforme a la calificación crediticia asignada al soberano de la jurisdicción donde estén constituidas.

Calificación	AAA hasta AA	A+ hasta A-	BBB+ hasta BBB-	BB+ hasta B-	Inferior a B-	No calificado
Ponderador de riesgo	20%	50%	100%	100%	150%	100%

Exposición a empresas y otras personas jurídicas del país y del exterior -incluyendo entidades cambiarias, aseguradoras, bursátiles y empresas del país a las que se les otorga el tratamiento del sector privado no financiero en función de lo establecido en la Sección 1 de las normas sobre "Financiamiento al sector público no financiero". 100

Exposiciones incluidas en la cartera minorista.

Financiamientos a personas humanas (cuando el total de las cuotas por financiamientos de la entidad no exceda, al momento de los acuerdos, del treinta por ciento (30%) de los ingresos del prestatario y a micro, pequeñas y medianas empresas ("MiPyME"). 75

Demás..... 100

Exposiciones garantizadas por sociedades de garantía recíproca o fondos de garantía de carácter público inscritos en los Registros habilitados en el Banco Central. 50

Financiamientos con garantía hipotecaria en primer grado, y cualquiera sea su grado de prelación siempre que la entidad sea la acreedora en todos los grados, sobre vivienda residencial.

Respecto del apoyo crediticio que no supere el 75% del valor de tasación del inmueble

- Vivienda única, familiar y de ocupación permanente. 35
- Demás. 50

Sobre el importe que supere el 75% del valor de tasación de tales bienes. 100

Financiamientos con garantía hipotecaria en primer grado, y cualquiera sea su grado de prelación siempre que la entidad sea la acreedora en todos los grados, sobre bienes distintos de vivienda residencial.

Hasta el importe equivalente al 50% del valor de mercado del inmueble o el 60% del importe del crédito hipotecario, de ambos el menor. 50

Sobre el resto de la financiación. 100

Préstamos con más de 90 días de atraso.

El ponderador varía según el préstamo y las previsiones específicas constituidas 50-150

Participaciones en el capital de empresas 150

Exposiciones a entidades de contraparte central (CCP) 0

Exposiciones a entidades de contraparte central (CCP) Posiciones de titulización

Operaciones al contado a liquidar no fallidas

Operaciones DvP fallidas y no DvP. Deberá tenerse en cuenta lo previsto

Exposiciones a entidades de contraparte central (CCP).

Operaciones con derivados no comprendidas

Demás activos y/o partidas fuera de balance 100

** Se aplicará el ponderador de riesgo correspondiente a una categoría menos favorable que la asignada a las exposiciones con el Gobierno Nacional en moneda extranjera, conforme a lo previsto en el punto 2.6.2.4., con un tope máximo del 100 %, excepto que la calificación fuese inferior a B-, en cuyo caso el ponderador de riesgo será del 150 %.*

Quedan excluidos: (a) las garantías otorgadas a favor del Banco Central de la República Argentina y por obligaciones directas; (b) los conceptos que deben deducirse a los fines del cálculo de la responsabilidad patrimonial computable (RPC); y (c) las financiaciones y avales, fianzas y otras responsabilidades otorgadas por sucursales y subsidiarias locales de entidades financieras del exterior, por cuenta y orden de su casa matriz o sus sucursales en otros países o de la entidad controlante, siempre que se observen los siguientes requisitos: (i) la entidad extranjera deberá tener calificación internacional de riesgo comprendida en la categoría “*investment grade*”, (ii) la entidad extranjera deberá estar sujeta a normas que abarquen la supervisión sobre base consolidada de las sucursales o subsidiarias locales; (iii) en el caso de las financiaciones, éstas deberán ser atendidas por las sucursales o subsidiarias locales sólo con fondos provenientes de líneas asignadas a ellas por los citados intermediarios del exterior; y (iv) en el caso de las garantías otorgadas localmente, deberá existir respecto de ellas contragarantías extendidas por la casa matriz o por la entidad controlante del exterior, cuya efectivización opere en forma irrestricta a simple requerimiento de la sucursal o subsidiaria local y en modo inmediato a su eventual ejecución por parte del beneficiario.

Los conceptos comprendidos se computarán sobre la base de los saldos al último día de cada mes (capitales, intereses, primas, actualizaciones -por el Coeficiente de Estabilización de Referencia “CER”- y diferencias de cotización, según corresponda, netos de las provisiones por riesgos de incobrabilidad y desvalorización y de las depreciaciones y amortizaciones acumuladas que les sean atribuibles y demás cuentas regularizadoras, sin deducir el importe mínimo exigido de la previsión por riesgo de incobrabilidad sobre la cartera “en situación normal” y las financiaciones que se encuentran cubiertas con garantías preferidas “A”).

Riesgo de tasa de interés

Hasta el 1° de enero de 2013, las entidades financieras debían cumplir con exigencias de capital mínimo por riesgo de tasa de interés. Estas exigencias están destinadas a reflejar la sensibilidad de los activos y pasivos frente a variaciones en las tasas de interés. La Comunicación “A” 5369 del Banco Central eliminó la totalidad de estas exigencias de capital mínimo. Sin perjuicio de este cambio, las entidades financieras siguen obligadas a calcular el riesgo de tasa de interés y sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.

Riesgo de mercado

El riesgo de mercado se definirá como la posibilidad de sufrir pérdidas en posiciones registradas dentro y fuera de balance a raíz de las fluctuaciones adversas en los precios de mercado. La exigencia de capital por riesgo de mercado será la suma aritmética de la exigencia de capital por los riesgos por tasa de interés, acciones, tipo de cambio y opciones. Para su determinación, las entidades deberán emplear un “Método de Medición Estándar” basado en una suma de componentes que capturan por separado el riesgo específico y el riesgo general de mercado de las posiciones en títulos valores.

Consideraciones generales

Los riesgos sujetos a esta exigencia de capital son los riesgos de las posiciones en instrumentos -títulos valores y derivados- imputados a la cartera de negociación y los riesgos de las posiciones en monedas extranjeras imputados a la cartera de inversión o de negociación, indistintamente. A los efectos de la imputación antedicha, la cartera de negociación de las entidades se compone de posiciones en instrumentos financieros incorporados al patrimonio de la entidad con la finalidad de negociarlos o de dar cobertura a otros elementos de dicha cartera. Un instrumento financiero se podrá imputar a la cartera de negociación -a los fines de la exigencia de capital por riesgo de mercado- si su negociación está libre de toda restricción o si es posible obtener una cobertura total del instrumento. Además, la cartera deberá ser gestionada de forma activa y las posiciones valuadas en forma diaria y con adecuada precisión. Las posiciones que se mantengan con fines de negociación son aquellas que se tienen para su venta a corto plazo o con el propósito de obtener beneficios a partir de las fluctuaciones de precios en el corto plazo, reales o esperadas, o mediante el arbitraje de precios. Incluyen tanto las posiciones que las entidades conservan para sí como las que adquieren como consecuencia de la prestación de servicios a clientes o de la “creación de mercado”. Las entidades deberán calcular la exigencia de capital por riesgo de crédito de contraparte de las operaciones con derivados OTC y de financiación con títulos valores (“*Securities Financing Transactions*” -SFT-) -tales como operaciones de pase (acuerdos REPO)- registradas en la cartera de negociación en forma separada y adicional al cálculo de las exigencias de capital por riesgo general de mercado

y riesgo específico de los subyacentes. A este efecto, deberán aplicar los métodos y ponderadores que son de aplicación cuando esas operaciones se registran en la cartera de inversión. Las entidades deberán contar con políticas y procedimientos claramente definidos para determinar qué exposiciones incluir o excluir de la cartera de negociación con el fin de calcular su exigencia de capital, para asegurar así que se cumplen los criterios para la cartera de negociación establecidos en estas normas. Las políticas y procedimientos deberán tomar en consideración la capacidad de la entidad para gestionar los riesgos y las prácticas que emplea para ello. La verificación del cumplimiento de las políticas y procedimientos deberá estar completamente documentado y sujeto a auditorías internas periódicas. Las políticas y procedimientos deberán tomar en consideración la capacidad de la entidad para gestionar los riesgos y las prácticas que emplea para ello. La verificación del cumplimiento de las políticas y procedimientos deberá estar completamente documentada y sujeta a auditorías internas periódicas.

La exigencia de capital por riesgo de tipo de cambio se aplicará a la posición total en cada moneda extranjera. La exigencia de capital por títulos valores se computará respecto de los instrumentos imputados a la cartera de negociación, que deberán estar valuados en forma prudente (a precios de mercado -“marked to market”- o a modelo -“marked to model”-). Los instrumentos cuyo rendimiento se determine en función del CER deberán ser considerados a tasa fija. Independientemente de que estén registradas en la cartera de negociación o en la cartera de inversión, los conceptos que deben deducirse a los fines del cálculo de la RPC se excluirán del cómputo de la exigencia de capital por riesgo de mercado.

Exigencia de capital por riesgo de tasa de interés

La exigencia de capital por el riesgo de tasa de interés se deberá calcular respecto de los títulos de deuda y otros instrumentos imputados a la cartera de negociación, incluidas las acciones preferidas no convertibles. La exigencia se calcula sumando dos exigencias por separado: una por el riesgo específico de cada instrumento, ya sea que se trate de una posición vendida o comprada, y otra por el riesgo general de mercado -vinculado al efecto de cambios en la tasa de interés sobre la cartera-, en la que se podrán compensar las posiciones compradas y vendidas en diferentes instrumentos.

Exigencia de capital por riesgo de posiciones en acciones

La exigencia de capital por el riesgo de mantener posiciones en acciones en la cartera de negociación alcanza a las posiciones compradas y vendidas en acciones ordinarias, títulos de deuda convertibles que se comporten como acciones y los compromisos para adquirir o vender acciones, así como en todo otro instrumento que tenga un comportamiento en el mercado similar al de las acciones, excluyendo a las acciones preferidas no convertibles, a las que se aplicará la exigencia por riesgo de tasa de interés descrita en el punto anterior. Las posiciones compradas y vendidas en la misma especie podrán computarse en términos netos.

Exigencia de capital por riesgo de tipo de cambio

La exigencia de capital por el riesgo de tipo de cambio establece el capital mínimo necesario para cubrir el riesgo de mantener posiciones en moneda extranjera, incluido el oro. El cálculo de la exigencia de capital por riesgo de tipo de cambio requiere que la entidad primero, cuantifique su exposición en cada moneda y luego, estime los riesgos inherentes a la combinación de posiciones compradas y vendidas en diferentes monedas.

Exigencia de capital por riesgo de posiciones en opciones

El cálculo de la exigencia de capital por riesgo de posiciones en opciones dependerá según se trate de entidades que sólo compren opciones -y siempre que el valor de mercado de la totalidad de las opciones en cartera no supere el 5% de su RPC del mes anterior, o cuyas posiciones en opciones vendidas estén cubiertas por posiciones compradas en opciones que posean exactamente las mismas condiciones contractuales, las que podrán usar el método simplificado previsto en las normas, mientras que en el resto de los casos, las entidades deberán usar el método alternativo (“delta-plus”) también previsto en las normas.

Consecuencias del incumplimiento de las exigencias de capital mínimo

El Banco Central establece lo siguiente:

- (i) *Incumplimientos informados por las entidades*: la entidad deberá encuadrarse en la exigencia a más tardar en el segundo mes siguiente a aquel en que se registre el incumplimiento, o presentar un plan de

regularización y saneamiento dentro de los 30 días corridos siguientes al último día del mes al que corresponda el incumplimiento.

La obligación de presentar planes determinará que el importe de los depósitos –en moneda nacional y extranjera– no podrá exceder del nivel que haya alcanzado durante el mes en que se originó el incumplimiento. Dicho límite –que se mantendrá mientras persista la deficiencia– y su observancia se computarán a base de los saldos registrados al último día de cada uno de los meses comprendidos.

Además, el incumplimiento de la exigencia de capital mínimo supondrá una serie de consecuencias para la entidad financiera, entre ellas la prohibición de instalar filiales en el país y en el exterior, instalar oficinas de representación en el exterior o tener una participación en entidades financieras del exterior, así como la prohibición de distribuir dividendos en efectivo. Asimismo, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias podrá designar un veedor, con las facultades establecidas por la Ley de Entidades Financieras.

- (ii) *Incumplimientos identificados por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias:* la entidad dispondrá de 30 días corridos contados desde la notificación de la determinación efectuada por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias a fin de formular su descargo. Cuando la entidad no presente su descargo o si el descargo formulado es desestimado, el incumplimiento se considerará firme, aplicándose el procedimiento establecido en el punto (i).

Asimismo, de acuerdo con la Comunicación “A” 5889 del Banco Central, en caso de producirse un defecto de integración diaria respecto de la exigencia de capital por riesgo de mercado, excepto la correspondiente al último día del mes, originado en el cómputo de las exigencias por riesgo de tasa, de tipo de cambio y de acciones, la entidad financiera deberá reponer el capital y/o reducir sus posiciones de activos financieros hasta lograr cumplir el requisito establecido, para lo cual contará con un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la primera deficiencia. De mantenerse el defecto por un término superior a 10 días hábiles, la entidad deberá presentar un plan de regularización y saneamiento dentro de los cinco días hábiles siguientes, y podrá quedar sujeta a un procedimiento administrativo iniciado por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.

Riesgo operacional

La norma sobre riesgo operacional aborda la gestión del riesgo operacional (RO) como una disciplina integral y separada de la gestión de otros riesgos, atento a su importancia. Se define el RO como el riesgo de pérdidas resultantes de la falta de adecuación o fallas en los procesos internos, de la actuación del personal o de los sistemas o bien aquellas que son producto de eventos externos. La definición incluye el riesgo legal y excluye el riesgo estratégico y reputacional.

Las entidades financieras deben establecer un sistema para la gestión del RO que comprende las políticas, procesos, procedimientos y estructuras con que cuenta la entidad financiera para su adecuada gestión. Este marco debe permitir también a la entidad financiera evaluar si cuenta con capital suficiente.

Se definen siete tipos de eventos de pérdidas operacionales, de acuerdo al criterio usado internacionalmente:

- fraude interno,
- fraude externo,
- relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo,
- prácticas con los clientes, productos y negocios,
- daños a activos físicos,
- alteraciones en la actividad y fallas tecnológicas, y
- ejecución, gestión y cumplimiento del plazo de los procesos.

Las entidades financieras tienen la responsabilidad de implementar un sistema de gestión del RO eficiente, en cumplimiento de las pautas establecidas por el Banco Central. Un sistema sólido para la gestión del riesgo debe contar con una clara asignación de responsabilidades dentro de la organización de las entidades financieras. Así, la norma describe el papel de los distintos niveles de la organización en la gestión del RO (directorio y gerencia general –o equivalentes– y gerencias de línea).

Se requiere que exista una “Unidad de Riesgo Operacional” acorde con el tamaño de la entidad, la naturaleza y complejidad de sus productos y procesos y la magnitud de sus operaciones, pudiendo tratarse de una única persona responsable, en los casos que así lo ameriten. Se permite que esta Unidad dependa funcionalmente de la

Gerencia General (o autoridad equivalente) o de un nivel funcional con capacidad decisoria en materia de gestión de riesgos que reporte a esa Gerencia.

Una gestión efectiva de este riesgo contribuirá a prevenir la ocurrencia de futuras pérdidas derivadas de eventos operativos. Consecuentemente, las entidades financieras deben gestionar el RO inherente a sus productos, actividades, procesos y sistemas relevantes. El proceso de gestión del RO comprende las etapas que se describen a continuación.

(a) Identificación y evaluación: para la identificación se tendrán en cuenta factores internos y externos, que pudieran afectar el desarrollo de los procesos e influir negativamente en las proyecciones realizadas conforme las estrategias de negocios definidas por la entidad. Las entidades financieras utilizarán datos internos, debiendo establecer un proceso para registrar y consignar en forma sistemática la frecuencia, severidad, categorías y otros aspectos relevantes de los eventos de pérdida por riesgo operacional. Entre las herramientas complementarias que las entidades deben usar pueden destacarse las autoevaluaciones de riesgo, la asignación de riesgos y los indicadores de riesgo.

(b) Seguimiento: se requiere contar con un proceso de seguimiento eficaz a los efectos de facilitar la rápida detección y corrección de las posibles deficiencias que se produzcan en las políticas, procesos y procedimientos de gestión del riesgo operacional. Además, se deberá verificar la evolución de los indicadores que permitan detectar deficiencias y proponer acciones correctivas.

(c) Control y mitigación del riesgo: se deberá contar con un sistema que asegure el cumplimiento de las políticas internas documentadas, reexaminando con una frecuencia mínima anual las estrategias de control y reducción de riesgos operacionales, debiendo realizar los ajustes que pudieran corresponder.

La exigencia de capital mínimo en relación con el riesgo operacional es igual al 15% del ingreso bruto positivo promedio anual de los últimos 36 meses.

El riesgo operacional se determinará aplicando la siguiente expresión:

$$C_{RO} = \frac{\sum_{t=1}^n \alpha * IB_t}{n}$$

Los factores comprendidos en la fórmula se definen como sigue:

CRO: exigencia de capital por riesgo operacional.

α : 15%.

n: número de períodos de 12 meses consecutivos en los cuales el IB es positivo, tomando en cuenta los últimos 36 meses anteriores al mes en que se efectúa el cálculo. El valor máximo de n es 3.

IBt: ingreso bruto de períodos de 12 meses consecutivos -siempre que sea positivo-, correspondiente a los últimos 36 meses anteriores al mes en que se efectúa el cálculo.

El IB se define como la suma de: (a) ingresos financieros y por servicios menos egresos financieros y por servicios, y (b) utilidades diversas menos pérdidas diversas.

De los rubros contables mencionados en (a) y (b) se excluirán los siguientes conceptos:

- (i) cargos provenientes de la constitución de provisiones, desafectación de provisiones constituidas en ejercicios anteriores y créditos recuperados en el ejercicio castigados en ejercicios anteriores;
- (ii) el resultado proveniente de participaciones en entidades financieras y en empresas, en la medida que se trate de conceptos deducibles de la responsabilidad patrimonial computable;
- (iii) conceptos extraordinarios o irregulares (es decir, aquellos provenientes de resultados atípicos y excepcionales acaecidos durante el período, de suceso infrecuente en el pasado y no esperado para el futuro), incluyendo ingresos provenientes del cobro de seguros (recuperos de siniestros); y
- (iv) resultados provenientes de la venta de especies clasificadas y medidas a costo amortizado o valor razonable con cambios en ORI.

Las nuevas entidades financieras deben cumplir en el primer mes con una exigencia de capital mínimo por riesgo operacional equivalente al 10% de la sumatoria de las exigencias determinadas por los riesgos de crédito y de mercado -en este caso, para las posiciones del último día- de ese mes. A partir del segundo y hasta el trigésimo sexto mes, la exigencia mensual será equivalente al 10% del promedio de las exigencias determinadas para los meses transcurridos hasta el período de cálculo -inclusive-, resultantes de considerar los riesgos mencionados en el párrafo precedente. A partir del trigésimo séptimo mes, la exigencia mensual se calculará en función de la fórmula de riesgo operacional.

Exigencias de efectivo mínimo

La exigencia de efectivo mínimo requiere que una entidad financiera mantenga una parte de sus depósitos u obligaciones en libre disponibilidad, sin asignarlas a operaciones de préstamo. De acuerdo con la Comunicación “A” 3498 (con sus modificatorias y suplementos) del 1º de marzo de 2002, la exigencia de efectivo mínimo comprende depósitos y otras obligaciones por intermediación financiera (a la vista y a plazo).

La exigencia de efectivo mínimo es aplicable a los depósitos a la vista y a plazo y otras obligaciones por intermediación financiera denominadas en pesos, moneda extranjera o títulos valores públicos y privados, y los saldos sin utilizar de adelantos en cuenta corriente formalizados que no contengan cláusulas que habiliten a la entidad a disponer discrecional y unilateralmente la anulación de la posibilidad de uso de dichos márgenes.

Las obligaciones de efectivo mínimo no incluyen (i) obligaciones con el Banco Central de la República Argentina; (ii) obligaciones con entidades financieras locales; (iii) obligaciones con bancos del exterior (incluidas las casas matrices y controlantes de entidades locales y sus sucursales) por líneas que tengan como destino la financiación de operaciones de comercio exterior; (iv) obligaciones por compras al contado a liquidar y a término, (v) ventas al contado a liquidar y a término, vinculadas o no a pases activos; (vi) obligaciones por líneas financieras del exterior con corresponsales; y (vii) obligaciones a la vista por giros y transferencias del exterior pendientes de pago siempre que su plazo no exceda las 72 horas hábiles a partir de su depósito.

Las obligaciones comprendidas se computarán por los saldos de capitales efectivamente transados. Quedan excluidos los intereses y primas devengados, vencidos o a vencer, por las obligaciones comprendidas, en tanto no hayan sido acreditados en cuenta o puestos a disposición de terceros, y, en el caso de depósitos a plazo fijo de las UVI (según se define más adelante) y UVA, el monto devengado resultante del incremento del valor de dicha unidad.

La exigencia de efectivo mínimo se aplicará sobre el promedio mensual de los saldos diarios de las obligaciones comprendidas, registrados al cierre de cada día durante cada mes calendario.

Los promedios se obtendrán dividiendo la suma de los saldos diarios por la cantidad total de días de cada mes.

Los días en que no se registre movimiento deberá repetirse el saldo correspondiente al día hábil inmediato anterior. La exigencia se observará en forma separada por cada una de las monedas y/o títulos e instrumentos de regulación monetaria en que se encuentren denominadas las obligaciones.

Deberán integrarse los importes de efectivo mínimo que surjan de aplicar las siguientes tasas que, en el caso de operaciones en pesos, dependerán de la categoría a la que pertenezca la localidad en la que se encuentre radicada la casa operativa en la que se efectúen, conforme a lo establecido en las normas sobre “Categorización de localidades para entidades financieras”:

Concepto	Tasas en %			
	Categoría I		Categorías II a VI	
	En pesos	En moneda extranjera	En pesos	En moneda extranjera
1- Depósitos en cuenta corriente y cuentas a la vista	28		26	
2- Depósitos en caja de ahorros, en cuenta sueldo y especiales	28	25	26	25
3- Usuras pupilares, cuentas especiales para círculos cerrados, fondo de cese laboral para los trabajadores de la industria de la construcción, sueldo/de la seguridad social, cuentas corrientes especiales para personas jurídicas y caja de ahorros para el pago de planes o programas de ayuda social	28	25	26	25
4- Otros depósitos y obligaciones a la vista, haberes previsionales acreditados por la ANSES pendientes de efectivización y saldos inmovilizados correspondientes a				

Concepto	Tasas en %			
	Categoría I		Categorías II a VI	
	En pesos	En moneda extranjera	En pesos	En moneda extranjera
obligaciones comprendidas en estas normas	28	25	26	25
5- Saldos sin utilizar de adelantos en cuenta corriente formalizados	28		26	
6- Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras no bancarias, computables para la integración de su efectivo mínimo	100		100	
7- Depósitos a plazo fijo, obligaciones por “aceptaciones”, pases activos -incluidas las responsabilidades por venta o cesión de créditos a sujetos distintos de entidades financieras-, pases pasivos, cauciones y pases bursátiles pasivos, inversiones a plazo constante, con opción de cancelación anticipada o de renovación por plazo determinado y con retribución variable, y otras obligaciones a plazo con excepción de los depósitos reprogramados comprendidos en los puntos 11, 12, y 13, de esta tabla, según su plazo residual:				
(i) Hasta 29 días	22	23	21	23
(ii) De 30 a 59 días	18	17	17	17
(iii) De 60 a 89 días	9	11	8	11
(iv) De 90 a 179 días	1	5	0	5
(v) De 180 días a 365 días	0	2	0	2
(vi) Más de 365 días	0	0	0	0
8- Obligaciones por líneas financieras del exterior (no instrumentadas mediante depósitos a plazo ni títulos valores de deuda)	0	0	0	0
9- Títulos valores de deuda (comprendidas las obligaciones negociables), según su plazo residual				
(i) Hasta 29 días	22	23	22	23
(ii) De 30 a 59 días	18	17	18	17
(iii) De 60 a 89 días	9	11	9	11
(iv) De 90 a 179 días	1	5	1	5
(v) De 180 días a 365 días	-	2	-	2
(vi) Más de 180 días	0	-	0	-
(vii) Más de 365 días	-	0	-	0
10- Obligaciones con el Fondo Fiduciario de Asistencia a Entidades Financieras y de Seguros	0		0	
11- Depósitos a la vista y a plazo fijo efectuados por orden de la Justicia con fondos originados en las causas en que interviene, y sus saldos inmovilizados	21	15	21	15
12- Depósitos especiales vinculados al ingreso de fondos del exterior - Decreto 616/2005		100		100
13- Inversiones a plazo instrumentadas en certificados nominativos intransferibles, en pesos, correspondientes a titulares del sector público que cuenten con el derecho a ejercer la opción de cancelación anticipada en un plazo inferior a 30 días contados desde su constitución	24	-	23	-
14- Depósitos e inversiones a plazo de UVI y UVA				
(i) Hasta 29 días	7	-	6	-
(ii) De 30 a 59 días	5	-	4	-
(iii) De 60 a 89 días	3	-	2	-
(iv) Más de 90 días	0	-	0	-
15- Fondo de Cese Laboral para los Trabajadores de la Industria de la Construcción en UVA	7	0	6	0
16- Depósitos a nombre de menores de edad por fondos que reciban a título gratuito	0	-	0	-

El defecto de aplicación de recursos correspondientes a depósitos en moneda extranjera, netos de los saldos de efectivo en las entidades, en custodia en otras entidades financieras, en tránsito y en Transportadoras de Valores

(TV), que se determine en un mes se computará por un importe equivalente en el cálculo de la exigencia de efectivo mínimo de ese mismo período de la respectiva moneda.

La integración se debe efectuar en la misma moneda que la de la exigencia, pudiéndose realizar con los siguientes conceptos:

1. Cuentas corrientes de las entidades financieras abiertas en el Banco Central en pesos.
2. Cuentas de efectivo mínimo de las entidades financieras abiertas en el Banco Central, en dólares o en otras monedas extranjeras.
3. Cuentas especiales de garantías a favor de las cámaras electrónicas de compensación y para la cobertura de la liquidación de operaciones con tarjetas de crédito y en cajeros automáticos y por transferencias inmediatas de fondos.
4. Cuentas corrientes de las entidades no bancarias, abiertas en bancos comerciales para la integración de la exigencia de efectivo mínimo.
5. Cuentas corrientes especiales abiertas en el Banco Central, vinculadas con la atención de los beneficios previsionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
6. Subcuenta 60 de efectivo mínimo habilitada en la “Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros - CRYL” de títulos valores públicos e instrumentos de regulación monetaria del Banco Central valuados a valor de mercado.

La remuneración de las cuentas en el Banco Central relacionadas con las reservas de liquidez sólo se realiza hasta los montos correspondientes a las exigencias establecidas para las operaciones a plazo, no remunerándose las reservas en exceso a esa exigencia.

En el caso de depósitos a plazo fijo en títulos públicos nacionales o instrumentos de regulación monetaria del Banco Central de la República Argentina (BCRA), incluidos sus saldos inmovilizados, deberá ser determinada en la misma especie captada, según su valor de mercado.

La exigencia se mantendrá aun cuando, con posterioridad a la constitución de la imposición, el respectivo título público nacional o instrumento de regulación monetaria deje de contar con cotización normal y habitual por importes significativos en mercados del país.

De tratarse de depósitos a plazo fijo en otros títulos valores, incluidos sus saldos inmovilizados, la exigencia deberá ser determinada –considerando el valor de mercado de la especie captada– en:

- a) pesos o en títulos públicos nacionales en esa moneda que cuenten con cotización normal y habitual por importes significativos en mercados del país, cuando la especie captada se encuentre nominada en esa moneda; o
- b) dólares estadounidenses o en títulos públicos nacionales en esa moneda, que cuenten con cotización normal y habitual por importes significativos en mercados del país, cuando la especie captada sea nominada en moneda extranjera.

La exigencia sobre obligaciones a la vista por transferencias del exterior en monedas extranjeras distintas del dólar estadounidense deberá imputarse a esta moneda, en la medida en que superen el plazo máximo de las 72 horas hábiles de la fecha de su acreditación.

Cuando se requiera la utilización de información de períodos anteriores al de cómputo (ej. estructura de plazos residuales, integración mínima diaria, etc.) y la entidad financiera carezca de ella por no haber operado en esos períodos (tal es el caso de nuevas entidades autorizadas a operar) deberá utilizarse la información del período de cómputo.

La exigencia de efectivo mínimo se aplicará sobre el promedio mensual de los saldos diarios de las obligaciones comprendidas, registrados al cierre de cada día durante cada mes calendario. Los promedios se obtendrán dividiendo la suma de los saldos diarios por la cantidad total de días de cada mes.

En ningún día del mes la suma de los saldos de los conceptos admitidos como integración, registrados al cierre de cada día, podrá ser inferior al 25% de la exigencia de efectivo mínimo total, sin incluir la exigencia por incremento de depósitos, determinada para el mes inmediato anterior, recalculada en función de las exigencias y conceptos vigentes en el mes al que corresponden los encajes. Dicha exigencia diaria será del 70% cuando en el período de cómputo anterior se haya registrado una deficiencia de integración.

Las deficiencias de integración del efectivo mínimo en pesos y en títulos e instrumentos de regulación monetaria denominados en esa moneda y de la integración mínima diaria en pesos estarán sujetas a un cargo equivalente a dos veces la tasa BADLAR de bancos privados para depósitos en pesos, informada para el último día hábil del pertinente período.

Las deficiencias de integración del efectivo mínimo en moneda extranjera y en títulos e instrumentos de regulación monetaria denominados en esa moneda diaria quedan sujetas a un cargo equivalente a dos veces la tasa BADLAR de bancos privados en dólares estadounidenses o dos veces la tasa LIBOR a 30 días de plazo por operaciones en esa moneda, informadas para el último día hábil del pertinente período o la última disponible, de ambas la mayor.

Los cargos podrán ser reducidos en función de: (i) De acuerdo con la participación en el total de financiaciones al sector privado no financiero en pesos en la entidad de las financiaciones a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES), (ii) En función del otorgamiento de financiaciones en el marco del Programa "AHORA 12".

Políticas de liquidez interna de las entidades financieras

De acuerdo con el texto ordenado del Banco Central "Ratio de Cobertura de Liquidez", las entidades financieras deberán adoptar políticas de dirección y control que aseguren la disponibilidad de razonables niveles de liquidez para atender eficientemente, sus depósitos y otros compromisos de naturaleza financiera. Dichas políticas deberán prever los procedimientos para evaluar con suficiente anticipación las condiciones de liquidez de la entidad en el contexto del mercado, con la consecuente revisión de las estimaciones y su adecuación a los nuevos escenarios, arbitrando las medidas conducentes a la eliminación de los desfases de liquidez o adoptando recaudos para prever la obtención de recursos a costo de mercado y suficientes para sustentar prudentemente los activos a más largo plazo. Dichas políticas deberían también tener en cuenta (i) el grado en que sus pasivos o activos se encuentran concentrados en determinados clientes, (ii) la situación general de la economía y del mercado y su probable evolución, su repercusión sobre la disponibilidad de líneas de crédito y (iii) la capacidad para obtener recursos mediante la venta de títulos públicos y/o cartera activa.

La estructura orgánica de la entidad deberá contemplar la unidad -o persona humana- específica encargada de gestionar la liquidez y los niveles de responsabilidad de quienes tendrán a su cargo la gestión del ratio de cobertura de liquidez (LCR), que requerirá un seguimiento diario. Necesariamente, corresponderá la participación y coordinación de la máxima autoridad gerencial de la entidad (por ejemplo: gerente general).

Además, las entidades financieras deberán designarse a un director o consejero al cual se informará al menos semanalmente, o con más frecuencia si las circunstancias así lo exigen, especialmente cuando cambios en las condiciones de liquidez obliguen a definir nuevos cursos de acción para resguardar a la entidad. En los casos de sucursales de entidades del exterior, se deberá informar a su máxima autoridad en el país.

Los funcionarios y directivos designados serán los responsables del manejo de la política de liquidez que, además del seguimiento del LCR, comprende la adopción de los recaudos para el cumplimiento de la integración del efectivo mínimo.

Deberá informarse a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias la nómina de tales funcionarios y directivos, así como los cambios posteriores dentro de los 10 días corridos de producidos.

Ratio del Fondeo Neto Estable (NSFR)

El ratio de fondeo neto estable (NSFR) tiene como objetivo que las entidades financieras puedan financiar sus actividades con fuentes suficientemente estables para mitigar el riesgo de futuras situaciones de estrés originadas en su fondeo. Al requerir a las entidades financieras que mantengan un perfil de fondeo estable en relación con la composición de sus activos y operaciones fuera de balance, el NSFR limita la excesiva dependencia respecto del fondeo mayorista de corto plazo, promueve una mejor evaluación del riesgo de fondeo de las partidas dentro y fuera de balance y favorece la estabilidad de las fuentes de fondos. Las definiciones de los conceptos contenidos en el NSFR son análogas a las previstas en las normas sobre "Ratio de cobertura de liquidez", excepto que se establezca explícitamente en estas disposiciones otra definición.

El NSFR se define como el cociente entre el monto disponible de fondeo estable y el monto requerido de fondeo estable: donde: MDFE (Monto disponible de fondeo estable): es la parte del capital y de los pasivos de la entidad

financiera –computados conforme a lo previsto en la Sección 2.– que se espera estén disponibles durante un período de un año. MRFE (Monto requerido de fondeo estable): es el monto de fondeo necesario durante ese período –computado conforme a lo previsto en la Sección 3–, que está en función de la liquidez y plazo residual de los activos de la entidad y de sus compromisos fuera de balance.

El NSFR deberá –en todo momento– ser mayor o igual a 1: $NSFR \geq 1$. Se complementará con la evaluación que realice la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC). La SEFyC podrá exigirle a la entidad que adopte estándares más estrictos con el fin de reflejar su perfil de riesgo de fondeo, teniendo en cuenta también a ese efecto la evaluación que haya realizado del cumplimiento de las normas sobre “Lineamientos para la gestión de riesgos en las entidades financieras” en materia de liquidez por parte de la entidad.

Regulación del riesgo de crédito

La normativa sobre riesgo de crédito establece normas para reducir dicho riesgo sin erosionar significativamente la rentabilidad promedio. Existen tres tipos de ratios que limitan la exposición de la entidad prestamista, a saber: los límites a la concentración del riesgo, los límites a las operaciones con clientes en función del capital de la entidad y los límites crediticios en función del patrimonio neto del cliente.

Concentración del riesgo

La normativa define el concepto “concentración del riesgo” como la suma de las exposiciones a contrapartes vinculadas o no que, en conjunto para cada una de ellas, representen 10 % o más del capital de nivel uno de la entidad.

La concentración del riesgo no puede ser en ningún momento mayor a:

- 3 veces el capital de nivel uno de la entidad, sin computar las exposiciones a entidades financieras locales.
- 5 veces el capital de nivel uno de la entidad, para el total de exposiciones comprendidas, sin perjuicio de la observancia del límite precedente.
- 10 veces el capital de nivel uno de la entidad, para los bancos comerciales de segundo grado.

Las financiaciones que superen el 2,5% de la RPC de la entidad financiera prestamista, excepto las operaciones interfinancieras, deben contar con la opinión de las más altas autoridades de la entidad y la aprobación del directorio o autoridad equivalente.

Diversificación del riesgo

Las entidades financieras deberán procurar que su cartera crediticia esté diversificada entre el mayor número posible de personas o empresas y entre las diferentes actividades económicas, de manera de evitar una concentración del riesgo, por operaciones con un conjunto reducido de personas o empresas o que se refieran a un determinado sector, que pueda comprometer significativamente el patrimonio de las entidades financieras.

Graduación del riesgo

En el caso de límites a la financiación basados en el patrimonio neto del cliente, como regla general, las financiaciones totales no pueden superar el 100% de la responsabilidad patrimonial computable de los clientes. Este límite básico se amplía hasta un 200% cuando el apoyo adicional no supera el 2,5% de la responsabilidad patrimonial computable de la entidad financiera al último día hábil del segundo mes anterior a la fecha de la financiación y cuenta con la aprobación del directorio o autoridad equivalente de la entidad pertinente.

Márgenes crediticios

Los límites máximos individuales aplicables a clientes no vinculados se calculan en relación con la RPC de la entidad financiera.

Asistencia financiera aplicables al sector público no financiero:

Las exposiciones de las entidades financieras frente al sector público no financiero –definido con el alcance establecido en las normas sobre “Financiamiento al sector público no financiero”– no están sujetas a los límites

previstos en “Grandes exposiciones al riesgo de crédito”. Sin embargo, deberán ser informadas a la SEFyC de acuerdo con lo dispuesto en el régimen informativo que se estableció al efecto.

Financiaciones al sector público no financiero	Límite máximo (*)
i) Al sector público nacional	50%
ii) A cada jurisdicción provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.....	10%
iii) A cada jurisdicción municipal	3%

(*) Los límites básicos establecidos se incrementarán en 15 puntos porcentuales, siempre que los aumentos se afecten al otorgamiento de asistencia financiera a fideicomisos o fondos fiduciarios, sujeto a ciertas condiciones y conforme a las normas sobre financiamiento al sector público o la incorporación de instrumentos de deuda emitidos por ellos.

Los límites máximos de asistencia financiera aplicables al sector privado no financiero del país y al sector no financiero del exterior son los siguientes:

Financiaciones al sector privado no financiero del país y al sector no financiero del exterior	Límite máximo
A cada prestatario.....	
a) Financiaciones sin garantías computables	15%
b) Total de financiaciones (cuenten o no con garantías computables) y/ u obligaciones garantizadas inclusive financiaciones garantizadas por terceros	25%
A cada sociedad de garantía recíproca (RGC) (aun cuando sea vinculada) o fondo de garantía de carácter público.....	25%
A cada compañía de seguros de crédito de exportación.....	15%

Los límites máximos de asistencia financiera aplicables al sector financiero del país son los siguientes:

Financiaciones al sector financiero del país	Entidad prestamista	Tomador	
		Calificación 1, 2 o 3	Calificación 4 o 5
i) Si la entidad prestamista no es banco comercial de segundo grado, a una entidad financiera local	Calificación 1, 2 o 3	25%	25%
	Calificación 4 o 5	25%	-
ii) Si la entidad prestamista es banco comercial de segundo grado	Calificación 1, 2 o 3	100%	100%
	Calificación 4 o 5	100%	-

*Este límite puede ser dividido en dos segmentos, con y sin garantía, en cada caso, por el 25% sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos.

Los límites máximos de asistencia financiera aplicables al sector financiero del exterior son los siguientes:

Financiaciones al sector financiero del exterior	Límite máximo
(i) Con calificación internacional “investment grade”	25%
(ii) Cuando no cumpla con lo anterior	5%

La asignación de márgenes por exposición crediticia de la contraparte en operaciones con derivados se realiza sobre la base de medidas sensibles al riesgo y las características de cada tipo de operación en particular (tipo de contrato, frecuencia de valuación a precios de mercado, volatilidad del activo). Las operaciones a ser incluidas son operaciones a término, futuros y opciones de acciones y títulos públicos, e instrumentos de regulación monetaria del Banco Central con volatilidad publicada, opciones de compra o venta de dichos activos y permutas (swaps).

Límites para personas vinculadas

El monto total de operaciones pertinentes con empresas o personas vinculadas no podrá exceder en ningún momento los límites del patrimonio neto de la entidad financiera al último día del mes anterior al mes en que se computa, de acuerdo con las siguientes normas generales:

- en el caso de entidades financieras locales que realicen operaciones sujetas a consolidación por la entidad prestamista o prestataria, se podrá otorgar asistencia a cada entidad:
 - (i) con calificación 1 de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, por un monto máximo equivalente al 100% de su responsabilidad patrimonial computable; o
 - (ii) con calificación 2 de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, por un monto máximo equivalente al 20% de su responsabilidad patrimonial computable; y asistencia

adicional por un monto máximo equivalente al 95% de dicha responsabilidad patrimonial computable siempre que el vencimiento de las financiaciones y otras líneas de crédito pertinentes ocurra dentro de los 180 días;

- (iii) en el caso de entidades financieras locales no incluidas en los puntos anteriores (i y ii), la entidad financiera puede otorgar asistencia por un monto máximo equivalente al 10% de su responsabilidad patrimonial computable;
- Si la entidad prestamista tiene calificación 1, 2 o 3 de la SEFyC y no es controlante.
 - i) A cada entidad financiera con calificación 1 a 3 de la SEFyC que pertenezca al mismo grupo de consolidación de la entidad prestamista: 25%;
 - ii) A cada entidad financiera vinculada que no cumpla alguna de las condiciones establecidas en el acápite precedente: 10%.
- Si la entidad financiera cuenta con una calificación de 4 o 5, no podrá otorgarse asistencia financiera a una persona o empresa vinculada, salvo en ciertas situaciones especiales.
- en el caso de entidades financieras locales no incluidas en el párrafo anterior, la entidad financiera puede otorgar asistencia por un monto máximo equivalente al 10% de su responsabilidad patrimonial computable; y
- en el caso de otras empresas locales vinculadas que suministren exclusivamente servicios complementarios de la actividad de la entidad financiera, así como a bancos extranjeros vinculados con calificación en la categoría “*investment grade*”, podrán recibir asistencia por un monto máximo equivalente al 10% de la responsabilidad patrimonial computable de la entidad prestamista, salvo que se cumplan con determinadas condiciones donde la asistencia puede ser mayor a la mencionada.

Por último, el monto de asistencia financiera total no excluida otorgada por una entidad financiera a personas humanas y empresas vinculadas y su participación accionaria en estas no podrá superar el 20% del capital regulatorio de la entidad establecido por la ley argentina, salvo cuando el límite aplicable sea del 100%.

De acuerdo con la normativa del Banco Central, se considerarán “vinculadas” a la entidad financiera (y por lo tanto parte del mismo grupo económico) las siguientes personas humanas y jurídicas:

- cualquier empresa o persona que directa o indirectamente ejerza el control de la entidad financiera, esté controlada por la entidad financiera o esté sujeta a supervisión consolidada con la entidad financiera;
- cualquier empresa que tenga directores comunes con la entidad o empresa que ejerce el control directo o indirecto de la entidad financiera o con la entidad financiera, siempre que esos directores, en conjunto, conformen la mayoría simple de los órganos de dirección de cada una de esas empresas o entidades financieras; o
- con carácter excepcional, conforme lo determine el Directorio del Banco Central de la República Argentina (a propuesta del Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias).
 - a) se considerará que existe control por parte de una empresa o persona sobre otra si se cumple alguna de las siguientes condiciones:
 - b) dicha empresa o persona, directa o indirectamente, posee o controla el 25% o más del total de votos de cualquier instrumento con derecho a voto en la otra empresa;
 - c) dicha empresa o persona ha contado con el 50% o más del total de los votos de los instrumentos con derecho a voto en la última asamblea en la que se hayan elegido directores;
 - d) dicha empresa o persona, directa o indirectamente, posee participación en la otra empresa por cualquier título (aun cuando sus votos resulten inferiores a los porcentajes arriba establecidos en a)) de modo de contar con los votos necesarios para formar la voluntad social en las asambleas de accionistas o para adoptar decisiones en reuniones de directorio u órgano similar; o

- e) dicha empresa o persona, directa o indirectamente, ejerce influencia controlante sobre la dirección y/o políticas de la otra empresa, cuando así lo determine el Directorio del Banco Central de la República Argentina, a propuesta de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.

La reglamentación contiene varios factores no excluyentes que son pautas que pueden denotar la existencia de dicha influencia controlante, entre otras, las siguientes:

- posesión de un porcentaje del capital de la empresa que otorgue los votos necesarios para influir en la aprobación de los estados *financieros* y en la distribución de utilidades de la otra persona;
- representación en el directorio de la otra persona;
- existencia de operaciones importantes con la empresa.
- intercambio de personal directivo con la empresa;
- dependencia técnico - administrativa de la empresa; y
- participación en la fijación de las políticas societarias de la empresa.
- Posesión de acceso privilegiado a la información sobre la gestión de la persona jurídica.

Regulaciones sobre tasa de interés en las operaciones de crédito y comisiones

Tasas de financiación

Las tasas de interés compensatorio se concertarán libremente entre las entidades financieras y los clientes salvo en las financiaciones vinculadas a operaciones con tarjetas de crédito y en regímenes específicos.

En el caso de las financiaciones vinculadas a operaciones con tarjetas de crédito la tasa no podrá superar en más del 25 % a aquella que resulte del promedio de las tasas de interés que la entidad haya aplicado, durante el mes inmediato anterior, ponderadas por el correspondiente monto de préstamos personales sin garantías reales otorgados en igual período.

Tasas para depósitos e inversiones a plazo

Las tasas de interés se concertarán libremente entre las entidades financieras y los clientes, de acuerdo con las normas que rijan para cada tipo de operación

Las tasas de interés deberán expresarse en forma homogénea y transparente dentro del mercado financiero con la finalidad de que el público inversor disponga de elementos comparables para su evaluación. En todas las operaciones, cualquiera sea su instrumentación, corresponde que en los contratos, recibos, u otros documentos de relación con los clientes, donde se expliciten tasas o importes de intereses, se deje expresa constancia de los siguientes aspectos: a) Tasa de interés anual contractualmente pactada, en tanto por ciento con dos decimales. b) Tasa de interés efectiva anual equivalente al cálculo de los intereses en forma vencida, en tanto por ciento con dos decimales y c) Carácter fijo o variable de la tasa de interés, con indicación en este último caso de los parámetros que se emplearán para su determinación y periodicidad del cambio.

Comisiones

El 6 de octubre de 2013, el Banco Central emitió la Comunicación “A” 5460, otorgando protección amplia a los usuarios de servicios financieros. La protección incluye, entre otras cuestiones, la regulación de comisiones y cargos adicionales a los intereses cobrados por entidades financieras por los servicios prestados. Las comisiones y cargos adicionales deben tener origen en un costo real, directo y demostrable y estar debidamente justificados desde el punto de vista técnico y económico. Cabe destacar que la Comunicación “A” 5514 establece una excepción a la exigibilidad de la Comunicación “A” 5460 para ciertos contratos de crédito con garantía prendaria celebrados hasta el 30 de septiembre de 2018.

El 21 de agosto de 2015, el Banco Central emitió la Comunicación “A” 5795 (tal como la misma fuera modificada y complementada, incluyendo sin limitación la Comunicación “A” 5828) estableciendo normas

adicionales destinadas a proteger a los usuarios de servicios financieros mediante regulaciones de refuerzo que prohíben a las entidades financieras cobrar honorarios y comisiones en relación con los productos de seguro que los usuarios contraten con carácter accesorio a un servicio financiero, independientemente de que se trate de una solicitud del usuario o de una condición establecida por la entidad financiera para acceder al servicio financiero. Al respecto, a partir del 13 de noviembre de 2015, las entidades financieras no podrán percibir retribuciones ni utilidades por tales productos de seguros que sus usuarios deban contratar ni percibirlos directa o indirectamente de la compañía de seguros.

Asimismo, la Comunicación “A” 5828 hace una distinción entre “seguros de vida sobre saldo deudor” y “otros seguros”, estableciendo para el caso de los primeros que las entidades financieras no podrán cobrar comisiones y/o cargos asociados con esta clase de seguros. Las entidades financieras deben contratar seguros de vida sobre saldo deudor con cobertura en caso de fallecimiento o incapacidad total permanente respecto de financiaciones otorgadas a personas humanas. Por otro lado, las entidades podrán autoasegurar los riesgos de fallecimiento e incapacidad total permanente de usuarios de servicios financieros. En ambos casos, la cobertura debe cubrir íntegramente el monto adeudado en caso de fallecimiento o incapacidad total permanente del beneficiario.

El 21 de marzo de 2016, el Banco Central emitió la Comunicación “A” 5927 (complementada por la Comunicación “A” 5928), que establece nuevas reglas destinadas a la protección de usuarios de servicios financieros. En este sentido, a partir del 1º de abril de 2016, las transferencias electrónicas de clientes que revistan la condición de usuarios de servicios financieros no se encontrarán sujetas a cargos y/o comisiones. Para los clientes que no revistan esta condición (como ciertas compañías) no se encontrarán sujetas a cargos y/o comisiones las transferencias por medios electrónicos por hasta el importe de Ps. 250.000

El 21 de marzo de 2016, el Banco Central emitió la Comunicación “A” 5928, según la cual todas las cajas de ahorro serán gratuitas, incluido el uso de la tarjeta de débito correspondiente. Al respecto, se establece que todas las cajas de ahorro tanto nuevas como existentes serán ahora gratuitas. Las cajas de ahorro no tendrán requisitos de monto mínimo ni cargos relacionados con su apertura, mantenimiento o renovación.

A partir del 1 de noviembre de 2017 a través de la Comunicación “A” 6279 las entidades financieras y las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra que ofrezcan y comercialicen productos y/o servicios que se perfeccionan con la firma o aceptación de contratos con cláusulas preestablecidas (contratos de adhesión), deberán informar las comisiones y cargos que cobren a los usuarios de servicios financieros mediante el régimen informativo establecido al efecto.

Las altas –comisiones de nuevos productos y/o servicios que deseen comercializar– y los aumentos en las comisiones que deseen implementar deberán ser previamente informados por la vía consignada en el párrafo precedente y sólo podrán ser notificadas a aquellos usuarios de servicios financieros luego de transcurridos treinta (30) días corridos desde la fecha de información al BCRA. También deberán informar las modificaciones de los cargos.

Las reducciones en las comisiones y/o cargos podrán aplicarse sin demora, sin perjuicio de que deberán ser informadas al BCRA dentro de los treinta (30) días corridos siguientes de su aplicación.

Con respecto al aumento de comisiones, desde la Comunicación “A” 5460, ha tenido varios cambios teniendo períodos donde las modificaciones de las comisiones debían ser informadas a la Gerencia Principal de Protección al Usuario de Servicios Financieros del BCRA con una antelación mínima de noventa (90) días corridos respecto de la fecha de su efectiva aplicación, donde debían contar con autorización previa del Banco Central para implementar aumentos a los costos de los servicios financieros básicos o donde se requería autorización previa del Banco Central para todas las comisiones.

Préstamos y unidades de vivienda

El Banco Central ha adoptado medidas para la toma de depósitos y otorgamiento de préstamos expresables en una unidad de medida especial ajustable por el coeficiente de estabilización de referencia – CER - Ley 25.827, y se denominan en Unidades de Valor Adquisitivo Actualizables (“UVAs”).

A su vez, mediante la Ley 27.271, se estableció la posibilidad de otorgar depósitos y préstamos ajustables por el índice de la construcción y se denominan Unidades de Vivienda (“UVIs”).

Así, a partir de dicha ley coexisten las dos unidades de ajuste, que pueden usarse tanto para créditos como para

depósitos bancarios.

El valor inicial de la UVI ha sido de Ps.14,05 (igual que el de la UVA), cifra que representa el costo de construcción de un milésimo de metro cuadrado de vivienda al 31 de marzo de 2016.

Sus actualizaciones son realizadas en base a dichos índices que publica el INDEC y el Banco Central en su página web.

Sistema cambiario

A través de la Comunicación “A” 6244 el BCRA dispuso un nuevo marco regulatorio para las operaciones cambiarias, el que rige desde el 1º de julio de 2017.

A partir de esa fecha, todas las personas humanas o jurídicas, patrimonios y otras universalidades pueden operar libremente en el mercado de cambios realizando operaciones al tipo de cambio que sea libremente pactado entre las partes.

Además, las entidades financieras y cambiarias pueden operar sin límite de horario en la realización de operaciones, deben dar cumplimiento a los requisitos de identificación de sus clientes y registro de las operaciones ante el BCRA según el régimen informativo correspondiente y deben cumplir con las normas sobre “Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas”.

Entre los principales cambios podemos mencionar que si en el mensaje Swift de las transferencias recibidas es consignado el número de cuenta del beneficiario, los fondos deberán ser acreditados en forma directa en esa cuenta, por liquidación de cambio, canje o arbitraje, según corresponda en cada caso salvo que el cliente se manifieste expresamente en sentido contrario. Otro cambio es que los pagos de importaciones de bienes y servicios podrán realizarse sin restricciones, en la medida que se constate el cumplimiento del tratamiento impositivo correspondiente.

Capacidad de préstamo en moneda extranjera

La “Política de Crédito” publicada por Banco Central contiene las normas sobre aplicación de la capacidad de préstamo de depósitos en moneda extranjera, de acuerdo a la Comunicación “A” 4851 del Banco Central, tal como fuera modificada y complementada, que establece que la capacidad de préstamo de los depósitos en moneda extranjera, incluidos los depósitos en dólares estadounidenses a ser liquidados en pesos, debe quedar comprendida en una de las siguientes categorías: (a) prefinanciación y financiación de exportaciones que se efectúen directamente o a través de mandatarios, consignatarios u otros intermediarios actuantes por cuenta y orden del propietario de las mercaderías; (b) otras financiaciones a exportadores, que cuenten con un flujo de ingresos futuros en moneda extranjera y se constate una facturación en moneda extranjera por un importe que guarde razonable relación con esa financiación; (c) financiaciones a productores, procesadores o acopiadores de bienes, siempre que: (i) cuenten con contratos de venta en firme de la mercadería a un exportador, con precio fijado o a fijar en moneda extranjera y se trate de mercaderías fungibles con cotización, en moneda extranjera, normal y habitual en los mercados locales o del exterior, de amplia difusión y fácil acceso al conocimiento público o (ii) su actividad principal sea la producción, procesamiento y/o acopio de mercaderías fungibles con cotización, en moneda extranjera, normal y habitual en los mercados del exterior, de amplia difusión y fácil acceso al conocimiento público, y se constate, en el año previo al otorgamiento de la financiación, una facturación total de esas mercaderías por un importe que guarde razonable relación con esa actividad y con su financiación. La norma también comprende las operaciones que tengan por destino financiar a proveedores de servicios directamente utilizados en el proceso de exportación de bienes, siempre que se verifiquen ciertas condiciones y se constate una facturación que guarde razonable relación con esa actividad y con su financiación; (d) financiaciones a productores de bienes para ser exportados, ya sea en el mismo estado o como parte integrante de otros bienes, por terceros adquirientes de ellos, siempre que cuenten con avales o garantías totales en moneda extranjera de dichos terceros y/o contratos de venta en firme en moneda extranjera y/o en bienes exportables; (e) la financiación de proyectos de inversión, capital de trabajo o compra de cualquier clase de bienes –que incluye las importaciones temporarias de insumos– que incrementen, o se relacionen con la producción de bienes para exportación, incluso préstamos sindicados, sean otorgados por entidades financieras locales o extranjeras; (f) financiaciones a clientes de la cartera comercial y de naturaleza comercial que reciben el tratamiento de los créditos para consumo o vivienda cuyo destino sea la importación de bienes de capital, que incrementen la producción de mercaderías destinadas al mercado interno; (g) títulos de deuda o certificados de participación en fideicomisos financieros en moneda extranjera cuyos activos fideicomitados sean préstamos

originados por las entidades financieras según lo descripto en los párrafos (a) a (d) precedentes (excluidos los préstamos sindicados); (h) Financiaciones a proveedores de bienes y/o servicios que formen parte del proceso productivo de mercaderías fungibles con cotización, en moneda extranjera, normal y habitual en los mercados locales o del exterior, de amplia difusión y fácil acceso al conocimiento público, siempre y cuando cuenten con contratos de venta en firme de esos bienes y/o servicios en moneda extranjera y/o en dichas mercaderías; (i) financiación con destinos distintos de los mencionados en los párrafos (a) a (d) precedentes comprendidos en el programa de crédito a que se refiere el "Préstamo BID N° 1192/OC-AR", que no excedan el 10% de la capacidad de préstamo; (j) préstamos interfinancieros (las entidades podrán imputar a estos recursos préstamos interfinancieros si los identifican e informan esa circunstancia a las prestatarias) y (k) letras y notas del Banco Central denominadas en dólares estadounidenses; (l) inversiones directas en el exterior por parte de empresas residentes en el país, que tenga como objeto el desarrollo de actividades productivas de bienes y/o servicios no financieros, en la medida que estén constituidas en países o territorios cooperadores a los fines de la transparencia fiscal, en función de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto N° 589/13 y complementarios; y (m) financiación de proyectos de inversión, incluido su capital de trabajo, que permitan el incremento de la producción del sector energético y cuenten con contratos de venta en firme y/o avales o garantías totales en moneda extranjera; (n) suscripción primaria de instrumentos de deuda en moneda extranjera del tesoro nacional, por hasta el importe equivalente a 1/3 del total de las aplicaciones realizadas conforme lo previsto en esta sección; (ñ) financiaciones de proyectos de inversión destinados a ganadería bovina, incluido capital de trabajo, sin superar el 5% de los depósitos en moneda extranjera del Banco; (o) Financiaciones a importadores del exterior para la adquisición de bienes y/o servicios producidos en el país, ya sea de manera directa o a través de líneas de crédito a bancos del exterior.; (p) Financiaciones a residentes del país que se encuentren garantizadas por cartas de crédito ("stand-by letters of credit") emitidas por bancos del exterior que cumplan con lo previsto en el punto 3.1. de las normas sobre "Evaluaciones crediticias", requiriendo a ese efecto calificación internacional de riesgo "investment grade", en la medida en que dichas cartas de crédito sean irrestrictas y que la acreditación de los fondos se efectúe en forma inmediata a simple requerimiento de la entidad beneficiaria..

El Banco Central provee una fórmula específica para calcular la capacidad de las entidades financiera para otorgar préstamos en moneda extranjera para las importaciones (correspondientes a los puntos (e) y (f) y, según corresponda, los puntos (g) y (i) del párrafo anterior).

La capacidad de préstamo será determinada para cada moneda de captación, efectuándose dicha determinación sobre la base del promedio mensual de los saldos diarios registrados durante cada mes calendario. Los defectos de aplicación estarán sujetos a un incremento equivalente de la exigencia de efectivo mínimo en la respectiva moneda extranjera.

Posición general de cambios

La posición general de cambios comprende la totalidad de los activos externos líquidos de la entidad netos de los saldos deudores de corresponsalía originados en la operatoria del mercado de cambio, tales como: disponibilidades en oro amonedado o en barras, billetes en moneda extranjera, tenencias de depósitos a la vista en bancos del exterior, inversiones en títulos públicos externos emitidos por países miembro de la OCDE cuya deuda soberana cuente con una calificación internacional no inferior a "AA", certificados de depósito a plazo fijo en entidades bancarias del exterior (que cuenten con calificación internacional no inferior a "AA") y los saldos y acreedores de corresponsalía. También se incluyen las compras y ventas de estos activos que estén concertadas y pendientes de liquidación por operaciones de cambio con clientes a plazos no mayores a 48 horas. No forman parte de la posición general de cambios, los billetes en moneda extranjera en custodia de la entidad, las ventas y compras a término de divisas o valores externos y las inversiones directas en el exterior, depósitos en el BCRA en moneda extranjera en cuentas a nombre de la entidad y demás activos locales en moneda extranjera.

A través de la Comunicación "A" 6237, el BCRA resolvió que las entidades autorizadas a operar en cambios podrán determinar libremente el nivel y uso de su Posición General de Cambios (PGC). De esta manera, se posibilita a las entidades mencionadas precedentemente a administrar sus posiciones en divisas, tanto en cuanto a la composición de sus activos, como a la posibilidad de entrar y sacar sus tenencias del país, con su consecuente impacto en reservas.

Asimismo, la mencionada comunicación dispuso que las entidades autorizadas a operar en cambios también podrán realizar operaciones de arbitraje y canjes en el exterior, en la medida que la contraparte sea sucursal o agencia en el exterior de bancos oficiales locales, una entidad financiera del exterior de propiedad total o mayoritaria de estados extranjeros, una entidad financiera o cambiaria del exterior que no esté constituida en países o territorios donde no se aplican, o no se aplican suficientemente, las Recomendaciones del Grupo de

Acción Financiera Internacional, o una compañía del exterior dedicada a la compra venta de billetes de distintos países y/o metales preciosos amonedados o en barras de buena entrega y cuya casa matriz esté radicada en un país miembro del Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria.

Para mayor información sobre la Comunicación “A” 6244, que elimina todas las disposiciones sobre la posición general de cambios al 1 de julio de 2017 ver “*Información adicional – Control de Cambios – Egreso de Capital - Comunicación “A” 6244 emitida por el Banco Central*”.

Posición global neta de moneda extranjera

La totalidad de los activos, pasivos y demás instrumentos por intermediación financiera en moneda extranjera o vinculados con la evolución del tipo de cambio incluyendo operaciones al contado y a término está incluida en la posición global neta incluyendo también contratos de derivados, los depósitos en esa moneda en las cuentas abiertas en el Banco Central, como así también, la posición de oro, las Letras del Banco Central de la República Argentina en moneda extranjera u otro instrumento de regulación monetaria del BCRA, la deuda subordinada en moneda extranjera y los instrumentos representativos de deuda en moneda extranjera.

También se computarán las operaciones a término que se celebren dentro de un acuerdo marco en el ámbito de mercados autorizados del país con la modalidad de liquidación por diferencia, sin entrega del activo subyacente negociado. Asimismo, los certificados o títulos emitidos por fideicomisos financieros y los derechos de créditos según fideicomisos comunes también están incluidos en la proporción pertinente, siempre que los activos subyacentes estén denominados en moneda extranjera. Los activos deducibles para determinar la RPC, y los conceptos incluidos que registre la entidad financiera en sus sucursales en el exterior, serán excluidos de esta relación.

En la Posición Global Neta de Moneda Extranjera se consideran dos relaciones:

- Posición Global Neta Negativa de Moneda Extranjera (el pasivo supera al activo): la Comunicación “A” 6233 del Banco Central establece que, desde el 1 de mayo de 2017, esta posición (en promedio mensual de saldos diarios convertidos a pesos al tipo de cambio de referencia) no podrá superar el 30 % de la responsabilidad patrimonial correspondiente al mes inmediatamente anterior.
- Posición Global Neta Positiva de Moneda Extranjera (el activo supera al pasivo): La Comunicación “A” 6526 del Banco Central estableció que, a partir del 18 de junio de 2018, esta posición diaria (como promedio mensual de los saldos diarios convertidos a pesos al tipo de cambio de referencia) no podía superar el 30% de la RPC o los recursos propios líquidos (lo que fuera menor), en cada caso respecto del mes anterior correspondiente (entendiéndose por ello, recursos propios líquidos al exceso de RPC respecto de los activos inmovilizados y otros conceptos, computables de acuerdo con las normas del BCRA relacionadas con la "Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos").

Los excesos a estas relaciones estarán sujetos a un cargo equivalente a 1,5 veces la tasa promedio resultante de la licitación de las Lebac en pesos (Letras del Banco Central) de menor plazo. Los cargos no ingresados en tiempo y forma estarán sujetos a un interés equivalente a la tasa que surja de adicionar un 50% a aquella aplicable a los excesos a estas relaciones.

Además del cargo mencionado precedentemente, se aplicarán las sanciones establecidas en el Artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras (incluso: llamado de atención; apercibimiento; multas; inhabilitación temporaria o permanente para el uso de la cuenta corriente bancaria; inhabilitación temporaria o permanente para desempeñarse como promotores, fundadores, directores, administradores, miembros de los consejos de vigilancia, síndicos, liquidadores, gerentes, auditores, socios o accionistas; y revocación de la autorización para funcionar).

Activos fijos y otros conceptos

El Banco Central determina que los activos fijos y otros conceptos mantenidos por las entidades financieras no deben exceder el 100% de la RPC de la entidad.

Dichos activos fijos y otros conceptos incluyen los siguientes:

- Acciones de empresas del país

- Créditos varios
- Bienes de uso
- Otros activos

Se excluyen los Activos afectados en garantía.

Los activos fijos se computarán en base a los saldos al cierre de cada mes, neto de las depreciaciones y amortizaciones acumuladas y las provisiones por riesgos de incobrabilidad que les sean atribuibles.

El incumplimiento de la relación origina el incremento de la exigencia de capital mínimo por un importe equivalente al 100% del exceso en la relación a partir del mes en que se registren los incumplimientos y mientras permanezcan.

Evaluaciones crediticias

Con vigencia para las operaciones que se realizan a partir del 1/12/14, el BCRA dio a conocer la Comunicación "A" 5671, por la cual aprobó las normas sobre "Evaluaciones crediticias" y la "Tabla de correspondencia de los nuevos requisitos de calificación para las entidades financieras".

Las disposiciones contenidas en la Comunicación "A" 5671 constituyen pautas básicas para evaluar adecuadamente el riesgo de crédito que las entidades financieras deberán observar cuando den cumplimiento a disposiciones del Banco Central que contemplen el requisito de una determinada calificación, y no reemplazan la evaluación crediticia que cada entidad financiera debe realizar de sus contrapartes. Las calificaciones internacionales de riesgo a las que aluden estas disposiciones deberán ser emitidas por agencias calificadoras de riesgo que cuenten con un código de conducta basado en los "Principios del Código de Conducta para los Agentes de Calificación de Riesgos" dados a conocer por la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV – IOSCO).

El Anexo II de la Comunicación "A" 5671 establece una tabla de los nuevos requisitos de calificación para las entidades financieras. Esta tabla clasifica los requisitos de calificaciones de crédito para las distintas operaciones.

Clasificación de la deuda y provisiones por riesgo de incobrabilidad

Cartera de créditos

Las reglamentaciones sobre clasificación de deuda están destinadas a establecer pautas claras para identificar y clasificar la calidad de los activos, como también evaluar el riesgo real o potencial de pérdidas sobre el capital o los intereses, para determinar (tomando en cuenta las garantías), si las provisiones afectadas a tales contingencias son adecuadas. Los bancos deben clasificar sus carteras de préstamos en dos categorías diferentes: (i) préstamos para el consumo o la vivienda, y (ii) préstamos comerciales.

Los préstamos para el consumo o la vivienda incluyen préstamos para la vivienda, préstamos para el consumo, financiamientos a través de tarjetas de crédito, préstamos a instituciones de Microcrédito y a microemprendedores (en este caso según lo previsto en el punto 1.1.3.4. de las normas sobre "Gestión crediticia") a microemprendimientos y otros tipos de préstamos comerciales de hasta Ps. 7.920.000 con o sin garantías. Los préstamos para el consumo o la vivienda superiores a Ps. 19.800.000 son clasificados como préstamos comerciales. Si un cliente tiene ambas clases de préstamos (préstamos comerciales y para el consumo o la vivienda), los préstamos para el consumo o vivienda serán incorporados a la cartera comercial para determinar bajo qué cartera deben ser clasificados basados en el monto indicado. No corresponderá la evaluación de la capacidad de repago respecto de las financiaciones que se encuentren respaldadas con tales garantías.

Bajo el sistema de clasificación de deuda vigente, cada cliente, como también sus deudas pendientes, es incluido dentro de una de seis sub-categorías. Los criterios de clasificación de deuda aplicados a la cartera de préstamos para el consumo están basados primordialmente en factores objetivos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones por parte del cliente o en su situación legal, mientras que el criterio clave para clasificar la cartera de préstamo comercial lo constituye la capacidad de pago de cada cliente, basado en su flujo de efectivo futuro.

Clasificación de préstamos comerciales

El criterio principal para evaluar un préstamo perteneciente a la cartera comercial es la capacidad de su prestatario para reembolsarlo, capacidad que se mide principalmente por el flujo de efectivo futuro de dicho prestatario. De acuerdo con las normas del Banco Central, los préstamos comerciales son clasificados del siguiente modo:

Clasificación	Criterios
En situación normal	Deudores respecto de los que no existen dudas respecto de su capacidad para cumplir con sus obligaciones de pago.
Con seguimiento especial /En observación	Los deudores que incurran en atrasos de hasta 90 días en los pagos de sus obligaciones, entre otros criterios, aunque son considerados capaces de hacer frente a todas sus obligaciones financieras, son sensibles a los cambios que puedan comprometer su capacidad para honrar deudas en ausencia de medidas correctivas oportunas.
Con seguimiento especial / en negociación o con acuerdos de refinanciación.	Incluye aquellos clientes que ante la imposibilidad de hacer frente al pago de sus obligaciones en las condiciones pactadas, manifiesten fehacientemente antes de los 60 días contados desde la fecha en que se verificó la mora en el pago de las obligaciones, la intención de refinanciar sus deudas. De no haberse alcanzado el acuerdo dentro de los 90 días (si estuvieran involucrados dos entidades prestamistas) o 180 días calendarios (si estuvieran involucrados más de dos entidades prestamistas) después de la fecha de incumplimiento de pago, deberá reclasificarse al deudor en la categoría inferior que corresponda, de acuerdo con los indicadores establecidos para cada nivel.
Con problemas	Deudores con dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras en forma regular que, de no ser corregidas, pueden dar como resultado pérdidas para el banco.
Con alto riesgo de insolvencia...	Deudores con una alta probabilidad de que no cumplan con sus compromisos financieros.
Irrecuperable	Préstamos clasificados como irrecuperables al momento del análisis (aunque podría existir la posibilidad de que tales préstamos se cobren en el futuro). El deudor no cumplirá sus obligaciones financieras con la entidad financiera.
Irrecuperable por disposición técnica	(a) Un deudor que no ha cumplido con sus obligaciones de pago de un préstamo durante más de 180 días calendario según el informe correspondiente suministrado por el Banco Central, incluye (1) las entidades financieras liquidadas por el Banco Central, (2) entidades residuales creadas como resultado de la privatización de entidades financieras públicas, o en procesos de privatización o disolución, (3) entidades financieras cuya licencia ha sido revocada por el Banco Central y que se encuentran sujetas a liquidación judicial o procedimientos de quiebra, y (4) fideicomisos en los que Seguro de Depósitos S.A. (SEDESA) sea beneficiario; o (b) determinada clase de prestatario extranjero (incluyendo bancos u otras entidades financieras que no están sujetos a la supervisión del Banco Central o autoridad similar del país en el cual están constituidos) que no cuentan con la calificación internacional de “investment grade” de cualquiera de las agencias calificadoras de riesgo reconocidas por el Banco Central.

Clasificación de préstamos para el consumo y la vivienda

El principal criterio utilizado en la evaluación de los préstamos en la cartera de préstamos de consumo y la vivienda es la duración de los incumplimientos. Según las Normas del Banco Central, los prestatarios de estos préstamos son clasificados del siguiente modo:

Clasificación	Criterios
Situación normal	Si todos los pagos sobre los préstamos están vigentes o en mora por menos de 31 días calendario y, en caso de adelantos en cuentas corrientes, en mora por menos de 61 días calendario.
Riesgo Bajo.....	Préstamos de clientes que registran incumplimientos ocasionales en la atención de sus obligaciones, con atrasos de más de 31 hasta 90 días
Riesgo Medio.....	Préstamos en los cuales sus obligaciones de pago están en mora por un período de más de 90 días pero menos de 180 días calendario.
Riesgo Alto	Préstamos en cuyo respecto se ha entablado una acción judicial de cobro, o préstamos que tengan obligaciones de pago en mora durante más de 180 días calendario pero menos de 365 días calendario.
Irrecuperable	Prestatarios con una alta probabilidad de que no honren sus obligaciones financieras. Préstamos en los cuales las obligaciones de pago tienen una mora superior a un año o bien el deudor es insolvente o fallido o se encuentra en proceso de liquidación.

Clasificación	Criterios
Irrecuperable por disposición técnica	Se aplican los mismos criterios que para los préstamos comerciales en estado de técnicamente irrecuperables según las Normas del Banco Central.

Previsiones mínimas por riesgos de incobrabilidad

Los bancos argentinos están obligados a establecer las siguientes provisiones de crédito mínimas en relación con la categoría de cartera de crédito:

Categoría	Con Garantías Preferidas	Sin Garantías Preferidas
“En situación normal”	1%	1%
“En observación” y “de Riesgo Bajo”	3%	5%
“Bajo negociación o con acuerdos de refinanciación”	6%	12%
“Con Problemas” y “de Riesgo Medio”	12%	25%
“Con alto riesgo de insolvencia” y “de Riesgo Alto”	25%	50%
“Irrecuperable”	50%	100%
“Irrecuperable por disposición técnica”	100%	100%

La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias podría exigir provisiones adicionales si determina que el nivel actual es inadecuado.

Las financiaciones totalmente cubiertas con garantías preferidas “A” estarán sujetas a la constitución de la provisión establecida con carácter general para la cartera normal

Las entidades financieras tienen derecho a registrar provisiones por incobrabilidad por montos superiores a los exigidos por las Normas del Banco Central. En tales casos y sin perjuicio de la existencia de determinadas excepciones, el hecho de registrar una provisión mayor para un crédito comercial, en la medida en que el monto de la provisión registrada quede comprendido en la siguiente categoría de la cartera de créditos establecida por los Normas del Banco Central, tendrá como resultado automático que el deudor quede recategorizado consecuentemente.

Frecuencia mínima para revisión de clasificación

Las entidades financieras deberán desarrollar procedimientos de análisis de cartera que aseguren un análisis adecuado de la situación económica y financiera del deudor y una revisión periódica de su situación en cuanto a las condiciones objetivas y subjetivas de todos los riesgos asumidos. Los procedimientos establecidos se deberán detallar en un manual denominado “Manual de Procedimientos de Clasificación y Provisión” que deberá estar a disposición permanente de la Superintendencia de Entidades Bancarias y Cambiarias para su revisión. El análisis de clasificación debe estar debidamente documentado. En caso que la responsabilidad de la tarea de clasificación la realice el sector encargado del otorgamiento de créditos y garantías deberá contar con una oficina independiente que tendrá como función efectuar la siguiente revisión de la calificación (i) clientes cuyo endeudamiento total (en pesos y en moneda extranjera) supere el 1% de la responsabilidad patrimonial computable de la entidad correspondiente al mes anterior al de la clasificación o el equivalente a Ps. 19,8 millones, de ambos el menor; y (ii) alcanzar como mínimo el 20% de la cartera activa total, que se completará, en caso de corresponder, incorporando a clientes cuyo endeudamiento total sea inferior a aquellos márgenes que se describen en el punto (i) anterior.

En el caso de préstamos comerciales, las normas aplicables también requieren una frecuencia mínima de revisión. Dicha revisión deberá tener lugar (i) trimestralmente para clientes cuyas financiaciones sean equivalentes al 5,0% o más de la responsabilidad patrimonial computable del mes anterior a la finalización de dicho período y (ii) semestralmente, respecto de clientes cuyas financiaciones sumen (x) en algún momento entre el 1% -o el equivalente a Ps. 19,8 millones, de ambos el menor e (y) menos del 5,0% de la responsabilidad patrimonial computable de la entidad financiera respecto del mes anterior. Al cierre del primer semestre calendario, la revisión íntegra conforme al punto (i) y (ii) deberá haber alcanzado no menos del 50% del importe total de la cartera comercial comprendida, y de resultar inferior, será completada incorporando clientes (en orden descendente) cuyo endeudamiento total resulte inferior a los límites que se describen en (ii)(x) de la oración anterior. En el curso del ejercicio económico, en los demás casos, por lo que a su finalización la revisión deberá haber alcanzado a la totalidad de la cartera comercial comprendida

Asimismo, las entidades financieras deben revisar la clasificación asignada a un deudor en ciertos casos, tales

como cuando otra entidad financiera reduce la clasificación del deudor en la “Central de Deudores del Sistema Financiero” cuyas acreencias representen como mínimo el 10% del total informado en el sistema financiero. Solamente se permite una discrepancia de más de un nivel en relación a la información presentada por las entidades financieras a la Central de Deudores del Sistema Financiero y la clasificación más baja otorgada por al menos otras dos entidades y el total de acreencias de dichas entidades totalicen 40% o más del total informado; si existiera una discrepancia superior, la entidad financiera deberá reclasificar al deudor.

Previsiones por riesgo de incobrabilidad

La previsión por riesgo de incobrabilidad es mantenida de conformidad con las normas aplicables del Banco Central. Los incrementos en la previsión se basan en el nivel de crecimiento de la cartera de préstamos así como en el deterioro de la calidad de préstamos existentes, mientras que las disminuciones en la previsión se basan en reglamentaciones que requieren que los préstamos en situación irregular clasificados como “irrecuperables” sean pasados a cuentas de orden después de determinado período de tiempo y en las decisiones de la administración de pasar a pérdida aquellos préstamos en situación irregular que evidencien una muy baja probabilidad de recuperación.

Privilegios de los depositantes

Conforme al artículo 49 de la Ley de Entidades Financieras, en el supuesto de la liquidación judicial o quiebra de un banco, todos los depositantes, independientemente de su clase o del monto o moneda de sus depósitos, gozarán de privilegio respecto de todos los demás acreedores (como accionistas del banco), con la excepción de ciertos créditos emergentes de relaciones laborales (artículo 53, párrafos “a” y “b”) y de aquellos acreedores con prenda o hipoteca, en el siguiente orden de prioridad: (a) depósitos de hasta Ps. 450.000 por persona (incluyendo todos los montos que tal persona depositó en una entidad financiera), o su equivalente en moneda extranjera, (b) todos los depósitos de un monto superior Ps. 450.000, o su equivalente en moneda extranjera, y (c) los pasivos originados en líneas comerciales otorgadas a la entidad financiera y que afectan directamente al comercio internacional. Asimismo, según el artículo 53 de la Ley de Entidades Financieras, y sus modificatorias, los créditos del Banco Central tienen prioridad absoluta sobre todos los demás créditos, con la excepción de créditos prendarios e hipotecarios, ciertos acreedores laborales, los depósitos de las personas humanas y/o jurídicas conforme al artículo 49, párrafo e), puntos i) y ii), deuda otorgada conforme al artículo 17, párrafos (b), (c) y (f) de la Carta Orgánica del Banco Central (incluso descuentos otorgados por entidades financieras debido a un falta de liquidez provisoria, anticipos a entidad financieras con garantía, cesión de derechos, prendas o cesión especial de ciertos activos) y la deuda otorgada por el Fondo de Liquidez Bancaria respaldada por una prenda o hipoteca.

La modificación del artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras por Ley N° 25.780 dispone que si un banco se encuentra en una situación en la que el Banco Central puede revocar su autorización para operar y queda sujeto a disolución o liquidación por resolución judicial, el Directorio del Banco Central puede llevar a cabo ciertas acciones. Entre ellas, en el caso de excluir la transferencia de activos y pasivos a fideicomisos financieros u otras entidades financieras, el Banco Central puede excluir total o parcialmente las obligaciones mencionadas en el artículo 49, párrafo e) así como la deuda definida en el artículo 53, dando efecto al orden de prioridad entre acreedores. Respecto de la exclusión parcial, el orden de prioridad del punto e) del artículo 49 debe seguirse sin otorgar un tratamiento diferente a las obligaciones del mismo grado.

Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos Bancarios

La Ley N° 24.485, aprobada el 12 de abril de 1995 y sus modificatorias, creó el Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos o “SSGS” que tiene el carácter de obligatorio para los depósitos bancarios, y delegó en el Banco Central la responsabilidad de organizar e implementar el sistema. El sistema constituye una protección complementaria al privilegio otorgado a los depositantes por el artículo 49 de la Ley de Entidades Financieras, según se menciona anteriormente.

El Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos ha sido implementado mediante la creación de un Fondo de Garantía de los Depósitos o “FGD” administrado por Seguro de Depósitos Sociedad Anónima o SEDESA. De acuerdo con el Decreto N° 1292/96, los accionistas de SEDESA son el gobierno nacional, a través del Banco Central y un fideicomiso establecido por las entidades financieras participantes. El SSGD es financiado a través de los aportes regulares y adicionales que debe efectuar mensualmente las entidades financieras al FGD según lo determinado por las Normas del Banco Central. Actualmente el aporte normal es equivalente al 0,015 % del promedio mensual de saldos diarios de las partidas alcanzada (depósitos en caja de ahorro, cuenta corriente, plazo fijo, etc.), registrado en el segundo mes inmediato anterior.

El SSGD cubre depósitos efectuados por personas humanas y jurídicas en moneda argentina o extranjera y mantenidos en cuentas con las entidades financieras participantes, incluyendo cuentas corrientes, cajas de ahorro y depósitos a plazo fijo hasta el monto de Ps. 450.000, desde el 1° de mayo de 2016. De acuerdo con la Comunicación “A” 6654 del 28 de febrero de 2019 y con vigencia a partir del 1° de marzo de 2019, el BCRA incrementó el tope de cobertura del seguro de garantía de los depósitos a miles de pesos 1.000.

El efectivo pago de esta garantía será realizado dentro de los 30 días hábiles después de la revocación de la licencia de la entidad financiera en la cual se mantengan dichos fondos y dichos pagos están sujetos a los derechos de prioridad del depositante, descriptos precedentemente.

Considerando las circunstancias que afectan el sistema financiero, el Decreto N° 214/2002 estableció que SEDESA puede emitir títulos valores nominativos con el fin de ofrecerlos a los depositantes en pago de la garantía en el supuesto que no tuviera suficientes fondos disponibles.

El SSGD no cubre: (i) los depósitos de entidades financieras en otros intermediarios, incluidos los certificados de plazo fijo adquiridos por negociación secundaria, (ii) depósitos efectuados por personas vinculadas directa o indirectamente a la entidad, (iii) depósitos a plazo de títulos valores, aceptaciones o garantías, (iv) depósitos a plazo fijo transferibles cuya titularidad haya sido adquirida por vía de endoso, y (v) Los depósitos a la vista en los que se convengan tasas de interés superiores a las de referencia, y los depósitos e inversiones a plazo que superen 1,3 veces esa tasa o la tasa de referencia más 5 puntos porcentuales –la mayor de ambas–, (vi) crédito inmovilizado de depósitos y operaciones excluidas.

Las entidades financieras deberán depositar puntualmente sus aportes como condición para operar regularmente. El Banco Central puede requerir que las entidades financieras anticipen el pago de hasta el equivalente a dos años de aportes mensuales y debiten los aportes vencidos de los fondos de las entidades financieras depositados en el Banco Central. El Banco Central puede asimismo exigir aportes adicionales de parte de ciertas entidades, dependiendo de su evaluación de la situación patrimonial de dichas entidades.

Cuando los aportes al FGD llegan a Ps. 2.000 millones o el 5% del total de depósitos del sistema, lo que sea mayor, el Banco Central podrá suspender o reducir los aportes mensuales, y restablecerlos cuando los aportes posteriormente caigan por debajo de dicho nivel.

Mercado de capitales

Los bancos comerciales están autorizados a suscribir y vender acciones y títulos de deuda. En la actualidad, no existen limitaciones legales con respecto al monto de los títulos que un banco puede comprometerse a suscribir. Sin embargo, según las regulaciones del Banco Central, la suscripción de títulos de deuda por un banco debe ser tratada como “asistencia financiera” y, por lo tanto, hasta que los títulos sean vendidos a terceros, tal suscripción estará sujeta a limitaciones.

La Ley N° 26.831, Ley de Mercado de Capitales, introdujo cambios sustanciales a las regulaciones que rigen los mercados, bolsas de valores y los diversos agentes que operan en el mercado de capitales, además de ciertas modificaciones a las facultades de la CNV. El 9 de septiembre de 2013, la CNV publicó las Normas de la CNV complementando la Ley del Mercado de Capitales. Las Normas de la CNV han estado vigentes desde el 18 de septiembre de 2013.

Una de las modificaciones más significativas introducida por la Ley del Mercado de Capitales y las Normas de la CNV es que los agentes y mercados deben cumplir con los requisitos de la CNV a los fines de solicitar una autorización para operar, así como requisitos de registro. Asimismo dispone que cada categoría de agente debe cumplir requisitos de patrimonio neto mínimo y de liquidez.

Asimismo, según la Ley del Mercado de Capitales, la autorregulación de los mercados fue eliminada y la autorización, supervisión, control así como las facultades disciplinarias y regulatorias son conferidas a la CNV respecto de todos los participantes del mercado.

Entidades financieras con dificultades económicas

La Ley de Entidades Financieras dispone que toda entidad financiera, incluyendo un banco comercial, que opere registrando reiterados incumplimientos a los distintos límites o relaciones técnicas establecidas, según el criterio

del Banco Central adoptado por la mayoría de los miembros del directorio, con su solvencia o liquidez afectada, o en cualquiera de las otras circunstancias enumeradas en el Artículo 44 de la Ley de Entidades Financieras, debe (ante una solicitud del Banco Central y para evitar la revocación de su licencia) preparar un plan de regularización y saneamiento. El plan debe ser presentado al Banco Central en una fecha específica, no más allá de los 30 días calendario posteriores a la fecha en la cual el Banco Central hubiera formulado una solicitud a tal efecto. Si la entidad no presentara un plan de regularización y saneamiento, no obtuviera la aprobación reglamentaria de éste, o no cumpliera con tal plan, el Banco Central estará facultado para revocar la licencia de la entidad para operar como tal.

Además, la carta orgánica del Banco Central autoriza a la Superintendencia de Entidades Financieras, con la previa autorización del Presidente del Banco Central, a disponer la suspensión transitoria, total o parcial, de las operaciones de una entidad financiera por un plazo máximo de 30 días, si su liquidez o solvencia se vieran afectadas de modo adverso. Dicho plazo se puede renovar por 90 días adicionales como máximo, con la aprobación del Directorio del Banco Central. Durante el plazo de la suspensión no se podrán trabar medidas cautelares ni realizar actos de ejecución forzada contra la entidad. Asimismo serán nulos los compromisos que aumenten los pasivos de las entidades y se suspenderá su exigibilidad así como el devengamiento de intereses.

Si, según el criterio del Banco Central una entidad financiera se encuentra en una situación que, según la Ley de Entidades Financieras, autorizaría al Banco Central a revocar su licencia para operar como tal, el Banco Central puede, antes de considerar tal revocación, disponer un plan de regularización y saneamiento que puede consistir en una serie de medidas, entre otras:

- adopción de medidas para capitalizar o aumentar el capital de la entidad financiera;
- revocación de la aprobación otorgada a los accionistas de la entidad financiera para mantener una participación en ésta;
- reestructuración o transferencia de activos y pasivos;
- otorgamiento de exenciones temporarias para cumplir con reglamentaciones técnicas o pagar cargos y multas que surjan de dicho cumplimiento defectuoso o
- designación de un delegado o interventor que eventualmente puede reemplazar al directorio de la entidad financiera.

Revocación de la licencia para operar como entidad financiera

El Banco Central podrá revocar la licencia para operar como entidad financiera si el plan de regularización y saneamiento hubiera fallado o no se lo considerara viable, o se hubiera incurrido en violaciones de las leyes y reglamentaciones locales o si se hubiera afectado la solvencia o liquidez de la entidad financiera, o si se hubieran producido cambios significativos en la situación de la entidad desde que se otorgó la autorización original, o si las autoridades legales o societarias de la entidad financiera hubieran adoptado una decisión con respecto a su disolución, entre otras circunstancias establecidas en la Ley de Entidades Financieras. Asimismo, según la Comunicación “A” 6094, sanciones impuestas por el Banco Central, la UIF, la CNV y/o la SSN a entidades financieras y/o sus autoridades podrían resultar en la revocación de sus licencias para operar como entidad financiera. Tal revocación podrá tener lugar cuando, en opinión del Directorio de Banco Central, se hubiera producido un cambio sustancial en las condiciones consideradas necesarias para mantener dicha licencia, incluidas aquellas relacionadas con la idoneidad, experiencia, probidad e integridad moral de (i) los miembros del directorio de una entidad financiera (directores, consejeros o autoridades equivalentes), (ii) sus accionistas, (iii) los integrantes del consejo de vigilancia, y (iv) otros, como sus gerentes. A tales efectos, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias también tomará en consideración las informaciones y/o sanciones comunicadas por entes de supervisión del exterior con facultades equivalentes. Para la ponderación de la significancia de las sanciones, se considerarán el tipo, motivo y monto de la sanción aplicada, el grado de participación en los hechos, la posible alteración del orden económico, la existencia de perjuicios ocasionados a terceros, el beneficio económico generado para el sancionado, su volumen operativo, su responsabilidad patrimonial y el cargo o función ejercida por las personas humanas que resulten involucradas.

Una vez que se haya revocado la licencia para operar como entidad financiera, ésta deberá ser liquidada.

Liquidación de entidades financieras

Según lo estipulado por la Ley de Entidades Financieras, el Banco Central debe notificar la decisión de revocación, a un juez competente, que deberá determinar quién liquidará la entidad: las autoridades societarias (liquidación extrajudicial) o un liquidador independiente designado por el juez a tal fin (liquidación judicial). La decisión del juez deberá estar basada en la existencia o no de garantías suficientes en cuanto a que las autoridades societarias son capaces de llevar a cabo tal liquidación en forma adecuada.

Quiebra de entidades financieras

Conforme a la Ley de Entidades Financieras, las entidades financieras no pueden presentar sus propios pedidos de quiebra. Además, la quiebra no debe declararse hasta tanto la licencia para operar como entidad financiera haya sido revocada.

Una vez que la licencia para operar como entidad financiera haya sido revocada, el juzgado comercial competente puede declarar en quiebra a la ex-entidad financiera o el Banco Central o cualquier acreedor del banco podrá presentar un pedido de quiebra después de que haya transcurrido un período de 60 días calendario desde que se revocó la licencia.

Una vez declarada la quiebra de una entidad financiera, las disposiciones de la Ley N° 24.522 de Concursos y Quiebras y la Ley de Entidades Financieras serán aplicables, quedando establecido, sin embargo, que en ciertos casos, las disposiciones específicas de la Ley de Entidades Financieras reemplazarán disposiciones de la Ley N° 24.522 de Concursos y Quiebras (por ejemplo, en cuanto a los privilegios de los depositantes).

Fusión, consolidación y transferencia de fondo de comercio

La fusión, consolidación y transferencia de fondo de comercio podrá ser dispuesta entre entidades del mismo o de diferente tipo y estará sujeta a la previa aprobación del Banco Central. La nueva entidad deberá presentar un perfil de estructura económico-financiera que respalde el proyecto a fin de obtener autorización del Banco Central.

Unidad de Reestructuración del Sistema Financiero

La Unidad de Reestructuración del Sistema Financiero fue creada para supervisar la instrumentación del enfoque estratégico de aquellos bancos que cuentan con asistencia brindada por el Banco Central. Esta unidad está encargada de reprogramar vencimientos, determinar estrategias de reestructuración y planes de acción, aprobar planes de transformación, y acelerar la amortización de los redescuentos otorgados por el Banco Central.

DATOS ESTADÍSTICOS Y PROGRAMA PREVISTO PARA LA OFERTA

A) DATOS ESTADÍSTICOS

Con independencia de lo dispuesto seguidamente en la sección “*Resumen de Términos y Condiciones*”, esta información, de ser aplicable a emisiones de Obligaciones Negociables, será suministrada en cada Suplemento de Precio aplicable a cada Clase y/o Serie.

B) MÉTODO Y PROGRAMA PREVISTOS PARA LA OFERTA

Con independencia de lo dispuesto seguidamente en la sección “*Resumen de Términos y Condiciones*”, esta información, de ser aplicable a emisiones de Obligaciones Negociables, será suministrada en cada Suplemento de Precio aplicable a cada Clase y/o Serie.

C) RESUMEN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

El siguiente resumen no pretende ser completo y está condicionado en su totalidad por la información detallada que se incluye en otras secciones del Prospecto, en particular la sección “*De la Oferta y del Listado para la Negociación*” y la que se incluirá en el Suplemento de Precio aplicable a cada Clase y/o Serie.

Emisor	Banco Patagonia S.A.
Programa	Programa global de emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones).
Títulos	Los Títulos a emitirse bajo el Programa constituirán "obligaciones negociables", conforme a la Ley de Obligaciones Negociables, gozando de los beneficios que allí se les otorgan y estando sujetas a los requisitos contemplados en dicha ley.
Organizadores	Banco Patagonia S.A. y/o aquél o aquéllos que sean designados en el Suplemento de Precio aplicable de cada Clase y/o Serie.
Colocadores	Banco Patagonia S.A. y/o aquél o aquéllos que sean designados en el Suplemento de Precio aplicable de cada Clase y/o Serie.
Agente de Registro	Caja de Valores S.A. u otra entidad según se designe en el Suplemento de Precio aplicable (el “Agente de Registro”).
Agente de Pago	Caja de Valores S.A. u otra entidad según se designe en el Suplemento de Precio aplicable (el “Agente de Pago”).
Fiduciario	Aquél que pueda llegar a designarse en el Suplemento de Precio aplicable para cualquiera de las Series, y que tendrá las facultades y obligaciones que se estipulen en el contrato de fideicomiso correspondiente.
Monto	Hasta US\$ 500.000.000 (dólares estadounidenses quinientos millones) en circulación en cualquier momento (o su equivalente en pesos o en otras monedas).
Clases y/o Series	Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas en diversas Clases, con derechos diferentes entre las Obligaciones Negociables de distintas Clases, pero las Obligaciones Negociables de una misma Clase siempre tendrán los mismos derechos entre sí. Asimismo, las Obligaciones Negociables de una Clase podrán ser emitidas en diversas Series, con los mismos derechos que las demás Obligaciones Negociables de la misma Clase. Sin perjuicio de ello, las Obligaciones Negociables de distintas Series pueden tener diferentes fechas de emisión, fecha de vencimiento, tasas de interés o precios de emisión.

Forma	Las Obligaciones Negociables de cada Clase y/o Serie podrán estar representadas por títulos nominativos no endosables cartulares o ser emitidas en forma escritural, de acuerdo al artículo 31 de la Ley de Obligaciones Negociables. De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 24.587 las sociedades argentinas no pueden emitir títulos valores privados al portador. Conforme a ello, y en la medida en que dicha ley esté vigente, el Banco sólo emitirá bajo el Programa, Obligaciones Negociables nominativas no endosables o escriturales. Las Obligaciones Negociables representadas en títulos globales o emitidas en forma escritural, podrán ser depositadas y/o registradas en sistemas de depósito colectivo aceptados por la CNV. Véase la sección “ <i>De la Oferta y del Listado para la Negociación – Forma</i> ”.
Moneda o unidades de moneda	Los Títulos podrán estar denominados en pesos o la moneda de curso legal que la reemplace, dólares estadounidenses, o cualquier otra moneda, incluyendo el euro, según se prevea en el Suplemento de Precio respectivo, sujeto al cumplimiento de todos los requisitos legales y regulatorios aplicables.
Duración del Programa	Cinco años a computar a partir de la fecha de vencimiento del plazo original del Programa, terminando por lo tanto el 25 de octubre de 2022.
Denominación	Las Obligaciones Negociables de cada Clase y/o Serie serán emitidas en las denominaciones que se determinen en el Suplemento de Precio aplicable, pudiendo tener el valor nominal unitario mínimo que permitan las normas.
Rango	<p>Las Obligaciones Negociables podrán ser obligaciones directas, no subordinadas del Emisor y calificarán en todo momento y en todos los aspectos <i>pari passu</i>, sin ninguna preferencia entre ellas, con relación a todas las demás deudas no subordinadas del Emisor, presentes o futuras, salvo aquéllas que gozan de privilegio en virtud de disposiciones legales o contractuales. Las Obligaciones Negociables podrán ser subordinadas o estar garantizadas o avaladas en cualquiera de las formas permitidas por las disposiciones aplicables del Banco Central, y según se especifique para cada Clase y/o Serie en el Suplemento de Precio.</p> <p>En virtud de la Ley de Entidades Financieras y sus modificatorias, los depositantes del Banco y el Banco Central gozan de ciertos privilegios para el cobro de sus acreencias, en la medida descripta en la sección “<i>INFORMACIÓN DEL EMISOR - Marco Regulatorio del Sistema Financiero Argentino - Privilegios de los depositantes</i>”. Las Obligaciones Negociables se encuentran excluidas del sistema de seguro de garantía de los depósitos establecido bajo la Ley N° 24.485 y del régimen exclusivo y excluyente de privilegios de los depósitos previsto en el inciso e) del artículo 49 y en el inciso c) del artículo 53 de la Ley de Entidades Financieras y sus modificatorias. Véase sección “<i>INFORMACIÓN DEL EMISOR - Marco Regulatorio del Sistema Financiero Argentino - Sistema obligatorio de seguro de depósitos</i>”.</p>
Contrato de fideicomiso	No existirá contrato de fideicomiso correspondiente al Programa, pudiendo preverse un contrato de fideicomiso en el Suplemento de Precio de una Serie.
Precio de emisión	Las Obligaciones Negociables de cualquier Clase y/o Serie podrán ser emitidas a la par o con un descuento o con una prima sobre el valor par, en la medida que sea permitido por la ley aplicable y según conste en el Suplemento de Precio aplicable.
Vencimientos	Las Obligaciones Negociables tendrán el plazo mínimo y máximo que se determine en el Suplemento de Precio correspondiente, sujeto a cualquier requisito legal o regulatorio aplicable.

Intereses

Las Obligaciones Negociables podrán (i) devengar intereses a tasa fija o flotante; (ii) ser emitidas con un descuento de emisión; (iii) devengar intereses a una tasa ajustable; (iv) devengar intereses a una tasa ajustable en función de la evolución de activos financieros, acciones, futuros, opciones de cualquier tipo y naturaleza u otros activos, inversiones e índices, sujeto a lo dispuesto por la ley aplicable; (v) devengar intereses adicionales consistentes en una participación en las ganancias del Emisor o en la apreciación o incremento de valor de activos pertenecientes al Emisor, según se especifique en el Suplemento de Precio aplicable, o (vi) devengar intereses de otra manera, conforme lo establezca el Suplemento de Precio aplicable.

En todos los casos, las Obligaciones Negociables devengarán los intereses desde la fecha de emisión o la fecha de comienzo de pago de intereses, según lo determine el Suplemento de Precio aplicable y dicho interés será pagadero en cada fecha de pago estipulada y en la fecha de vencimiento, y se calcularán y computarán de la manera que lo establezca dicho Suplemento de Precio.

Compra o adquisición por el Emisor

Las Obligaciones Negociables sólo podrán ser compradas o adquiridas por el Emisor de conformidad con lo dispuesto en el Suplemento de Precio aplicable y lo previsto en este Prospecto, sujeto al cumplimiento de las normas aplicables y aprobaciones correspondientes. Véase la sección *“De la Oferta y del Listado para la Negociación – Compra o adquisición de Obligaciones Negociables por parte del Emisor”*.

Rescate

Las Obligaciones Negociables sólo serán rescatables de conformidad con lo dispuesto en este Prospecto y en el Suplemento de Precio aplicable, sujeto al cumplimiento de las normas aplicables y aprobaciones correspondientes. Véase la sección *“De la Oferta y del Listado para la Negociación – Rescate”*.

Régimen impositivo

Los pagos con respecto a los Títulos se efectuarán sin retención o deducción con respecto a cualquier impuesto, derecho, gravamen o cargo gubernamental presente o futuro vigente en la Argentina, sujeto a ciertas excepciones previstas en este Prospecto y otras que puedan preverse en el Suplemento de Precio respectivo, como se estipula en la sección *“De la Oferta y del Listado para la Negociación – Montos Adicionales”*. Véase asimismo la sección *“Información Adicional - Carga Tributaria”*.

Obligaciones del Banco

A menos que se especifique diferente en los Suplementos de Precio correspondientes, el Emisor se obliga a cumplir las obligaciones que se detallan en la sección *“De la Oferta y del Listado para la Negociación – Obligaciones del Banco”*.

Supuestos de Incumplimiento

Si se produce y subsiste uno o más Supuestos de Incumplimiento, como dicho término se define en la sección *“De la Oferta y del Listado para la Negociación – Supuestos de Incumplimiento”*, los tenedores que representen como mínimo el porcentaje establecido en dicha sección podrán declarar la caducidad de los plazos para el pago del capital, intereses, Montos Adicionales (como se define más adelante) y/o cualquier otro monto adeudado de los Títulos de dicha Clase y/o Serie.

Ley aplicable

La Ley de Obligaciones Negociables regirá los requisitos necesarios para que las Obligaciones Negociables califiquen como tales. Asimismo, la Ley General de Sociedades y sus modificatorias con la Ley de Obligaciones Negociables y la Ley de Entidades Financieras y demás normas aplicables argentinas regirán la capacidad del Emisor para emitir las Obligaciones Negociables, y la autorización de creación y de oferta pública del Programa en la Argentina por la CNV. Todo otro aspecto vinculado con las

Obligaciones Negociables podrá registrarse por, e interpretarse de conformidad con, las leyes de otras jurisdicciones, según se indique en el Suplemento de Precio aplicable.

Jurisdicción y arbitraje

Todo juicio, acción o procedimiento que se suscite entre el Emisor, los tenedores, cualquier persona que intervenga en cualquier carácter en cualquiera de las Clases y/o Series que se emitan bajo el Programa y cualquier tercero con relación a lo previsto en este Prospecto y/o cualquier Suplemento de Precio aplicable, se resolverá en forma inapelable por el Tribunal de Arbitraje General de la BCBA (en virtud de la delegación de facultades otorgadas por BYMA a la BCBA en materia de constitución de tribunales arbitrales, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 18.629 de la CNV), y en consecuencia los tenedores renuncian a su derecho a apelar dicho laudo arbitral, salvo lo dispuesto, en caso de resultar aplicable, en el artículo 46 de la Ley de Mercado de Capitales relativo al derecho de los tenedores de optar por acudir a los tribunales judiciales competentes, y todo ello sin perjuicio del derecho de los tenedores de reclamar el cobro judicial de cualquier suma adeudada por el Emisor bajo las Obligaciones Negociables, acudiendo a los tribunales judiciales competentes.

Listado y negociación

El Banco podrá solicitar la autorización de listado y de negociación de las Obligaciones Negociables de una Clase y/o Serie en una o más bolsas y/o mercados bursátiles y/o extrabursátiles del país y/o del exterior, tales como listar en el BYMA a través de la BCBA en virtud del ejercicio de la facultad delegada por la primera a la segunda, conforme lo dispuesto por la Resolución N° 18.629 de la CNV, y negociar en el MAE, según se especifique en el Suplemento de Precio aplicable.

Calificación

El Programa no cuenta con calificación de riesgo. Las calificaciones de riesgo serán solicitadas al momento de la emisión de cada Serie según se determine en el Suplemento de Precio respectivo, y conforme a lo que requieran las leyes y reglamentaciones aplicables.

Destino de los fondos

Los fondos netos de la emisión y venta de los Títulos podrán ser destinados a uno o más de los destinos indicados en la sección *“DE LA OFERTA Y EL LISTADO PARA LA NEGOCIACIÓN - Destino de los Fondos”*.

Acción ejecutiva

En el supuesto de incumplimiento por parte del Banco en el pago del capital, prima, Montos Adicionales (si hubiera) o intereses a su vencimiento, cualquier tenedor de un Título podrá iniciar una acción ejecutiva directamente contra el Banco ante tribunales competentes de la Argentina para reclamar el pago de los montos adeudados por el Emisor, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Obligaciones Negociables.

FACTORES DE RIESGO

Invertir en Obligaciones Negociables del Banco implica riesgos. El inversor deberá considerar cuidadosamente los riesgos descriptos a continuación junto con la demás información incluida en el Prospecto y en el Suplemento de Precio pertinente antes de decidir invertir en Obligaciones Negociables. Si alguno de los siguientes riesgos efectivamente ocurriera, podría afectar adversa y materialmente el negocio del Banco, su situación financiera y los resultados de sus operaciones. En ese caso, el precio de mercado de las Obligaciones Negociables podría disminuir y el inversor podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Riesgos relacionados con Argentina

Consideraciones generales.

La mayor parte de las operaciones, bienes y clientes de Patagonia se encuentran ubicados en Argentina, por lo que la calidad de sus activos, la situación patrimonial y financiera y los resultados de las operaciones de Patagonia dependen de las condiciones macroeconómicas, regulatorias, sociales y políticas oportunamente prevalecientes en Argentina, incluidas las tasas de crecimiento, índices de inflación, tipos de cambio, impuestos, controles cambiarios, modificaciones en las tasas de interés, cambios en las políticas de estado, inestabilidad social y otros acontecimientos políticos, económicos o internacionales que tengan lugar en Argentina o que la afecten de alguna manera.

La inestabilidad económica y política de Argentina puede afectar en forma sustancial y adversa el negocio, los resultados de las operaciones y la situación patrimonial y financiera del Banco.

La economía argentina ha experimentado niveles de volatilidad considerables en las últimas décadas, con períodos de bajo o nulo crecimiento, niveles de inflación altos y variables y devaluación de la moneda. En consecuencia, el negocio y las operaciones del Banco han resultado afectadas y podrían continuar resultando afectadas en distinta medida por acontecimientos económicos y políticos y otros hechos significativos que afectan la economía argentina, tales como: inflación, controles de precios, controles cambiarios, fluctuaciones del tipo de cambio y las tasas de interés, políticas públicas de gasto e inversión, aumentos de impuestos nacionales, provinciales o municipales y otras iniciativas regulatorias que aumentan la intervención del gobierno nacional en la actividad económica, y disturbios civiles y problemas de inseguridad local. Los inversores deberían realizar su propia investigación sobre la economía y las condiciones imperantes en Argentina antes de realizar una inversión en el Banco.

Durante 2001 y 2002, Argentina atravesó un período de grave crisis política, económica y social. Entre otras consecuencias, la crisis resultó en el incumplimiento por Argentina de sus obligaciones de deuda externa y la introducción de medidas de emergencia y numerosos cambios en las políticas económicas que afectaron los servicios públicos, las entidades financieras y muchos otros sectores de la economía. Argentina sufrió una importante devaluación del peso en términos reales, lo que a su vez originó que numerosos deudores del sector privado con exposición a la moneda extranjera dejaran de pagar sus deudas vigentes. A partir de esta crisis, y según las nuevas cifras publicadas por el INDEC desde la declaración del estado de emergencia administrativa en enero de 2016, el PBI de Argentina creció considerablemente en términos reales, a una tasa del 8,9% en 2005, del 8,1% en 2006, 9,0% en 2007 y 4,1% en 2008. Durante 2009, no obstante, la economía argentina sufrió una recesión atribuible a factores locales y externos, incluso debido a una gran sequía que afectó las actividades del sector agrícola, y a los efectos de la crisis económica global. El crecimiento del PBI real se recuperó en 2010 y 2011, registrando un aumento del 10,4% y 6,2%, respectivamente. Entre 2012 y 2015, la economía argentina fluctuó entre períodos de contracción y expansión: luego de una contracción del 1,0% en 2012, el PBI real creció un 2,4% en 2013, luego se contrajo un 2,5% en 2014, luego creció un 2,5% en 2015 y en el año 2016 se contrajo un 2,3%, aumentando luego un 2,9% en 2017. A su vez, el primer, segundo y tercer trimestre de 2018, arrojaron una variación anual del PBI del 3,9% -4,0% y -3,5% respectivamente.

Argentina ha enfrentado incrementos de precios desde 2007, evidenciados, entre otros indicadores, por los precios significativamente más caros de los combustibles, energía y alimentos. Según datos publicados por el INDEC (que permanecen sujetos a revisión por parte del INDEC), desde 2010 al 31 de octubre de 2015, el IPC aumentó significativamente. En junio de 2016, el INDEC retomó la publicación de los índices de precios utilizando su nueva metodología para calcular el IPC, informando continuos aumentos mensuales en el IPC. Véase “—Si no se reducen los actuales niveles de inflación, la economía argentina, la situación patrimonial y financiera y el negocio del Banco podrían verse seriamente afectados”.

Desde 2007, el INDEC experimentó reformas institucionales y metodológicas que dieron lugar a controversias respecto de la credibilidad de la información que publicaba, incluidos los datos de la inflación, PBI, desempleo y pobreza. Informes publicados por el Fondo Monetario Internacional (el “FMI”), utilizando medidas alternativas para estimar la evolución de precios, incluso datos obtenidos de fuentes privadas, mostraban variaciones considerablemente superiores a las publicadas por el INDEC entre 2007 y 2015. Luego de asumir el cargo en diciembre de 2015, la nueva administración del Presidente Macri declaró el estado de emergencia administrativa en el sistema estadístico nacional y el INDEC hasta el 31 de diciembre de 2016, en base a su determinación de que el INDEC no había podido elaborar una información estadística confiable. El INDEC suspendió la publicación de ciertos datos estadísticos hasta la reorganización de su estructura técnica y administrativa para recuperar su capacidad de producir información estadística suficiente y confiable. Durante los primeros seis meses de este período de reorganización, el INDEC publicó cifras oficiales del IPC emitidas por la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de San Luis como referencia. El INDEC ha publicado recientemente ciertas cifras actualizadas sobre comercio exterior, balanza de pagos y PBI por los años 2011 a 2015 y el IPC por cada mes a partir de mayo de 2016. Las reformas del gobierno nacional procuran publicar datos oficiales que cumplan con normas internacionales. A pesar del progreso logrado por el INDEC, que fue reconocido por el FMI el 9 de noviembre de 2016, cuando levantó su declaración de censura de 2013 contra Argentina, la vigencia a largo plazo de estas reformas depende de cierta implementación y de la oportuna recolección de datos, lo cual puede estar fuera del control del gobierno nacional. Si no pudieran continuar implementándose estas reformas con éxito, la economía argentina podría verse seriamente afectada, en particular minando la confianza del consumidor y los inversores.

Desde que asumió sus funciones el 10 de diciembre de 2015, la administración Macri ha anunciado varias reformas económicas y políticas, entre ellas:

- *Reformas en el INDEC.* Luego de las elecciones presidenciales de 2015, la administración Macri designó al Sr. Jorge Todesca al frente del INDEC, quien anteriormente se desempeñaba como director de una consultora privada. El 8 de enero de 2016, en base a su determinación de que el INDEC no había podido elaborar información estadística confiable, en particular respecto de datos sobre IPC, PBI, pobreza y comercio exterior, la nueva administración declaró un estado de emergencia administrativa en el sistema estadístico nacional y en el INDEC hasta el 31 de diciembre de 2016, que no se renovó. Como consecuencia de la declaración de emergencia, el INDEC dejó de publicar de forma preventiva ciertos datos estadísticos hasta el 15 de junio de 2016, fecha en la cual reanudó la publicación de datos estadísticos, entre los cuales se incluyeron cálculos del PBI, la inflación, la pobreza, el comercio exterior y las estadísticas de la balanza de pagos, entre otros. En consecuencia, el 9 de noviembre de 2016, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (“FMI”) levantó su censura sobre Argentina, señalando que Argentina había reanudado la publicación de datos de manera consistente con las obligaciones contraídas en virtud del Convenio Constitutivo del FMI.
- *Reformas en las operaciones cambiarias.* A partir del 9 de agosto de 2016, el Banco Central eliminó sustancialmente la totalidad de las restricciones de cambio vigentes en Argentina, incluso ciertos controles de moneda. Entre las principales medidas adoptadas a la fecha de este Prospecto se encuentran (i) la eliminación del requisito de registro de las operaciones cambiarias en el Programa de Consultas de Operaciones Cambiarias de la AFIP, (ii) la eliminación de la obligación de ingreso en el país de los fondos provenientes de nuevas operaciones de endeudamiento financiero y liquidación de dichos fondos en el MULC, (iii) la eliminación de los límites para la formación de activos externos por residentes del país, (iv) la disminución a cero % (del 30%) del depósito nominativo, no transferible y no remunerado aplicable a ciertas operaciones de ingreso de divisas, (v) la eliminación del requisito de transferir y liquidar los fondos de los nuevos endeudamientos financieros incurridos por residentes y mantenidos por acreedores del exterior a través del MULC, y la eliminación del período de permanencia mínima obligatorio de 120 días corridos aplicable a tales fondos, y (vi) la eliminación del requisito de un período de tenencia mínimo (72 horas hábiles) para compras y posteriores ventas de títulos valores. Adicionalmente, el 17 de diciembre de 2015, debido al levantamiento de ciertas restricciones, el peso sufrió una devaluación respecto del dólar estadounidense. Además, el 26 de diciembre de 2017, en virtud de la Comunicación “A” 6401, el Banco Central reemplazó los regímenes de información establecidos por las Comunicaciones “A” 3602 y “A” 4237, con un nuevo régimen unificado aplicable para la información al 31 de diciembre de 2017. El régimen de información unificado incluye una declaración anual, cuya presentación será obligatoria para toda persona cuyo flujo total de fondos o saldo de activos y pasivos ascienda a US\$ 1 millón o más durante el año calendario anterior. Véase “--Las fluctuaciones en el valor del Peso podrían afectar de manera adversa la economía argentina y, en consecuencia, los resultados de las operaciones o la situación patrimonial y financiera del Banco” y “Controles de Cambio”.

- *Reformas en las operaciones de comercio exterior.* El gobierno nacional procedió a la eliminación de las retenciones a las exportaciones para el trigo, el maíz, la carne y productos regionales, y las redujo entre un 5% y 30% en el caso de la soja. Asimismo se eliminaron las retenciones del 5% a la mayoría de las exportaciones industriales. Con respecto a los pagos por importaciones de bienes y servicios, el gobierno nacional eliminó también los límites al monto de ingreso al MULC para nuevas operaciones al 17 de diciembre de 2015. El 2 de enero de 2017, el gobierno nacional sancionó una nueva reducción de los derechos a las exportaciones aplicables a la soja y los productos de soja, estableciendo un recorte mensual de 0,5% en la alícuota del impuesto a las exportaciones a partir de enero de 2018 hasta diciembre de 2019. Asimismo, se ofrecieron a los importadores títulos de deuda de corto plazo emitidos por el gobierno nacional para cancelar deudas comerciales pendientes por la importación de mercaderías.
- *Reformas en el gas y la electricidad.* El gobierno nacional declaró también un estado de emergencia con respecto al sistema eléctrico nacional, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017. Esta situación permitirá al gobierno nacional tomar medidas para garantizar el suministro de electricidad. En tal contexto, se revisó la política de subsidios al sector y se fijaron nuevas tarifas para el servicio de energía eléctrica a partir del 1° de febrero de 2016, con aumentos que varían dependiendo del área geográfica y el nivel de consumo. Luego de la suba de tarifas, los clientes, políticos y organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de los usuarios solicitaron el otorgamiento de medidas cautelares, las cuales fueron otorgadas por los tribunales argentinos. Sin embargo, el 6 de septiembre de 2016, la Corte Suprema de la Nación dejó sin efecto estas medidas cautelares invocando objeciones formales y fallas procesales. No obstante, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (“ENRE”) dictó la Resolución N° 522/2016 y celebró audiencias públicas en octubre de 2016 para una discusión pública de las tarifas eléctricas. El nuevo cronograma tarifario entró en vigencia en febrero de 2017. Asimismo, por Resolución N° 31/2016 del Ministerio de Energía y Minería, la administración Macri anunció la eliminación de ciertos subsidios al gas natural y el ajuste de sus tarifas. El 6 de junio de 2016, el gobierno nacional acordó reducir los aumentos de las tarifas de gas por Resolución N° 99/2016, que fijó una suba máxima del 400% para clientes residenciales y un 500% para clubes, hoteles, comercios y pequeñas y medianas empresas, con vigencia en forma retroactiva al 1° de abril de 2016. Más aún, por Resolución N° 111/2016, se duplicó la cantidad de kilovatios / hora que los beneficiarios de la tarifa social de ciertas provincias podrían consumir mensualmente sin costo. Sin embargo, el 18 de agosto de 2016 la Corte Suprema falló en contra de los aumentos para los clientes residenciales únicamente, argumentando que debían celebrarse audiencias públicas antes de adoptar estas medidas. Se celebraron audiencias públicas el 16 de septiembre de 2016. De acuerdo con el fallo de la Corte Suprema de la Nación, el Ente Nacional Regulador del Gas (“ENARGAS”) dictó las Resoluciones N° 3690 y 3691, las cuales, entre otros temas, dispusieron retrotraer el valor de las tarifas al 1° de abril de 2016 y un plan de cuotas para las deudas impagas. El 7 de octubre de 2017 se publicó un nuevo cronograma de las tarifas del gas, con un aumento promedio del 200%. El 11 de octubre de 2016, el Ministerio de Energía y Minería (a) amplió la cantidad de beneficiarios elegibles para la tarifa social, incluyendo a jubilados y pensionados que cobren una remuneración menor o igual a dos salarios mínimos, veteranos de guerra del Atlántico Sur y titulares con una enfermedad electrodependiente, y (b) estableció que las entidades que se dediquen a actividades de interés público tendrían derecho a tarifas residenciales. El aumento año a año en el precio de la energía en el mercado eléctrico mayorista para los usuarios finales, que excluye los gastos de transporte y distribución y cuentas por aproximadamente el 45% de la tarifa a usuarios finales en la Ciudad de Buenos Aires, totalizó el 233% (de Ps. 96/MWh a Ps. 320/MWh promedio), mientras que el aumento en el precio de gas natural para usuarios finales fue del 68% (de Ps. 37/MMBtu a Ps. 62/MMBtu en promedio). El 10 de marzo de 2017, se llevó a cabo una audiencia pública a fin de tratar el aumento de las tarifas de gas a partir de abril de 2017. El 31 de marzo de 2017 el nuevo esquema tarifario para el gas fue publicado por la administración nacional, con un incremento promedio del 24% a partir de abril de 2017.
- *Política financiera.* Inmediatamente de asumir sus funciones, la administración Macri procuró resolver los reclamos vigentes con los acreedores que no habían aceptado la reestructuración de la deuda, resultando en una serie de acuerdos con los acreedores no aceptantes que permitieron al gobierno nacional recuperar el acceso al mercado de capitales internacional. Véase “--La falta de financiamiento para las sociedades argentinas, sea debido a condiciones de mercado, regulaciones gubernamentales o litigios pendientes con los bonistas no aceptantes, podría tener un impacto negativo sobre la situación patrimonial y financiera o el flujo de fondos del Banco”.
- *Reformas en las políticas fiscales.* El 29 de junio de 2016, el Congreso de la Nación adoptó una ley de sinceramiento fiscal y reforma tributaria. La ley dispone que los fondos provenientes de este

sinceramiento fiscal sean utilizados para el pago a jubilados y pensionados y para contribuir a la formación de un programa de infraestructura multimillonario en dólares. El sinceramiento fiscal permitirá a quienes posean activos no declarados ingresarlos al sistema formal sin la necesidad de explicar el origen de los fondos. La ley dispone también que no se pagará cargo alguno sobre los activos que posean un valor de hasta Ps. 305.000, y fija una alícuota reducida del 5% aplicable sobre los bienes y activos con un valor de hasta Ps. 800.00. Por sobre este monto límite, la alícuota aplicable será del 10% hasta fin de 2016 y del 15% hasta fin de marzo de 2017, cuando se prevé la finalización del programa de sinceramiento fiscal. La ley también incluye disposiciones relacionadas con lo siguiente: (i) *Impuesto sobre los Bienes Personales*: la reducción de la tasa de este impuesto del 0,5% al 0,25% para personas humanas domiciliadas en el país y en el exterior y personas jurídicas domiciliadas en el exterior respecto de sus tenencias de títulos; (ii) *Dividendos*: la eliminación del pago del 10% por impuesto a las ganancias sobre los dividendos respecto de accionistas residentes nacionales y extranjeros; (iii) *Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta*: la eliminación de este impuesto a partir del 1° de enero de 2019.

- *Ley de Financiamiento Productivo*. El 11 de mayo de 2018 se publicó en el Boletín Oficial, la ley de financiamiento productivo N° 27.440 (la “Ley de Financiamiento Productivo”). La misma introduce importantes modificaciones a las leyes de Mercado de Capitales, la Ley de Obligaciones Negociables y la ley de fondos comunes de inversión, entre otra legislación complementaria y relevante en la materia, con el fin de modernizar y favorecer el desarrollo del mercado de capitales local. Asimismo, busca aumentar la base de inversores y empresas que participen en el mercado de capitales, promoviendo el financiamiento productivo, sobre todo de las MiPyMEs, proponiendo un régimen para impulsar y facilitar el financiamiento de las mismas. Entre las principales novedades que trae se destacan las siguientes:

(i) *Impulso al financiamiento de las MiPyMEs*: se contempla la posibilidad para las MiPyMEs, sujeta a la reglamentación que oportunamente dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos (la “AFIP”), de emitir Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs con la posibilidad de ser negociadas en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores, las cuales gozarán de oferta pública en los términos de la Ley de Mercado de Capitales. Dichas facturas constituirán títulos ejecutivos y valores no cartulares susceptibles de ser acreditados ante un Agente de Depósito Colectivo o similar, con la consecuente posibilidad de circular como título valor independiente y autónomo, transferible en las condiciones que oportunamente fije la CNV;

(ii) *Modificación a la Ley de Mercado de Capitales*: se reforma parcialmente la Ley de Mercado de Capitales cabiendo destacar lo siguiente: (i) se eliminan las facultades en cabeza de la CNV de separar a los órganos de administración y designar veedores con facultad de veto de las resoluciones adoptadas por el órgano de administración de la entidad, así como las multas como fuente de recursos; (ii) se establece la obligación para los mercados de listar sus acciones en un (1) mercado autorizado; (iii) con relación a los aumentos de capital de acciones u obligaciones negociables convertibles ofrecidas mediante oferta pública se establece que el derecho de preferencia se ejercerá exclusivamente mediante el procedimiento de colocación que se determine en el prospecto oferta pública, sin aplicación del plazo de ejercicio previsto en el artículo 194 de la Ley General de Sociedades, sujeto a la inclusión de una disposición expresa en el estatuto social y a la aprobación de la asamblea de accionistas que apruebe cada emisión, excluyéndose así en tal caso el derecho de acrecer; (iv) se modifican los procedimientos y condiciones para la realización de ofertas públicas de adquisición de acciones con derecho a voto de sociedades cuyas acciones se encuentren admitidas al régimen de la oferta pública; y (v) se establece que corresponde a las Cámaras de Apelaciones Federales y a los Juzgados Federales con competencia en materia comercial entender en los recursos interpuestos contra las decisiones de la CNV, la revisión de sanciones que pueda imponer la CNV, la revisión de las denegaciones de inscripciones y autorizaciones y en la ejecución de tasas y aranceles y en los pedidos y peticiones efectuadas por la CNV, entre otros;

(iii) *Modificación a la Ley de Obligaciones Negociables*: se modifica la Ley de Obligaciones Negociables en los siguientes puntos: (i) se establece que en caso de constitución de garantías prendarias de créditos presentes y futuros la notificación a los deudores cedidos, los efectos de la oponibilidad de dicha garantía prendaria y cesión respecto de terceros se tendrá por practicada mediante la publicación del aviso prescripto por el art. 10 de dicha ley en el Boletín Oficial; (ii) la autorización de la emisión de obligaciones negociables podrá ser resuelta por el órgano de administración de la sociedad, en caso de que así se hubiera previsto en el estatuto social; (iii) se aumenta de dos (2) a cinco (5) años el plazo durante el cual podrán ejercerse las facultades delegadas por la asamblea en el directorio; (iv) se elimina el requisito de publicar el aviso del art. 10 de la Ley de Obligaciones Negociables en el Boletín Oficial para el caso de obligaciones negociables con autorización de oferta

pública, siendo suficiente la publicación de un aviso en el sitio *web* de la CNV; y (v) se amplían los destinos posibles a darse a los fondos obtenidos de la colocación de obligaciones negociables por oferta pública contemplados por el art. 36 de la Ley de Obligaciones Negociables, incluyendo entre ellos las inversiones en bienes de capital situados en el país, la adquisición de fondos de comercio situados en el país y la adquisición de participaciones sociales y/o financiamiento del giro comercial de su negocio; e

(iv) *Instrumentos Derivados*: se fijan regulaciones para los instrumentos financieros derivados y pases y se crea un registro de operaciones de instrumentos derivados. Asimismo, se exceptúan de aplicación a los derivados y pases ciertas disposiciones de la Ley N° 24.522 de Concursos y Quiebras, el Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley de Entidades Financieras y la Ley N° 24.144 (Carta Orgánica del BCRA), respecto de los mecanismos contractuales de resolución anticipada, terminación, liquidación, compensación y ejecución de garantías.

- *Ley de Responsabilidad Penal Empresaria*: El 5 de julio de 2017, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas por delitos cometidos contra la administración pública y el cohecho transnacional que hubieren sido realizados directa o indirectamente en su nombre, representación o interés y de los que pudiera resultar beneficiada, cuando la comisión del delito fuere consecuencia de un control y supervisión inefectivo por parte de ésta, y los delitos fueren cometidos por sus apoderados, directores, gerentes, empleados o representantes, entre otros. Las personas jurídicas condenadas serán pasibles de diversas sanciones incluyendo, entre otras, multa de entre el 1% (uno por ciento) y el 20% (veinte por ciento) de los ingresos anuales que la persona jurídica condenada hubiere tenido en el último ejercicio anterior a la comisión del delito; y suspensión de actividades por un máximo de 10 (diez) años. Además, el proyecto de ley busca ampliar la jurisdicción criminal nacional a todos aquellos casos de cohecho llevados a cabo aún fuera del territorio nacional por ciudadanos o empresas con domicilio o asiento principal de sus negocios en territorio argentino. El proyecto fue aprobado el 8 de noviembre de 2017 y entró en vigencia 90 días luego de su publicación el Boletín Oficial el 1 de diciembre de 2017.
- *Ley de Reforma Previsional*. El 19 de diciembre de 2017, el Congreso aprobó la “Ley de Reforma Previsional” que, entre otras cuestiones, modificó la fórmula de ajuste del sistema actual de jubilación de reparto, para intentar solventar la falta de los fondos necesarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (la “ANSES”) para garantizar el 82% móvil a todos los jubilados que perciben la jubilación mínima. Las prestaciones sociales estarán sujetas a una fórmula de actualización que se aplicará en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año, y que considerará para su cálculo el 70% por la variación del Índice de Precios al Consumidor (el “IPC”) del INDEC y 30% restante por la variación del RIPTE, un indicador del Ministerio de Trabajo de la Nación que mide la evolución del salario de los estatales. Además, en lugar del aumento semestral, se aplicará una actualización por trimestre. Tras la aprobación de la reforma previsional, el 20 de diciembre de 2017, se publicó el Decreto nro. 1058 que, con el objetivo de evitar el desfase que se producía entre la aplicación de la anterior fórmula de movilidad y la sancionada recientemente en el Congreso, se establece un bono compensatorio destinado a jubilados, pensionados y beneficiarios de la asignación universal por hijo.
- *Proyecto de Ley de Reforma Laboral*. El 19 de noviembre de 2017 la administración de Macri envió al Congreso Nacional un proyecto de ley de reforma de la Ley de Contrato de Trabajo actualmente vigente, mediante el cual se establece un plazo para que las empresas puedan regularizar a sus empleados obteniendo beneficios y evitando la aplicación de ciertas sanciones que impone la ley laboral y se establecen, entre otras, modificaciones a los montos que deben tenerse en cuenta al momento del cálculo de las indemnizaciones por despidos. A la fecha del presente Prospecto, dicho proyecto de ley todavía no ha sido evaluado por el Congreso.
- *Decreto de Necesidad y Urgencia 27/2018*. El 11 de enero de 2018 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina el Decreto de Necesidad y Urgencia de Desburocratización y Simplificación (el “DNU”), mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional buscó profundizar las reformas impulsadas durante el mes de diciembre de 2017 y sumó a estas el DNU que contiene normas destinadas a simplificar, agilizar y aumentar la eficiencia de los trámites ante la administración pública. Asimismo se orienta a conformar la estructura estatal a los lineamientos propuestos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entre muchas otras, el DNU complementa, modifica y/o sustituye las siguientes cuestiones: (i) otorga a las personas jurídicas la posibilidad de llevar los libros societarios y contables a través de registros digitales, sujeto a la reglamentación de la CNV; (ii) se modifican cuestiones relativas al Registro Nacional de Sociedades otorgando su órbita de control al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; (iii)

otorga a las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones la posibilidad de participar en la constitución de una sociedad por acciones simplificada; (iv) incorpora la posibilidad de que el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (el “FONDCE”) pueda financiar emprendimientos e instituciones de capital emprendedor registrados como tales mediante préstamos, aportes no reembolsables, aportes de capital y otros instrumentos); (v) prevé la posibilidad que las sociedades de garantía recíproca garanticen a terceros, brinden asesoramiento técnico, económico y financiero; (vi) autoriza a la Administración Nacional de Seguridad Social, como administradora del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino a operar como una entidad financiera, a tal fin se lo autoriza a constituir fideicomisos, alquilar o prestar títulos y acciones y a realizar cualquier operación dentro del mercado bursátil; (vii) a los efectos de devolver calidad crediticia a los ahorristas se deroga la inembargabilidad sobre la cuenta sueldo, a tales efectos se establece un monto por encima del cual las sumas depositadas en una cuenta sueldo pueden ser embargadas directamente por el acreedor. Manteniendo la imposibilidad de trabar embargos sobre el saldo de la cuenta sueldo cuando los montos deriven de una relación laboral y/o prestación social cuando el importe sea menor a tres veces el monto de las remuneraciones y/o prestaciones devengada por el trabajador según un promedio de seis meses; (viii) se adecuan, para los ámbitos y las actividades bancarias y financieras, los marcos legales relativos al cheque, letra de cambio, pagaré y tarjetas de crédito previendo la firma digital como medio habilitado para probar la autenticidad y la autoría de un instrumento privado generado por medios electrónicos; (ix) se reconoce el valor probatorio de los documentos electrónicos oficiales firmados digitalmente en las plataformas de trámites a distancia y gestión documental electrónica; (x) se introdujeron modificaciones a la Ley de Prevención del Lavado de Activos tendientes a simplificar y agilizar los procesos judiciales, adecuando la normativa vigente a la realidad operativa de la UIF; y a receptar ciertos estándares internacionales en materia de intercambio de información entre los sujetos obligados. En tal sentido se sustituyeron y derogaron varios artículos.

- *Ley de reforma tributaria.* El 27 de diciembre de 2017, el gobierno argentino aprobó una reforma tributaria, sancionada el 29 de diciembre de 2017 como la Ley N° 27.430 (la “Reforma Impositiva”). Dicha reforma buscaban eliminar ciertas ineficiencias en el Sistema Tributario Argentino, disminuir la evasión fiscal, ampliar el impuesto a las ganancias para alcanzar a más individuos y fomentar la inversión, teniendo como objetivo a largo plazo la recuperación del equilibrio fiscal. Las reformas son parte de un programa más grande anunciado por el Presidente Macri destinado a aumentar el nivel de empleo, hacer la economía Argentina más competitiva (por ejemplo, reduciendo el déficit fiscal) y disminuir la pobreza de forma sustentable. Los aspectos principales de esta reforma incluyen: (i) ganancias de capital realizadas por personas humanas que sean residentes derivadas de las enajenaciones de inmuebles (sujeto a ciertas excepciones, incluyendo una exención de residencia primaria) adquiridos con posterioridad a la sanción de la ley estarán sujetas a un impuesto del 15%, calculado sobre el costo de adquisición ajustado por inflación; (ii) ingresos obtenidos de depósitos bancarios actualmente exentos y ventas de valores negociables (incluyendo títulos públicos) estarán sujetos a un impuesto de (a) 5% en caso de valores negociables denominados en pesos, sujeto a una tasa de interés fija y no indexada, y (b) 15% en caso de valores negociables denominados en moneda extranjera o indexados; los ingresos obtenidos de la venta de acciones realizada en un mercado permanecerá exenta, sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos; (iii) el impuesto a las ganancias de personas jurídicas disminuirá inicialmente a un 30% en 2019 y 2020 y a un 25% a partir de 2021; (iv) las contribuciones de la seguridad social aumentarán gradualmente de 19,5% a partir de 2022, en vez de las escalas diferenciales actualmente en vigencia; y (v) el porcentaje del impuesto a los débitos y créditos bancarios que puede computarse como crédito en el impuesto a las ganancias se incrementará gradualmente a lo largo de un período de cinco años, del actual 17% para créditos al 100% para débitos y créditos.

Por otro lado, con fecha 16 de noviembre de 2017, el Gobierno Nacional, los gobernadores de la mayoría de las provincias argentinas, incluyendo la Provincia de Buenos Aires, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suscribieron un acuerdo mediante el cual establecieron lineamientos para armonizar las estructuras tributarias de las diferentes provincias y la Ciudad de Buenos Aires (el “Consenso Fiscal”). Entre otros compromisos, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires acordaron disminuir las alícuotas correspondientes al impuesto de sellos y al impuesto sobre los ingresos brutos de forma gradual en un periodo de cinco años y desistir de los procesos judiciales iniciados contra el Gobierno Nacional en conexión con el régimen de coparticipación federal. En contrapartida, el Gobierno Nacional, entre otros compromisos, se comprometió a (i) compensar a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires (en la medida que adopten el acuerdo) por la disminución efectiva de sus recursos en 2018 resultante de la propuesta de derogación del artículo 104° de la Ley de Impuesto a las Ganancias, actualizando trimestralmente en los años siguientes dicha compensación y (ii) a emitir un bono a 11 años cuyos fondos generen servicios por Ps.5.000 millones en 2018 y Ps. 12.000 millones

por año a partir de 2019, a ser distribuidos entre todas las provincias, excluyendo la Provincia de Buenos Aires, y la Ciudad de Buenos Aires, en función de los coeficientes efectivos de distribución resultantes del Régimen de Coparticipación Federal. Las administraciones provinciales que participaron en este acuerdo se han comprometido a presentar, dentro de los 30 días posteriores a la firma del mismo, los proyectos de ley necesarios a sus respectivos poderes legislativos para aprobar el acuerdo, modificar las leyes necesarias para implementarlo y autorizar a sus respectivos poderes ejecutivos a hacer cumplirlo. Este acuerdo solo será efectivo en aquellas provincias donde su respectivo poder legislativo lo haya aprobado. En este sentido, el 22 de diciembre, el Congreso aprobó los proyectos sobre Consenso Fiscal y Responsabilidad Fiscal con algunas modificaciones.

El 22 de octubre de 2017 se realizaron las elecciones legislativas, donde la coalición de gobierno de Mauricio Macri obtuvo la mayor parte de los votos a nivel nacional. Sin embargo, aunque la cantidad de miembros en el Congreso pertenecientes a la coalición gobernante se incrementó (incluyendo en total 107 de las 257 bancas totales en la Cámara de Diputados y 24 de un total de 72 bancas en el Senado), aún carece de mayoría en las dos Cámaras y, como resultado, algunas o todas las reformas requeridas para seguir implementando los cambios exigidos para continuar con el crecimiento de la economía y las inversiones (incluyendo la reducción del déficit fiscal, la baja de la tasa de inflación, reformas fiscales y laborales, entre otros) podrían no ser implementados y, en consecuencia, ello podría afectar adversamente el crecimiento continuo de la economía y la inversión.

Adicionalmente, a una semana de conocerse el resultado de las elecciones legislativas con fecha 30 de octubre de 2017, la calificadoradora Standard & Poor's (S&P) subió las calificaciones crediticias soberanas de largo plazo de Argentina a 'B+' desde 'B' y afirmaron las calificaciones soberanas de corto plazo en 'B'. También subieron las evaluaciones de riesgo de transferencia y convertibilidad (T&C) a 'BB-' desde 'B+'.

Posteriormente, a fines de septiembre de 2018, el gobierno argentino negoció con el FMI una ampliación del monto máximo del acuerdo inicial. Los objetivos pretendidos principales fueron en parte contener la turbulencia cambiaria generada por la falta de confianza de los mercados financieros sobre la capacidad de Argentina de cumplir con el pago de su deuda durante el 2019 y en parte tratar de reducir la pobreza, en un intento de estabilizar la situación económica del país. Por su parte, tanto el acuerdo inicial con el FMI como la ampliación posterior, implicaron el compromiso del gobierno argentino frente al FMI de adoptar políticas fiscales y monetarias que permitan cumplir, por un lado, con la meta de déficit primario 0 en 2019 y, por otro, restringir la emisión de pesos que circulan en el mercado y que presionan la demanda de moneda extranjera y la inflación. Entre las medidas fiscales se destacan las que permitan ampliar la base recaudatoria (como por ejemplo la aplicación de retenciones a la exportación de trigo y maíz, la suspensión de la disminución gradual de la alícuota del impuesto a las ganancias y el aumento de controles sobre la economía informal) acompañadas de medidas paliativas del estado de emergencia social, consistentes en la extensión del programa de Precios Cuidados hasta el 6 de enero de 2019 y el aumento de la asignación universal por hijo. A su vez, todas estas medidas fueron acompañadas por una reducción cuantitativa de los ministerios a los fines de achicar la estructura del Poder Ejecutivo. A nivel monetario y cambiario, se preve que el BCRA pueda retirar pesos del mercado a través de licitaciones diarias de Letras de Liquidez que sólo compraran los bancos y se pactó un régimen que fija el control estricto de la base monetaria local, la que no podrá ser elevada hasta junio de 2019, en un intento por tratar de restringir la cantidad de pesos disponible en el mercado. Por su parte, el BCRA podrá intervenir vendiendo dólares cuando el tipo de cambio supere los \$44 por dólar y comprando cuando el tipo de cambio baje de los \$34 por dólar (rango que se ajusta diariamente a razón del 3% anual hasta diciembre de 2018, y para el primer trimestre de 2019, se ajusta diariamente a razón del 2% anual), considerándose la zona intermedia, como de “no intervención”.

A la fecha de este Prospecto, no se puede predecir el impacto que tendrán estas medidas y otras que en el futuro adopte el gobierno del Presidente Macri en la economía del país en su totalidad y en el sector financiero en particular. El Banco considera que el efecto de la liberación planificada de la economía será positivo para su negocio ya que estimulará la actividad económica, pero no es posible predecir tal efecto con certeza, que podría también perjudicar a la economía y no beneficiar o inclusive, dañar el negocio del Banco. Asimismo, no es posible saber cuáles de las medidas ya anunciadas se implementarán ni cuándo. A su vez, los partidos políticos opositores conservaron la mayoría de las bancas en el Congreso, por lo que el gobierno de Macri deberá procurar el apoyo político de la oposición en su conjunto para sus propuestas económicas, lo cual crea mayor incertidumbre en su capacidad para llevar a cabo las medidas que se proponga. La incertidumbre política en Argentina en relación con las medidas económicas a ser adoptadas por el gobierno de Macri podría originar mayor volatilidad de los precios de mercado de los títulos valores de sociedades argentinas, incluso, en particular, sociedades vinculadas al sector financiero, como el Banco, dado el alto grado de regulaciones y de supervisión en este sector.

Un incremento de precios, una caída del PBI y/u otros futuros acontecimientos económicos, sociales y políticos de Argentina, sobre los que el Banco no tiene control, podrían afectar de manera adversa su situación patrimonial y financiera o los resultados de sus operaciones.

La economía argentina ha experimentado en el pasado una desaceleración importante, y una nueva caída en la tasa de crecimiento de Argentina podría afectar adversamente el negocio, la situación patrimonial y financiera y los resultados de las operaciones del Banco.

Tras recuperarse considerablemente de la crisis de 2001 y 2002, el ritmo de crecimiento de Argentina disminuyó, generando incertidumbre respecto de la sustentabilidad del crecimiento experimentado entre 2003 y 2011. Inicialmente, el crecimiento económico se produjo luego de una importante devaluación del peso y en un contexto de exceso de capacidad de producción disponible resultante de un largo período de profunda recesión y altos precios de los *commodities*. A pesar del crecimiento que siguió a la crisis de 2001 y 2002, la economía ha sufrido una constante erosión de la inversión directa e inversión en bienes de capital. La crisis económica global de 2008 provocó una reducción en el nivel de actividad de la economía Argentina durante 2009, acompañada por incrementos de precios, depreciación del peso y la caída de la confianza del consumidor e inversor.

Las condiciones económicas de Argentina de 2012 a 2015 evidenciaron incrementos de precios, demanda continúa de aumentos salariales, un crecimiento en el déficit fiscal y limitaciones a la capacidad de Argentina de atender el servicio de su deuda reestructurada de acuerdo con sus términos debido a los litigios en trámite con los bonistas no aceptantes. Asimismo, a partir del segundo semestre de 2011, un aumento de la demanda local de moneda extranjera originó que el gobierno nacional refuerce sus controles de cambio. Sin embargo, con la emisión de la Comunicación “A” 6037 del Banco Central que entró en vigencia el 9 de agosto de 2016, el gobierno eliminó los topes mensuales para adquirir moneda extranjera con fines de atesoramiento. Durante 2013, 2014 y 2015, el gobierno nacional impuso controles sobre los precios de ciertos bienes y servicios a fin de lograr frenar su suba. A partir de diciembre de 2015, la administración Macri ha mantenido ciertos controles de precios para bienes de primera necesidad, como por ejemplo alimentos y productos de limpieza e higiene. A pesar de éstas y de otras medidas, el Banco no puede asegurar que la administración Macri podrá controlar el incremento de precios con éxito.

La caída en la demanda internacional de productos argentinos, la falta de estabilidad y competitividad del peso frente a otras monedas, la disminución de la confianza entre los consumidores e inversores extranjeros y locales, una mayor tasa de inflación y futuras incertidumbres en el plano político, entre otros factores, podrían afectar el desarrollo de la economía argentina, lo que podría llevar a una disminución en la demanda de los servicios del Banco y afectar en forma adversa el negocio, la situación patrimonial y financiera, y los resultados de las operaciones del Banco.

Si no se reducen los actuales niveles de inflación, la economía argentina y la situación patrimonial y financiera y el negocio del Banco podrían verse seriamente afectados.

Argentina ha enfrentado incrementos de precios desde 2007. Según información no revisada publicada por el INDEC, el IPC aumentó 9,5% en 2011, 10,8% en 2012, 10,9% en 2013, 23,9% en 2014 y 11,9% en el período de diez meses finalizado el 31 de octubre de 2015. El INDEC no publicó datos del IPC por el período comprendido entre noviembre de 2015 y abril de 2016, y retomó la publicación de los índices de precios utilizando su nueva metodología para calcular el IPC a partir de junio de 2016, informando un aumento del 27,5% entre abril de 2016 y abril de 2017. Según datos no revisados del INDEC, el IPM aumentó 14,6% en 2010, 12,7% en 2011, 13,1% en 2012, 14,8% en 2013, 28,3% en 2014 y 10,6% en el período de diez meses finalizado el 31 de octubre de 2015. El INDEC no publicó el IPM durante los últimos dos meses de 2015, y retomó su publicación en mayo de 2016. Según el INDEC, el IPM creció un 34,5% en 2016.

Con respecto al 2017, el INDEC informó una variación acumulada del IPC del 24,8%. Respecto al año 2018, la variación del IPC en el período de once meses finalizado el 30 de noviembre de 2018 fue de 43,9%.

Asimismo, con fecha 26 de septiembre de 2016, el Banco Central presentó el régimen de metas de inflación, un sistema que busca ofrecer una unidad de valor previsible y estable para la inflación. De conformidad con los datos publicados por la referida entidad, las metas de inflación interanual correspondían al 12% a 17% para 2017; de 8% a 12% para 2018; y de 3,5% a 6,5% para 2019. Tras una inflación para el año 2016 de 40,6%, en 2017 se registró una inflación de 24,6%, no alcanzando la meta propuesta.

No obstante lo cual, con fecha 28 de diciembre de 2017, el Banco Central actualizó su régimen de metas de inflación, elevando el objetivo al 15% para el 2018, pero con miras a reducirlo a un 5% anual para el 2020. No obstante, en el marco del primer acuerdo celebrado con el FMI, el gobierno comprometió los siguientes objetivos en materia de inflación: una tasa del 17% anual para el año 2019, 13% para el año 2020, y 9% para 2021. Posteriormente, en el marco del segundo acuerdo con el FMI se pactó sustituir el esquema de metas de inflación por un régimen que fija el control estricto de la base monetaria, la que no podrá ser elevada hasta junio de 2019, en un intento por tratar de restringir la cantidad de pesos disponible en el mercado.

Por su parte, las entidades financieras bajo el control del BCRA, como es el caso del Banco, se encuentran obligadas, a partir del ejercicio comenzado el 1 de enero de 2018, a confeccionar sus estados financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”). La Norma Contable 29 de “Información financiera en economías hiperinflacionarias” (la “NIC 29”) exige que los estados financieros de cualquier entidad cuya moneda funcional sea la moneda de una economía hiperinflacionaria, ya sea con base en el método del costo histórico o en el método del costo actual, se expresen en términos de la unidad de medida que está vigente al final del período de informe. La NIC 29 no establece una tasa de inflación absoluta por sobre la cual se presume que habrá hiperinflación. Sin embargo, es una práctica común considerar que existe hiperinflación cuando los cambios en los niveles de precios son cercanos o superiores al 100% de forma acumulada en los últimos tres años, junto con otros factores cualitativos relacionados con la macroeconomía.

En este sentido, debido a factores tales como la devaluación del tipo de cambio y la continuidad del proceso de ajuste de tarifas de servicios públicos, así como un contexto internacional desfavorable en cuestiones de financiamiento, la inflación trienal acumulada al 30 de noviembre de 2018 se ubicó por encima del 100%, y la revisión a la que estuvo sujeto el anterior esquema de metas junto con otras proyecciones disponibles, indicaron que esta tendencia no se revertiría en el corto plazo. Por tales razones, bajo la NIC 29, la economía argentina debe ser considerada altamente inflacionaria al 30 de junio de 2018. En consecuencia, las entidades bajo el control del BCRA, obligadas a la aplicación de las NIIF adoptadas por el BCRA cuya moneda funcional sea el Peso argentino, deberán re expresar sus estados financieros a partir del primer período en que ello resulte practicable, que para nosotros es el período intermedio iniciado el 1 de julio de 2018. Sin embargo, la posibilidad de cumplir con los requerimientos de la NIC 29 está sujeta a ciertos cambios necesarios en la normativa del BCRA, relacionados con la imposibilidad de utilizar el método de re expresión de los estados financieros en moneda homogénea, según la Comunicación “A” 3921 de dicho organismo, originada en el decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 664/2003.

Teniendo en cuenta ello, nuestros estados financieros y otra información financiera pueden necesitar ajustarse con la aplicación de un índice general de precios expresado en la unidad de medición (es decir, la moneda hiperinflacionaria) al final de cada período informado.

En función de la vigencia de la Comunicación “A” 6651 del BCRA de fecha 22 de febrero de 2019 la NIC 29 será aplicable para los ejercicios económicos que se inicien a partir del 1 de enero de 2020 y por ende el Banco no ha aplicado mecanismos de reexpresión de estados financieros para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 ni para el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2019. En este sentido, el patrimonio y los resultados del Banco podrían diferir significativamente en caso de aplicar las normas contables sobre la materia. Aún cuando el Banco no ha cuantificado los efectos que sobre los estados financieros tendría su reexpresión en moneda homogénea, la existencia de un contexto inflacionario afecta la situación financiera y los resultados del Banco, y, por ende, el impacto de la inflación puede distorsionar la información contable y debe ser tenido en cuenta en la interpretación que se realice de la información que el Banco brinda en el presente Prospecto y en los estados financieros sobre su situación financiera, sus resultados integrales y los flujos de su efectivo.

En el pasado, la inflación ha debilitado fuertemente la economía argentina y la capacidad del gobierno de generar condiciones que permitieran el crecimiento económico. Adicionalmente, los altos niveles de inflación o de volatilidad podrían afectar de manera sustancial y adversa el volumen de operaciones del sistema financiero e impedir el crecimiento de los niveles de actividad de intermediación, así como también, podría afectar de manera adversa el nivel de actividad económica y empleo.

Un alto índice de inflación también afecta la competitividad de Argentina en el exterior, el salario real, las tasas de empleo, el consumo y las tasas de interés. El alto nivel de incertidumbre con respecto a estas variables económicas, y la falta de estabilidad general en términos de inflación, podría derivar en plazos contractuales reducidos y afectar la capacidad de planificar y tomar decisiones. Esta situación puede tener un impacto negativo sobre la actividad económica, los ingresos de los consumidores y su nivel adquisitivo, todo lo cual podría afectar de manera sustancial y adversa la situación patrimonial y financiera, los resultados de las operaciones y el

negocio del Banco. Recientemente, los ajustes impuestos por el gobierno nacional a las tarifas de la electricidad y el gas, así como también el aumento de los precios de la nafta, han impactado en los precios, creando mayor presión inflacionaria.

Las tasas de inflación podrían aumentar en el futuro, existiendo incertidumbre respecto de los efectos que podrían tener las medidas adoptadas o que en el futuro podría adoptar el gobierno nacional para controlar los aumentos de los precios. Véase “--La intervención del gobierno en la economía argentina podría afectar en forma adversa los resultados de las operaciones o la situación patrimonial y financiera del Banco”.

La capacidad del gobierno nacional de obtener financiamiento en los mercados internacionales es limitada, lo que podrá afectar su capacidad para implementar reformas e impulsar el crecimiento económico, lo que podrá tener un impacto negativo sobre la situación patrimonial y financiera o el flujo de fondos del Banco.

En 2005 y 2010, Argentina lanzó ofertas de canje para reestructurar parte de su deuda soberana en mora desde fines de 2001. Como resultado de estas ofertas, Argentina reestructuró más del 92% de su deuda impaga involucrada en la oferta. En abril de 2016, el gobierno nacional pagó US\$ 9,2 mil millones del capital pendiente de pago de la deuda no presentada en la oferta.

En 2012, los querellantes de diferentes juicios en Nueva York obtuvieron una resolución de un tribunal de primera instancia estadounidense que prohíbe a la Argentina pagar todos los intereses sobre los bonos emitidos en las ofertas de canje de 2005 y 2010 a menos que primero pagara íntegramente a los querellantes, fundándose en que los pagos anteriores violaban la cláusula *pari passu* del Convenio de Agencia Fiscal de 1994 que rige estos bonos en mora. El Tribunal Federal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos confirmó las órdenes llamadas *pari passu* y el 16 de junio de 2014 la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la petición de Argentina de un *writ of certiorari* y el 18 de junio de 2014 se levantó la suspensión de las órdenes *pari passu*. En febrero de 2016, el gobierno nacional celebró un acuerdo de principios para conciliar los reclamos de ciertos tenedores de deuda en mora y presentar una propuesta a otros tenedores de deuda impaga, incluso aquéllos con reclamos pendientes en tribunales estadounidenses. El 2 de marzo de 2016, el tribunal de primera instancia estadounidense aceptó levantar las órdenes *pari passu*, sujeto a ciertas condiciones. En abril de 2016, el gobierno nacional acordó con tenedores de un capital total pendiente de pago de deuda no presentada en las ofertas de US\$ 9,2 mil millones, y, al cumplirse sus condiciones, el tribunal de primera instancia ordenó levantar todas las órdenes *pari passu*. Desde abril de 2016, el gobierno nacional continuó conciliando reclamos con tenedores de deuda no presentada en las ofertas.

A la fecha del presente Prospecto, continúan en varias jurisdicciones los juicios iniciados por los bonistas que no aceptaron la oferta de pago de Argentina, aunque la dimensión de los reclamos involucrados ha disminuido considerablemente.

Aun cuando el levantamiento de las órdenes *pari passu* eliminó un importante obstáculo que tenía el gobierno nacional para acceder al mercado de capitales, las operaciones futuras podrían verse afectadas si continuaran los juicios con los bonistas no aceptantes, lo que a su vez podría afectar la capacidad del gobierno nacional de acceder al mercado financiero internacional y limitar el crecimiento económico, afectando adversamente el negocio, la situación patrimonial y financiera y los resultados de las operaciones del Banco.

Las fluctuaciones en el valor del peso podrían afectar de manera adversa la economía argentina y, en consecuencia, los resultados de las operaciones o la situación patrimonial y financiera del Banco.

Las fluctuaciones en el valor del peso también pueden afectar de manera adversa la economía argentina, la situación patrimonial y financiera y los resultados de las operaciones del Banco. Desde enero de 2002, el peso ha fluctuado significativamente en su valor. La devaluación del peso en términos reales de 2002 tuvo un impacto negativo sobre la capacidad de determinadas empresas argentinas de pagar sus deudas en moneda extranjera, y también ha llevado a incrementos de precios y a una reducción de los salarios en términos reales. La devaluación también ha tenido un impacto negativo sobre las empresas cuyo éxito depende de la demanda local, y ha afectado adversamente la capacidad del gobierno nacional de pagar sus obligaciones de deuda externa. Si el peso se devalúa significativamente en términos reales, todos los efectos negativos sobre la economía argentina relacionados con dicha devaluación también podrían tener consecuencias adversas para el negocio del Banco. Un incremento sustancial en el valor del peso respecto del dólar estadounidense también representa riesgos para la economía argentina ya que puede conducir a un deterioro de la actual balanza comercial y balanza de pagos del país. Luego de varios años de moderadas variaciones en el tipo de cambio nominal, en 2012, el peso se depreció casi un 14,3% respecto del dólar estadounidense. A ello le siguió en 2013 y 2014 una devaluación del peso

respecto del dólar estadounidense que superó el 32,6% en 2013 y el 31,2% en 2014, incluso una depreciación de aproximadamente el 23,0% en enero de 2014. En 2015, el peso se depreció un 52,1% frente al dólar, con una devaluación del 10,1% desde el 1º de enero de 2015 al 30 de septiembre de 2015, y una devaluación del 38,1% durante el último trimestre de 2015, concentrada principalmente a partir del 16 de diciembre de 2015. En 2016, el peso se depreció aproximadamente un 21,83% de su valor frente al dólar estadounidense. A su vez, durante 2017 el peso se depreció alrededor del 20% frente al dólar estadounidense. Asimismo, en 2018, el peso se depreció más de un 100% respecto del dólar estadounidense, siendo Argentina el país que más devaluó a nivel mundial en dicho año. El Banco no puede predecir el valor futuro del peso respecto del dólar estadounidense.

El proceso de devaluación del peso en el 2018 comenzó aproximadamente en abril de dicho año. Como resultado de la mayor volatilidad del Peso argentino, el gobierno argentino anunció varias medidas para restablecer la confianza del mercado y estabilizar el valor del Peso argentino, entre ellas, se negociaron dos acuerdos con el FMI, se aumentaron las tasas de interés, se vendieron reservas del BCRA en moneda extranjeras, entre otras. Más recientemente, y en virtud del último acuerdo celebrado con el FMI, se pactó un régimen que fija el control estricto de la base monetaria local, la que no podrá ser elevada hasta junio de 2019, en un intento por tratar de restringir la cantidad de pesos disponible en el mercado, lo que se entiende presiona la demanda de moneda extranjera. Al mismo tiempo, se estableció que el BCRA pueda intervenir vendiendo dólares cuando el tipo de cambio supere los \$44 por dólar y comprando cuando el tipo de cambio baje de los \$34 por dólar (rango que se ajustó diariamente a razón del 3% anual hasta diciembre de 2018, y para el primer trimestre de 2019, se ajusta diariamente a razón del 2% anual), considerándose la zona intermedia, como de “no intervención”.

Por otra parte, el gobierno de la anterior Presidente Cristina Fernández de Kirchner adoptó numerosas medidas para controlar directa o indirectamente las operaciones de comercio exterior y el mercado de divisas. A partir de 2011 hasta la asunción del Presidente Macri, el gobierno nacional adoptó controles de cambio cada vez más estrictos, la mayoría de los cuales fueron eliminados o atenuados por la administración Macri.

Al 28 de junio de 2019, el tipo de cambio mayorista de acuerdo con la Comunicación “A” 3500 del Banco Central era de \$ 42,45 por cada dólar estadounidense. Las regulaciones cambiarias que se emitan y cualquier modificación resultante del tipo de cambio entre el peso y el dólar estadounidense podrán impedir o limitar la compensación por parte del Banco del riesgo derivado de su exposición al dólar estadounidense, y, en consecuencia, el Banco no puede predecir el impacto que tendrían estos cambios en su situación patrimonial y financiera y en los resultados de sus operaciones.

La implementación en el futuro de nuevos controles de cambio, de restricciones a la transferencia de fondos al exterior y al ingreso de capitales al país podrían limitar la disponibilidad del crédito internacional, y podrían amenazar el sistema financiero, lo cual podría afectar de manera adversa la economía argentina y, en consecuencia, el negocio del Banco.

Entre 2001 y 2002, el gobierno argentino incorporó controles de cambio y restricciones a la transferencia de divisas en un intento por impedir una fuga de capitales y una mayor depreciación del peso. Estos controles de cambio limitaron significativamente la capacidad de las empresas de acumular o mantener divisas en el país o efectuar pagos al exterior. A pesar de que varios de estos controles de cambio y restricciones a la transferencia luego fueron suspendidos o eliminados, en junio de 2005 el gobierno nacional dictó un decreto que estableció nuevos controles para las transferencias de capitales, que resultaron en una disminución de la disponibilidad del crédito internacional para las sociedades argentinas.

Desde 2011 hasta la asunción del Presidente Macri, el gobierno nacional incrementó los controles sobre la venta de moneda extranjera y la adquisición de activos extranjeros por residentes locales, limitando la posibilidad de transferir fondos al exterior. Junto con las regulaciones establecidas en 2012 que sometieron a determinadas operaciones en moneda extranjera a la previa aprobación de la AFIP o el Banco Central, las medidas adoptadas por la anterior administración restringieron significativamente el acceso al MULC por parte de personas humanas y sociedades del sector privado.

En respuesta, se desarrolló un mercado paralelo para la negociación del dólar estadounidense, en el que el tipo de cambio peso/dólar estadounidense difería significativamente del tipo de cambio oficial. Véase “Controles de Cambio”.

Desde diciembre de 2015, la nueva administración ha ido eliminando gradualmente una porción significativa de las restricciones de cambio impuestas por la administración previa. Sin perjuicio de las medidas adoptadas por la nueva administración Macri, en el futuro el gobierno nacional podría igualmente imponer nuevos controles de

cambio, restricciones a la transferencia, exigir la repatriación a través del MULC de fondos obtenidos a través de operaciones del mercado de capitales realizadas en el exterior o restricciones al traslado de capitales, y tomar otras medidas en respuesta a la depreciación del peso, lo cual podría limitar la capacidad del Banco de acceder a los mercados de capitales internacionales. Estas medidas podrían causar tensiones políticas y sociales y debilitar las finanzas públicas, tal como ha ocurrido en el pasado, lo que podría afectar adversamente la economía y las perspectivas de crecimiento económico del país, lo cual, a su vez, podría afectar adversamente el negocio y los resultados de las operaciones y valor de mercado de las acciones Clase B del Banco.

Asimismo, el gobierno nacional o el Banco Central podrán restablecer ciertas restricciones a las transferencias de fondos al exterior, afectando la capacidad del Banco de efectuar pagos de dividendos a tenedores en el exterior, lo que podrá afectar adversamente el valor de mercado de sus tenencias. A la fecha del presente Prospecto, sin embargo, está permitida la transferencia de fondos al exterior para el pago de dividendos, siempre que el Banco cumpla con régimen de información “Relevamiento de Activos y Pasivos Externos” establecido por la Comunicación “A” 6401 del Banco Central (según sus modificaciones), de ser aplicable. Véase “Controles de Cambio”.

En el pasado, el gobierno nacional impuso también restricciones informales, como por ejemplo limitaciones sobre la capacidad de ciertas personas y empresas locales de comprar moneda extranjera. Estas restricciones a la compra de moneda extranjera comenzaron en octubre de 2011 y se intensificaron durante 2012 a 2014 y fines de 2015. Las restricciones informales comprenden medidas *de facto* que limitan la compra de moneda extranjera por residentes y empresas locales a través del MULC para efectuar pagos en el exterior, tales como dividendos, reducciones de capital y pagos para importaciones de bienes y servicios. Por ejemplo, los bancos locales pueden exigir, aun cuando la normativa no lo disponga expresamente, la intervención previa del Banco Central antes de llevar a cabo cualquier operación en moneda extranjera específica.

Adicionalmente, el nivel de reservas internacionales depositado en el Banco Central disminuyó significativamente de US\$ 47,4 mil millones al 1° de noviembre de 2011 a US\$ 25,6 mil millones al 31 de diciembre de 2015, resultando en una menor capacidad del estado de intervenir en el mercado de cambios y brindar acceso a tales mercados a las empresas del sector privado como el Banco. La administración Macri ha anunciado un programa tendiente a aumentar el nivel de reservas internacionales depositadas en el Banco Central a través de la celebración de ciertos acuerdos con diversas empresas extranjeras. Como resultado de las medidas adoptadas en este programa, las reservas internacionales aumentaron a US\$ 38,8 mil millones al 30 de diciembre de 2016. Al 31 de diciembre de 2017, las reservas internacionales alcanzaron US\$ 55,05 mil millones. Sin perjuicio de las medidas adoptadas por la nueva administración, en el futuro el gobierno nacional podría reducir de otro modo el nivel de las reservas internacionales depositadas en el Banco Central lo que podría originar tensiones políticas y sociales y quebrantar las finanzas públicas del gobierno nacional, como ha ocurrido en el pasado, lo que podría afectar adversamente la economía argentina y las perspectivas de crecimiento económico.

La economía argentina puede verse seriamente afectada por los desarrollos económicos o políticos de otros mercados y por los efectos “contagio” más generalizados, lo que podría tener un efecto sustancial adverso en el crecimiento económico de Argentina.

La economía argentina es vulnerable a crisis externas que podrían ser causadas por situaciones adversas que afectan a sus principales socios comerciales. Una caída significativa en el crecimiento económico de cualquiera de los principales socios comerciales de Argentina (incluido Brasil, que actualmente está atravesando una recesión y crisis política, la Unión Europea, China y los Estados Unidos) podría tener un impacto adverso sustancial en la balanza comercial del país y afectar adversamente el crecimiento económico de Argentina. En 2017, se registró un aumento de las exportaciones del 13,7% a Chile, 0,2% al MERCOSUR (Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela), 1,2% de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (EE.UU. y Canadá), mientras que se registró una disminución del 1,6% en las exportaciones a China, cada una respecto del mismo período de 2016. Una caída en la demanda de las exportaciones argentinas, podría tener un efecto sustancial adverso en el crecimiento económico de Argentina.

A pesar de que las condiciones económicas y de mercado varían de país a país, la percepción de los inversores acerca de hechos ocurridos en otros países han afectado seriamente en el pasado y podrán continuar afectando de manera sustancial el ingreso de capitales y las inversiones en títulos valores de emisores de otros países, incluida la Argentina. La reacción de los inversores internacionales ante hechos que tienen lugar en un mercado a menudo demuestra un efecto “contagio” por el cual una región entera o una clase de inversión se ve desfavorecida por los inversores internacionales; Argentina podría verse seriamente afectada por

acontecimientos económicos o financieros negativos ocurridos en otros países, lo que a su vez puede tener un efecto adverso en la situación patrimonial y financiera y los resultados de las operaciones del Banco.

El sistema financiero y los mercados de valores de Argentina podrían resultar afectados en forma adversa por hechos que tengan lugar en economías de países desarrollados, tales como Estados Unidos y Europa (en particular, como resultado del voto por la salida del Reino Unido de la Unión Europea o “Brexit”, ocurrido el 23 de junio de 2016 y el resultado de las elecciones en Estados Unidos el 8 de noviembre de 2016), o por acontecimientos ocurridos en otros mercados emergentes, como Brasil. Una desaceleración de la actividad económica de Argentina afectaría en forma adversa el negocio, la situación patrimonial y financiera y los resultados de las operaciones del Banco.

El triunfo de Donald Trump en la elección presidencial de Estados Unidos, así como también el mantenimiento del control del Partido Republicano tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de Estados Unidos en las elecciones legislativas han generado volatilidad en los mercados de capitales globales e incertidumbre respecto del futuro del comercio exterior y políticas de inmigración. Como candidato y desde que asumió el cargo, el Presidente Trump ha demostrado una inclinación a considerar restricciones más importantes sobre el libre comercio y la inmigración. Los cambios en las condiciones sociales, políticas, regulatorias y económicas en Estados Unidos o en las leyes y políticas que rigen el comercio exterior podrían crear incertidumbre en los mercados internacionales y tener un impacto negativo sobre las economías de mercados emergentes, incluso la economía argentina, lo que a su vez podría tener un impacto negativo sobre el negocio, la situación patrimonial y financiera y los resultados de las operaciones del Banco.

Los cambios en las condiciones sociales, políticas, regulatorias y económicas del resto de los países o regiones o en las leyes y políticas que rigen el comercio exterior podrían generar incertidumbre en los mercados internacionales y tener un impacto negativo sobre las economías de los mercados emergentes, entre ellos la de Argentina. Asimismo, si estos países entraran en recesión, la economía argentina se vería afectada por una disminución de sus exportaciones, en especial de sus principales productos agropecuarios. Todos estos factores podrían tener un impacto negativo sobre la economía argentina, y a su vez en el negocio, la situación patrimonial y financiera y los resultados de las operaciones del Banco.

Cualquiera de estos factores podría deprimir la actividad económica y restringir el acceso del Banco a los proveedores y tener un efecto adverso sustancial sobre su, su situación patrimonial y financiera y los resultados de sus operaciones.

Medidas adoptadas por el gobierno, así como presiones de sectores sindicales, en respuesta a la inflación, podrían requerir aumentos salariales o beneficios adicionales, todo lo cual podría incrementar los costos operativos de las empresas.

En el pasado, el gobierno nacional ha sancionado leyes y reglamentaciones obligando a las empresas del sector privado a mantener ciertos niveles salariales y brindar beneficios adicionales a sus empleados. Asimismo, los empleadores del sector público y del sector privado se han visto sometidos a intensas presiones por parte de su fuerza laboral o de los sindicatos que los representan, en demanda de subas salariales y ciertos beneficios para los trabajadores.

Las relaciones laborales en Argentina se rigen por leyes específicas como ser la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo N° 14.250 que, entre otras cosas, establecen cómo llevar a cabo las negociaciones salariales y otros temas laborales. Cada sector industrial o comercial está regulado por un convenio colectivo de trabajo que agrupa a las empresas por sector y por gremio. Si bien el proceso de negociación está normalizado, cada cámara de industria o comercio negocia los aumentos salariales y beneficios laborales con el sindicato pertinente del sector pertinente. En el sector bancario, los salarios se fijan sobre una base anual a través de negociaciones entre las cámaras que representan a los bancos y el sindicato de empleados bancarios. El Ministerio de Trabajo de la Nación actúa como mediador entre las partes y, en última instancia, aprueba el aumento salarial anual que se aplicará en el sector bancario. Las partes están obligadas a cumplir con la decisión final una vez que es aprobada por las autoridades en materia laboral y deben observar los aumentos salariales establecidos para todos los empleados que están representados por el sindicato bancario y a los que se aplica el convenio colectivo de trabajo.

Asimismo, cada empresa puede, independientemente de los aumentos salariales obligatorios dispuestos por el sindicato, otorgar a sus empleados aumentos adicionales de acuerdo a su mérito o a un esquema salarial variable.

Actualmente, de acuerdo a lo resuelto por el Ministerio de Trabajo, se encuentra vigente para todos los trabajadores comprendidos en el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo, de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos en las que el Estado Nacional actúe como empleador, un salario mínimo, vital y móvil (excluidas las asignaciones familiares) de \$10.000 a partir de julio de 2018. Sin perjuicio de ello, cada empresa del sector privado y repartición pública puede, independientemente de los aumentos salariales obligatorios dispuestos por el sindicato, otorgar a sus empleados aumentos adicionales de acuerdo a su mérito o a un esquema salarial variable.

Los empleadores del sector público y privado de Argentina, han soportado gran presión de parte de sus trabajadores y de los sindicatos para obtener aumentos en los salarios y beneficios adicionales. Debido a los elevados índices de inflación, los trabajadores y sindicatos demandan aumentos salariales. En agosto de 2012, el gobierno nacional estableció un incremento del 25% en el salario mínimo mensual de Ps. 2.875 a partir de febrero de 2013. El gobierno nacional aumentó el salario mínimo mensual a Ps. 3.300 en agosto de 2013, a Ps. 3.600 en enero de 2014, a Ps. 4.400 en septiembre de 2014, a Ps. 5.588 en agosto de 2015, a Ps. 6.060 en enero de 2016 y a Ps. 8.060 en enero de 2017. En agosto de 2018, el gobierno estableció un cronograma, modificado en febrero de 2019, a través del cual se fijaron distintos valores del salario mínimo, que lo fijó en Ps. 12.500 a partir del 1 de marzo de 2019. Debido a los altos índices de inflación, los empleadores del sector público y privado soportan gran presión de los sindicatos y sus empleados para obtener nuevos aumentos.

Por otro lado, El INDEC publicó cifras del Índice de Salarios ("IS"), un índice que muestra la evolución de los salarios del sector público y privado. El IS mostró un aumento del 32,9% para los trabajadores del sector privado, y un aumento del 32,6% para los trabajadores del sector público, respectivamente en 2016. De acuerdo a los datos publicados por el INDEC, el índice salarial total registró un crecimiento del 27,5% durante 2017, como resultado del aumento del 26,5% en el sector registrado y un aumento del 31,5% en el sector privado no registrado. Para el año 2018, el INDEC registró un crecimiento de del IS del sector registrado de 30,4% respecto al año anterior, como consecuencia del incremento de 30,4% del sector privado registrado y el aumento de 30,3% del sector público, mientras que el IS del sector privado no registrado mostró un incremento del 27,2% en el mismo período.

En el futuro el gobierno nacional podría adoptar nuevas medidas que determinen subas salariales o beneficios adicionales para los trabajadores, y los trabajadores y sus sindicatos pueden ejercer presión en demanda de dichas medidas. Toda suba salarial o beneficio adicional podría derivar en un aumento de los costos y una disminución de los resultados de las operaciones de las empresas argentinas, incluido el Banco.

La intervención del gobierno en la economía argentina podría afectar en forma adversa los resultados de las operaciones o la situación patrimonial y financiera del Banco.

Los dos últimos gobiernos de la Presidente Fernández de Kirchner incrementaron su intervención directa en la economía argentina, incluso a través de la implementación de medidas de expropiación y estatización, controles de precios y controles de cambio.

En 2008, el gobierno de Fernández de Kirchner absorbió y reemplazó el anterior sistema previsional mixto privado por un régimen previsional de reparto. Como resultado, todos los recursos administrados por las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones privadas, incluso las grandes participaciones de capital en una amplia gama de sociedades que listan en bolsa, incluido el Banco, fueron transferidos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad ("FGS"), a ser administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social ("ANSES"). La disolución de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones privadas y la transferencia de sus activos financieros al FGS han tenido importantes repercusiones en el financiamiento de las empresas del sector privado. Los instrumentos de deuda y acciones que anteriormente podían ser colocados en administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones se encuentran en la actualidad completamente sujetos a la discrecionalidad de la ANSES. Desde que adquirió participaciones de capital en empresas privadas a través del proceso de reemplazo del sistema de jubilaciones y pensiones, la ANSES puede designar representantes del gobierno nacional en los directorios de estas entidades. Según el Decreto N° 1.278/12, emitido por el Poder Ejecutivo Nacional el 25 de julio de 2012, estos representantes deben reportar directamente al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y se encuentran sujetos a un régimen obligatorio de información según el cual, entre otras, deben informar inmediatamente al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el orden del día de cada reunión de directorio y suministrar la documentación relacionada.

En abril de 2012, el gobierno de Fernández de Kirchner decretó la remoción de los directores y alta gerencia de YPF S.A. ("YPF"), la compañía gasífera y petrolífera más grande del país que estaba controlada por el grupo

español Repsol, y envió un proyecto de ley al Congreso de la Nación para expropiar el 51% de las acciones de YPF. Este proyecto fue aprobado por el Congreso de la Nación en mayo de 2012 mediante sanción de la Ley N° 26.741, que declaró de interés público nacional y como objetivo prioritario de la Argentina el autoabastecimiento de hidrocarburos y la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, y facultó al gobierno nacional a adoptar las medidas necesarias para lograr tales metas. En febrero de 2014 el gobierno nacional y Repsol llegaron a un acuerdo sobre las condiciones respecto de la compensación pagadera a Repsol por la expropiación de las acciones de YPF. Dicho pago ascendía a la suma de US\$ 5,0 mil millones (Ps. 79,3 mil millones) pagadero mediante la entrega de bonos públicos argentinos con diferentes vencimientos. El acuerdo, ratificado por Ley N° 26.932, puso fin a las demandas presentadas por Repsol ante el CIADI.

El 28 de septiembre de 2014 entró en vigencia la Ley N° 26.991 (la “Ley de Abastecimiento”). La Ley de Abastecimiento comprende todos los procesos económicos relativos a los bienes, prestaciones y servicios que satisfagan directamente o indirectamente necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población (“Bienes Necesarios o Esenciales”) y delega amplias facultades a su autoridad de aplicación para involucrarse en los procesos. También faculta a la autoridad de aplicación a disponer la comercialización, producción, distribución y/o prestación de Bienes Necesarios o Esenciales en todo el territorio de la Nación frente a una situación de desabastecimiento o escasez.

En febrero de 2015, el gobierno de Fernández de Kirchner presentó ante el Congreso de la Nación un proyecto de ley para revocar determinadas concesiones de ferrocarriles, recuperar para el Estado Nacional el sistema nacional de ferrocarriles y ampliar las facultades para revisar todas las concesiones actualmente vigentes. Este proyecto fue aprobado el 20 de mayo de 2015, como Ley N° 27.132.

En septiembre de 2015, a través de la Resolución N° 646/2015 de la CNV, el gobierno nacional modificó los criterios de valuación de los valores negociables que se negocian en el exterior y componen los activos de los fondos comunes de inversión, estableciendo que dichos valores deberán ser valuados en la misma moneda en que hayan sido emitidos, en la medida en que ésta sea la moneda de pago, debiendo utilizarse a los fines de dicha valuación el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina, aplicable a transferencias financieras. Dicha medida provocó un cambio contable en el valor de los fondos comunes de inversión y de sus cuotas partes.

Las acciones adoptadas por el gobierno nacional en materia económica, incluso las decisiones con respecto a las tasas de interés, impuestos, controles de precios, aumentos salariales, incremento de beneficios para los trabajadores, controles cambiarios y potenciales cambios en el mercado de divisas, han tenido y podrían continuar teniendo un efecto sustancial adverso sobre el crecimiento económico de Argentina y, a su vez, sobre la situación patrimonial y financiera y los resultados de las operaciones del Banco. Más aún, las políticas adicionales del gobierno nacional establecidas para evitar conflictos sociales, y en respuesta a ellos, podrían afectar de manera adversa y sustancial la economía, y en consecuencia el negocio del Banco.

Economistas del sector privado han manifestado ampliamente que las expropiaciones, los controles de precios y los controles cambiarios y otras intervenciones directas del gobierno nacional en la economía han tenido un impacto negativo en el nivel de inversiones en Argentina, el acceso a los mercados internacionales de capitales por sociedades argentinas y las relaciones comerciales y diplomáticas argentinas con otros países. Si el nivel de intervención del gobierno en la economía continúa o se incrementa, la economía argentina y, a su vez, el negocio, los resultados de las operaciones y la situación patrimonial y financiera del Banco podrían verse afectados.

Un marco regulatorio volátil podría afectar sustancial y adversamente la economía argentina y las operaciones de las entidades financieras, como el Banco.

Luego de la crisis financiera 2001-2002, el gobierno nacional promulgó diversas leyes que modificaron el marco regulatorio que regía para una cantidad de diversas actividades de la economía del país, incluso para el sector financiero. Por ejemplo, en el ejercicio económico 2012 el Banco Central emitió una cantidad de regulaciones que requirieron a las entidades financieras, incluido el Banco, otorgar ciertos préstamos a tasas de interés por debajo de las prevalecientes en ese momento en el mercado, y, en 2014, el Banco Central adoptó nuevas regulaciones que limitaron las tasas de interés y comisiones que podían ser cobradas por las entidades financieras para ciertos tipos de préstamos otorgados a personas humanas. A pesar de que la administración actual ha eliminado algunas de estas regulaciones, las presiones políticas y sociales podrían inhibir al gobierno implementar políticas diseñadas a generar crecimiento y mejorar la confianza de consumidores e inversores. No obstante, la nueva administración no ha eliminado las políticas de financiación obligatoria en las tarifas subsidiadas.

Asimismo, el nuevo Código Civil y Comercial, que entró en vigencia el 1° de agosto de 2015, modificó el régimen aplicable a disposiciones contractuales relacionadas con obligaciones de pago en moneda extranjera, estableciendo que pueden ser canceladas en pesos. El Código Civil y Comercial modificó el marco legal en virtud del cual los deudores anteriormente sólo podían cancelar sus obligaciones de pago en moneda extranjera efectuando pagos en la moneda extranjera específica acordada en los respectivos contratos. Continúa evaluándose la capacidad del deudor de renunciar a la opción de cancelar en pesos una obligación de pago en moneda extranjera.

En el futuro las autoridades argentinas podrán promulgar normas que impacten en el sistema financiero, que podrían afectar en forma sustancial y adversa los activos, ingresos y el resultado operativo de las empresas del sector privado, incluido el Banco, los derechos de tenedores de títulos valores emitidos por tales entidades o el valor de tales títulos. La falta de previsión regulatoria podría imponer serias limitaciones para las actividades del sistema financiero y el negocio del Banco, generando incertidumbre respecto de su futura situación patrimonial y financiera y el resultado de sus operaciones.

Un elevado nivel de gasto público podría derivar en consecuencias adversas a largo plazo para la economía argentina.

La administración Kirchner incrementó significativamente el gasto público. En 2015 el gasto público aumentó un 38,1% comparado con 2014, y el gobierno informó un déficit fiscal primario de Ps. 291,66 mil millones, lo que representa aproximadamente el 5,4% del PBI. En 2016, el déficit primario fue de Ps. 359,28 mil millones, lo que representa aproximadamente el 4,6% del PBI, en base a información publicada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. El gobierno de la Presidente Fernández de Kirchner recurrió al Banco Central y a la ANSES para financiar parte de los requerimientos de fondos de la administración pública.

Dada la estrechez de las finanzas públicas, el gobierno de Fernández de Kirchner adoptó varias medidas para financiar su gasto público, por ejemplo, la revisión de las políticas de subsidio (en particular las relacionadas con la energía, electricidad y gas, agua y transporte público) y la implementación de una política monetaria expansiva. Estas medidas derivaron en un mayor incremento de precios y, por lo tanto, afectaron adversamente, y podrían hacerlo aún más, el poder adquisitivo del consumidor y la actividad económica.

No obstante, desde su asunción del cargo, el gobierno de Macri ha adoptado medidas para mitigar el aumento en el déficit fiscal y reducir el nivel actual del mismo, incluyendo un proceso de revisión integral de los contratos de los empleados del sector público así como la eliminación de los subsidios a los servicios públicos y otras medidas fiscales, lo cual redujo el déficit fiscal primario en aproximadamente el 1,8% del PIB en diciembre de 2015, e informó un déficit fiscal primario de 4,4% del PIB en 2016, mayormente debido a los impuestos percibidos en virtud del programa establecido por la Ley de Sinceramiento Fiscal en los últimos dos meses de 2016.

Para 2017, el gobierno se propuso una meta de déficit fiscal del 4,2% del PIB logrando un déficit fiscal primario del 3,9% del PIB por debajo de dicha meta. La meta del gobierno para 2018 respecto del déficit fiscal primario fue del 2,7% del PIB mientras que el resultado fiscal mostró un déficit primario de 2,4% del PBI, arrojando una baja con respecto al año anterior y un sobrecumplimiento de 0,3% del PIB con respecto a la meta fiscal para el año. Si bien el objetivo de la administración Macri era lograr un déficit fiscal primario equivalente al 1,3% del PIB en el 2019, en virtud de las negociaciones con el FMI y de acuerdo con la Ley de Presupuesto Nacional para el 2019, el déficit fiscal deberá ser de 0% del PBI en el año 2019 con un superávit de 1% en el año 2020.

Sin perjuicio de las medidas tomadas por el gobierno actual para anclar el déficit fiscal e incrementar la recaudación, existe incertidumbre respecto de qué efectos podrían tener las medidas adoptadas y otras futuras políticas sobre la economía argentina y nuestro negocio, así como también respecto del cumplimiento efectivo de las metas propuestas. Por otro lado, si el gobierno de Macri procurara financiar su déficit aumentando la exposición de las entidades financieras locales al sector público, la liquidez y la calidad de los activos del Banco podrían verse afectadas y, en consecuencia, repercutir en forma negativa sobre la confianza de sus clientes.

Una baja de los precios internacionales de las principales exportaciones de commodities de Argentina podría tener un efecto adverso en el crecimiento económico de Argentina.

La recuperación financiera de Argentina a partir de la crisis de 2001 y 2002 se produjo en un contexto de aumentos de los precios para las exportaciones de *commodities* del país. Los altos precios de los *commodities* han contribuido al aumento de las exportaciones argentinas desde el tercer trimestre de 2002 y a elevar los ingresos fiscales provenientes de las retenciones a las exportaciones. En consecuencia, la economía argentina ha continuado relativamente dependiendo del precio de sus principales productos agrícolas, principalmente la soja. Esta dependencia ha tornado a la economía argentina más vulnerable a los precios de los *commodities*. Los precios internacionales de los *commodities* cayeron durante 2015 y se han recuperado parcialmente durante 2016. En la actualidad, el Banco Mundial prevé que se mantendrán los aumentos de los precios de los productos básicos industriales, durante lo que resta del 2017 y para el próximo año, lo que podría resultar favorable para la economía argentina.

Una baja en los precios internacionales de las principales exportaciones de *commodities* de Argentina tendría un impacto negativo en los niveles de los ingresos públicos y la capacidad del gobierno de pagar su deuda soberana y podría generar presiones recesionarias o inflacionarias, dependiendo de la reacción del gobierno. Cualquiera de dichas situaciones tendría un efecto adverso en la economía argentina y, por lo tanto, en el negocio, los resultados de las operaciones y la situación patrimonial y financiera del Banco.

A la fecha de este Prospecto, el gobierno ha eliminado los aranceles sobre las exportaciones de muchos productos agrícolas y redujo el arancel sobre la soja del 35% al 30%. Aun cuando la medida pretendió impulsar las exportaciones, futuras reducciones de los aranceles a la exportación, a menos que sean reemplazadas con otras fuentes de ingresos, podrán impactar adversamente en las finanzas públicas del país.

Riesgos relacionados con el sistema financiero argentino

La estabilidad del sistema financiero argentino depende de la capacidad de las entidades financieras, incluido el Banco, para mantener la confianza de los depositantes.

Las medidas implementadas por el gobierno nacional a fines de 2001 y principios de 2002, en particular las restricciones impuestas a los depositantes en relación con la posibilidad de retirar libremente fondos de los bancos y la pesificación y reestructuración de sus depósitos, causaron pérdidas a muchos depositantes y debilitaron la confianza en el sistema financiero argentino.

Si bien el sistema financiero ha experimentado una recuperación en el volumen de los depósitos, esta tendencia podría no continuar, y la base de los depósitos del sistema financiero argentino, incluido el Banco, podría verse negativamente afectada en el futuro por sucesos económicos, sociales y políticos adversos. Así también, el crecimiento del sistema financiero argentino depende fuertemente de los niveles de depósitos, debido al reducido volumen de su mercado de capitales y a la ausencia de inversiones externas de los últimos años. Aun cuando los niveles de liquidez son actualmente razonables, no puede garantizarse que estos niveles no se verán reducidos en el futuro debido a condiciones económicas adversas que podrían afectar negativamente la actividad del Banco.

Si, en el futuro, la confianza de los depositantes se debilitara y hubiera una contracción en la base de los depósitos, esta pérdida de la confianza y contracción de los depósitos tendrían un importante impacto negativo sobre la capacidad de las entidades financieras, incluido el Banco, para operar como intermediarios financieros. Si el Banco no pudiera actuar como intermediario financiero y desarrollar de otra manera sus actividades en la forma habitual, los resultados de sus operaciones y su situación patrimonial y financiera podrían verse significativamente afectados o limitados.

El crecimiento y la rentabilidad del sistema financiero argentino dependen en parte de la evolución del financiamiento a largo plazo.

Como consecuencia de la crisis económica global de 2008, el sector bancario de Argentina sufrió una significativa desaceleración. Esta tendencia se revirtió hacia fines de 2009 y el sistema financiero argentino creció significativamente. Los préstamos al sector privado crecieron aproximadamente 30,8% en 2013, 20,3% en 2014, 37,1% en 2015, 31,4% en 2016, 51,7% en 2017 y tuvieron un crecimiento de un 29,2% interanual en abril del 2018 en el sistema financiero en su totalidad, según datos del Banco Central.

Dado que la mayoría de los depósitos a plazo son depósitos a corto plazo con vencimientos inferiores a tres meses, una parte sustancial de los préstamos tienen el mismo vencimiento, y hay una porción reducida de líneas de crédito a largo plazo.

La incertidumbre respecto de las tasas de inflación futuras es el principal obstáculo para acelerar la recuperación del crédito a largo plazo del sector privado de Argentina. Esta situación ha tenido, y es posible que continúe teniendo, un impacto significativo sobre la oferta y demanda de préstamos a largo plazo dado que los prestatarios buscan cubrirse contra el riesgo de inflación a través de préstamos a tasa fija y los prestamistas lo hacen ofreciendo préstamos a tasa variable.

Si los plazos de la actividad de intermediación financiera no se amplían, la posibilidad de las entidades financieras, incluso del Banco, de generar ganancias resultará afectada en forma negativa.

Mayor competencia y consolidación en el sector bancario y financiero podrían afectar de manera adversa las operaciones del Banco.

El Banco espera que la competencia en el sector bancario y financiero continúe aumentando. Esta mayor competencia en el sector bancario y financiero podría reducir los precios y márgenes y el volumen de operaciones y participación de mercado del Banco. Más aún, una mayor competencia de parte de entidades financieras controladas directa o indirectamente por empresas estatales o públicas (que tienen un menor costo para financiarse) podría ejercer mayor presión en la determinación de precios y márgenes por parte del Banco. Por lo tanto, los resultados de las operaciones del Banco podrían verse seriamente afectados.

La exigibilidad de los derechos de los acreedores en Argentina puede estar sujeta a limitaciones, y ser onerosa y tediosa.

Para proteger a los deudores que resultaron afectados por la crisis económica de 2001 y 2002, el gobierno nacional, a principios de 2002, adoptó medidas por las que suspendió las acciones para hacer valer los derechos de los acreedores ante la falta de pago del deudor, incluidas ejecuciones de hipotecas y pedidos de quiebra.

Aunque estas medidas fueron levantadas, podrían ser restablecidas en el futuro o el gobierno podría adoptar otras medidas que limiten los derechos de los acreedores. Cualquier medida que restrinja la posibilidad de los acreedores, incluido el Banco, de iniciar acciones legales para el cobro de préstamos impagos o que limite los derechos de los acreedores en general podría tener un efecto sustancialmente adverso en el sistema financiero y en el negocio del Banco.

La Ley de Defensa del Consumidor puede limitar algunos derechos del Banco y sus subsidiarias.

La Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240, con sus modificatorias o normas complementarias (la “Ley de Defensa del Consumidor”) establece una serie de normas y principios para la defensa de los derechos de los consumidores. La Ley de Defensa del Consumidor no contiene disposiciones específicas para su aplicación en relación con actividades financieras, pero contiene disposiciones generales que podrían ser utilizadas como argumentos para respaldar su aplicación, según ha sido previamente interpretada en diversos precedentes legales. Adicionalmente, el texto del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ha recogido los principios de la Ley de Defensa del Consumidor y ha establecido su aplicación a los contratos del sector bancario.

La aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor por las autoridades administrativas y tribunales federales, nacionales, provinciales y municipales es mayor. Por otra parte, las autoridades administrativas y judiciales han dictado varias normas y regulaciones tendientes a reforzar la protección del consumidor. En este contexto, la Comunicación “A” 5990 del Banco Central, complementada y modificada, otorga una amplia protección a los clientes de servicios financieros, limitando las comisiones y cargos que las entidades financieras pueden válidamente cobrar a sus clientes. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la Acordada N° 32/2014, por la que creó el Registro Público de Procesos Colectivos a efectos de inscribir ordenadamente todos los procesos colectivos (demandas colectivas) radicados ante los tribunales del Poder Judicial de la Nación. Más aún, en abril de 2016 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la Acordada 12/2016 aprobando la reglamentación para actuar sobre demandas colectivas, complementando la Acordada 32/2014, que ha tenido vigencia para las demandas presentadas a partir del primer día hábil de octubre de 2016 y continuará vigente hasta que el Congreso sancione una ley que regule las demandas colectivas. En caso de que se determinara que el Banco o sus subsidiarias son responsables de violar las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor, las potenciales sanciones podrían limitar los derechos del Banco o de sus subsidiarias, por ejemplo, al limitar su capacidad para cobrar los pagos adeudados por los servicios y créditos otorgados por el Banco y, por lo tanto, podrían afectar en forma adversa los resultados financieros de sus operaciones.

Con fecha 18 de septiembre de 2014, se crea el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo por Ley N° 26.993 a fin de atender las controversias suscitadas entre consumidores o usuarios y proveedores o prestadores en el plazo máximo de 30 días, incluidas sanciones para las empresas que no comparezcan en las audiencias.

La Ley N° 25.065 (modificada por Ley N° 26.010 y Ley N° 26.361, la “Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito”) establece diversas regulaciones obligatorias diseñadas para proteger a los titulares de tarjetas de crédito. Igualmente que con la Ley de Defensa del Consumidor, ha aumentado la aplicación de esta ley por parte de las autoridades administrativas y tribunales de competencia federal, nacional, provincial y municipal. Más aún, autoridades administrativas y judiciales han dictado varias normas y regulaciones destinadas a reforzar la protección de los consumidores.

Asimismo, las normas que reglamentan el negocio de las tarjetas de crédito establecen topes variables sobre las tasas de interés que las entidades financieras pueden cobrar a sus clientes y las comisiones que pueden cobrar a los establecimientos comerciales. Más aún, existen disposiciones legales generales por las que los tribunales podrían reducir las tasas de interés y las comisiones pactadas por las partes en base a que son excesivamente elevadas. El 31 de marzo de 2017, el Banco Central emitió la Comunicación “A” 6212 vigente a partir del 1 de abril de 2017, reduciendo las comisiones sobre las ventas con tarjetas de crédito y débito de manera gradual anual. De acuerdo con la Comunicación “A” 6212, la comisión máxima sobre las ventas con tarjeta de crédito en 2017 fue del 2%, mientras que para 2018 es del 1,85% y para 2019, 2020 y 2021 en adelante, será del 1,65%, 1,50% y 1,30%, respectivamente. La comisión máxima para compras con tarjetas de débito en 2017 fue del 1%, para el 2018 es del 0,90% y para los años 2019, 2020 y 2021 en adelante, será del 0,80%, 0,70% y 0,60%, respectivamente.

A la fecha del presente Prospecto, existe un proyecto de ley presentado en el Congreso, el cual ha conseguido dictamen para ser tratado en la Cámara de Senadores, que tiene en miras la reducción de las comisiones que los comercios pagan a las entidades financieras del 3 al 1,5% en tarjetas de crédito y del 1 al 0,5% en las tarjetas de débito (modificando el esquema de baja gradual acordado con la industria por el BCRA, por una baja inmediata) y, simultáneamente, al recorte de los intereses compensatorios y punitivos aplicados por las tarjetas a los usuarios. Asimismo modifica la base de cálculo empleada para el cobro de las comisiones y se limitan los cargos administrativos por renovación del contrato de emisión de las tarjetas de débito, crédito y compra, los cuales no podrán superar la variación de la inflación. Si bien el proyecto mencionado está todavía bajo análisis, su aprobación podría tener un impacto adverso en la capacidad del Banco de cobrar comisiones a sus clientes o a los comercios, lo cual podría afectar negativamente su rentabilidad.

Patagonia considera que esta reducción legal en el cobro de comisiones máximas impactará en sus ingresos por comisiones de tarjetas de crédito y débito, reduciendo sus ingresos por servicios totales. Actualmente Patagonia analiza mitigantes ante el impacto de esta nueva reglamentación.

Si Patagonia no logra mitigar los efectos de estas nuevas normas, podrían reducirse las comisiones que cobra por sus productos de tarjetas de crédito, y afectar sustancial y adversamente su situación patrimonial y financiera y los resultados de sus operaciones.

Demandas colectivas contra las entidades financieras por un monto indeterminado pueden afectar de manera adversa la rentabilidad del sistema financiero y, en particular, del Banco.

La Constitución Nacional y la Ley de Defensa del Consumidor contienen ciertas disposiciones respecto de demandas colectivas. Sin embargo, los lineamientos en materia procesal para entablar y tramitar demandas colectivas son limitados. A pesar de ello, los tribunales argentinos han admitido las demandas colectivas en determinados casos, incluidos varios litigios contra entidades financieras en relación con “intereses similares”, tales como presuntos cargos excesivos en los productos y tasas de interés, y asesoramiento en la venta de títulos públicos. Algunos de estos litigios fueron transados extrajudicialmente. Estas transacciones han involucrado típicamente un compromiso por la entidad financiera de ajustar las comisiones y cargos. Véase “INFORMACIÓN DEL EMISOR – Procedimientos legales y administrativos”. Si las actoras resultan favorecidas respecto de las entidades financieras, su éxito podría tener un efecto adverso sobre el sector financiero y el negocio del Banco.

Es posible que en el futuro fallos judiciales y administrativos aumenten el grado de protección otorgado a los deudores y clientes del Banco, o se pronuncien a favor de reclamos presentados por grupos o asociaciones de consumidores. Esta situación podría afectar la capacidad de las entidades financieras, como el Banco, de fijar

libremente los cargos, las comisiones o los gastos por la prestación de sus servicios y productos, afectando en consecuencia su negocio y los resultados de sus operaciones.

El Banco opera en un entorno altamente regulado y sus operaciones se encuentran sujetas a las regulaciones y medidas adoptadas por diversas dependencias regulatorias.

Las entidades financieras se encuentran sujetas a importante regulación en relación con las funciones que históricamente han sido determinadas por el Banco Central y otras autoridades regulatorias. El Banco Central podría penalizar al Banco, así como también a su subsidiaria GPAT, en caso de incumplimiento de las normas aplicables. De igual modo, la CNV, que autoriza la oferta de títulos valores del Banco y regula los mercados públicos de Argentina, puede imponer sanciones al Banco y a su Directorio por violación de las normas de gobierno societario. Asimismo, de conformidad con la Ley N° 26.831, la CNV podrá designar veedores con facultad de veto respecto de las resoluciones adoptadas por el Directorio del Banco y temporalmente remover al Directorio cuando, según determinación de la CNV, se hubieran vulnerado los derechos o intereses de los bonistas o accionistas minoritarios. La Unidad de Información Financiera (“UIF”) reglamenta los asuntos relacionados con el lavado de activos y tiene facultades para supervisar el cumplimiento normativo por parte de las entidades financieras y, eventualmente, imponer sanciones. Tales agencias regulatorias podrían iniciar acciones contra el Banco, sus accionistas o directores y, en consecuencia, imponer sanciones al Banco o cualquiera de sus subsidiarias.

Además de las regulaciones propias de su sector, el Banco está sujeto a una gran variedad de regulaciones nacionales, provinciales y municipales y a la supervisión generalmente aplicable a las empresas que operan en Argentina, incluidas las leyes y regulaciones en materia laboral, previsional, salud pública, defensa del consumidor, medioambiente, competencia y controles de precios.

Específicamente, se dictaron una serie de regulaciones desde principios de 2012 hasta la asunción del Presidente Macri, que incorporaron requisitos y restricciones para las entidades financieras, entre ellas las siguientes: (i) líneas de crédito obligatorias para la inversión productiva, con tasas de interés máximas reguladas; (ii) la obligación de obtener la autorización previa para implementar nuevas comisiones para nuevos productos y/o servicios ofrecidos, y para aumentar las existentes; (iii) exigencias sobre encajes en el Banco Central; y (iv) normas que limitan la capacidad de las entidades financieras de registrar retribuciones ni utilidades por los productos de seguros que sus usuarios deben contratar como condición para acceder a los servicios financieros. Véase “El Marco Regulatorio del Sistema Bancario Argentino—Regulaciones sobre tasa de interés y comisiones”.

En 2012, el Banco Central amplió las exigencias de capital para las entidades financieras siguiendo la directriz de Basilea II, así como también diversas otras medidas relacionadas con Basilea III, incluso respecto del capital, endeudamiento y liquidez. Véase “El Marco Regulatorio del Sistema Bancario Argentino— Requisitos de liquidez y solvencia - Exigencias de capital mínimo”.

En julio de 2016, mediante Comunicación “A” 6013, modificada por la Comunicación “A” 6464, el Banco Central eliminó el requisito sobre capitales mínimos que debían mantener las entidades financieras luego de la distribución de dividendos. Asimismo, desde enero de 2016, por Comunicación “A” 5827 emitida por el Banco Central, existen exigencias sobre márgenes adicionales de capital, compuestos por un margen de conservación de capital y un margen contracíclico. Según estas normas, el margen de conservación de capital es del 2,5% del monto de los activos ponderados por riesgo (“APR”), y en el caso de entidades consideradas por el Banco Central como de importancia sistémica (“D-SIB”), que no es el caso del Banco a la fecha del presente Prospecto, el margen será aumentado al 3,5% del monto de APR. El margen contracíclico debe estar comprendido dentro de un rango del 0% al 2,5% de APR. Según Comunicación “A” 5938, modificada por Comunicación “A” 6013, el margen contracíclico aplicable es actualmente del 0%. Véase “El Marco Regulatorio Argentino – Requisitos de liquidez y solvencia – Requisitos aplicables a la distribución de dividendos”.

Adicionalmente, con fecha 10 de mayo de 2018, el BCRA emitió la Comunicación “A” 6507 estableciendo que la posición global neta negativa en moneda extranjera –en promedio mensual de saldos diarios convertidos a pesos al tipo de cambio de referencia del cierre del mes anterior al de cómputo de esta relación– no podrá superar el 30 % de la RPC del mes anterior al que corresponda. Si bien actualmente la posición global neta positiva en moneda extranjera no podrá superar el 5% de la RPC o los recursos propios líquidos, lo que sea menor, en virtud de la comunicación “A” 6526, con vigencia desde el 18 de junio de 2018, el BCRA admite que dicha posición pueda llegar hasta el 30% de la RPC o los recursos propios líquidos –lo que sea menor, en tanto el exceso total respecto del límite general se origine únicamente como consecuencia de: (i) incremento de la

posición en letras del Tesoro Nacional en Dólares Estadounidenses respecto de las mantenidas al 15 de junio de 2018; y/o (ii) posición en letras del Tesoro Nacional en Dólares Estadounidenses al 15 de junio de 2018 mantenidas en exceso al límite vigente a esa fecha.

El Banco Central puede establecer encajes. En mayo de 2016, el Banco Central aumentó estos depósitos vigentes gradualmente hasta junio y julio de 2016.

El Banco Central también ha establecido limitaciones a la posición global neta positiva en moneda extranjera y a la posición global neta en moneda extranjera de las entidades financieras, que han sido modificadas en diversas oportunidades, para impedir que disminuyan aún más las reservas de divisas del Banco Central. Al 1° de enero de 2017, la posición global neta positiva en moneda extranjera (excluidas las operaciones a término) no puede superar el 25% de la Responsabilidad Patrimonial Computable (“RPC”) de la entidad financiera o los recursos propios líquidos, lo que sea menor, en cada caso respecto del mes precedente aplicable. Para mayor detalle sobre las modificaciones, véase “El Marco Regulatorio del Sistema Bancario Argentino— Posición global neta en moneda extranjera”. Para una descripción de la RPC, véase “El Marco Regulatorio del Sistema Bancario Argentino – Requisitos de liquidez y solvencia – Descripción de las regulaciones de Capital Nivel 1 y Nivel 2”.

Asimismo, según la Comunicación “A” 5785 (con sus modificaciones) emitida por el Banco Central, sanciones impuestas por el Banco Central, la UIF, la CNV y/o la Superintendencia de Seguros de la Nación (“SSN”) a entidades financieras y/o sus autoridades podrían resultar en la revocación de sus licencias para operar como entidad financiera. Tal revocación podrá tener lugar cuando, en opinión del Directorio de Banco Central, se hubiera producido un cambio sustancial en las condiciones consideradas necesarias para mantener dicha licencia, incluidas aquellas relacionadas con la idoneidad, experiencia, probidad e integridad moral de (i) los miembros del directorio de una entidad financiera (directores, consejeros o autoridades equivalentes), (ii) sus accionistas, (iii) los integrantes del consejo de vigilancia, y (iv) otros, como sus gerentes.

Recientemente, a través de la Comunicación “A” 6526, los encajes bancarios se incrementaron 5 puntos porcentuales para los depósitos a la vista y a plazo, con ciertas excepciones, en forma escalonada y en dos etapas, que comenzaron en junio y julio de 2018, en donde se aumentó tres y dos puntos, respectivamente, del porcentaje de inmovilización de los depósitos. El Banco Central dispuso que los fondos inmovilizados podrían ser integrados mediante “Bonos del Tesoro Nacional” en tasa fija con vencimiento en noviembre de 2020.

La ausencia de un marco regulatorio estable o la imposición de medidas que puedan afectar la rentabilidad de las entidades financieras y limitar la posibilidad de cubrir sus posiciones contra las fluctuaciones de moneda, podrían resultar en importantes limitaciones a las decisiones de las entidades financieras, como es el caso del Banco, en relación con la asignación del activo. A su vez, esta situación podría provocar incertidumbre y afectar en forma negativa las futuras actividades financieras y el resultado de las operaciones del Banco. Por otra parte, las leyes y normas actuales o futuras podrían requerir gastos sustanciales o de otra forma tener un efecto adverso sobre las operaciones consolidadas del Banco.

La exposición a múltiples leyes y normas provinciales y municipales podría afectar adversamente el negocio o los resultados de las operaciones del Banco.

Argentina tiene un sistema federal de gobierno organizado en 23 provincias y una ciudad autónoma (Buenos Aires), cada una de las cuales, de conformidad con la Constitución Nacional, tiene potestad para sancionar sus propias leyes tributarias y otras cuestiones. Asimismo, los gobiernos municipales de cada provincia tienen amplias facultades para regular estas cuestiones. Dado que las actividades del Banco están situadas en diferentes provincias, el Banco también está sujeto a una gran variedad de leyes y regulaciones provinciales y municipales. Si bien el Banco no ha experimentado efectos sustanciales adversos en este sentido, los futuros desarrollos de las leyes provinciales y municipales en materia de impuestos, las reglamentaciones provinciales u otras cuestiones podrían afectar de manera adversa el negocio o los resultados de las operaciones del Banco.

Procedimientos administrativos iniciados por autoridades impositivas de ciertas provincias contra entidades financieras y modificaciones a las leyes de impuestos aplicables al Banco podrían generar pérdidas para el Banco.

Luego de la crisis financiera argentina de 2001 y 2002, se emitieron bonos con el objeto de compensar a las entidades financieras por las pérdidas que habrían incurrido en otro caso como resultado de las medidas implementadas para enfrentar la crisis financiera, en particular, la pesificación asimétrica (el “Bono Compensatorio”). La administración de ingresos públicos de la Ciudad de Buenos Aires, así como también ciertas autoridades impositivas de ciertas provincias, han iniciado procedimientos administrativos contra entidades financieras a fin de cobrar mayores impuestos a los ingresos brutos de tales entidades a partir de 2002 en adelante. Tales autoridades invocan que el Bono Compensatorio debería estar gravado con impuestos. La decisión final sobre estos procedimientos continúa siendo incierta y las entidades financieras, incluido el Banco, podrán sufrir fuertes pérdidas.

A pesar de que el Banco entiende que ha cumplido con sus obligaciones fiscales según las regulaciones vigentes, y ha contabilizado adecuadamente provisiones para tales riesgos en base a las opiniones y el asesoramiento de sus asesores legales externos y según las normas de contabilidad aplicables, ciertos factores de riesgo pueden tornar inadecuadas tales provisiones. Las autoridades fiscales podrán no estar de acuerdo con el tratamiento impositivo encarado por el Banco, lo que podría conducir a un aumento de sus responsabilidades fiscales.

Más aún, las modificaciones de las actuales regulaciones podrán aumentar la alícuota fiscal que pesa sobre el Banco, y un aumento sustancial en la carga fiscal podría afectar adversamente sus resultados financieros.

Las futuras políticas o reglamentaciones gubernamentales pueden afectar en forma adversa la economía y las operaciones de las entidades financieras.

El gobierno nacional históricamente ha ejercido gran influencia sobre la economía, y las entidades financieras, en particular, han operado en un entorno altamente regulado. Es posible que las leyes y regulaciones vigentes en la actualidad y que rigen la economía o el sector bancario sean objeto de nuevas reformas en el futuro, lo cual podría afectar de manera adversa el negocio, la situación patrimonial y financiera y los resultados de las operaciones del Banco.

Varios proyectos de ley para modificar la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 (la “Ley de Entidades Financieras”) que se han sometido a consideración del Congreso de la Nación proponen reformar diferentes aspectos de la Ley de Entidades Financieras, inclusive la calificación de los servicios financieros como servicio público, el aumento de las regulaciones gubernamentales que afectan las actividades de las entidades financieras e iniciativas para ampliar el acceso a los servicios financieros. Una reforma integral de la Ley de Entidades Financieras tendría un efecto sustancial sobre el sistema bancario en su conjunto. Si se aprobara cualquiera de los proyectos, o si se realizara cualquier otra reforma de la Ley de Entidades Financieras, las reformas que se introduzcan en las normas bancarias podrían tener efectos negativos sobre las entidades financieras en general, como también sobre el negocio, la situación patrimonial y financiera y los resultados de las operaciones del Banco.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Convertibilidad pueden afectar adversamente el crecimiento de la economía argentina.

El 22 de marzo de 2012, el Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 26.739, reformando la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Convertibilidad. Esta nueva ley modificó los objetos del Banco Central (establecidos en su Carta Orgánica) y eliminó ciertas disposiciones que regían anteriormente. De conformidad con los términos de la nueva ley, el Banco Central tendrá como objeto principal promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. El concepto de “reservas de libre disponibilidad” fue eliminado, por lo que el gobierno nacional tendrá acceso a una mayor cantidad de reservas para pagar deuda. Asimismo, esta nueva ley, establece que el Banco Central podrá fijar la tasa y las condiciones de los préstamos otorgados por las entidades financieras.

En lo que respecta a las reservas, si el gobierno nacional resuelve utilizar las reservas del Banco Central para pagar la deuda pública o financiar el gasto público, podría haber una suba de la inflación, lo cual obstaculizaría el crecimiento económico. Más aún, una disminución en las reservas del Banco Central podría afectar de manera adversa la capacidad del sistema financiero argentino para soportar y superar los efectos de una crisis económica (interna o internacional), afectando en forma negativa el crecimiento económico y, a su vez, los resultados consolidados y los resultados de las operaciones del Banco.

Riesgos relacionados con los negocios del Banco

El mercado del Banco podrá verse seriamente afectado por recesiones económicas y, en tal sentido, no puede asegurarse que la estrategia comercial del Banco será exitosa.

La estrategia comercial del Banco es aumentar las operaciones de intermediación financiera y los ingresos por servicios, en particular, de su cartera de clientes conformada por personas humanas de medianos ingresos (clientes minoristas) y por pequeñas, medianas y microempresas. Este mercado es particularmente vulnerable a recesiones económicas y, en caso de producirse una recesión, el crecimiento del mercado bancario podrá declinar y en consecuencia afectar adversamente el negocio del Banco. La economía argentina en su totalidad y el mercado bancario en particular no son lo suficientemente estables como para brindar certeza al Banco de que continuará creciendo la demanda. Por lo tanto, no puede garantizarse que su estrategia de negocios será exitosa.

En particular, el Banco podrá enfrentar, entre otros, los siguientes riesgos relacionados con una recesión económica:

- Una menor demanda de los productos y servicios del Banco, incluso de préstamos, tarjetas de crédito y otros servicios.
- La imposibilidad de sus deudores de cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones vigentes.
- El proceso que utiliza el Banco para estimar pérdidas inherentes a su exposición crediticia requiere juicios complejos, incluso proyecciones de las condiciones económicas y cómo estas condiciones económicas podrían afectar la capacidad de sus deudores de amortizar sus préstamos. El grado de incertidumbre concerniente a las condiciones económicas podrá afectar adversamente la exactitud de sus estimaciones, lo que podrá a su vez impactar en la confiabilidad del proceso y la calidad de sus activos.
- El valor y la liquidez de la cartera de títulos de inversión en poder del Banco podrán verse seriamente afectados.
- El empeoramiento de las condiciones económicas globales podrá demorar la recuperación del sector financiero internacional e impactar en su situación patrimonial y financiera y los resultados de sus operaciones.

Es posible que el Banco no pueda ejecutar con éxito adquisiciones estratégicas u obtener los beneficios esperados de tales adquisiciones.

El Banco ha participado en una cantidad de fusiones y adquisiciones en el pasado, y podrá emprender otras adquisiciones en el futuro como parte de su crecimiento estratégico en el sector de servicios financieros del país.

El Banco podrá enfrentar dificultades para identificar objetivos de adquisición atractivos o no poder adquirir negocios o bienes deseados en términos económicamente aceptables. Asimismo, ciertas obligaciones de no hacer estipuladas en algunas de las líneas de crédito del Banco podrían prohibirle realizar una adquisición atractiva en caso de que las empresas a adquirir participen de una actividad fuera del curso habitual del negocio bancario y el Banco no pudiera obtener el consentimiento requerido del prestamista.

Las adquisiciones que realiza el Banco podrán exponerla a riesgos de obligaciones desconocidas o contingencias de las sociedades o activos adquiridos anteriores a su adquisición. El proceso de investigación o *due diligence* que el Banco realiza para evaluar la situación legal y financiera de las sociedades a adquirir, así como también las garantías o indemnidades contractuales que reciba de los vendedores de las empresas o negocios comprados podrán ser insuficientes para protegerse o verse compensada por cualquier contingencia que pudiera sufrir. Contingencias relevantes originadas en las adquisiciones podrán dañar la actividad y los resultados del Banco. Asimismo, el Banco podrá adquirir sociedades que no estén sujetas a auditorías externas independientes, lo que podrá aumentar los riesgos relacionados con sus adquisiciones.

Además, el Banco podría verse seriamente afectada si no integra exitosamente las operaciones de sus sociedades adquiridas y, como resultado, no pudiera obtener los beneficios que intenta obtener de sus adquisiciones.

En general, la imposibilidad del Banco de obtener efectivamente los beneficios de cualquier adquisición podrá deberse a diversos factores, incluida su imposibilidad de implementar su cultura de empresa en las sociedades que adquiere, integrar sus respectivas operaciones administrativas con las de las sociedades que adquiere o

practicar reducciones de personal anticipadas. Una adquisición podría resultar en la pérdida de empleados clave, la interrupción de su actividad o de la actividad de cualquier empresa adquirida y en la inconsistencia de normas, controles, procedimientos y políticas. Más aún, el éxito de cualquier adquisición estará sujeto en parte a una cantidad de factores económicos y otras circunstancias fuera del control del Banco.

El Banco enfrenta mayores riesgos en tanto nuevas iniciativas de negocios la hacen operar con un espectro mayor de clientes y contrapartes y la exponen a nuevas clases de activos y nuevos mercados.

Adquisiciones estratégicas y una expansión internacional podrá acercar al Banco, directa o indirectamente, a individuos y empresas que no se encuentran dentro de su base de clientes y contrapartes tradicionales, y exponerla a nuevas clases de activos y a nuevos mercados. Tales actividades podrán exponerla a nuevos y mayores riesgos, incluso riesgos asociados con la operación con entidades estatales, temas relacionados con su reputación originados en operar con contrapartes e inversores menos sofisticadas o en relación con la forma en la que estos activos son operados o mantenidos, un mayor escrutinio regulatorio de estas actividades y mayores riesgos crediticios, soberanos y operativos.

El Banco depende de personal clave para su operación actual y futura, cuya pérdida podrá impactar adversamente en sus operaciones.

La operación actual y futura del Banco depende en gran medida del continuo aporte de su gerencia de primera línea y demás personal clave. Su desempeño podría verse seriamente dañado si el Banco pierde los servicios de ciertos funcionarios, ya que podrá no estar en posición de encontrar o contratar reemplazos calificados en condiciones aceptables, lo que podrá impactar adversamente en sus operaciones.

Una mayor competencia, la reducción de la cantidad de participantes en el mercado financiero y menores márgenes sin un correspondiente aumento de los volúmenes de crédito podría afectar adversamente las operaciones y ganancias del Banco.

El Banco prevé que aumente la competitividad en el mercado financiero. Adicionalmente, si la tendencia hacia menores gastos por márgenes financieros no fuera compensada por aumentos en los volúmenes de crédito, la rentabilidad y los resultados de las operaciones del Banco se verá afectada adversamente. Asimismo, El Banco prevé una continua reducción de la cantidad de participantes del mercado, originando, como consecuencia, la generación de bancos más grandes y sólidos que podrán tener mayores recursos que el Banco.

De igual forma, el Banco considera probable un aumento de la competencia en el segmento de pequeñas y medianas empresas. Como resultado, aún si la demanda de productos y servicios financieros de estos mercados continuara creciendo, la competencia podrá afectar seriamente los resultados de las operaciones del Banco disminuyendo los márgenes que puede generar de este segmento de clientes.

Los márgenes promedio anuales entre las tasas de interés sobre los préstamos y los depósitos del sector privado han ido decreciendo en los últimos años como resultado de un aumento de la competencia en el sector financiero, que originó una suba de las tasas de interés sobre los depósitos. Si continuaran bajando los márgenes sin un correspondiente aumento del crédito o corte de gastos, las operaciones y ganancias del Banco podrán verse seriamente afectadas.

Como entidad financiera argentina, cualquier procedimiento de concurso o quiebra contra el Banco estaría sujeto a la autoridad y facultades del Banco Central, que podrá limitar los recursos que de otra forma estarían disponibles y prolongar tales procedimientos.

Según la ley argentina, es el Banco Central el único que puede iniciar procedimientos de quiebra o similares contra entidades financieras luego de haber revocado una licencia bancaria. Si el Banco no pudiera pagar sus deudas a su vencimiento, el Banco Central tomará medidas y revocará su licencia y presentará un pedido de quiebra ante un juzgado comercial. Si el Banco Central tomara medidas, el procedimiento tomará más tiempo y es probable que los recursos de los accionistas se vean limitados. Durante tales procedimientos, el Banco Central debe considerar sus intereses como ente regulador y, como tal, podrá dar prioridad a créditos de otros acreedores y terceros en contra del Banco. Como resultado de tales intervenciones del Banco Central, los accionistas del Banco podrán obtener sustancialmente menos realización de activos que lo que podría obtenerse en cualquier otro procedimiento de quiebra en Argentina, Estados Unidos o cualquier otro país.

El Banco podría sufrir pérdidas en sus carteras de inversión debido a la volatilidad del mercado de capitales y los tipos de cambio, lo que podría afectar adversamente los resultados de sus operaciones.

El Banco podrá sufrir pérdidas en relación con su inversión en títulos de renta fija o variable o títulos de capital y en su posición monetaria debido a, entre otras razones, cambios en los precios de mercado, incumplimientos y fluctuaciones de las tasas de interés y en el tipo de cambio. El deterioro del mercado de capitales podrá originar que el Banco registre pérdidas netas debido a una caída del valor de sus carteras de inversión, además de las pérdidas de las posiciones en operaciones de compra-venta o intermediación originadas por la volatilidad del mercado financiero, aún si la economía no padeciera globalmente. Cualquiera de estas pérdidas podría tener un efecto sustancial adverso en los resultados de las operaciones del Banco.

El valor de mercado de un título con una tasa de interés fija disminuye en general cuando las tasas de interés prevalecientes suben, lo que podrá tener un efecto adverso en las ganancias y situación patrimonial y financiera del Banco. Asimismo, el Banco podrá incurrir en costos (lo que a su vez impactará en sus resultados) a medida que implemente estrategias para reducir una futura exposición a las tasas de interés. El valor de mercado de una obligación con una tasa de interés variable puede verse seriamente afectado al aumentar las tasas de interés, debido a una demora en la implementación de las condiciones de fijación de precios o la imposibilidad de refinanciar a tasas más bajas.

Los aumentos de las tasas de interés podrán reducir ganancias o requerir que el Banco registre pérdidas sobre ventas de sus préstamos o títulos. Si bien las tasas de interés han sido altas en el pasado no puede garantizarse que tales tasas altas continuarán en el futuro.

La baja de las tasas de interés, a pesar de que es probable que reduzca los costos de financiación, podría impactar en forma adversa en los ingresos que reciba el Banco originados en sus inversiones en títulos valores y en el otorgamiento de crédito.

Interrupciones o fallas en los sistemas informáticos del Banco podrían afectar en forma adversa sus operaciones y situación patrimonial y financiera.

Como una entidad financiera, el éxito del Banco depende de una operación eficiente e ininterrumpida de sus sistemas de comunicación y hardware, incluso aquellos sistemas relacionados con la operación de sus cajeros automáticos y su sitio web. Las operaciones y sistemas de comunicación y hardware podrían verse dañados o interrumpidos por hechos tales como incendios, inundaciones, fallas de energía, telecomunicaciones defectuosas, virus informáticos, robos electrónicos o físicos y hechos o interrupciones similares. Cualquiera de tales hechos podría originar interrupciones del sistema, demoras y la pérdida de datos críticos y podría impedir que el Banco opere o lo haga a niveles óptimos. Asimismo, la planificación de la recuperación de desastres podrá no ser suficiente para cubrir todos estos hechos y el Banco podría contar con una cobertura de seguros inadecuada o tener límites que le impedirían recibir una indemnización total de las pérdidas que sufra en una interrupción. Si ocurriera cualquiera de estos hechos, ello podría dañar su reputación, ser costoso de corregir y afectar adversamente las operaciones, así como también los resultados de las operaciones y la situación patrimonial y financiera del Banco.

El Banco podrá necesitar un mayor capital en el futuro y, de no poder obtenerlo o de no obtenerlo oportunamente o en condiciones aceptables, ello podrá afectar negativamente su situación patrimonial y financiera y sus ganancias.

A fin de que el Banco continúe creciendo, siendo competitivo, participe en nuevos negocios, reemplace las pérdidas de su cartera de préstamos o cumpla con sus exigencias de capital mínimo y liquidez, podrá requerir un mayor capital en el futuro. Su capacidad de obtener capital adicional en el futuro está sujeta a incertidumbres, entre ellas:

- Su futura situación patrimonial y financiera, los resultados de sus operaciones y su flujo de efectivo;
- Las aprobaciones regulatorias de gobierno;
- Las obligaciones de no hacer y compromisos financieros incluidos en ciertas facilidades de crédito que pueden afectar su posibilidad de obtener capital;

- Las condiciones de mercado generales para la obtención de fondos por parte de bancos comerciales y otras entidades financieras; y
- La situación política y demás condiciones prevalecientes en Argentina y otras jurisdicciones.

Es posible que el Banco no pueda obtener capital adicional o que no pueda obtenerlo oportunamente o en condiciones aceptables, lo que podrá afectar negativamente su situación patrimonial y financiera y sus ganancias.

El Banco podría no detectar actividades de lavado de activos, financiación de actos de terrorismo y otras actividades ilegales o inapropiadas, o no detectarlas en su totalidad u oportunamente, lo que podría llevarla a incurrir obligaciones adicionales y dañar su actividad y reputación.

El Banco debe cumplir con todas las leyes aplicables y demás regulaciones contra lavado de dinero, financiación al terrorismo en Argentina. Estas leyes y regulaciones requieren, entre otros temas, que el Banco adopte e implemente políticas y procedimientos que involucren procesos de “conocer al cliente” y de reporte de operaciones sospechosas y relevantes a las autoridades regulatorias aplicables. Aún a pesar de que el Banco ha adoptado políticas y procedimientos tendientes a detectar e impedir el uso de su red bancaria para actividades de lavado de activos y de financiación del terrorismo por organizaciones terroristas y otras organizaciones individuales generales, estas políticas y procedimientos en ciertos casos han sido adoptados muy recientemente y podrán no ser exitosos para eliminar completamente el riesgo de que el Banco hubiera sido o estuviera siendo actualmente utilizado por otras partes, sin su conocimiento, para participar en actividades relacionadas con actividades de lavado de activos u otras actividades ilegales o inapropiadas. En caso de que el Banco no hubiera detectado o no detectara tales actividades ilegales, las agencias de gobierno del país correspondientes a las que reporta, tales como la UIF, gozan de la facultad y poderes para llamar a cualquiera de los directores, gerentes o empleados del Banco a declarar o cooperar en investigaciones, incluso proporcionando información a la entidad regulatoria correspondiente, así como imponer multas y otras penalidades, incluso sanciones penales al Banco o a cualquiera de sus directores. Asimismo, el negocio y la reputación del Banco podrían verse seriamente afectados en caso de que sus clientes la utilizaran para actividades de lavado de activos o con objetivos ilegales o inadecuados.

Los estatutos sociales del Banco no contienen limitaciones respecto de ciertas actividades de los directores o respecto de su edad de retiro.

Los estatutos sociales del Banco no contienen limitaciones respecto de la capacidad de los directores de (i) votar una propuesta, acuerdo o contrato respecto del cual el director tuviera un interés personal, (ii) si no se reuniera quórum, votar respecto de su remuneración o la remuneración de cualquier otro director, o (iii) contraer préstamos, sin perjuicio de ciertas regulaciones correspondientes aplicables. Los estatutos sociales del Banco no requieren tampoco que los directores se retiren a cierta edad o cuenten con una cierta cantidad de acciones a fin de convertirse en director.

Cambios en las condiciones de mercado y sus riesgos asociados, incluso la volatilidad de la tasa de interés y el tipo de cambio, podrían afectar de manera sustancial y adversa la situación patrimonial y financiera consolidada y los resultados de las operaciones del Banco.

Los cambios en las condiciones de mercado afectan en forma directa e indirecta al Banco. El riesgo de mercado, o el riesgo de que el valor del activo o pasivo o de los ingresos resulten afectados de manera adversa por cambios en las condiciones de mercado, incluida la volatilidad de la tasa de interés y el tipo de cambio, es inherente a los productos e instrumentos asociados con las operaciones del Banco, incluidos los préstamos, depósitos, deuda a largo plazo y préstamos a corto plazo.

En particular, los resultados de las operaciones del Banco dependen en gran medida de sus ingresos netos por intereses, estos representaron el 79,0% , 71,7%, 74,7% en los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2018 2017 y 2016, respectivamente. Las variaciones en las tasas de interés de mercado podrían afectar las tasas de interés obtenidas respecto de los activos que devengan intereses de manera diferente de las tasas de interés pagadas respecto de los pasivos que devengan intereses, lo que llevaría a una disminución de los ingresos netos por intereses del Banco o una reducción de la demanda de los clientes de sus productos de préstamo o depósito. Asimismo, los aumentos en las tasas de interés podrían resultar en mayores obligaciones del servicio de deuda para sus clientes, lo que a su vez resultaría en altos niveles de morosidad o desalentaría a los clientes a tomar préstamos. Las tasas de interés son altamente sensibles a muchos factores ajenos al control del Banco, incluidas

las políticas de reservas del Banco Central, la regulación del sector financiero de Argentina, las condiciones económicas y políticas internas e internacionales y otros factores.

El Banco controla el riesgo de tasa de interés utilizando la sensibilidad del Margen Financiero Neto, que es la diferencia entre el retorno sobre activos y el costo financiero de sus pasivos financieros en base a un marco de un año y un movimiento paralelo de 100 puntos básicos (1%) en las tasas de interés de mercado.

El Banco también está expuesta a un riesgo del tipo de cambio como resultado de diferencias entre activos y pasivos denominados en diferentes monedas. En caso de que cualquiera de estos riesgos se materialice, el valor de mercado de sus activos y pasivos podría verse seriamente afectado.

Las variaciones en las tasas de interés y los tipos de cambio podrían afectar de manera adversa el negocio, el futuro desempeño financiero y el precio de los títulos del Banco.

La reducción de la calificación de crédito del Banco podría afectar en forma adversa su liquidez y posición competitiva, y aumentar sus costos financieros.

Los costos financieros del Banco y su acceso al mercado de capitales dependen significativamente de su calificación de crédito. Estas calificaciones son otorgadas por sociedades calificadoras de riesgo, y el Banco no puede asegurar que sus calificaciones permanecerán estables durante un determinado período de tiempo o que no serán reducidas o retiradas. Las calificaciones de crédito también son importantes para el Banco respecto de su competitividad en ciertos mercados y al procurar participar en operaciones de largo plazo, incluso operaciones con derivados en el mercado abierto. Una reducción de sus calificaciones de crédito podría aumentar sus costos financieros y limitar su acceso al mercado de capitales. Esto a su vez podría reducir sus ganancias y afectar en forma adversa la liquidez del Banco.

Incumplimientos de otras entidades financieras podrían afectar adversamente el mercado de capitales en general y al Banco en particular.

La solidez comercial de muchas entidades financieras puede estar estrechamente interrelacionada por operaciones de crédito, compra-venta o intermediación, compensación u otras relaciones u operaciones entre las entidades y las contrapartes. Como resultado, problemas o un incumplimiento de una entidad o contraparte podrían originar serios problemas de liquidez o pérdidas, o incumplimientos, de otras entidades. Esto a menudo se refiere como “riesgo sistémico” y puede afectar adversamente a intermediarios financieros, como cajas de valores, cámaras de compensación, bancos, sociedades de bolsa y mercados, con los que el Banco interactúa diariamente.

Los rendimientos pasados pueden no representar los resultados futuros del Banco.

El Banco ha incluido información relevante en el presente Prospecto relacionada con su rendimiento financiero pasado. Al considerar esta información, los inversores deberán tener presente que el rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de los resultados futuros, y que no puede garantizarse que el Banco logrará resultados similares. Las condiciones futuras imperantes podrán requerir realizar actos que difieran de aquéllos contemplados en el presente. Véase “INFORMACIÓN DEL EMISOR”. Pueden existir diferencias entre las expectativas de los inversores y los resultados efectivamente obtenidos debido a hechos y circunstancias que frecuentemente no ocurren tal como se prevén, y tales diferencias pueden ser sustanciales y adversas. Así también, las condiciones económicas generales, que no pueden predecirse, podrán también tener un impacto sustancial adverso en la confiabilidad de las proyecciones de la gerencia. El Banco podrá utilizar el producido de esta oferta a un ritmo menor o mayor al que históricamente emplea su capital, lo que podrá afectar negativamente su capacidad de crear valor de largo plazo para sus accionistas. Tales ritmos diferentes para utilizar sus fondos son otra razón por la es posible que el Banco no logre retornos similares a los anteriores descriptos en este Prospecto.

Parte del negocio del Banco se desarrolla a través de sus subsidiarias. Su capacidad para invertir en sus desarrollos comerciales dependerá parcialmente de la capacidad de sus subsidiarias de generar dividendos para el Banco.

El Banco desarrolla parte de su negocio a través de sus subsidiarias, siendo la principal GPAT. La capacidad del Banco de invertir en sus desarrollos de negocios y cumplir con sus obligaciones está sujeta en cierta medida a los fondos generados por sus subsidiarias y la capacidad de dichas subsidiarias de pagar dividendos en efectivo. En

ausencia de dichos fondos, el Banco podría tener que recurrir a opciones de financiamiento a precios, tasas de interés y condiciones no atractivos. Asimismo, dicho financiamiento podría no estar disponible cuando el Banco lo necesite.

Cada una de las subsidiarias del Banco es una persona jurídica separada y debido a restricciones legales, regulatorias o contractuales, como también a su situación patrimonial y financiera y a requisitos operativos, es posible que no puedan distribuir dividendos al Banco. La capacidad del Banco de desarrollar su negocio, cumplir con sus obligaciones de pago y pagar dividendos a sus accionistas podría resultar limitada por restricciones que impidan a sus subsidiarias pagar dividendos al Banco. Los inversores deben tener en cuenta estas restricciones al analizar los desarrollos de inversiones del Banco y su capacidad para cancelar sus obligaciones. Véase “Dividendos y política de dividendos”.

Es posible que las políticas, procedimientos y métodos de gestión de riesgo de mercado, crédito y operativo del Banco no sean totalmente efectivos para mitigar su exposición a riesgos no identificados o imprevistos.

Es posible que las técnicas y estrategias de gestión de riesgo de mercado y crédito del Banco y otras herramientas de modelización estadística no sean totalmente efectivas para mitigar su exposición al riesgo en todos los mercados económicos o contra todo tipo de riesgo, incluso riesgos que el Banco no pueda identificar o anticipar. Algunas de sus herramientas y métricas cualitativas para la gestión de riesgos se basan en su uso del comportamiento del mercado histórico observado. El Banco aplica herramientas estadísticas y otras a estas observaciones para arribar a cuantificaciones de su exposición al riesgo. Estas herramientas y métricas cualitativas pueden no ser exitosas para predecir futuras exposiciones a riesgos. Estas exposiciones a riesgos podrían, por ejemplo, originarse en factores que el Banco no pudo prever o evaluar correctamente en sus modelos estadísticos. Ello limitaría su capacidad de gestionar sus riesgos. Como resultado, sus pérdidas podrían ser significativamente mayores que lo que indican las mediciones históricas. Además, su modelización cuantificada no toma en cuenta todos los riesgos. Su acercamiento más cualitativo para gestionar tales riesgos podría resultar insuficiente, exponiéndola a pérdidas sustanciales. Si los clientes actuales o potenciales consideraran inadecuada su gestión de riesgo, podrían retirar sus operaciones del Banco, lo que podría dañar su reputación, negocio y resultado de las operaciones del Banco.

Asimismo, los negocios del Banco dependen de la capacidad de procesar una gran cantidad de operaciones de forma eficiente y exacta. Podrán arrojar pérdidas a causa de un personal ineficaz, procesos y sistemas de control interno inadecuados o fallidos, fallas del sistema informático o hechos externos que interrumpan las operaciones comerciales habituales. El Banco enfrenta también el riesgo de que el diseño de sus controles y procedimientos para mitigar el riesgo operativo resulte inadecuado o sea limitado. El Banco ha sufrido pérdidas por riesgos operativos en el pasado y podría sufrir sustanciales pérdidas por riesgo operativo en el futuro.

Las estimaciones del Banco y sus reservas constituidas por riesgo de crédito y por riesgo de incobrabilidad pueden resultar inexactas o insuficientes, lo que podría afectar de manera sustancial y adversa la calidad de sus activos y su situación patrimonial y financiera y el resultado de sus operaciones.

El Banco está expuesto a riesgo de crédito por determinados productos, entre ellos los préstamos para consumo, préstamos comerciales y otros créditos. Las variaciones en el nivel de ingresos de los prestatarios del Banco, las subas de la tasa de inflación o el aumento en las tasas de interés podrían tener un efecto negativo en la calidad de su cartera de préstamos, lo que la llevaría a aumentar los cargos por incobrabilidad, y, por ende, resultaría en una reducción de los ingresos o en pérdidas para el Banco.

El Banco estima y constituye reservas por riesgo de crédito y por riesgo de incobrabilidad. Este proceso implica complejos juicios subjetivos, incluso proyecciones de las condiciones económicas y presunciones acerca de la capacidad de los prestatarios para pagar sus préstamos.

En general, si el Banco no puede controlar de manera eficaz el nivel de préstamos en situación irregular o mala calidad crediticia en el futuro, o si las provisiones por riesgo de incobrabilidad son insuficientes para cubrir futuras pérdidas, la calidad de los activos y la situación patrimonial y financiera y resultados de las operaciones del Banco podrían verse afectados de manera sustancial y adversa.

Los préstamos de cumplimiento irregular del Banco pueden impactar negativamente en el resultado de sus operaciones.

El Banco no puede asegurar a los inversores que podrá controlar efectivamente el nivel de los préstamos con deterioro de valor en su cartera total de préstamos. En particular, el monto de sus préstamos de cumplimiento irregular informado podrá aumentar en el futuro como resultado del crecimiento de su cartera total de préstamos, incluso como resultado de las carteras de préstamos que el Banco pudiera adquirir en el futuro, o de factores fuera del control, como el impacto de tendencias económicas y acontecimientos políticos, hechos que afecten a ciertos sectores de la industria o hechos que afecten a los mercados financieros y a las economías globales. Como parte de su estrategia comercial, el Banco procura aumentar el otorgamiento de créditos y otros servicios a personas y PyME, que son los que tienen mayor probabilidad de verse afectados adversamente por recesiones económicas en comparación con las grandes empresas y las personas de alta renta que cuentan con mayores recursos. En consecuencia, en el futuro el Banco podrá experimentar mayores niveles de activos con deterioro de valor, lo que podría resultar en mayores cargos por incobrabilidad, lo que a su vez afectará la situación patrimonial y financiera y los resultados de las operaciones del Banco. Parte de su estrategia de crecimiento actual es también aumentar el volumen de la cartera de tarjetas de crédito, a una tasa igual o levemente mayor que la del mercado, lo que podrá aumentar el nivel de préstamos de cumplimiento irregular de su cartera de préstamos. Asimismo, la incorporación de nuevos productos podrá generar mayores pérdidas crediticias.

Al 31 de diciembre de 2018, la previsión por riesgo de incobrabilidad era de Ps. 3.866,31 millones comparada con Ps. 1.949 millones al 31 de diciembre de 2017 y Ps. 1.418 millones al 31 de diciembre de 2016. El Banco entiende que su previsión actual por riesgo de incobrabilidad y otras provisiones son adecuadas para cubrir todas las pérdidas conocidas o que pudieran conocerse en su cartera de préstamos y valores. No obstante, la previsión por riesgo de incobrabilidad actual del Banco podrá no resultar adecuada para cubrir un aumento del monto de los préstamos de situación irregular o cualquier futuro deterioro de la calidad crediticia total de su cartera total de préstamos. Como resultado, si se deteriorara la calidad de sus cartera total de préstamos por cualquier razón, por ejemplo un aumento del crédito otorgado a personas y PyME, el aumento del volumen de la cartera de tarjetas de crédito y la incorporación de nuevos productos, el Banco podrá tener que aumentar sus provisiones por riesgo de incobrabilidad, lo que podrá afectarla en forma adversa. Más aún, no existe un método preciso para predecir las pérdidas crediticias, por lo que el Banco no puede asegurar que sus provisiones por riesgo de incobrabilidad serán suficientes para cubrir las pérdidas efectivamente incurridas. Si el Banco no pudiera controlar o reducir el nivel de sus préstamos de cumplimiento irregular o de baja calidad, ello podría tener un efecto sustancial adverso en el Banco.

Dado que los depósitos a corto plazo son una de sus principales fuentes de fondeo, la repentina disminución en los depósitos a corto plazo podría provocar un aumento en los costos financieros, afectar sus ratios de liquidez y tener un efecto adverso sobre los ingresos del Banco.

Los depósitos constituyen una de las principales fuentes de obtención de fondos del Banco, representando el 80,11% de sus pasivos totales al 31 de diciembre de 2018 comparado con el 81,38,7%, y 83% al 31 de diciembre de 2017 y 2016. Una parte significativa de sus activos tienen vencimientos a plazos más largos, lo que genera un descalce entre los vencimientos de los pasivos y los vencimientos de los activos. Si un número considerable de depositantes retira sus depósitos a la vista o no renueva sus plazos fijos al vencimiento, la posición de liquidez, los resultados de las operaciones y la situación patrimonial y financiera del Banco podrían verse afectadas de manera sustancial y adversa. En caso de una reducción repentina o imprevista de fondos en el sistema bancario, es posible que los mercados monetarios en los que opera el Banco no puedan mantener niveles de financiamiento sin incurrir en elevados costos o en la liquidación de determinados activos. Si se planteara esta situación, es posible que el Banco no pueda financiar sus necesidades de liquidez a costos competitivos, y los resultados de sus operaciones y la situación patrimonial y financiera podrían verse afectadas de manera sustancial y adversa.

Las normas especiales que rigen el orden de prelación de las diferentes partes interesadas de las entidades financieras en Argentina, que conceden un privilegio a los depositantes respecto de la mayoría de los otros acreedores, pueden afectar de manera negativa a los accionistas en caso de liquidación judicial o quiebra del Banco.

La Ley de Entidades Financieras, modificada por Ley N° 24.485 y Ley N° 25.089, establece que, en caso de un proceso de liquidación o quiebra de una entidad financiera, todos los depositantes, sin perjuicio del tipo, monto o moneda de sus depósitos, tendrán un derecho de preferencia general y absoluto por sobre las restantes acreencias, con excepción de los créditos con privilegio especial de prenda e hipoteca y los acreedores laborales, que serán pagados con la totalidad de los fondos que deriven de la liquidación de los activos de dicha entidad financiera. Los fondos se aplicarían en el siguiente orden de prelación: (a) los depósitos por importes de hasta Ps. 50.000 por entidad, o su equivalente en moneda extranjera, (gozando de este privilegio una sola persona por depósito); (b) los depósitos constituidos por importes mayores a Ps. 50.000; y (c) los préstamos otorgados a la

entidad financiera relacionados directamente con operaciones de comercio exterior. Como consecuencia de estas normas, los accionistas podrán obtener un monto sustancialmente menor respecto de sus acreencias al que obtendrían en un procedimiento de quiebra ordinario en Argentina, Estados Unidos o cualquier otro país.

Incidentes de seguridad informática podrían afectar en forma negativa la reputación, situación patrimonial y financiera y los resultados de las operaciones del Banco.

El Banco depende de la operación eficiente e ininterrumpida de las plataformas de procesamiento electrónico de datos, comunicación e intercambio de información y redes, incluso los sistemas relacionados con la operación de su red de cajeros automáticos. El Banco tiene acceso a grandes volúmenes de información financiera confidencial y controla importantes activos financieros propios y de sus clientes. Asimismo, el Banco brinda a sus clientes acceso remoto a sus cuentas y la posibilidad de transferir importantes activos financieros por medios electrónicos. En consecuencia, la seguridad informática es un riesgo sustancial para el Banco. Los incidentes de seguridad informática, por ejemplo, intrusiones, robos de datos personales, robos de identidad y otras fallas podrían afectar la seguridad de la información almacenada y transmitida a través de los sistemas informáticos e infraestructura de red del Banco y hacer que los actuales y potenciales clientes se abstengan de utilizar sus servicios.

Asimismo, los actuales planes de contingencia informática pueden no ser suficientes para cubrir las obligaciones relacionadas con dichos incidentes y, por lo tanto, la cobertura del seguro aplicable podría ser insuficiente, impidiendo al Banco recibir la indemnización total por las pérdidas soportadas como resultado de la alteración del servicio.

Si bien el Banco se propone continuar implementando tecnologías de seguridad y establecer procedimientos operativos para prevenir daños, los sistemas podrían resultar vulnerados y estas medidas de seguridad podrían no resultar exitosas. La existencia de cualquiera de estos incidentes podría menoscabar la reputación del Banco, ocasionar importantes gastos y afectar sus transacciones, así como los resultados de sus operaciones y su situación patrimonial y financiera.

El negocio del Banco depende en gran medida del correcto funcionamiento y la mejora de los sistemas de tecnología de la información.

El negocio del Banco depende en gran medida de la capacidad de sus sistemas de tecnología de la información y los terceros administradores de tales sistemas para administrar y procesar eficazmente una gran cantidad de transacciones de numerosos y diversos mercados y productos en tiempo y forma. Asimismo, el Banco brinda a sus clientes acceso remoto a sus cuentas y la posibilidad de transferir importantes activos financieros por medios electrónicos. El adecuado funcionamiento del servicio de control financiero, gestión de riesgos, finanzas, atención al cliente y otros sistemas de procesamiento de datos es crítico para el negocio del Banco y para su capacidad de competir de manera eficaz. Las actividades comerciales del Banco pueden verse alteradas si ocurriera una falla parcial o total de cualquiera de las redes de comunicación de los sistemas de tecnología de la información. Dichos incidentes podrían ser causados, por ejemplo, por errores de software, virus informáticos o intrusiones, robos de datos personales, robos de identidad o errores de conversión debido a mejoras en el sistema. Asimismo, la violación de medidas de seguridad causada por el acceso no autorizado a la información o los sistemas, o el mal funcionamiento intencional o la pérdida o corrupción de los datos, software, hardware u otro equipo informático podrían tener un efecto sustancial adverso en el negocio, los resultados de las operaciones y la situación patrimonial y financiera del Banco.

La capacidad del Banco de mantener su competitividad y alcanzar un mayor crecimiento dependerá en parte de su capacidad para mejorar sus sistemas de tecnología de la información y aumentar su capacidad en forma oportuna y rentable. Cualquier falta de mejora o modernización, oportuna y efectiva, de los sistemas de tecnología de la información podría afectar sustancialmente al Banco.

El Banco está expuesto a situaciones de fraude, operaciones no autorizadas y errores operativos.

Al igual que lo que ocurre con otras entidades financieras, el Banco está expuesto, entre otros riesgos, a fraude por parte de los empleados o terceros, operaciones no autorizadas de empleados y a otros errores operativos (incluso errores administrativos o en los registros y fallas de los sistemas informáticos o de telecomunicaciones). Dado el alto volumen de transacciones que puede haber en una entidad financiera, los errores pueden repetirse o combinarse antes de que sean detectados y solucionados. Asimismo, algunas de las transacciones del Banco no

están totalmente automatizadas, lo que aumenta el riesgo de que un error humano o manipulación por parte de un empleado se traduzca en pérdidas difíciles de detectar, o de detectarlas con rapidez. Las pérdidas provenientes del fraude de empleados o terceros, operaciones no autorizadas de empleados y otros errores operativos podrían tener un efecto sustancial adverso sobre el Banco.

El Banco está sujeto a riesgos de mercado, operativo y demás riesgos relacionados vinculados con sus operaciones con derivados, lo que podría tener un efecto sustancial adverso en su actividad.

El Banco celebra operaciones con derivados a los efectos de su negociación así como también con fines de cobertura. El Banco está sujeto a riesgos de mercado y operativos vinculados con estas operaciones, incluso un riesgo básico (el riesgo de pérdida asociada con las variaciones del margen entre el rendimiento del activo y el costo financiero y/o de cobertura) y un riesgo de crédito o incumplimiento (el riesgo de insolvencia u otra incapacidad de la contraparte de una operación determinada de cumplir con sus obligaciones allí contraídas, incluso la de prestar garantía suficiente).

La capacidad del Banco de mantener su posición competitiva depende, en parte, del éxito de nuevos productos y servicios que ofrezca a sus clientes, y de su capacidad de continuar ofreciendo productos y servicios de terceros.

El éxito de las operaciones del Banco y su rentabilidad depende en parte del éxito de nuevos productos y servicios que ofrezca a sus clientes, y de su capacidad de continuar ofreciendo productos y servicios de terceros. No obstante, el Banco no puede garantizar que sus nuevos productos y servicios responderán a las demandas de los clientes o tendrán éxito una vez que sean ofrecidos, o que serán exitosos en el futuro. Además, las necesidades o deseos de los clientes podrá variar en el tiempo, lo cual podrá tornar obsoletos, desactualizados o poco atractivos los productos y servicios ofrecidos, y es posible que el Banco no pueda desarrollar nuevos productos que cumplan con las necesidades cambiantes de sus clientes. Si el Banco no pudiera responder de forma inmediata a las necesidades de sus clientes, podrá perder clientes, lo que a su vez podría afectarla sustancial y adversamente.

Riesgos relacionados con las Obligaciones Negociables

Posible inexistencia de un mercado para las Obligaciones Negociables.

Las Obligaciones Negociables que se emitan en el marco del Programa constituirán una nueva emisión de valores negociables, no pudiendo el Banco asegurar la existencia futura de un mercado para las Obligaciones Negociables, así como tampoco puede asegurar que los tenedores de las Obligaciones Negociables podrán venderlos ni, en su caso, el precio al cual podrán venderlos. Si el mercado se desarrollara, las Obligaciones Negociables se negociarían a precios que podrían resultar mayores o menores al precio de suscripción inicial, dependiendo de diversos factores, algunos de los cuales exceden el control del Banco. Asimismo, la liquidez y el mercado de las Obligaciones Negociables pueden verse afectados por las variaciones en la tasa de interés y por el decaimiento y la volatilidad de los mercados para títulos valores similares, así como por cualquier modificación en la liquidez, la posición patrimonial, la solvencia, los resultados y la rentabilidad del Banco.

Ciertas cuestiones relativas a la denominación de las Obligaciones Negociables en UVA y/o UVI.

El Poder Ejecutivo Nacional puede emitir Decretos de Necesidad y Urgencia (“DNU”) de acuerdo con, y sujeto a, las limitaciones previstas en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. Conforme lo dispuesto por la Ley N° 26.122, la Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez de los DNU, pronunciándose sobre la adecuación de los mismos a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado, y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara Legislativa para su expreso tratamiento. En consecuencia, los DNU son plenamente válidos en tanto no se produzca su rechazo expreso por ambas Cámaras Legislativas.

Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas en el marco del Decreto 146/17, que estableció que los valores negociables con o sin oferta pública por plazos de amortización no inferiores a dos años, están exceptuados de lo dispuesto en los artículos 7 y 10 de la ley 23.928 que prohíbe la actualización monetaria o indexación. En caso que dicho Decreto 146/17 fuese rechazado por ambas Cámaras Legislativas según se detalla más arriba, o por cualquier motivo se deje sin efecto o no se reconozca como válido, dicha circunstancia podría

afectar la validez de la actualización de las Obligaciones Negociables en caso de ser denominadas en Unidades de Vivienda actualizables por “ICC” – Ley 27.271 (“UVI”) y/o en Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por “CER” Ley 25.827 (“UVA”).

Por otro lado, en caso que conforme con los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables resultare aplicable el Índice Sustituto en reemplazo de las UVA y/o UVI, según corresponda, dicho Índice Sustituto podrá ser aplicado en la medida que ello esté permitido por la normativa vigente, y, de aplicarse, podría resultar en un valor distinto del que hubiera resultado en caso de la aplicación de las UVA y/o UVI, respectivamente.

Las Obligaciones Negociables estarán subordinadas efectivamente al pago a los acreedores garantizados y a los depositantes del Banco.

Salvo que el respectivo Suplemento de Precio especifique lo contrario, las Obligaciones Negociables tendrán igual prioridad de pago que toda la demás deuda no garantizada y no subordinada del Banco, existente y futura, salvo las obligaciones que gozan de preferencia por ley o de puro derecho, incluidos, entre otros, los reclamos fiscales y laborales y las obligaciones del Banco hacia los depositantes.

En particular, según la Ley de Entidades Financieras, todos los depositantes existentes y futuros del Banco gozarán de un derecho de preferencia general sobre los tenedores de las Obligaciones Negociables emitidas en el marco de este Programa. La Ley de Entidades Financieras dispone que en caso de liquidación judicial o de quiebra, todos los depositantes tienen una prioridad de cobro sobre la totalidad de los demás acreedores del Banco (incluidos los tenedores de las Obligaciones Negociables), salvo ciertos acreedores laborales y garantizados. Más aún, los depositantes tendrían prioridad de cobro sobre todos los demás acreedores, con excepción de ciertos acreedores laborales, por los fondos en poder del Banco Central mantenidos como reserva, otros fondos en el momento de cualquier revocación de la licencia bancaria del Banco y los fondos provenientes de cualquier transferencia forzosa de los activos del Banco por parte del Banco Central.

Si así se especificara en el respectivo Suplemento de Precio, el Banco también podrá emitir Obligaciones Negociables subordinadas. En ese caso, además de la prioridad otorgada a ciertos acreedores según se explicara en los párrafos precedentes, las Obligaciones Negociables subordinadas también estarán sujetas en todo momento al pago de cierta deuda no garantizada y no subordinada del Banco, según se detalle en el Suplemento de Precio pertinente.

El Banco podrá rescatar las Obligaciones Negociables antes del vencimiento.

Las Obligaciones Negociables podrán ser rescatadas a opción del Banco en caso de producirse ciertos cambios en el régimen fiscal argentino y, salvo que el Suplemento de Precio aplicable establezca lo contrario, las Obligaciones Negociables también podrán ser rescatadas a opción del Banco por cualquier otra causa. El Banco podrá optar por rescatar Obligaciones Negociables cuando las tasas de interés prevalecientes fueran relativamente bajas. En consecuencia, un inversor podrá no estar en posición de reinvertir los fondos provenientes del rescate en un título similar a una tasa de interés efectiva como la de las Obligaciones Negociables.

Como entidad financiera, cualquier procedimiento de quiebra contra el Banco estaría sujeto a la intervención del Banco Central, lo que podrá limitar los recursos disponibles y extender la duración de los procedimientos.

La Ley de Entidades Financieras establece que las entidades financieras no pueden solicitar la formación de concurso preventivo ni su propia quiebra. Tampoco se puede decretar la quiebra de las entidades financieras hasta tanto el Banco Central les revoque la autorización para funcionar. En caso que la quiebra sea pedida por circunstancias que la harían procedente según la legislación común, los jueces podrían rechazar de oficio el pedido y dar intervención al Banco Central para que, si así correspondiere, se formalice la petición de quiebra.

Bajo la Ley de Entidades Financieras, en ciertas circunstancias, el Banco Central puede resolver, con carácter previo a la revocación de la autorización para funcionar, la reestructuración de la entidad en resguardo del crédito y los depósitos bancarios en los términos del artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras.

Si el Banco no pudiera pagar sus deudas a su vencimiento, el Banco Central generalmente intervendría, designando a un interventor, solicitaría que el Banco presente un plan de reestructuración, transferiría parte de sus activos y pasivos y posiblemente revocaría su habilitación bancaria y presentaría un pedido de liquidación ante un tribunal local. Ante tal intervención, los recursos de los tenedores de las Obligaciones Negociables

podrán verse limitados y los reclamos y derechos de los depositantes del Banco y posiblemente de otros acreedores podrán gozar de prioridad sobre los de los tenedores. Como resultado, los tenedores de las Obligaciones Negociables podrán obtener una sustancialmente menor compensación por sus reclamos que la que obtendrían en un procedimiento concursal o de quiebra en Argentina.

Los controles cambiarios y las restricciones a las transferencias al exterior podrían perjudicar la capacidad del Banco para realizar pagos bajo las Obligaciones Negociables.

A partir de la crisis de 2001 y 2002, Argentina impuso controles cambiarios y restricciones a las transferencias que limitaban sustancialmente la capacidad de las empresas para retener moneda extranjera o realizar pagos al exterior. En una etapa inicial (hasta octubre de 2011) se habían levantado varias de las restricciones relacionadas con el repago de obligaciones con no residentes, incluidas aquellas que requerían la autorización previa del Banco Central para la transferencia de fondos al exterior a fin de pagar capital e intereses sobre deudas, pero a partir de dicha fecha se han sancionado normas cambiarias que establecieron nuevas restricciones para la transferencia de fondos al exterior y la compra de divisas.

Bajo el nuevo gobierno argentino que asumió el 10 de diciembre de 2015, el Banco Central dictó sucesivas Comunicaciones (la “A” 5850, del 17 de diciembre de 2015, la “A” 6037, del 8 de agosto de 2016, la “A” 6137, del 30 de diciembre de 2016, la “A” 6150, del 13 de enero de 2017, entre otras), mediante la cual dispuso dejar sin efecto la mayor parte de las restricciones impuestas desde el año 2011 a la fecha. No obstante, estas reglamentaciones están sujetas a constantes modificaciones y el Banco no puede asegurar que no serán más severas de lo que han sido en el pasado.

Bajo ciertas circunstancias en las cuales el Banco pueda cumplir con sus obligaciones de pago en relación con las Obligaciones Negociables mediante la transferencia de Pesos a cuentas bancarias situadas en Argentina, los tenedores podrían verse impedidos de obtener Dólares o de transferir fondos fuera de Argentina.

Sujeto a lo establecido en el respectivo Suplemento de Precio, si el Banco no pudiera comprar Dólares o transferir los mismos fuera de Argentina a los fines de realizar cualquier pago relacionado con las Obligaciones Negociables que se emitan en dicha moneda en razón de cualquier restricción legal o regulatoria o por cualquier otra causa fuera de su control, entonces el Banco estará habilitado para cumplir con dicha obligación de pago en Pesos y mediante transferencias a cuentas bancarias situadas en Argentina. En dicho supuesto, los tenedores podrían verse impedidos de obtener Dólares al tipo de cambio aplicable de acuerdo a las Obligaciones Negociables o a cualquier tipo de cambio y/o de transferir libremente fondos fuera de Argentina.

POLÍTICAS DEL EMISOR

a) Políticas de Inversiones, de Financiamiento y Ambientales

Principales inversiones o desinversiones

Las principales inversiones efectuadas por el Banco en los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2016, 2017 y 2018 y hasta la fecha del Prospecto son:

➤ **Apertura de sucursales:**

Durante 2017, el Banco abrió 2 sucursales (Prov. de Buenos Aires y Río Negro), 2 sucursales recaudadoras (Río Negro), 3 centros de atención y 2 centros de atención Alta Renta, que implicaron una inversión aproximada de Ps. 100,1 millones.

Durante 2016, el Banco abrió 4 sucursales que implicaron una inversión aproximada de Ps. 15,8 millones. Dichas sucursales se encuentran ubicadas en: Santa Fe 1, Córdoba 1, y Río Negro 2. Asimismo se abrió un Centro de Alta Renta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y dos ATM's Neutrales (Uno en Río Negro y otro en Provincia de Buenos Aires).

Durante 2015, el Banco abrió 17 puntos de atención que implicaron una inversión aproximada de Ps. 24 millones. Estos puntos de atención se conformaron de 5 sucursales (ubicadas en: Provincia de Buenos Aires 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1, Entre Ríos 1), 2 Centros de Atención Alta Renta (ubicados en la Provincia de Buenos Aires), 12 ATM's Neutrales (ubicados en: Río Negro 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1, Provincia de Buenos Aires 1, Formosa 1, Jujuy 1, Santiago del Estero 1, Neuquén 1, Salta 1). Asimismo, se relocizaron dos Sucursales, una en la Provincia de Río Negro y otra en la Provincia de Buenos Aires).

➤ **Compras:**

En el año 2015 se adquirieron dos fracciones de terreno linderas a la sucursal de Neuquén (actualmente alquilada); ubicados los mismos en Calle Carlos H. Rodríguez N° 160 y N° 174, entre las Calles Hipólito Yrigoyen y Almirante Brown, de la Ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén por un precio de Ps. 16,4 millones.

Adicionalmente se adquirió el inmueble ubicado en Av. de Mayo N° 701, piso 18° más cinco cocheras (CABA) por un precio de Ps. 25 millones.

Por último, se adquirió un lote de terreno con una construcción ubicado frente a la Autopista del Oeste N° 8797 esquina Del Cielito N° 1998, Localidad de Parque Leloir, Partido de Ituzaingó, de la Provincia de Buenos Aires por un precio de US\$ 1.275.000.

En el año 2016, se adquirió local sobre lote propio con frente a la Calle Ángel Gallardo N° 121 entre las Calles Alvaro Barros y Bartolomé Mitre, Ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro por un precio de compra de Ps. 4 Millones.

En el año 2017, no se han adquirido propiedades.

En el año 2018, no se han adquirido propiedades.

Las principales desinversiones efectuadas por el Banco durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2016, 2017 y 2018 son:

➤ **Ventas:**

Durante los ejercicios 2015 y 2016 no se realizaron venta de Inmuebles " afectados al negocio".

En el año 2017, se vendieron dos sucursales. En el mes de marzo de 2017 se vendió la sucursal Monserrat situada en la calle Moreno N° 1617/1619 – Ciudad de Buenos Aires, la cual tuvo un precio de venta de USD 400.000. Así mismo en el mes de Diciembre del mismo año, se firmó el boleto de

compraventa con cláusula de Posesión del inmueble de la sucursal Belgrano situada en la Av. Cabildo 1939 (la “Sucursal Belgrano”)– Ciudad de Buenos Aires, por un precio de venta de USD 7.000.000

En el año 2018, se suscribió la Escritura Traslativa de Dominio de la Sucursal Belgrano y simultáneamente se suscribió un Contrato de Locación del Inmueble a favor del Banco. También se suscribió el Boleto de Compraventa de la Sucursal Vicente López: sito en Avda. Maipú N° 801, Vicente López, Buenos Aires - precio de venta: USD 2.000.000

Para información sobre la adquisición por terceras partes con respecto a las acciones del Banco, véase “*INFORMACIÓN DEL EMISOR > A) RESEÑA HISTÓRICA*”.

RSE en Banco Patagonia.

Con la mirada puesta en el desarrollo sostenible y el empoderamiento de nuestro rol social como entidad financiera, desarrollamos nuestro modelo de negocio considerando a todos nuestros grupos de interés y el impacto económico, social y ambiental que generamos en ellos.

Desde nuestra estrategia de inversión social buscamos impulsar y apoyar proyectos propios y en alianza con Organizaciones de la Sociedad Civil y sector público, que crean valor en las comunidades en las que estamos presente. El objetivo es potenciar el bienestar a través de la educación, el emprendedurismo, el fortalecimiento local, la cultura y el voluntariado corporativo.

Pilares de nuestra estrategia de RSE:

Educación:

Contribuimos en este ámbito principalmente a través de la educación financiera, el equipamiento a instituciones educativas, el otorgamiento de becas para el acceso a la educación formal, la capacitación y formación de jóvenes para el futuro, y el apoyo a la educación superior por medio de nuestro Programa Universidades.

Acompañamos a 57 becados con Fundación Cimientos y Fundación Cruzada Patagónica.

Programa Desafío Banco Patagonia Junto a Socialab Argentina y en colaboración con el Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro. Impactó en 232 alumnos y docentes, que participaron con 3 ideatones regionales. Se llevó a cabo un evento final en el que se premió al equipo más innovador de la provincia.

Promoción de la lectura y la escritura junto a Fundación Ruta 40, beneficiando a 963 alumnos de escuelas primarias de Campo Grande, Río Negro.

Programa “Escuelas Activas” Junto a Proyecto Agua Segura, que benefició a 900 alumnos de 10 escuelas de Río Negro.

Educación financiera:

Conscientes de nuestro rol como entidad financiera, asumimos el compromiso de impulsar programas que favorezcan la inclusión financiera a través de iniciativas que mejoren los hábitos y conocimientos de las personas para la tomar decisiones relacionadas con la economía personal y para mejorar su vínculo con el sistema financiero.

Se llevó a cabo el programa “Un click de confianza”, una iniciativa de banca electrónica que incluye talleres presenciales y un sitio web especial para que adultos mayores de 65 años, residentes de la provincia de Río Negro, puedan realizar simulacros de operaciones digitales sin miedo a equivocarse. Además, a través de la misma plataforma pudieron participar de un concurso por 10 tablets. Los talleres se dictaron en articulación con la Universidad Nacional de Río Negro, como parte de su programa de formación continua, en las ciudades de Bariloche, Viedma y General Roca

Junto a Fundación Junior Achievement, apostando por el programa con modalidad virtual “Planificá tu futuro”. Esta iniciativa les permite a los alumnos identificar sus habilidades e intereses personales, explorar posibles profesiones, aprender las mejores formas de conseguir empleo, y descubrir el valor que tiene la educación para el logro de sus objetivos. Este programa alcanzó la declaración de interés del Ministerio de Educación y logró alcanzar a 500 alumnos de 20 cursos de escuelas de Bariloche y Cipolletti,

Programa Universidades

Promovemos el desarrollo de los estudiantes de las Universidades Nacionales que trabajan con el Banco a través de becas de formación e investigación, entrega de premios y reconocimientos, equipamiento, y acompañamiento en eventos y jornadas de formación.

Emprendedurismo:

Impulsamos el emprendedurismo mediante el fortalecimiento y la capacitación a productores locales que quieren promover sus negocios. Estos proyectos contribuyen al desarrollo de las economías regionales, siendo que las actividades que llevan adelante son el sustento de muchas familias y generadoras directas de empleo.

Banco Patagonia Emprende, programa de innovación financiera digital.

Promovemos el espíritu emprendedor de los jóvenes universitarios a través de la presentación de ideas que propongan una innovación de base digital para el sector financiero. Todos los estudiantes de las casas de altos estudios clientes del Banco fueron invitados a participar de este certamen. NXTP Labs y Banco Patagonia seleccionaron los 10 proyectos con mayor potencial para brindarles un plan de capacitación y aceleración presencial en Buenos Aires. Durante tres jornadas, 14 representantes de los 10 proyectos finalistas asistieron a distintos workshops, talleres y seminarios que les permitieron mejorar sus proyectos. El cierre de la experiencia se concentró en un “pitch competition” en el que los estudiantes presentaron sus proyectos ante un jurado de especialistas, que seleccionaron los tres ganadores.

Emprendedores de Río Negro.

A partir del compromiso con el empoderamiento de las economías regionales, la entidad desarrolla este programa junto a Fundación Nobleza Obliga y el apoyo de actores locales y municipios, con el objetivo de acompañar, capacitar y dar financiamiento y visibilidad a los emprendedores. El Programa brinda una experiencia de capacitación gratuita donde los emprendedores pueden incorporar nuevos conocimientos y herramientas para perfeccionar y hacer crecer su emprendimiento. En 2018, participaron 371 emprendedores, que accedieron a más de 50 capacitaciones locales. Fueron 60 los proyectos semi finalistas y 9 los finalistas. Tres de ellos resultaron ganadores y beneficiados con capital semilla para potenciar sus negocios.

Fortalecimiento Local:

Acompañamos proyectos que potencien las comunidades en las que operamos y fortalezcan a las Organizaciones de la Sociedad Civil, abordando de manera conjunta los asuntos de interés para el desarrollo de las comunidades.

Voluntariado:

El Programa Voluntarios Patagonia tiene como objetivos acompañar el espíritu solidario de los colaboradores y contribuir a la ciudadanía, promoviendo el compromiso con la comunidad y el ambiente. Las acciones solidarias se realizan bajo un compromiso compartido entre los colaboradores que aportan su tiempo y ganas de ayudar; y el Banco que contribuye con la coordinación, logística, insumos y financiamiento para los proyectos. En 2018 participaron 680 voluntarios de distintos puntos del país.

Cultura:

En el marco del Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a partir de la ley de Mecenazgo, patrocinamos distintos proyectos culturales orientados a temáticas de restauración de edificios culturales, equipamiento para la promoción de la cultura, y acceso a actividades artísticas de jóvenes, niños y la comunidad. En 2018 concretó el acompañamiento a 7 proyectos.

Medioambiente:

Banco Patagonia trabaja en el uso eficiente de los recursos y residuos, integra criterios ambientales en sus productos y líneas de crédito, y gestiona los riesgos de forma integral. Es el primer banco en Argentina, en incluir la firma digital en pad para alta de productos. Esto significa la eliminación de múltiples firmas en distintos formularios en papel generando una mejor experiencia del cliente, con procesos más ágiles y modernos. A partir de esto, los legajos de clientes son 100% digitales, contando con los más altos estándares internacionales en materia de seguridad.

Líneas de crédito con valor para el ambiente:

Tanto los bancos multilaterales como de desarrollo tienen actualmente un fuerte enfoque en el financiamiento de proyectos de energía renovable. Así, Banco Patagonia cuenta con líneas de créditos para estos fines, que incluyen cláusulas, exigencias de cumplimiento y requisitos de prácticas internas y externas ambientalmente responsables.

Gestión responsable de residuos:

Se realiza la separación de residuos generados en la Sede Central y en las sucursales en línea con los procedimientos y requerimientos de los municipios correspondientes. Extendiendo el compromiso de generar valor a partir de los materiales en desuso, el Banco continuó realizando la recolección y posterior donación de tapas plásticas al Hospital Garrahan, como parte de la campaña de reciclado de la Fundación de dicho hospital. En total, se donaron 120 kilos de plástico. Asimismo, se continúa con el programa de donación de equipos tecnológicos en desuso a la Asociación Civil Basura Cero, que recicla y reutiliza los mismos con fines sociales.

Asimismo, a través de la campaña interna de comunicación "Yo reciclo" se busca promover la concientización de los colaboradores para que aprendan cómo separar correctamente los residuos y utilizar los contenedores diferenciados.

Talleres en el marco del día mundial del medio ambiente:

Con motivo del día del medio ambiente, se realizó una campaña interna de comunicación con el fin de fortalecer la separación diferenciada de residuos en la Sede central y las sucursales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se realizaron charlas en cada uno de los pisos de los dos edificios centrales del Banco. En ellas se brindaron conocimientos prácticos sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar los residuos, promoviendo un consumo responsable de los recursos. En línea con esta iniciativa, y en base al relevamiento realizado en las visitas de Clima a las Sucursales, se logró identificar a equipos comprometidos en la reducción de la utilización de vasos de plástico a los que se les hizo llegar sets de vasos de vidrio.

Campaña Triple E:

En el marco del Programa de Eficiencia Operativa denominado "Triple E: Eficiencia, Eficacia, Efectividad" que promueve el Banco en sus colaboradores, se llevó a cabo un encuentro con especialistas de la Asociación Civil Más Oxígeno, en la que participaron 40 colaboradores de áreas centrales en forma presencial y 15 colaboradores de sucursales, que pudieron sumarse vía aula virtual. Este programa fue acompañado con una campaña interna de comunicación que transmitió de forma práctica algunos Ecotips para aplicar en las oficinas, con el fin de promover el uso consciente de electricidad, agua, papel y otros recursos.

Memoria Anual Integrada:

Para comunicar nuestro desempeño en materia económica, social y ambiental, en 2018 migramos al modelo de Reporte Integrado, documento que nos permite consolidar la información financiera y no financiera, dando respuesta a los requerimientos de información y transparencia por parte del mercado y públicos claves. Utilizamos el marco de referencia proporcionado por el Consejo Internacional de Reporte Integrado ("IIRC"), incluyendo información del negocio del Banco, sus programas e iniciativas.

En 2018, el presupuesto de Inversión Social Privada fue de Ps. 13,5 millones, alcanzando a 19.530 beneficiarios.

b) Políticas de Dividendos y Agentes Pagadores

La declaración, monto y pago de dividendos es determinada por el voto de la mayoría de los accionistas reunidos en asamblea ordinaria, sobre la base de una propuesta del Directorio del Banco, y depende de los resultados del ejercicio económico, la situación financiera del Banco en dicho momento, sus eventuales requerimientos de liquidez y otros factores que considere relevantes el Directorio del Banco y los accionistas. Consecuentemente, no se puede asegurar al inversor que el Banco pagará dividendos en el futuro o en montos similares a los pagados en el pasado.

Todas las acciones se encuentran en igualdad de condiciones (*pari passu*) con respecto al pago de dividendos. Las nuevas acciones clase B tendrán derecho a dividendos a partir de la fecha de su emisión.

El siguiente cuadro informa los dividendos en efectivo que fueron pagados a los accionistas de Banco Patagonia, desde 2007 a la fecha:

Ejercicio cerrado el 31 de diciembre	Dividendos por acción (en pesos)	Pago total de dividendos (en miles de pesos)	Porcentaje de utilidades (en %)	Fecha de puesta a disposición
2007	0,0890	66.500	50,1%	16 de mayo de 2008
2008	0,1823	133.373	50,0%	16 de setiembre de 2009
2009	0,312	224.413	50,0%	11 de junio de 2010
2010	0,3347	240.702	50,0%	17 de mayo de 2011
2011	--	--	--	--
2012	--	--	--	--
2013	0,6283	451.852	36,2%	27 de junio de 2014
2014	1,4526	1.044.608	48,0%	15 de octubre de 2015
2015	2,385	1.715.261	70,8%	29 de setiembre de 2016
2016	2,2728	1.634.496	50,0%	13 de julio de 2017
2017	2,4718	1.777.606	50,0%	30 de mayo de 2018
2018	3,7015	2.675.335	50,0%	10 de mayo de 2019

Los ejercicios económicos del Banco finalizados el 31 de diciembre de 2011 y 2012 arrojaron un resultado positivo neto de miles de Ps. 612.246 y Ps. 884.644, respectivamente. Sin embargo, según las normas del BCRA dictadas en el año 2012 sobre distribución de utilidades, y de la aplicación de la metodología de cálculo allí establecida, el Banco no pudo distribuir utilidades mediante el pago de un dividendo en efectivo. Al respecto, las asambleas de accionistas celebradas el 26 de abril de 2012 y 24 de abril de 2013 aprobaron la propuesta de Directorio respecto al tratamiento a dar a los resultados no asignados al cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 y 2012, respectivamente. Dichos resultados ascendían a miles de Ps. 612.246 y 884.644, respectivamente, de los cuales se asignaron miles de Ps. 993.806 y 707.715, respectivamente, a la constitución de una reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados, sujeto al cumplimiento de la normativa del BCRA. Véase “*Marco Regulatorio del Sistema Financiero Argentino – Requisitos aplicables a la distribución de dividendos*”.

Procedimiento para el pago de dividendos bajo las normas del Banco Central

El Banco Central estableció los criterios aplicables para que una entidad financiera pueda distribuir dividendos sin afectar su liquidez y solvencia.

Para una explicación más detallada, véase la sección “*INFORMACIÓN DEL EMISOR - Marco Regulatorio del Sistema Financiero Argentino – Requisitos aplicables a la distribución de dividendos*”.

Restricciones contractuales al pago de dividendos

El Banco no es parte en ningún acuerdo que contenga restricciones contractuales respecto del pago de dividendos por parte del Banco.

Montos disponibles para distribución y proceso de aprobación de distribución

En virtud de la Ley General de Sociedades y demás regulaciones aplicables, la declaración y pago de dividendos anuales, en la medida en que se disponga legalmente de los fondos, es determinada por una asamblea de accionistas. Generalmente, pero no necesariamente, el Directorio realiza una recomendación con respecto al pago de dividendos.

Los dividendos pueden ser declarados y pagados siempre que existan ganancias líquidas y realizables determinadas sobre la base de estados contables anuales preparados de acuerdo con las normas del Banco Central y aprobados por una asamblea de accionistas según se describe más adelante.

El directorio presenta a la asamblea ordinaria anual de accionistas los estados contables del Banco correspondientes al ejercicio económico anterior, junto con los informes preparados al respecto por la comisión fiscalizadora para su aprobación. Dentro de los cuatro meses posteriores a la finalización de cada ejercicio económico, debe convocarse a una asamblea ordinaria de accionistas para aprobar los estados contables y determinar la asignación de las ganancias netas del Banco durante dicho año.

Según las normas de la CNV, los dividendos en efectivo deben pagarse a los accionistas dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la asamblea de accionistas que aprueba dichos dividendos. En el caso de dividendos en acciones, las acciones deberán entregarse dentro de los tres meses posteriores a que el Banco sea notificado de la autorización de la CNV para la oferta pública de las acciones que surgen de dichos dividendos.

De acuerdo con la Ley de Entidades Financieras y las normas del Banco Central, el Banco está obligado a constituir una reserva legal del 20% del resultado del ejercicio más/menos los ajustes de resultados de ejercicios anteriores. La reserva legal no puede ser distribuida a los accionistas. En virtud de la Ley General de Sociedades y de los estatutos del Banco, los resultados anuales netos del Banco (según fueran ajustados para reflejar cambios en los resultados anteriores) son asignados en el orden siguiente: (i) para cumplir con el requisito de la reserva legal, (ii) para pagar la remuneración devengada de los miembros de la comisión fiscalizadora; (iii) para pagar la remuneración de los miembros del directorio y (iv) el saldo en todo o en parte a dividendos o a la constitución o incremento de reservas o fondos o a cuenta nueva o al destino que fije los accionistas reunidos en la asamblea ordinaria. Los dividendos declarados deberán ser pagados en proporción a las respectivas integraciones y prescriben a favor del Banco a los tres años, contados desde que fueron puestos a disposición de los accionistas.

INFORMACIÓN SOBRE LOS DIRECTORES, GERENTES, MIEMBROS DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN y COMITÉ DE AUDITORÍA (TITULARES Y SUPLENTE)

A) DIRECTORES Y GERENCIA

El Directorio del Banco estará compuesto con un mínimo de siete Directores titulares y un máximo de nueve, de los cuales un titular y un suplente es representante de las acciones de Clase “A” y el resto son representantes de las acciones Clase “B”, los que en ambos casos son elegidos por tres ejercicios anuales. El siguiente cuadro presenta información sobre los miembros del Directorio del Banco al 30 de abril de 2019, cuyos respectivos mandatos vencen con la asamblea de accionistas que trate el ejercicio anual que finaliza el 31 de diciembre de 2019:

Nombre	Cargo	Año de designación	DNI / Pasaporte	CUIT/CUIL/C.D.I.
João Carlos de Nóbrega Pecego	Presidente	2017 ⁽¹⁾	94639043	20-94639043-8
Rubén Miguel Iparraguirre	Vicepresidente	2017 ⁽¹⁾	11831785	20-11831785-9
Oswaldo Parré Dos Santos	Vicepresidente	2017 ⁽¹⁾	95695626	23-95695626-9
Claudio de Oliveira Borsa	Vicepresidente	2017 ⁽¹⁾	95423348	20-95423348-1
Marcio Hamilton Ferreira	Vicepresidente	2017 ⁽¹⁾	FK 837843 ⁽³⁾	-
Fernando Florencio Campos	Vicepresidente	2017 ⁽¹⁾	SB 111019 ⁽³⁾	-
Marvio Melo Freitas	Director Titular **	2018 ⁽¹⁾	SB077893 ⁽³⁾	-
Giovanna María Matilde Cristoforo (*)	Directora Titular	2017 ⁽²⁾	28002650	27-28002650-1
Ernesto Juan Cassani (*)	Director Titular	2017 ⁽¹⁾	10691242	20-10691242-5
Thompson Soares Pereira Cesar	Director Suplente **	2019 ⁽¹⁾	SB 125061 ⁽³⁾	-
Paula Luciana Viana da Silva Lima	Directora	2019 ⁽¹⁾	SB 121360 ⁽³⁾	-
Mazanék	Suplente**			-
Camilo Buzzi	Director Suplente **	2019 ⁽¹⁾	SB 100038 ⁽³⁾	-
Mauricio Nogueira	Director Suplente **	2019 ⁽¹⁾	SB 128258 ⁽³⁾	-
José Ricardo Fagone Forni	Director Suplente**	2019 ⁽¹⁾	SB106376 ⁽³⁾	-
Luis Carlos Cerolini ^(*)	Director Suplente	2017 ⁽¹⁾	11187410	20-11187410-8
Zenon Alberto Biagosch ^(*)	Director Suplente	2017 ⁽¹⁾	17972572	20-17972572-0

^(*) Director independiente.

^(**) ad referéndum del BCRA

⁽¹⁾ Director designado por las acciones clase B.

⁽²⁾ Director designado por las acciones clase A.

⁽³⁾ Pasaporte brasileño, persona no residente en Argentina.

A continuación se presentan breves descripciones biográficas de los miembros del directorio, excepto los que aún se encuentran ad referéndum de la autorización del BCRA.

João Carlos de Nóbrega Pecego, brasileño, nacido el 12 de marzo de 1964, es Presidente del Directorio del Banco desde 2014. También es Director Suplente de GPAT Compañía Financiera S.A.U., Director Suplente de Patagonia Valores S.A. y de Banco Patagonia (Uruguay) S.A.I.F.E., y miembro del Directorio del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. (Bladex) desde 2010. Comenzó su carrera en Banco do Brasil en 1978 y ocupó diferentes cargos ejecutivos como Superintendente Comercial, Gerente Ejecutivo Corporate y Gerente Regional para América Latina, entre otros. En 2011, fue designado Vicepresidente de Banco Patagonia. El Sr. Pecego es Licenciado en Administración de Empresas egresado del *Instituto de Educación Costa Braga* (Brasil). Asimismo ha completado estudios de posgrado Gestión de Negocios y dos MBA en Negocios Internacionales y Marketing.

Rubén Miguel Iparraguirre, argentino, nacido el 22 de abril de 1955, es Vicepresidente del Directorio del Banco desde 2014 y Director Titular desde 2013. Se desempeña también como Presidente del Directorio de Banco Patagonia (Uruguay) S.A.I.F.E. y de Patagonia Valores S.A., Vicepresidente 2° del Directorio y Oficial de Cumplimiento PLA/FT Titular en GPAT Compañía Financiera S.A.U.. El Sr. Iparraguirre comenzó su carrera bancaria en 1978 en Banco de la Pampa Sociedad de Economía Mixta, donde se desempeñó hasta 1994 cuando ingresó al Banco Patagonia a través de sus entidades predecesoras. En 2013, luego de ser promovido a numerosos puestos ejecutivos, fue designado como miembro del Directorio. Posee el título de Licenciado en Organización y Técnica Bancaria y un posgrado en Finanzas en la Universidad Argentina de la Empresa.

Oswaldo Parré Dos Santos, brasileño, nacido el 14 de diciembre de 1969, es Vicepresidente de Banco Patagonia desde febrero de 2017, habiendo sido designado Director Suplente en abril de 2016. Asimismo, es Oficial de Cumplimiento PLA/FT Suplente del Banco, Vicepresidente 1° de GPAT Compañía Financiera S.A.U., Director Titular en Banco Patagonia Uruguay S.A.I.F.E. y de Patagonia Valores S.A. Comenzó su carrera en

Banco do Brasil en 1984, desempeñándose en varios cargos ejecutivos en Banco do Brasil a partir del año 2000. Fue designado como Gerente General de la Agencia de Nueva York (Estados Unidos) en 2011 y Gerente Adjunto en la Agencia de Frankfurt (Alemania) en 2008. En 2013 fue promovido a Gerente Ejecutivo de la Directoría de Créditos y en 2016 fue designado Gerente Ejecutivo de Infraestructura y Mercado de Capitales. Posee el título de Licenciado en Economía en la Universidad de San Judas Tadeo (Brasil) y cursó estudios de posgrado en Administración en la Fundación Dom Cabral de Brasil (Brasil). También realizó cursos de Extensión Universitaria de Bank Management en la Universidad de Texas, Austin (USA) y en la Universidad De Paul de Chicago (USA).

Claudio de Oliveira Borsa, brasileño, nacido el 16 de febrero de 1957, es Vicepresidente del Directorio del Banco desde 2015. Es también el Oficial de Cumplimiento PLA/FT Titular del Banco, Presidente del Directorio y Oficial de Cumplimiento PLA/FT Suplente de GPAT Compañía Financiera S.A. y Vicepresidente de Banco Patagonia (Uruguay) S.A.I.F.E., Patagonia Valores S.A. y Presidente de la Asociación Argentina de Empresas Brasileñas (Grupo Brasil). El Sr. Borsa trabajó en Banco do Brasil desde 1983 y ascendió a Gerente de Negocios Internacionales en el 2000. Posteriormente, se desempeñó en varios cargos ejecutivos en las ciudades de Porto Alegre, Río de Janeiro, San Pablo y Curitiba, Brasil. El Sr. Borsa obtuvo el título de Ingeniero Agrónomo en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (Brasil) y ha completado estudios de posgrado en Gestión de Negocios Bancarios y Liderazgo Estratégico.

Fernando Florêncio Campos, brasileño, nacido el 18 de mayo de 1969, fue designado como Director Suplente en abril de 2017 y Vicepresidente en abril 2019. El Sr. Campos ingresó a Banco do Brasil en 1984, desempeñándose como Gerente Ejecutivo de la Directoría de Corporate Banking de 2010 a 2015 y como Gerente General de la Unidad de Gobierno de Entidades Vinculadas de 2015 a 2016. Actualmente, es Director en la Directoría de Mercado de Capitales e Infraestructura. Posee el título de Licenciado en Ciencias Contables emitido por la Universidad Mackenzie (Brasil), una especialización en Gerencia Financiera y un MBA de Formación General para Altos Ejecutivos (Brasil).

Márcio Hamilton Ferreira, brasileño, nacido el 25 de enero de 1972, fue designado como Director Suplente en abril de 2017 y Vicepresidente en abril 2019. El Sr. Ferreira ha trabajado en Banco do Brasil por más de 30 años, habiendo sido designado como Gerente Ejecutivo de las Directorías de Comercio Exterior y Mercado de Capitales, Director Financiero, Director de Crédito, Superintendente Comercial para la región sudeste y luego Director de Inversiones en la *Caixa de Previdência dos Funcionarios do Banco do Brasil*. Fue Vicepresidente de Controles Internos y Gestión de Riesgo en Banco do Brasil y actualmente se desempeña como Vicepresidente de Atacado en dicha Entidad. Posee el título de Licenciado en Administración emitido por la Facultad de Administración de Brasilia (Brasil) y un MBA de Formación General para Altos Ejecutivos.

Giovanna María Matilde Cristoforo, argentina, nacida el 10 de mayo de 1980, es Directora Titular desde Abril de 2018 habiendo sido designada como Directora Suplente en abril 2017. Fue elegida por el titular de las acciones Clase "A" (Provincia de Río Negro) y es considerada miembro independiente según las Normas de la CNV. La Sra. Cristoforo es Gerente de Responsabilidad Corporativa en Zara Argentina S.A. Anteriormente, se desempeñó como Profesional de Consultoría Senior para PwC (Price Waterhouse&Cooper). Posee el título de Contadora Pública emitido por la Universidad Argentina de la Empresa, un Posgrado en Logística y Comercio Exterior de la Universidad de Belgrano y un Master en Finanzas de la Universidad del CEMA.

Ernesto Juan Cassani, argentino, nacido el 16 de diciembre de 1952, es Director Titular desde enero de 2017 y previamente fue designado Director Suplente en abril de 2016. Es considerado un miembro independiente de acuerdo con las Normas de la CNV. Se desempeña como miembro del Comité de Auditoría – CNV y BCRA y como miembro del Comité de Desarrollo Humano. Asimismo, el Dr. Cassani es miembro de la Comisión Fiscalizadora de Molinos Río de la Plata, de Pecom Servicios Energía S, A y de diversas compañías del Grupo Pérez Companc. Anteriormente el Dr. Cassani fue miembro de las Comisiones Fiscalizadoras de Telecom s.a., Telecom Personal S.A., Santander Río S.A, Banco de Valores S.A.y Grupo Tráfico. Socio de Pistrelli ,Díaz y Asociados posteriormente Pistrelli, Henry Martin y Asociados, firma miembro de EY GLOBAL hasta su retiro en el año 2013 en el área de servicios financieros y mercado de capitales de la División de Auditoría, trabajando en la firma por más de 35 años-. Posee título de Contador Público emitido por la Universidad de Belgrano.

Luis Carlos Cerolini, argentino, nacido el 27 de enero de 1954, fue designado como Director Suplente en abril de 2017 y es considerado como miembro independiente de acuerdo a las Normas de la CNV. Se desempeñó como miembro del Directorio de Banco Macro desde el año 2000 hasta el 2015. También fue Director en Banco del Tucumán S.A., Macro Fiducia S.A., Macro Securities S.A., Macro Warrants S.A. y Provincanaje S.A. El Sr. Cerolini posee el título de Abogado emitido por la Universidad Nacional de Córdoba.

Zenon Alberto Biagosch, argentino, nacido el 29 de agosto de 1966, fue designado como Director Suplente en abril de 2017 y es considerado como miembro independiente de acuerdo a las Normas de la CNV. Fue Director del Banco Central de la República Argentina desde 2004 hasta 2010, habiéndose desempeñado dentro de dicho órgano como Vicesuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias desde 2005 hasta 2008. Asimismo, se desempeñó como Director y Vicepresidente del Banco de la Nación Argentina desde 2002 hasta 2004. Es Presidente y socio fundador de FIDESnet. El Sr. Biagosch posee el título de Licenciado en Administración emitido por la Universidad de Buenos Aires y posee una certificación de Examinador de Fraudes expedido por la Association of Certified Fraud Examiners de Austin (EEUU).

De conformidad con el artículo 256 de la Ley 19.550, los directores antes mencionados, fijan domicilio especial en Av. De Mayo 701, piso 24°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1084AAC). La mayoría de los directores del Banco residen en Argentina.

GERENCIA

La estructura organizacional del Banco acompaña el progreso y facilita el desarrollo adecuado de sus actividades administrativas, operativas y comerciales. Esta estructura contribuye a agilizar la toma de decisiones, crear valor para el cliente, atender a las recomendaciones en materia de gobierno societario y potenciar el compromiso organizacional del Banco. Actualmente, la gerencia de primera línea del Banco está compuesta por siete superintendentes, cuatro gerentes ejecutivos y tres gerentes. Según la Ley General de Sociedades, no existe diferencia legal entre los superintendentes y los gerentes de primera línea.

El cuadro siguiente brinda información pertinente sobre los miembros de las gerencias de primera línea actual del Banco.

Nombre	Cargo	Fecha de Elección	DNI / Pasaporte	CUIT / CUIL / CDI
Leonardo Aníbal Sica	Superintendente de Negocios con Empresas	2018	22913907	20-22913907-0
Karina Guadalupe Gomez Vara	Superintendente Red de Sucursales y Negocios con personas	2014	17428495	27-17248495-1
Juan Manuel Trejo	Superintendente de Finanzas, Administración y Sector Público	2017	21831588	20-21831588-8
Alejandro Damián Mella	Superintendente de Créditos y Comercio Exterior	2017	17333730	20-17333730-3
Paulo Roberto Previdelli	Superintendente de Operaciones	2014	95361702	20-95361702-2
Gerardo Adrián Aguzzi	Superintendente de Tecnología, Comunicaciones y Sistemas	2014	21762505	20-21762505-0
Marcio Takeda	Superintendente de Controles Internos y Gestión de Riesgos	2017	95696695	20-95696695-8
Otacílio Martins de Magalhães Filho	Superintendente de Negocios Digitales	2019	95955601	20-95955601-7
Carlos Daniel Ferreyra	Gerente Ejecutivo Desarrollo Humano y Clima Organizacional	2017	24170843	20-24170843-9
Alejandro Oscar Pisani	Gerente Ejecutivo de Asuntos Legales	2003	12154578	20-12154578-1
Laura Eugenia Varela	Gerente Ejecutivo de Planeamiento, Marca y Comunicación	2017	23865245	27-23865245-1
Edésio Antônio de Araujo	Gerente Ejecutivo de Secretaría de Directorio	2017	95529365	20-95529365-8
Nelly Liliana Ranzatto Venier	Gerente de Prevención de Lavado de Activos	2012	20034535	27-20034535-0
Favio Daniel Galeano	Gerente de Auditoría Interna	2011	22509326	20-22509326-2
Claudio Norberto Colace	Gerente de Seguridad Informática y Protección de Activos de la Información	2008	23787140	20-23787140-6

A continuación se incluyen resúmenes de las descripciones biográficas de las gerencias de primera línea del Banco. Según lo establecido en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, el domicilio legal de cada gerente de primera línea es Avda. de Mayo 701, Piso 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1084AAC), Argentina.

Leonardo Aníbal Sica, argentino, nacido el 9 de octubre de 1972. Desde febrero de 2018 está a cargo de la Superintendencia de Negocios con Empresas. Asimismo es Director Suplente de Patagonia Inversora S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión y Director Titular de Interbanking S.A. Se incorporó al Banco como Oficial de Negocios en 1997. Luego de desarrollarse en el área de Empresas, alcanzó la posición de Gerente de Agronegocios en 2008 y en 2010 fue promovido a Gerente Ejecutivo de Banca Empresas. En junio de 2017, fue designado como Gerente Ejecutivo de Empresas. El Sr. Sica posee el título de Contador Público expedido por la Universidad Argentina de la Empresa y ha realizado una Maestría en Dirección de Empresas en UCEMA.

Karina Guadalupe Gómez Vara, argentina, nacida el 11 de abril de 1965. Desde noviembre de 2014 está a cargo de la Superintendencia de Red de Sucursales, la cual desde marzo 2017 incluyó el área de Negocios con Personas. Inició su experiencia en la actividad financiera en el BNL en 1998 como oficial de negocios con empresas. Desempeñó funciones en el Banco desde el año 2000, habiéndose desempeñado como Gerente de

Sucursal, Zonal y Regional Integral.

Juan Manuel Trejo, argentino, nacido el 1 de septiembre de 1970. Desde octubre de 2017 está a cargo de la Superintendencia de Finanzas, Administración y Sector Público. En abril 2019 fue designado Director Suplente de Patagonia Valores S.A., y de Banco Patagonia S.A. y GPAT Compañía Financiera S.A.U., en ambos casos ad referendum de la autorización del BCRA, y de Banco Patagonia (Uruguay) SAIFE, ad referendum de la autorización del Banco Central del Uruguay. Además es Director titular de Argencontrol y Director Suplente de Mercado Abierto Electrónico S.A. Se incorporó al Banco a través de sus entidades predecesoras en 1993. Fue designado Gerente de Marketing en 2009 y en 2013 fue promovido a Gerente Ejecutivo de Planeamiento y Proyectos Estratégicos, gerencia que en 2017 incorporó el área de Marca y Comunicación. El Sr. Trejo posee el título de Licenciado en Comercialización expedido por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y ha realizado un Master en Finanzas con Orientación en Mercado de Capitales en UCEMA, un posgrado en Planeamiento y Administración Estratégica en la Universidad de Buenos Aires y un Programa de Desarrollo de Habilidades de Gestión en UdeSA.

Alejandro Damián Mella, argentino, nacido el 15 de junio de 1965. Desde marzo de 2017 está a cargo de la Superintendente de Créditos y Comercio Exterior. En abril 2019 fue designado Director Suplente de Patagonia Valores S.A., y de Banco Patagonia S.A. y GPAT Compañía Financiera S.A.U., en ambos casos ad referendum de la autorización del BCRA, y de Banco Patagonia (Uruguay) SAIFE, ad referendum de la autorización del Banco Central del Uruguay. Antes de incorporarse al Banco se desempeñó en el Banco Tornquist S.A. – Credit Lyonnais en el período comprendido entre 1986 y 1999. En ese año ingresó al Banco como Team Leader de Banca Empresas y en mayo 2014 fue designado como Superintendente de Controles Internos y Gestión de Riesgos. Posee el título de Contador Público Nacional expedido por la UBA, y ha realizado un Master en Dirección de Empresas de la Universidad del CEMA.

Paulo Roberto Previdelli, brasileño, nacido el 4 de mayo de 1965. Desde agosto de 2014, está a cargo de la Superintendencia de Procesos y Soporte de Operaciones del Banco, que actualmente se denomina Superintendencia de Operaciones. Además, es Director Suplente en Compensadora Electrónica S.A. (COELSA) y en Interbanking S.A. y Director Titular en Patagonia Inversora S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión y en Provincanje S.A. Se desempeñó en cargos ejecutivos en el Banco Nossas Caixa S.A., y en 2012 fue designado Gerente General de Soporte de Operaciones de Banco do Brasil. Posee el título de Licenciado en Administración de Empresas expedido por Facultad Uniar de Araraquara (Brasil) y ha realizado un Posgrado en Gestión Empresarial en FECAP, San Pablo.

Gerardo Adrián Aguzzi, argentino, nacido el 17 de julio de 1970. Desde julio de 2014, está a cargo de la Superintendencia de Tecnología, Comunicaciones y Sistemas. Además es Director Titular de Interbanking S.A.. Desempeñó funciones en Accenture su filial en Buenos Aires y en Madrid (España); luego en 2006 fue designado como Chief Information Officer en el Standard Bank y continuó con el mismo cargo en el ICBC, luego de la adquisición del Standard Bank. Posee título de Licenciado en Sistemas expedido por la Universidad CAECE y ha realizado un Programa de Desarrollo Directivo en el IAE en 2008.

Marcio Takeda, brasileño, nacido el 7 de octubre de 1967. Desde abril de 2017, está a cargo de la Superintendencia de Controles Internos y Gestión de Riesgos. Asimismo es Director Titular y Presidente de Patagonia Inversora S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión. Se desarrolló en Banco do Brasil alcanzando el cargo de Gerente de División en 2005 y hasta 2014, cuando fue designado como Gerente Ejecutivo. Posee el título de Licenciado en Administración de Empresas expedido por la Universidad Mackenzie de San Pablo (Brasil) y ha realizado una Especialización en Marketing y otra en Nuevos Negocios, en San Pablo (Brasil).

Otacílio Martins de Magalhães Filho, brasileño, nacido el 30 de octubre de 1978. Desde febrero de 2019, está a cargo de la Superintendencia de Negocios Digitales. Ingresó en Banco do Brasil en 1998 y desde 2014 se desempeñó como Gerente Ejecutivo de Gestión de Atención, Procesos, Gestión de Riesgos Operacionales y Concesiones de Infraestructura en la Dirección de Soluciones Empresariales. Posee el título de Licenciado en Administración de Empresas de la Pontificia Universidade Católica de Campinas con una Maestría en Administración en la Universidad de Brasilia y un MBA en Finanzas Corporativas en el Ibmecc.

Carlos Daniel Ferreyra, argentino, nacido el 22 de septiembre de 1974. Desde junio de 2017, está a cargo de la Gerencia Ejecutiva de Desarrollo Humano y Clima Organizacional. El Sr. Ferreyra inició su carrera en el Banco como Jefe de Relaciones Laborales en 2004, luego en 2010 obtuvo el cargo de Jefe de Gestión de Recursos

Humanos y en 2011, fue designado como Gerente de Gestión y Desarrollo de Personas. Desde 1999 a 2003 trabajó en América Latina Logística S.A. como Coordinar de Relaciones Laborales para luego ser promovido a Gerente de la misma área durante el 2003. Posee título de abogado expedido por la Universidad de Buenos Aires y ha realizado un Posgrado en Gestión de Recursos Humanos en la Universidad de Belgrano.

Alejandro Oscar Pisani, argentino, nacido el 29 de enero de 1958. Desde septiembre de 2011, está a cargo de la Gerencia Ejecutiva de Asuntos Legales y es Director Suplente de Provincanaje S.A. Se incorporó al Banco a través de sus entidades predecesoras en 1988 y pasó a ser Gerente de Asuntos Legales en 1992. Desde 1981 a 1982, el Sr. Pisani trabajó en Banco de Intercambio Regional S.A. y desde 1982 a 1985 en Banco Financiero. Posee título de abogado expedido por la Universidad de Buenos Aires.

Laura Eugenia Varela, argentina, nacida el 2 de marzo de 1974. Desde octubre de 2017, está a cargo de la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento, Marca y Comunicación. Se incorporó al Banco en 2003, fue designada Gerente en 2011 y en julio de 2015, fue promovida a Gerente Ejecutiva de Secretaria de Directorio. Posee el título de Contadora Pública expedido por la Universidad Argentina de la Empresa y obtuvo una Maestría en Finanzas de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina. Asimismo ha completado un Programa de Desarrollo Directivo en el Instituto de Altos Estudios Empresariales de la Universidad Austral.

Edésio Antônio de Araujo, brasileño, nacido el 8 de abril de 1969. Desde octubre de 2017, está a cargo de la Gerencia Ejecutiva de Secretaría de Directorio de Banco Patagonia. En diciembre de 2015 fue designado como Asesor Especial de Presidencia en el Banco. Ingresó a Banco do Brasil en 1985. A lo largo de su carrera ejerció funciones ejecutivas en carácter esporádico, entre otras, en la Directoría Internacional y Directoría Jurídica. En 2007 fue designado Asesor Jurídico Master para operaciones de Mergers & Acquisitions, y de 2009 a diciembre de 2015 actuó como Gerente Ejecutivo Jurídico en la Unidad de Adquisición de Bancos. Posee el título de Abogado expedido por la Universidad Federal de Goiás (Goiania, Brasil), inscripto en el Colegio de Abogados de Brasil; con posgrados en Derecho Económico y de las Empresas (Fundação Getúlio Vargas, Brasília DF), Administración en Comercio Exterior (Unión Educacional de Brasília UNEB). Realizó perfeccionamiento en Derecho Internacional Público y Privado en la Academia de Derecho Internacional de la Haya, Holanda y una Especialización en Finanzas Internacionales en el Instituto Brasileño de Mercado de Capitales. También ejerció la docencia universitaria (UNEB), por tres años. Fluidez en inglés, francés y español; italiano intermedio avanzado.

Nelly Liliana Ranzatto Venier, argentina, nacida el 22 de agosto de 1968. Desde mayo de 2012, está a cargo de la Gerencia de Prevención de Lavado de Activos. Se incorporó al Banco a través de sus entidades predecesoras en 1993. La Sra. Ranzatto Venier, posee el título de Abogada expedido por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ha cursado el posgrado de Derecho Bancario y Financiero en la Universidad de Buenos Aires, así como también ha finalizado estudios de posgrado en Gestión y Management en la Universidad de Belgrano, Programa Ejecutivo de Dirección de Empresas en la Universidad del CEMA, y un posgrado de Desarrollo en Habilidades de Gestión de la Universidad de San Andrés. La Sra. Ranzatto Venier también ha completado el Programa en Prevención de Delitos Financieros, Compliance y PLAFT dictado por el Instituto de Altos Estudios -IAE Business School- de la Universidad Austral.

Favio Daniel Galeano, argentino, nacido el 5 de marzo de 1972. Desde septiembre de 2011, está a cargo de la Gerencia de Auditoría Interna. Se incorporó a la entidad en junio de 2003, y previamente se desempeñó como *Senior* de Entidades Financieras en el Estudio Pistrelli, Henry Martin y Asociados desde 1997 a 2003. Posee título de Contador Público expedido por la Universidad de Buenos Aires y obtuvo un MBA en la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina.

Claudio Norberto Colace, argentino, nacido el 24 de diciembre de 1973. Desde agosto de 2008, está a cargo de la Gerencia de Seguridad Informática y Protección de Activos de la Información. Trabajó como consultor senior en Unitech desde 1997 hasta el 2000, año en el que ingreso a Banco Patagonia como analista senior. En julio de 2005 fue designado Responsable del área de Tecnología de la Información Seguridad e Informática. El Sr. Colace posee el título de Licenciado en Informática expedido por la Universidad de Palermo, y realizó varios estudios de posgrado sobre Gestión de la Seguridad de la Información en la Universidad Austral, Desarrollo de Habilidades Gerenciales en la Universidad de San Andrés y el Programa de desarrollo Directivo en el IAE.

B) COMISIÓN FISCALIZADORA

El Estatuto Social del Banco prevé una comisión fiscalizadora integrada por tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes, designados por la asamblea ordinaria de accionistas, con mandato para ejercer durante un ejercicio económico. Conforme a la Ley General de Sociedades, solamente los abogados y contadores públicos habilitados para ejercer la profesión en la Argentina o las sociedades civiles integradas por esas personas, pueden actuar como síndicos en una sociedad anónima o en una sociedad de responsabilidad limitada. La comisión fiscalizadora tiene acceso ilimitado a los libros societarios y demás registros del Banco, y derecho a solicitar toda la información que sea necesaria para el cumplimiento de sus deberes.

La Ley General de Sociedades establece que las principales atribuciones y deberes de los miembros de la comisión fiscalizadora son, entre otras: (i) la fiscalización de la administración de la sociedad, a cuyo efecto examinará los libros y documentación siempre que lo juzgue conveniente y, por lo menos, una vez cada tres meses; (ii) verificar en igual tiempo y periodicidad las disponibilidades y títulos valores, así como las obligaciones y su cumplimiento; (iii) asistencia con voz, pero sin voto, a las asambleas de accionistas y a las reuniones del directorio; (iv) la convocatoria a asambleas extraordinarias de accionistas cuando se considere necesario, y a asambleas ordinarias y especiales de accionistas cuando no fueran convocadas por el directorio; (v) presentar a la asamblea ordinaria un informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la sociedad, dictaminando sobre la memoria, inventario, balance y estado de resultados; y (vi) la investigación de quejas por escrito presentadas por los accionistas que representen no menos del 2% del capital social. Cuando la comisión fiscalizadora realiza estas funciones, no controla las operaciones del Banco ni evalúa los méritos de las decisiones adoptadas por sus directores.

Por su parte, las normas del Banco Central establecen que los síndicos deben ser personas con idoneidad para el ejercicio de la función, la que es evaluada sobre la base de sus antecedentes de desempeño en la actividad financiera y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial de la entidad. Para acreditar el cumplimiento de dichos requisitos las entidades financieras deben por los nuevos Síndicos: (i) presentar ante el Banco Central con una antelación de por lo menos 60 días de la fecha de celebración de la asamblea ordinaria de accionistas en la que se considere la elección de los síndicos los requisitos de información previstos en dichas normas; o (ii) designar al síndico y presentar la documentación indicada dentro de los 30 días de celebrada la pertinente asamblea de accionistas. Hasta tanto el Banco Central notifique la aprobación del candidato, el nuevo síndico no puede asumir el cargo para el que fue designado.

El siguiente cuadro presenta cierta información relevante de los miembros de la comisión fiscalizadora del Banco, cuyos respectivos mandatos vencen con la asamblea de accionistas que trate el ejercicio anual que finaliza el 31 de diciembre de 2019:

Nombre	Cargo	Año de designación	DNI	CUIT/CUIL
Mónica María Cukar	Síndico Titular ⁽²⁾	2019	12.857.716	27-12857716-0
Héctor Osvaldo Rossi Camilion	Síndico Titular ⁽¹⁾	2019	7.613.785	20-07613785-5
Alberto Mario Tenaillon	Síndico Titular ^(*) ⁽¹⁾	2019	10.966.731	20-10966731-6
Julio Alberto Pueyrredon	Síndico Suplente ^(*) ⁽¹⁾	2019	13.748.195	20-13748195-3
Jorge Héctor Lorenzo	Síndico Suplente ⁽¹⁾	2018	7.593.539	20-07593539-1
María Cristina Tapia Sasot	Síndico Suplente ⁽¹⁾	2018	16.764.933	27-16764933-0

(*) *ad referendum del BCRA*

(1) *Abogado/a y no presta servicios profesionales para la Sociedad ni a su controlante o empresas controladas.*

(2) *Contadora pública y reviste la calidad de independiente de acuerdo con la Resolución Técnica N° 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.*

A continuación se presenta una breve descripción biográfica de los miembros de la comisión fiscalizadora del Banco.

Mónica María Cukar, argentina, nacida el 6 de enero de 1959, Síndico Titular desde abril 2013, habiendo sido reelegida para su mandato actual en abril 2019. Asimismo, es Síndico Titular en GPAT Compañía Financiera S.A.U. y en Patagonia Valores S.A. Ha desempeñado cargos ejecutivos en Bertora & Asoc., y Riadigos, Trossero & Asociados. En 2001 fue designada como Directora Ejecutiva de la División de Financial Services & Health Care de Pistrelli, Henry Martin & Asoc. S.R.L., firma miembro de E&Y Global, hasta abril de 2013. Fue integrante de la Comisión Directiva del Instituto de Auditores Internos de Argentina de 2003 a 2013, siendo Presidente del Directorio de 2009 a 2011. Asimismo, de 2008 a 2013, presidió la Comisión de Estudios de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. La Sra. Cukar posee título de Contadora Pública expedido por la Universidad de Buenos Aires.

Héctor Osvaldo Rossi Camilión, argentino, nacido el 2 de mayo de 1948, Síndico Titular desde abril de 2012, habiendo sido reelegido para su mandato actual en abril 2019. Asimismo, desempeña los siguientes cargos con relación al sector financiero o bursátil: Síndico Titular Banco Itaú Argentina S.A.. Es Socio del Estudio Jurídico Rossi Camilión & Asociados. Posee título de abogado expedido por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina.

Jorge Héctor Lorenzo, argentino, nacido el 20 de diciembre de 1946, es Síndico Suplente de GPAT Compañía Financiera S.A.U. desde abril de 2013, habiendo sido reelegido para su mandato actual en abril 2019. Asimismo, posee el cargo de Síndico Titular de Banco Itaú Argentina S.A., y de Itaú Valores S.A. y Síndico Suplente de Banco Patagonia S.A. Posee título de abogado expedido por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es socio del Estudio Jurídico Rossi Camilión & Asociados.

María Cristina Tapia Sasot, argentina, nacida el 26 de octubre de 1963, es Síndico Suplente desde abril de 2010, habiendo sido reelegida para su mandato actual en abril 2019. Asimismo, se desempeña como Síndico Suplente en GPAT Compañía Financiera S.A.U. y en Patagonia Valores S.A. Es miembro del Estudio Jurídico Tenaillon & Esteban Asesores Legales. Posee el título de Abogada emitido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

C) REMUNERACIÓN

No existen contratos de trabajo celebrados con los Directores ni con los Gerentes de primera línea que excedan los beneficios otorgados por la legislación laboral, ni contratos de locación de servicios de los Directores o Gerentes con el Banco o cualquiera de sus subsidiarias que provean beneficios luego de la terminación de sus mandatos. Ni el Banco ni ninguna de sus subsidiarias cuenta con algún acuerdo de participación sobre utilidades u opciones de acciones para remunerar a los Directores o Gerentes de primera línea.

En virtud de lo establecido en la Ley General de Sociedades y el estatuto social del Banco, la asamblea ordinaria de accionistas del Banco fijará la remuneración del directorio y de la comisión fiscalizadora, dentro de los límites establecidos en dicha ley. El monto total de adelantos por honorarios y remuneraciones pagadas por el Banco a todos los Directores Titulares, miembros de la comisión fiscalizadora y Gerentes de primera línea durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018 ascendió a miles de Ps. 82.225.237,07.

La asamblea ordinaria celebrada el 25 de abril de 2019, aprobó un total de honorarios a directores por Ps. 89.322.171 por servicios prestados durante 2018.

D) INFORMACIÓN SOBRE PARTICIPACIONES ACCIONARIAS.

A la fecha del Prospecto, ninguna persona humana que actualmente sea miembros del Directorio, de la comisión fiscalizadora o funcionario ejecutivo del Banco, poseen acciones del Banco.

El Banco no cuenta con ningún convenio que otorgue participación a los empleados en su capital social.

E) OTRA INFORMACIÓN RELATIVA AL DIRECTORIO, COMISIÓN FISCALIZADORA Y COMITÉS ESPECIALES

Normas aplicables al directorio y sus miembros

El Directorio tiene a su cargo la administración del Banco y toma las decisiones relacionadas con ese fin, así como aquellas decisiones expresamente establecidas en la Ley General de Sociedades, en el Estatuto Social del Banco y en otras regulaciones aplicables. De este modo, el Directorio es el responsable de ejecutar las decisiones asamblearias y del desarrollo de las tareas especialmente delegadas por los accionistas. En virtud de la Ley General de Sociedades, los directores están obligados a cumplir sus funciones con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los directores son conjunta y solidariamente responsables ante la sociedad en la cual ejercen dichos cargos, sus accionistas y los terceros por el mal desempeño de su cargo, según el criterio precedentemente indicado, así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento de la sociedad, si hubiere, y por cualquier daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa. Asimismo, la Ley General de Sociedades establece como criterio de conducta de los directores que: (i) tienen prohibido celebrar contratos con la sociedad salvo en contratos que sean de la actividad en que ésta opere y siempre que se concierten en las

condiciones de mercado, (ii) tienen la obligación de informar al directorio y a la comisión fiscalizadora de la sociedad sobre cualquier interés contrario al de la sociedad que pudiera tener en una operación propuesta y abstenerse de intervenir en la deliberación y votación del mismo, y (iii) no pueden participar en actividades en competencia con la sociedad.

A su vez, el artículo 78 de la Ley de Mercado de Capitales dispone que se entenderán especialmente comprendidas en el deber de lealtad con que deben actuar los directores: (i) la prohibición de hacer uso de los activos sociales y la de hacer uso de cualquier información confidencial, con fines privados; (ii) la prohibición de aprovechar o de permitir que otro aproveche, ya sea por acción o por omisión, las oportunidades de negocio de la sociedad; (iii) la obligación de ejercer sus facultades únicamente para los fines para los que la ley, el estatuto, la asamblea o el directorio se las hayan concedido; (iv) la obligación de velar escrupulosamente para que su actuación nunca incurra en conflicto de intereses, directo o indirecto, con los de la sociedad. En caso de duda acerca del cumplimiento del deber de lealtad, la carga de la prueba corresponde al director.

Adicionalmente, la Ley de Entidades Financieras establece que no pueden ser directores de las entidades financieras (i) los afectados por las inhabilidades e incompatibilidades establecidas por la Ley General de Sociedades, (ii) los inhabilitados para ejercer cargos públicos, (iii) los deudores morosos de las entidades financieras, (iv) los inhabilitados para ser titulares de cuentas corrientes u otras que participen de su naturaleza, hasta tres años después de haber cesado dicha medida, (v) los inhabilitados por aplicación del inciso (5) del artículo 41 de dicha ley, (inhabilitación temporaria o permanente para desempeñarse como promotores, fundadores, directores, administradores, miembros del consejo de vigilancia, síndicos, liquidadores, gerentes, auditores, socios o accionistas de una entidad financiera), mientras dure el tiempo de su sanción, y (vi) quienes por decisión de autoridad competente hubieran sido declarados responsables de irregularidades en el gobierno y administración de las entidades financieras. Dicha norma, además, prohíbe a las entidades financieras operar con sus directores y con empresas o personas vinculadas con ellos en condiciones más favorables que las acordadas de ordinario a su clientela. Para mayor detalle, véase la sección “*INFORMACIÓN DEL EMISOR - Marco Regulatorio del Sistema Financiero Argentino*”.

Por su parte, las normas del Banco Central establecen que los directores deben ser personas con idoneidad para el ejercicio de la función, la que es evaluada sobre la base de sus antecedentes de desempeño en la actividad financiera y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial de la entidad. Al menos, dos tercios de la totalidad de los directores deberán acreditar experiencia en puestos directivos, gerenciales o en otras posiciones destacadas en materia financiera en la función pública o privada, en el país o en el exterior. Para acreditar el cumplimiento de dichos requisitos las entidades financieras deben: (i) presentar ante el Banco Central con una antelación de por lo menos 60 días de la fecha de celebración de la asamblea ordinaria de accionistas en la que se considere la elección de los directores los requisitos de información previstos en dichas normas; o (ii) designar al director y presentar la documentación indicada dentro de los 30 días de celebrada la pertinente asamblea de accionistas. Hasta tanto el Banco Central notifique la aprobación del candidato, el nuevo director no puede asumir el cargo para el que fue designado.

Carácter de independencia de los directores

Los directores poseen carácter independiente o no según los criterios de independencia establecidos por la Sección III, Capítulo III, Título II de las Normas CNV. A todos los fines previstos en las leyes y reglamentos aplicables, se entenderá que un miembro del directorio de las emisoras no reúne la condición de independiente, cuando se den una o más de las siguientes circunstancias a su respecto:

- (i) Sea también miembro del órgano de administración de la controlante u otra sociedad perteneciente al mismo grupo económico del Emisor por una relación existente al momento de su elección o que hubiere cesado durante los TRES (3) años inmediatamente anteriores.
- (ii) Esté vinculado al Emisor o a los accionistas de ésta que tengan en ella en forma directa o indirecta “participaciones significativas” o con sociedades en las que estos también tengan en forma directa o indirecta “participaciones significativas”, o si estuvo vinculado a ellas por una relación de dependencia durante los últimos 3 años.
- (iii) Tenga relaciones profesionales o pertenezca a una sociedad o asociación profesional que mantenga relaciones profesionales con habitualidad y de una naturaleza y volumen relevante con, o perciba

remuneraciones u honorarios (distintos de los correspondientes a las funciones que cumple en el directorio) del Emisor o los accionistas de esta que tengan en ella en forma directa o indirecta “participaciones significativas” o con sociedades en las que estos también tengan en forma directa o indirecta “participaciones significativas” o cuenten con “influencia significativa”. Esta prohibición abarca a las relaciones profesionales y pertenencia durante los últimos tres años anteriores a la designación como director.

- (iv) En forma directa o indirecta, sea titular del cinco por ciento (5%) o más de acciones con derecho a voto y/o del capital social en el Emisor o en una sociedad que tenga en ella una “participación significativa”.
- (v) En forma directa o indirecta, venda y/o provea bienes o servicios -distintos a los previstos en el inciso c)- de forma habitual y de una naturaleza y volumen relevante al Emisor o a los accionistas de esta que tengan en ella en forma directa o indirecta “participaciones significativas”, por importes sustancialmente superiores a los percibidos como compensación por sus funciones como integrante del órgano de administración. Esta prohibición abarca a las relaciones comerciales que se efectúen durante los últimos tres (3) años anteriores a la designación como director.
- (vi) Haya sido director, gerente, administrador o ejecutivo principal de organizaciones sin fines de lucro que hayan recibido fondos, por importes superiores a los descriptos en el inciso I) del artículo 12 de la Resolución UIF N° 30/2011 y sus modificatorias, de la sociedad, su controlante y demás sociedades del grupo del que ella forma parte, así como de los ejecutivos principales de cualquiera de ellas.
- (vii) Reciba algún pago, incluyendo la participación en planes o esquemas de opciones sobre acciones, por parte de la sociedad o de las sociedades de su mismo grupo, distintos a los honorarios a recibir en virtud de su función de director, salvo los dividendos que le correspondan en su calidad de accionista en los términos del inciso d) y el correspondiente a la contraprestación enunciada en el inciso (v).
- (viii) Se haya desempeñado como director en el Emisor, su controlante u otra sociedad perteneciente al mismo grupo económico por más de diez (10) años. La condición de director independiente se recobrará luego de haber transcurrido como mínimo tres (3) años desde el cese de su cargo como director.
- (ix) Sea cónyuge o conviviente reconocido legalmente, pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad de individuos que, de integrar el órgano de administración, no reunirían la condición de independientes.

En todos los casos las referencias a “participaciones significativas” allí contenidas, se considerarán referidas a aquellas personas que posean acciones que representen por lo menos el 5% del capital social y de los votos, o una cantidad menor cuando tuvieren derecho a la elección de uno o más directores por clase de acciones o tuvieren con otros accionistas convenios relativos al gobierno y administración de la sociedad de que se trate, o de su controlante.

Asimismo, a los fines de definir “influencia significativa” deberán considerarse las pautas establecidas en las normas contables profesionales. Al respecto, la Resolución Técnica 21 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (la “Resolución Técnica”) define la “influencia significativa” como la facultad de intervenir en las decisiones de políticas operativas y financieras de una entidad, sin llegar a controlarlas. La Resolución Técnica establece pautas bajo las cuales se presume que existe dicha influencia, entre las que menciona, la de poseer 20% o más de los derechos de voto de la entidad. Asimismo detalla, de manera no taxativa, ciertos parámetros a ser tenidos en cuenta al momento de evaluar la existencia o no de “influencia significativa” entre los que cita: la participación en la fijación de políticas operativas y financieras de la entidad y el acceso privilegiado a la información sobre la gestión de la misma.

Asimismo, se establece en las Normas CNV que los directores y síndicos designados por el Estado, revisten carácter de independiente.

Según dichos criterios, los miembros titulares y suplentes del directorio del Banco revisten el siguiente carácter:

Nombre	Carácter
João Carlos de Nóbrega Pecego	No independiente
Rubén Miguel Iparraguirre	No independiente

Oswaldo Parré Dos Santos	No independiente
Claudio de Oliveira Borsa	No independiente
Marcio Hamilton Ferreira	No independiente
Fernando Florencio Campos	No independiente
Marvio Melo Freitas (*)	No independiente
Giovanna María Matilde Cristoforo	Independiente
Ernesto Juan Cassani	Independiente
Thompson Soares Pereira Cesar (*)	No independiente
Paula Luciana Viana da Silva Lima Mazanék (*)	No independiente
Camilo Buzzi(*)	No independiente
Mauricio Nogueira (*)	No independiente
José Ricardo Fagonde Forni (*)	No independiente
Juan Manuel Trejo(*)	No independiente
Alejandro Damián Mella (*)	No independiente
Luis Carlos Carolini	Independiente
Zenon Alberto Biagosch	Independiente

(*) *ad referendum del BCRA*

Carácter de independencia de los síndicos

La totalidad de los miembros de la comisión fiscalizadora deberá revestir la calidad de independiente, según lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Mercado de Capitales y los artículos 12 y 13 de la Sección III, Capítulo III, Título II de las Normas CNV.

Comité de Auditoría-CNV

El comité de Auditoría-CNV del Banco está integrado por tres directores titulares, dos de los cuales deben poseer carácter independiente, de acuerdo con las Normas CNV. Todos los miembros del comité de auditoría, designados por el directorio del Banco fueron elegidos hasta la Asamblea que considere los Estados Financieros al 31.12.19. Conforme lo dispuesto en el reglamento del comité de auditoría, el comité sesiona válidamente estando presente la mayoría absoluta de sus miembros, adopta sus decisiones por mayoría simple de votos presentes, y en caso de empate, el presidente del comité, y a falta de éste el vicepresidente del comité, tiene voto doble. El presidente y el vicepresidente del comité deben tener carácter independiente.

Según establece el artículo 110 de la Ley de Mercado de Capitales, el comité de auditoría del Banco tiene las siguientes facultades y deberes, entre otras: (i) la emisión de un dictamen respecto de las propuestas del directorio sobre la designación de los auditores externos del Banco y el control de su carácter de independencia; (ii) la supervisión del funcionamiento de los sistemas de control interno y del administrativo-contable del Banco; (iii) la supervisión de la observancia de las políticas en materia de información sobre la gestión de riesgos del Banco; y (iv) la emisión de una opinión fundada con respecto a las operaciones entre Partes Relacionadas (tal como se define más adelante) u otras operaciones que pueden provocar conflictos de interés. Anualmente el comité de auditoría deberá elaborar un plan de actuación para el ejercicio del que dará cuenta al directorio y a la comisión fiscalizadora.

El siguiente cuadro presenta cierta información relevante de los miembros titulares del comité de auditoría CNV - del Banco:

Nombre	Cargo en el Comité	Año de designación	Carácter
Ernesto Juan Cassani	Presidente	2017	Independiente
Claudio de Oliveira Borsa	Miembro	2017	No Independiente
Giovanna María Matilde Cristoforo	Vicepresidente	2018	Independiente

COMITÉS ESPECIALES

El Banco cuenta con los siguientes comités que operan bajo la supervisión del Directorio del Banco y de todos los que participa por lo menos el Presidente o un Vicepresidente. Además del antes mencionado Comité de Auditoría CNV, el Banco cuenta con: (i) Comité de Auditoría BCRA; (ii) Comité de Tecnología Informática; (iii) Comité de Seguridad Informática y Protección de Activos de Información; (iv) Comité de Control y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; (v) Comité de Riesgo Operacional; (vi) Comité de Riesgo Global; (vii) Comité de Dirección; (viii) Comité de Negocios; (ix) Comité de Finanzas; (x) Comité de Desarrollo Humano; (xi) Comité de Ética; (xii) Comité de Calidad y (xiii) Comité de Arquitectura, Seguridad y Administración de Bienes; (xiv) Comité de Protección de los Usuarios de Servicios Financieros.

Comité de Auditoría BCRA

El Comité de Auditoría BCRA tiene a su cargo la implementación de las gestiones necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas y procedimientos de control interno del Banco, conforme a los lineamientos definidos por el Directorio. Asimismo, este comité es responsable de la aprobación del Plan Anual de la Auditoría Interna, de revisar su grado de cumplimiento y de analizar los estados financieros anuales y trimestrales del Banco, los informes del auditor externo, la información financiera pertinente y los informes de la Comisión Fiscalizadora.

Los miembros del Comité de Auditoría BCRA y sus respectivos cargos son los siguientes:

Nombre	Cargo
Claudio de Oliveira Borsa	Vicepresidente
Oswaldo Parré dos Santos	Vicepresidente
Ernesto Juan Cassani	Miembro Independiente
Giovanna María Matilde Cristóforo	Miembro Independiente
Favio Daniel Galeano	Gerente de Auditoría Interna

Comité de Tecnología Informática

El Comité de Tecnología Informática es responsable de asesorar al Directorio del Banco respecto de la tecnología informática ("TI"), las estrategias, la implementación de estas estrategias e identificación de las necesidades de tecnología informática del Banco con el objetivo de ampliar su estrategia comercial y asegurar la disponibilidad de acceso a datos y servicios necesarios para sus operaciones y gestión.

Los miembros del Comité de Tecnología Informática son designados por el Directorio de acuerdo a sus cargos en el Banco de la siguiente forma:

Miembro por cargo	Cargo
Miembros con derechos de voto	
Vicepresidente	Miembro Titular
Superintendente de Tecnología, Comunicaciones y Sistemas	Miembro Titular
Superintendente de Red de Sucursales y Negocios con Personas	Miembro Titular
Superintendente de Operaciones	Miembro Titular
Superintendente de Controles Internos y Gestión de Riesgos	Miembro Titular
Superintendente de Negocios Digitales	Miembro Titular
Presidente	Miembro Suplente
Miembros sin derechos de voto	
Gerente de Seguridad Informática y Protección de Activos de Información	Miembro Titular
Gerente de Canales Electrónicos y Alternativos de Ventas	Miembro Titular
Gerente de Tecnología y Producción	Miembro Titular
Gerente de Desarrollo de Sistemas	Miembro Titular
Gerente de Gestión de Demanda y Gobierno de TI	Miembro Titular

Comité de Seguridad Informática y Protección de Activos de Información

El Comité de Seguridad Informática y Protección de Activos de Información es responsable de proponer al Directorio las políticas en materia de seguridad informática y monitorear su cumplimiento. También tiene a su cargo la elaboración de propuestas al Directorio respecto de medidas preventivas tendientes a minimizar los riesgos vinculados con la seguridad informática o, en la medida de lo posible, de acciones correctivas.

Los miembros del Comité de Seguridad Informática y Protección de Activos de Información son designados por el Directorio de acuerdo a sus cargos en el Banco de la siguiente forma:

Miembro por cargo	Cargo
Miembros con derechos de voto	
Vicepresidente	Miembro Titular
Superintendente de Controles Internos y Gestión de Riesgos	Miembro Titular
Superintendente de Tecnología, Comunicaciones y Sistemas	Miembro Titular
Presidente	Miembro Suplente
Miembros sin derechos de voto	
Gerente de Riesgo Operacional, Controles Internos y Compliance	Miembro Titular
Gerente de Seguridad Informática y Protección de Activos de Información	Miembro Titular

Comité de Control y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

El Comité de Control y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo tiene a su cargo planificar, coordinar y velar por el cumplimiento de las políticas que en la materia establezca el Directorio. Asimismo, el Comité asiste al Banco respecto de detección, en tiempo y forma, de operaciones que pueden ser sospechadas como procedentes de lavado de dinero u otras actividades ilícitas.

Los miembros del Comité de Control y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo son designados por el Directorio de acuerdo a sus cargos en el Banco de la siguiente forma:

Miembro por cargo	Cargo
Miembros con derechos de voto	
Vicepresidente (Funcionario Responsable Oficial de Cumplimiento)	Miembro Titular
Vicepresidente	Miembro Titular
Superintendente de Controles Internos y Gestión de Riesgo	Miembro Titular
Superintendente de Red de Sucursales y Negocios con personas	Miembro Titular
Gerente Ejecutivo de Asuntos Legales	Miembro Titular
Presidente	Miembro Suplente
Miembros sin derechos de voto	
Gerente de Prevención de Lavado de Activos	Miembro Titular

Comité de Riesgo Operacional

El Comité de Riesgo Operacional es responsable de proponer al Directorio del Banco las políticas, estrategias y manuales destinados a la gestión del riesgo operacional de cada unidad de negocios y de evaluar la efectividad de los procesos de gestión del riesgo operacional. Este comité debe informar directamente al Directorio por los menos bimestralmente.

Los miembros del Comité de Riesgo Operacional son designados por el Directorio de acuerdo a sus cargos en el Banco, incluso, sus respectivos roles, de la siguiente forma:

Miembro por cargo	Cargo
Miembros con derechos de voto	
Vicepresidente	Miembro Titular
Superintendente de Operaciones	Miembro Titular
Superintendente de Controles Internos y Gestión de Riesgos	Miembro Titular (Coordinador)
Superintendente de Tecnología, Comunicaciones y Sistemas	Miembro Titular
Presidente	Miembro Suplente
Miembros sin derechos de voto	
Gerente de Riesgo Operacional, Controles Internos y Compliance	Miembro Titular

Comité de Riesgo Global

El Comité de Riesgo Global es responsable de proponer al Directorio del Banco las estrategias para la gestión de riesgos de mercado, tasas de interés, liquidez y riesgos crediticios, así como de establecer los límites globales de exposición a dichos riesgos, por otra parte el Comité de Riesgo Global es responsable de tomar conocimiento del riesgo de las posiciones del Banco y cumplimiento de políticas. Este Comité se reúne como mínimo mensualmente con el Directorio del Banco para informarle sobre los principales aspectos relacionado con la gestión del riesgo financiero. El alcance de sus funciones comprende tanto al Banco como a sus subsidiarias.

Los miembros del Comité de Riesgo Global son designados por el Directorio de acuerdo a sus cargos en el Banco de la siguiente forma:

Miembro por cargo	Cargo
Miembros con derechos de voto	
Presidente	Miembro Titular
Vicepresidente	Miembro Titular
Vicepresidente	Miembro Titular
Superintendente de Finanzas, Administración y Sector Público	Miembro Titular
Superintendente de Créditos y Comercio Exterior	Miembro Titular
Superintendente de Controles Internos y Gestión de Riesgos	Miembro Titular
Vicepresidente	Miembro Suplente
Miembros sin derechos de voto	
Gerente de Validación de Modelos	Miembro Titular
Gerente de Riesgos Financieros	Miembro Titular

Comité de Dirección

El Comité de Dirección está a cargo de analizar y aprobar el otorgamiento de créditos.

Los miembros del Comité de Dirección son designados por el Directorio de acuerdo a sus cargos en el Banco de la siguiente forma:

Miembros por cargo	Cargo
Miembros con derecho a voto y participación permanente	
Vicepresidente	Miembro Titular
Superintendente de Créditos y Comercio Exterior	Miembro Titular
Miembros con derecho a voto y participación alternada	
Vicepresidente	Miembro Titular
Superintendente correspondiente a la línea de crédito del segmento que corresponda (Negocios con Empresas o Finanzas, Administración y Sector Público)	Miembro Titular
Presidente	Miembro Suplente
Miembros sin derechos de voto	
Gerente de Análisis de Créditos Masivos	Miembro Titular
Gerente de Análisis de Créditos Empresas	Miembro Titular
Gerente de Área correspondiente a la línea del segmento que corresponda	Miembro Titular

Comité de Negocios

El Comité de Negocios analiza las diferentes propuestas comerciales, define las estrategias comerciales que serán adoptadas por los diferentes segmentos y analiza las fortalezas y debilidades de los posibles nuevos productos.

Los miembros del Comité de Negocios son designados por el Directorio de acuerdo a sus cargos en el Banco de la siguiente forma:

Miembro por cargo	Cargo
Miembros con derechos de voto	
Vicepresidente	Miembro Titular
Vicepresidente	Miembro Titular
Vicepresidente	Miembro Titular
Superintendente de Negocios con Empresas	Miembro Titular
Superintendente de Red de Sucursales y Negocios con Personas	Miembro Titular
Superintendente de Negocios Digitales	Miembro Titular
Presidente	Miembro Suplente
Miembros sin derechos de voto	
Gerente Ejecutivo de Planeamiento, Marca y Comunicación	Miembro Titular

Comité de Finanzas

El Comité de Finanzas es responsable de las decisiones a tomar en asuntos concernientes al gerenciamiento de los activos y pasivos financieros del Banco.

Los miembros del Comité de Finanzas son designados por el Directorio de acuerdo a sus cargos en el Banco de la siguiente forma:

Miembro por cargo	Cargo
Miembros con derechos de voto	
Presidente	Miembro Titular
Vicepresidente	Miembro Titular
Superintendente de Finanzas, Administración y Sector Público	Miembro Titular
Superintendente de Controles Internos y Gestión de Riesgos	Miembro Titular
Vicepresidente	Miembro Suplente
Miembros sin derechos de voto	
Superintendente de Negocios Digitales	Miembro Titular
Gerente de Gestión Financiera	Miembro Titular

Comité de Desarrollo Humano

El Comité de Remuneraciones e Incentivos al Personal tiene por objeto vigilar que el sistema de remuneraciones al personal sea consistente con las políticas propias del Banco, así como evaluar todas las cuestiones relacionadas con la remuneración de la gerencia de primera línea.

Los miembros del Comité de Remuneraciones e Incentivos al Personal son designados por el Directorio de acuerdo a sus cargos en el Banco, y no nominalmente, de la siguiente forma:

Miembro por cargo	Cargo
Miembros con derechos de voto	
Presidente	Miembro Titular
Vicepresidente	Miembro Titular
Vicepresidente	Miembro Titular
Miembros sin derechos de voto	
Gerente Ejecutivo de Desarrollo Humano y Clima Organizacional	Miembro Titular
Gerente Ejecutivo de Secretaría de Directorio	Miembro Titular

Comité de Ética

El Comité de Ética tiene por objeto resolver cuestiones relativas a la interpretación del Código de Ética y promover el comportamiento ético entre todos los integrantes del Banco.

Los miembros del Comité de Ética son designados por el Directorio de acuerdo a sus cargos en el Banco de la siguiente forma:

Miembro por cargo	Cargo
Miembros con derechos de voto	
Presidente	Miembro Titular
Vicepresidente	Miembro Titular
Vicepresidente	Miembro Titular
Vicepresidente	Miembro Titular
Miembros sin derechos de voto	Cargo
Gerente Ejecutivo de Desarrollo Humano y Clima Organizacional	Miembro Titular

Comité de Calidad

El Comité de Calidad es responsable de evaluar y proponer al Directorio las políticas y estrategias orientadas a promover el control de calidad. En el marco del Comité se realiza la planificación y el seguimiento de las acciones para mejorar la experiencia del cliente en base a estudios y encuestas de clientes que periódicamente se realizan.

Los miembros del Comité de Calidad son designados por el Directorio de acuerdo a sus cargos en el Banco de la siguiente forma:

Miembro por cargo	Cargo
Miembros con derechos de voto	
Vicepresidente	Miembro Titular
Vicepresidente	Miembro Titular
Gerente Ejecutivo de Desarrollo Humano y Clima Organizacional	Miembro Titular
Superintendente de Operaciones	Miembro Titular
Superintendente de Red de Sucursales y Negocios con Personas	Miembro Titular
Superintendente de Negocios Digitales	Miembro Titular
Presidente	Miembro Suplente
Miembros sin derechos de voto	
Gerente Ejecutivo de Planeamiento, Marca y Comunicación	Miembro Titular
Gerente de Planeamiento y Proyectos Estratégicos	Miembro Titular

Comité de Arquitectura, Seguridad y Administración de Bienes

El Comité de Arquitectura, Seguridad y Administración de Bienes es el responsable del análisis de los temas relacionados con la infraestructura edilicia y el espacio de oficinas del Banco.

Los miembros del Comité de Arquitectura y Administración de Bienes Propios y Activos Fijos son designados por el Directorio de acuerdo a sus cargos en el Banco de la siguiente forma:

Miembro por cargo	Cargo
Miembros con derechos de voto	
Vicepresidente	Miembro Titular

Vicepresidente	Miembro Titular
Superintendente de Operaciones	Miembro Titular
Superintendente de Red de Sucursales y Negocios con Personas	Miembro Titular
Superintendente de Finanzas, Administración y Sector Público	Miembro Titular
Presidente	Miembro Suplente
Miembros sin derechos de voto	
Superintendente de Negocios Digitales	Miembro Titular
Gerente de Arquitectura y Mantenimiento	Miembro Titular
Gerente de Marca y Comunicación	Miembro Titular
Gerente de Canales Electrónicos y alternativos de Ventas	Miembro Titular
Responsable de la Administración de Bienes Inmuebles	Miembro Titular

Comité de Protección de Usuarios de Servicios Financieros

El Comité de Protección de Usuarios de Servicios Financieros tiene por objeto vigilar el adecuado funcionamiento de los procesos relacionados con la protección de los usuarios de los servicios financieros, así como de contribuir a la mejora de los mismos y de sus controles vinculados.

Los miembros del Comité de Protección de Usuarios de Servicios Financieros son designados por el Directorio de acuerdo a sus cargos en el Banco de la siguiente forma:

Miembro por cargo	Cargo
Miembros con derechos de voto	
Vicepresidente	Miembro Titular
Vicepresidente	Miembro Titular
Superintendente de Red de Sucursales y Negocios con Personas	Miembro Titular
Superintendente de Operaciones	Miembro Titular
Superintendente de Controles Internos y Gestión de Riesgos	Miembro Titular
Gerente Ejecutivo de Asuntos Legales	Miembro Titular
Presidente	Miembro Suplente
Miembros sin derechos de voto	
Responsable de Atención al Usuario de Servicios Financieros	Miembro Titular
Gerente de Auditoría Interna	Miembro Titular
Gerente de Riesgos Operacional, Controles Internos y Compliance	Miembro Titular
Gerente de Soporte y Operaciones	Miembro Titular

Asesores Legales

El asesor legal del Banco en el marco del Programa es el estudio EGFA - Errecondo, Gonzalez & Funes Abogados.

Audidores Contables Externos

Los auditores externos del Banco de los últimos ejercicios anuales cerrados al 31 de diciembre de 2016, 2017 y 2018, fueron los siguientes:

Balance al	Firmado por	Estudio contable	Domicilio	Matriculado en	CUIT
31 de diciembre de 2016	Marcelo A. Castillo	KPMG Sociedad Civil (firma miembro de KPMG International)	Bouchard 710, Buenos Aires	C.P.C.E.C.A.B.A. T°CLXIX F°52	23-13072432-9
31 de diciembre de 2017	Marcelo A. Castillo	KPMG Sociedad Civil (firma miembro de KPMG International)	Bouchard 710, Buenos Aires	C.P.C.E.C.A.B.A. T°CLXIX F°52	23-13072432-9
31 de diciembre de 2018	Mauricio G. Eidelstein	KPMG Sociedad Civil (firma miembro de KPMG International)	Bouchard 710, Buenos Aires	C.P.C.E.C.A.B.A. T°CXXF° 228	23-13072432-9

El CUIT de KPMG Sociedad Civil es: 30-61458714-4.

El auditor con mandato vigente para llevar a cabo la auditoría del Banco es:

Auditor	Estudio contable	Domicilio	Matriculado en
Mauricio G. Eidelstein	KPMG Sociedad Civil (firma miembro de KPMG International)	Bouchard 710, Buenos Aires	C.P.C.E.C.A.B.A. T°CXXF° 228

Los miembros integrantes de la firma auditora se encuentran matriculados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Relaciones con el mercado

Los Sres. Marcelo A. Iadarola y Juan Manuel Trejo son los Responsables de Relaciones con el Mercado del Banco, y pueden ser contactados en los teléfonos +54 (11) 4323-5375, +54 (11) 4323-5143, fax +54 (11) 4323-5891 y en la dirección de correo electrónico relacionconelmmercado@bancopatagonia.com.ar.

F) EMPLEADOS

Al 31 de diciembre de 2018, el Emisor tenía una dotación de 3.407 empleados, de los cuales 1.269 se desempeñaban en las oficinas centrales y los restantes 2.138 en las sucursales. A dicha fecha, la totalidad de los empleados del Banco se hallaban representados por el sindicato nacional de empleados bancarios, el cual se encarga de negociar un convenio colectivo de trabajo para establecer salarios mínimos para todos sus miembros. El Banco mantiene una buena relación con todos sus empleados, sindicalizados o no, y nunca se han producido huelgas. El convenio colectivo que rige la actividad bancaria fue suscripto el 25 de junio de 1975 y ha sufrido modificaciones parciales. Asimismo, el sindicato ha suscripto con las entidades que agrupan a entidades financieras acuerdos puntuales sobre determinados asuntos, como por ejemplo salarios mínimos.

El siguiente cuadro muestra también la dotación de los últimos 3 ejercicios anuales cerrados al 31 de diciembre de 2016, 2017 y 2018, discriminando la distribución geográfica de los empleados:

Distribución geográfica	31 de diciembre		
	2018	2017	2016
Casa Central	1.269	1.256	1.332
Sucursales	2.138	2.109	2.102
Total	3.407	3.365	3.434

ESTRUCTURA DEL EMISOR, ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS

A) ESTRUCTURA DE LA EMISORA Y SU GRUPO ECONÓMICO

Composición accionaria

En el cuadro a continuación se describen las participaciones accionarias en el Banco al 30 de abril de 2019.

Accionista	Participación en el Banco
Banco do Brasil	80,3894%
Administración Nacional de Seguridad Social	15,2926%
Provincia de Río Negro	3,1661%
Accionistas agrupados (bolsas del país y del exterior)	1,1519%
Total:	100,0000%

Grupo Banco do Brasil

Es la primera Institución bancaria en operar en Brasil y también la primera en realizar una oferta pública de acciones en el mercado de capitales brasileño. Con más de 200 años de antigüedad, cuenta con la mayor red de distribución geográfica, con 65.660 puntos de atención en Brasil y encontrándose presente en 17 países.

Es una de las instituciones financieras más importante de América Latina en términos de activos totales. Actúa en todos los segmentos, desde el bancario, pasando por el de tarjetas de crédito, administración de recursos de terceros, seguros, hasta mercado de capitales, con un importante portafolio de productos y servicios.

Emplea a más de 97.000 colaboradores, que le permiten atender la demanda de los más de 66,96 millones de clientes.

La información institucional y financiera de Banco do Brasil se encuentra disponible en su página de internet www.bb.com.br.

Entidades que conforman el grupo Banco do Brasil

Participaciones societarias consolidadas mencionadas en los estados contables consolidados de Banco do Brasil al 31 de diciembre de 2018, segregadas por segmentos de negocios:

Sociedad	Actividad	31 de diciembre de 2018 % de Participación
Segmento Bancario		
Banco do Brasil AG	Bancaria	100%
BB Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil	Arrendamiento	100%
BB Securities Asia Pte. Ltd.	Corretaje	100%
Banco do Brasil Securities LLC	Corretaje	100%
BB Securities Ltd.	Corretaje	100%
BB USA Holding Company, Inc.	Holding	100%
Brazilian American Merchant Bank	Bancaria	100%
Banco do Brasil Americas	Bancaria	100%
Banco Patagonia S.A.	Bancaria	80,39%
Segmento Inversiones		
BB Banco de Investimento S.A.	Banco de Inversión	100%
Segmento Gestión de Recursos		
BB Gestao de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	Administración de activos	100%
Besc - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	Administración de activos	99,62%
Segmento Seguros, Previsional y Capitalización		
BB Seguridade Participações S.A.	Holding	66,36%
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.	Corretaje	66,36%
BB Seguros Participações S.A.	Holding	66,36%
Segmento Medios de Pago		
BB Administradora de Cartões de Crédito S.A.	Prestación de servicios	100%
BB Elo Cartões Participações S.A.	Holding	100%

Otros segmentos

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros	Adquisición de créditos	100%
Ativos S.A. Gestao de Cobrança e Recuperação de Credito	Adquisición de créditos	100%
BB Administradora de Consórcios S.A.	Consortio	100%
BB Tur Viagens e Turismo Ltda.	Turismo	100%
BB Asset Management Ireland Limited	Adquisición de créditos	100%
BB Tecnologia e Serviços S.A.	Informática	99.99%

Identificación de los accionistas controlantes últimos de Banco do Brasil

El siguiente cuadro informa los distintos accionistas de Banco do Brasil y del cual se observa que el accionista controlante es el Estado Nacional de la República Federativa del Brasil:

Accionistas	Participación en el capital social al 31 de marzo de 2019 (en %)
Unión Federal (Estado Nacional) ⁽¹⁾	
Ministerio de Economía	50,73%
Caja de Previsión de los empleados de Banco do Brasil	6,32%
Acciones en tesorería	2,79%
Acciones en Mercado (free float)	40,17%

(1) Estado Nacional de la República Federativa del Brasil

Subsidiarias del Banco

El Banco realiza determinadas operaciones a través de sus subsidiarias. En el cuadro a continuación se describen las mismas.

Subsidiarias del Banco	Participación del Banco
Patagonia Inversora S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión	99,99%
Patagonia Valores S.A.	99,99%
Banco Patagonia (Uruguay) S.A.I.F.E.	100,00%
GPAT Compañía Financiera S.A.U.	100,00%

Patagonia Inversora S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión

Patagonia Inversora S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión (“Patagonia Inversora”), es una Sociedad Anónima inscrita en la Comisión Nacional de Valores (CNV) como Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión, cuyo objeto es la promoción, administración y gerenciamiento de Fondos Comunes de Inversión. La comercialización de los Fondos es realizada exclusivamente a través del Banco, que a su vez opera como la Sociedad depositaria de los mismos..

A continuación se detallan las cifras en miles Pesos para Patagonia Inversora de los estados contables al 31 de marzo de 2019 y 2018 y al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016.

	Periodo de 3 meses finalizado el 31 de marzo		Ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre		
	2019	2018	2018	2017	2016
	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)
	(En miles de pesos)				
Patrimonio administrado	388.066	254.498	314.703	320.694	9.473.128
Patrimonio neto	324.930	209.768	265.100	265.146	132.853
Resultados del período/ejercicio	28.605	34.313	93.471	68.623	50.503
(1) Valores en moneda Constante					
(2) Valores historicos					

Patagonia Valores S.A

Patagonia Valores S.A. (“Patagonia Valores”), es una Sociedad Anónima inscrita en la CNV como Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral, tiene como objeto exclusivo intervenir en la

liquidación y compensación de operaciones –colocación primaria y negociación secundaria de valores, por cuenta propia o de terceros.

A continuación se detallan las cifras en miles de Pesos para Patagonia Valores de los estados contables al 31 de marzo de 2019 y 2018 y al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016.

	Período de 3 meses finalizado el 31 de marzo		Ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre		
	2019	2018	2018	2017	2016
	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)
	(En miles de pesos)				
Activos totales	42.118	100.397	41.827	140.266	33.737
Patrimonio neto	39.207	73.926	37.691	102.428	30.956
Resultados del período/ejercicio	(2.923)	(138.7)	(10.384)	42.610	4.901
(1) Valores en moneda Constante					
(2) Valores historicos					

Banco Patagonia (Uruguay) S.A.I.F.E.

Banco Patagonia (Uruguay) S.A.I.F.E. (“Banco Patagonia Uruguay”) es una Sociedad Anónima uruguaya que desarrolla la actividad de intermediación financiera en ese país, exclusivamente con no residentes de Uruguay, llevando a cabo su operatoria comercial y administrativa bajo la supervisión del Banco Central del Uruguay.

A continuación se detallan las cifras en miles de Dólares para Banco Patagonia Uruguay de los estados contables al 31 de marzo de 2019 y 2018 y al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016.

	Período de 3 meses finalizado el 31 de marzo		Ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre		
	2019	2018	2018	2017	2016
	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)
	(En miles de pesos)				
Activos totales	45.319	41.133	36.053	34.864	41.642
Patrimonio neto	10.355	11.892	10.117	12.366	11.978
Resultados del período/ejercicio	74	(475)	(2.249)	323	221
(1) Valores en moneda Constante					
(2) Valores historicos					

GPAT Compañía Financiera S.A.U.

GPAT Compañía Financiera S.A.U. (“GPAT Compañía Financiera”), es una Sociedad Anónima Unipersonal, desarrolla sus actividades de financiamiento mayorista y minorista dentro del sector de la industria automotriz, a través del otorgamiento de préstamos prendarios para la adquisición de vehículos nuevos y usados, comercializados principalmente por General Motors de Argentina S.R.L. a través de su red de concesionarias oficiales. Asimismo, se encarga de la prestación de servicios de administración de la cartera de créditos otorgados por Banco Patagonia a las concesionarias de General Motors de Argentina, llevando a cabo su operatoria bajo la supervisión del BCRA. Asimismo, se encuentra bajo la supervisión de la CNV por estar habilitada a la emisión de Obligaciones Negociables con oferta pública.

A continuación se detallan las cifras en miles de Pesos y en valores historicos para GPAT Compañía Financiera S.A.U. de los estados financieros al 31 de marzo de 2019 y 2018 al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016.

	Período de 3 meses finalizado el 31 de marzo		Ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre		
	2019	2018	2018	2017	2016
	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)
	(En miles de pesos)				
Activos totales	4.437.789	5.431.848	4.673.387	5.476.507	3.780.010
Patrimonio neto	705.383	948.047	740.473	952.086	1.015.362
Resultados del período/ejercicio	(35.090)	(4.039)	17.180	234.814	281.322

B) ACCIONISTAS PRINCIPALES

El capital social del Banco está representado por 719.145.237 acciones, de las cuales 22.768.818 son de Clase “A” y 696.376.419 son de Clase “B”, siendo ambas clases escriturales, de V\$N 1 y un voto cada una.

En el cuadro a continuación se expone la información relativa a la tenencia de acciones clase “A” y acciones clase “B” de los accionistas del Banco al 31 de marzo de 2019.

Accionista	Clase de acciones	Capital social (en pesos)	Participación en el Banco
Banco do Brasil	B	578.116.870	80,39%
Administración Nacional de Seguridad Social	B	109.976.022	15,29%
Provincia de Río Negro	A	22.768.818	3,17%
Accionistas Agrupados (Bolsas del país y del exterior)	B	8.283.527	1,15%
Total:		719.145.237	100,0000%

Evolución del capital social del Banco

La siguiente tabla representa la evolución del capital social del Banco y los cambios en el monto del capital social:

Fecha	Capital social	Aumento (Reducción)	Evento
(En miles de pesos)			
1 de enero de 2004	397.483		Saldo inicial
11 de julio de 2005	433.351	35.868	Capitalización de ajustes al patrimonio
11 de julio de 2005	439.750	6.399 ⁽¹⁾	Capitalización de aportes irrevocables
30 de octubre de 2006	599.333	159.583	Capitalización de resultados no asignados
30 de octubre de 2006	671.622	72.289 ⁽¹⁾	Capitalización de aportes irrevocables
30 de octubre de 2006	673.156	1.534 ⁽¹⁾	Capitalización de un depósito en garantía correspondiente al ex Banco Sudameris Argentina
23 de julio de 2007	748.156	75.000	Emisión de nuevas acciones ordinarias escriturales clase “B”
9 de marzo de 2010	719.265	(28.891)	Cancelación de acciones ordinarias escriturales clase “B”
14 de diciembre de 2015	719.145	(1.195)	Cancelación de acciones ordinarias escriturales clase “B”

(1) Dichas capitalizaciones no implicaron cambios en los porcentajes de las tenencias accionarias porque provienen del acuerdo de fusión con el ex Banco Sudameris Argentina. En dicho acuerdo, los Ex Accionistas Controlantes y el Grupo Intesa Sanpaolo convinieron que los derechos emergentes de dichas capitalizaciones se cedieron a todos los accionistas del Banco a prorrata de sus tenencias.

Sociedades controladas por el Banco

En Argentina

Patagonia Inversora S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, Patagonia Valores S.A. y GPAT Compañía Financiera S.A.U. Véase la sección “*ESTRUCTURA DEL EMISOR, ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS - Estructura del Emisor y su Grupo Económico – Patagonia Inversora S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión*”, “– Patagonia Valores S.A.” y “– GPAT Compañía Financiera S.A.U.”.

En Uruguay

Banco Patagonia Uruguay S.A.I.F.E. Véase la sección “*ESTRUCTURA DEL EMISOR, ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS - Estructura del Emisor y su Grupo Económico – Banco Patagonia (Uruguay) S.A.I.F.E.*”.

C) TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

Provincia de Río Negro

La Provincia de Río Negro, única accionista titular de acciones clase A y con una participación en el Banco de 3,1661%, posee de acuerdo a lo establecido en el estatuto social del Banco, la facultad de designar un director por la clase A mientras detente al menos una acción de dicha clase. Véase las secciones “*Accionistas*”.

Principales”, e *“Información Adicional – Elección de directores”*. Desde el año 1996, el Banco actúa como agente financiero de la provincia de Río Negro, en virtud del convenio celebrado en 1996, renovado el 1° de enero de 2007 por un plazo de 10 años a partir de dicha fecha. El rol de agente financiero provincial permite prestar diversos servicios a fin de atender las necesidades financieras y de servicios de los distintos estamentos del sector público de la provincia (administración central, organismos y sociedades vinculadas, como así también municipios), tales como recaudación de impuestos, acreditación de haberes, entre otros. La función de agente financiero no incluye la obligación de asistir financieramente a la Provincia de Río Negro en otras condiciones que las compatibles con el carácter de banco privado. En febrero de 2016, el Emisor se presentó en el proceso de licitación lanzado por la Provincia de Río Negro para renovar su papel de Agente Financiero. A la fecha de este Prospecto, el Emisor ha renovado su papel de Agente Financiero de la Provincia por un plazo adicional de 10 años.

Con fecha 12 de diciembre de 2013, el Emisor informó como hecho relevante mediante la AIF que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 72 y 73 de la Ley 26.831, el Directorio del Emisor, en su reunión del 12 de diciembre de 2013 resolvió aprobar un préstamo sindicado en el cual el Banco es participante –junto con otras entidades financieras-, organizador y banco agente, con su parte relacionada Provincia de Río Negro. La aprobación contó con la previa opinión del Comité de Auditoría, en el cual se determinó que la operación puede razonablemente considerarse adecuada a las condiciones normales y habituales de mercado.

Con fecha 30 de noviembre de 2015, el Emisor informó como hecho relevante mediante la AIF que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 72 y 73 de la Ley de Mercado de Capitales, el Emisor aprobó la participación en el otorgamiento de un préstamo sindicado en el cual el Emisor actúa como prestamista –junto con otras entidades financieras-, organizador y banco agente, con su parte relacionada Provincia de Río Negro. La aprobación por el Directorio del Emisor contó con la previa opinión del Comité de Auditoría, en el cual se determinó que la operación puede razonablemente considerarse adecuada a las condiciones normales y habituales de mercado.

D) OTRA INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS

Préstamos a directores, gerentes de primera línea o miembros cercanos de las familias

El Banco no ha participado en transacciones y préstamos con sus directores, gerentes de primera línea o miembros cercanos de las familias de tales personas, no les ha otorgado ningún préstamo, ni existe ninguna operación propuesta con dichas personas, excepto aquellas permitidas por leyes vigentes las que por sus importes son de muy baja significancia. En particular, algunos de sus directores han participado en ciertas operaciones de crédito con el Banco de acuerdo a lo permitido por la Ley General de Sociedades y las normas del Banco Central que permiten tales operaciones cuando ellas se ajusten a prácticas del mercado. Tales normas fijan límites sobre el monto de crédito que puede otorgarse a las partes vinculadas basándose entre otras cosas, en un porcentaje de la RPC del Banco.

El Banco Central exige la presentación, sobre una base mensual, de un detalle del monto de crédito pendiente de directores, accionistas controlantes, funcionarios y otras entidades relacionadas que fueron tratados por el directorio. Por normativa del Banco Central tales préstamos deben otorgarse en un pie de igualdad con respecto a las tasas, tenor y garantías de los préstamos otorgados al público en general.

Al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, existía un total de Ps. 21.685 millones, Ps. 143.475 millones y Ps. 225.188 millones, respectivamente, en concepto de asistencia financiera pendiente de pago otorgada por el Banco y sus sociedades controladas en forma consolidada (financiamientos en los que se incluyen las garantías otorgadas) a Partes Relacionadas. A los efectos del presente, “Partes Relacionadas” significan los directores, funcionarios principales, síndicos, accionistas controlantes del Banco, como también los miembros cercanos de sus familias y toda empresa que directa o indirectamente sea controlada o con influencia significativa por cualquiera de estas partes y que no se exige sean consolidadas.

Asistencia financiera a Partes Relacionadas	31 de marzo de 2019	2018	31 de diciembre 2017	2016
		(En miles de pesos)		
Préstamos	14.896	21.402	143.334	137.386
Adelantos	5.858	4.650	4.869	7.001
- Sin garantías ni contragarantías preferidas	5.858	4.650	4.869	7.001
Documentos	-	8.462	129.249	122.882
- Sin garantías ni contragarantías preferidas	-	8.462	129.249	122.882
Personales	1.117	1.229	1.683	1.473

- Sin garantías ni contragarantías preferidas	1.117	1.229	1.683	1.473
Tarjetas de crédito	7.921	7.061	7.533	6.030
- Sin garantías ni contragarantías preferidas	7.921	7.061	7.533	6.030
Otros Créditos por Intermediación Financiera	-	-	-	51.204
Créditos por arrendamientos financieros	-	-	-	-
Responsabilidades Eventuales	-	284	141	36.598
Total	14.896	21.685	143.475	225.188

Nota: la información del cuadro es interna del Banco y no surge de sus estados contables.

Interés de expertos y/o asesores

A requerimiento de las normas de la CNV, se informa que ninguno de los expertos y/o asesores fue empleado sobre una base contingente ni posee una cantidad de acciones en el Banco o sus subsidiarias que sea importante para dicha persona, así como tampoco ningún experto y/o asesor tiene un interés económico importante sobre el Banco.

ACTIVOS FIJOS Y SUCURSALES DE LA EMISORA

ACTIVOS FIJOS

El Banco es titular de 38.687 metros cuadrados de oficinas ubicadas en Teniente General J. D. Perón 500, Avenida de Mayo 701, Teniente General J. D. Perón 466 y Luzuriaga 1.650, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, en donde se aloja el personal de la casa central que desempeña tareas directivas, contables, administrativas y de relaciones con inversores. Al 31 de marzo de 2019, la red de sucursales del Banco está integrada por 187 sucursales en Argentina, de las cuales 143 son alquiladas y el resto de propiedad del Banco. Asimismo, a la misma fecha, el Banco posee 23 centros de atención al cliente de los cuales uno es propio. Adicionalmente, el Banco posee otras propiedades que son usadas como espacios de estacionamiento, almacenamiento y otros usos, incluyendo alquiler.

	31 de marzo de		31 de diciembre	
	2019	2018	2018	2017
	(En miles de pesos)			
Activos fijos	5.801.176	2.501.877	5.494.066	2.595.416

El Banco tiene contratado una póliza de seguros de incendio y todo riesgo operativo, bajo cuya cobertura se encuentran asegurados el total de los inmuebles, tanto propios como alquilados. Las sumas aseguradas dentro de la mencionada póliza son las siguientes: edificios por US\$ 184 millones; contenido general por US\$ 8.3 millones y Atms y TAS US\$ 21.7 millones.

ANTECEDENTES FINANCIEROS

Los cuadros que se incluyen a continuación presentan datos financieros y contables consolidados del Banco, con sus sociedades controladas: Patagonia Valores S.A., Patagonia Inversora S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, Banco Patagonia (Uruguay) S.A.I.F.E., y GPAT Compañía Financiera S.A.U.. El inversor debería leer esta información conjuntamente con los estados financieros y las notas relacionadas a los mismos, incluidos en este Prospecto, y la información descripta en la sección “*Reseña Informativa*”. Los datos financieros seleccionados por los períodos de tres meses terminados el 31 de marzo de 2019 y 2018, provienen de estados financieros revisados por auditoría externa y por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, provienen de los estados financieros anuales auditados, incluidos en este Prospecto. Respecto de las prácticas contables utilizadas, véase la sección “*Avisos a los Inversores – Prácticas contables*”.

a) Estados financieros

1. Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales

	Periodo de 3 meses finalizado el 31 de marzo de		Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de	
	2019	2018	2018	2017
	(cifras expresadas en miles de Pesos)			
Ingresos por intereses	10.328.656	4.045.658	25.306.178	13.769.091
Egresos por intereses	(4.819.193)	(1.471.119)	(11.629.570)	(5.100.636)
Resultado neto por intereses	5.509.463	2.574.539	13.676.608	8.668.455
Ingresos por comisiones	1.440.970	1.066.311	4.138.135	3.164.532
Egresos por comisiones	(182.912)	(106.000)	(497.648)	(366.752)
Resultado neto por comisiones	1.258.058	960.311	3.640.487	2.797.780
Resultado neto por medición de instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	51.262	246.372	1.278.077	1.024.439
Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera	441.743	6.492	1.064.621	345.871
Otros ingresos operativos	1.876.679	269.394	1.979.598	1.504.074
Cargo por incobrabilidad	(1.658.906)	(220.993)	(2.409.842)	(792.132)
Ingreso operativo neto	7.478.299	3.836.115	19.229.549	13.548.487
Beneficios al personal	(1.501.105)	(1.068.300)	(4.668.876)	(3.576.778)
Gastos de administración	(944.810)	(629.341)	(3.240.171)	(2.383.573)
Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes	(114.797)	(48.107)	(202.130)	(165.187)
Otros gastos operativos	(1.122.658)	(670.779)	(3.486.102)	(2.405.565)
Resultado Operativo	3.794.929	1.419.588	7.632.270	5.017.384
Resultado por asociadas y negocios conjuntos	40.818	48.704	373.032	169.171
Resultado antes de impuesto de las actividades que continúan	3.835.747	1.468.292	8.005.302	5.186.555
Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan	(1.218.737)	(478.014)	(2.654.632)	(2.068.758)
Resultado neto de las actividades que continúan	2.617.010	990.278	5.350.670	3.117.797
RESULTADO NETO DEL PERÍODO/EJERCICIO	2.617.010	990.278	5.350.670	3.117.797
GANANCIA POR ACCIÓN				
NUMERADOR				
Ganancia neta atribuible a Accionistas de la Entidad Controladora	2.617.010	990.278	5.350.670	3.117.797
Ganancia neta atribuible a Accionistas de la Entidad controladora ajustada por el efecto de la dilución	2.617.010	990.278	5.350.670	3.117.797

DENOMINADOR

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación del período/ejercicio	719.145	719.145	719.145	719.145
Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación del período/ejercicio ajustado por el efecto de la dilución	719.145	719.145	719.145	719.145
Ganancia por acción Básica	3,639	1,377	7,440	4,335
Ganancia por acción Diluida	3,639	1,377	7,440	4,335

RESULTADO DEL PERÍODO / EJERCICIO	2.617.010	990.278	5.350.670	3.117.797
--	------------------	----------------	------------------	------------------

Componentes de otro Resultado Integral que se reclasificarán al resultado del período/ejercicio

Revaluación de propiedad, planta y equipo e intangibles.	-	-	2.253.473	179.631
Revaluaciones del ejercicio de propiedad, planta y equipo e intangibles.	-	-	3.007.365	-
Impuesto a las ganancias	-	-	(753.892)	179.631
Diferencia de cambio por conversión de Estados Financieros	44.365	12.402	153.036	27.031
Diferencia de cambio del período/ejercicio	59.153	16.536	204.048	36.041
Impuesto a las ganancias	(14.788)	(4.134)	(51.012)	(9.010)
Ganancias o pérdidas por instrumentos financieros a valor razonable con cambios en el ORI (Punto 4.1.2° de la NIIF 9)	73.533	(36.175)	(149.635)	39.348
Resultado del período/ejercicio por instrumentos financieros a valor razonable con cambios en el ORI	103.179	(48.267)	(187.632)	53.126
Impuesto a las ganancias	(29.646)	12.092	37.997	(13.778)
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO/EJERCICIO	117.898	(23.773)	2.256.874	246.010
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL	117.898	(23.773)	2.256.874	246.010
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	2.734.908	966.505	7.607.544	3.363.807
Atribuible a los propietarios de la controladora	2.734.908	966.505	7.607.544	3.363.807

SEGÚN NORMAS DEL BCRA PREVIAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO BASADO EN NIIF**Por el ejercicio Finalizado el 31 de diciembre de 2016**

Ingresos financieros	13.363.124
Egresos financieros	6.232.748
Margen bruto por intermediación	7.130.376
Cargo por incobrabilidad	407.189
Ingresos por servicios	3.266.426
Egresos por servicios	1.109.495
Gastos de administración	4.738.460
Utilidades diversas	706.262
Pérdidas diversas	84.528
Impuesto a las ganancias	1.494.400
Resultado Neto	3.268.992
Ganancia por acción	4,5457
Dividendos por acción	2,2728
Número de acciones ordinarias en circulación al cierre del ejercicio	719.145

2. Estado de Situación Financiera

	Periodo de 3 meses finalizado el 31 de marzo de		Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de		
	2019	2018	2018	2017	2016
	(cifras expresadas en miles de Pesos)				
Efectivo y Depósitos en Bancos	36.643.331	13.085.816	34.940.609	14.422.402	10.885.200
Efectivo	4.280.191	3.071.081	4.752.520	3.075.161	2.489.434
Entidades Financieras y corresponsales	32.363.140	10.014.735	30.188.089	11.347.241	8.395.766
BCRA	31.353.277	9.519.408	29.379.307	10.893.579	7.416.575
Otras del país y del exterior	1.009.863	495.327	808.782	453.662	979.191
Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados	25.177	918.312	182.928	438.106	946.733
Instrumentos derivados	7.772	41.727	148.988	34.201	10.312
Operaciones de pase	1.167.197	805.224	663.435	952.850	453.901
Otros activos financieros	2.276.321	2.733.310	3.158.092	1.725.203	322.415
Préstamos y otras financiaciones	78.659.786	60.952.982	82.549.304	61.623.720	44.812.000
Sector Público no Financiero	106.777	447.504	221.825	450.660	479.860
Otras Entidades financieras	3.270.121	1.359.453	3.617.245	2.139.251	1.428.530
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior	75.282.888	59.146.025	78.710.234	59.033.809	42.903.610
Otros Títulos de Deuda	45.766.690	11.255.816	23.649.064	13.184.641	11.515.909
Activos financieros entregados en garantía	3.071.406	1.866.506	2.797.674	1.736.636	1.114.082
Activos por impuestos a las ganancias corriente	16.122	183	40.396	188	128
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	220.281	10.355	6.347	13.673	3.452
Inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	187.671	91.473	146.853	188.710	114.490
Propiedad, planta y equipo	5.801.176	2.501.877	5.494.066	2.595.416	2.624.044
Activos intangibles	158.625	43.662	62.630	46.774	26.368
Activos por impuesto a las ganancias diferido	84.024	160.725	72.611	60.337	76.674
Otros activos no financieros	340.676	353.037	347.178	262.928	214.165
Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	267.639	234.831	34.383	-
TOTAL ACTIVO	174.426.255	95.088.644	154.495.006	97.320.168	73.119.873
PASIVO					
Depósitos	121.762.106	64.771.165	109.117.039	69.062.590	52.219.646
Sector público no Financiero	10.892.354	4.721.989	11.995.436	4.666.896	3.297.391
Sector Financiero	43.607	65.988	38.330	13.179	6.030
Sector privado no Financiero y Residentes en el exterior	110.826.145	59.983.188	97.083.273	64.382.515	48.916.225
Pasivos a valor razonable con cambios en resultados	128.078	163.838	-	124.934	-
Instrumentos derivados	117.638	9.495	74.331	14.058	11.606
Operaciones de pase	3.957.580	1.504.826	916.010	1.857.080	135.238
Otros pasivos financieros	7.903.136	6.235.156	9.321.695	6.020.069	3.226.977
Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras	11.541.733	2.859.346	9.358.048	2.372.762	2.303.547
Obligaciones negociables emitidas	1.663.740	2.541.324	1.678.055	2.231.014	1.579.937
Pasivo por impuestos a las ganancias corriente	2.709.196	1.015.920	1.757.878	871.381	843.630
Provisiones	398.805	224.799	402.073	214.139	140.635
Pasivo por impuestos a las ganancias diferido	14.493	22.863	184.956	-	210.074
Otros pasivos no financieros	3.201.622	2.310.125	3.391.701	2.088.859	1.703.917
TOTAL PASIVO	153.398.127	81.658.857	136.201.786	84.856.886	62.375.207
PATRIMONIO NETO					
Capital Social	719.145	719.145	719.145	719.145	719.145
Aportes no capitalizados	217.191	217.191	217.191	217.191	217.191
Ganancias reservadas	8.442.024	6.664.419	8.442.024	6.664.419	5.029.804
Resultados no asignados	5.180.076	3.384.617	(170.594)	266.820	267.728
Otros Resultados Integrales acumulados	3.852.682	1.454.137	3.734.784	1.477.910	1.231.652
Resultado del período / ejercicio	2.617.010	990.278	5.350.670	3.117.797	3.268.992
Patrimonio Neto atribuible a los propietarios de la controladora	21.028.128	13.429.787	18.293.220	12.463.282	10.734.512
Patrimonio Neto atribuible a participaciones no controladoras	-	-	-	-	10.154
TOTAL PATRIMONIO NETO	21.028.128	13.429.787	18.293.220	12.463.282	10.744.666
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO	174.426.255	95.088.644	154.495.006	97.320.168	73.119.873

3. Estado de cambios en el Patrimonio

Al 31 de marzo de 2019 (cifras expresadas en miles de Pesos):

Movimientos	Capital Social	Aportes no capitalizados	Otros Resultados Integrales			Reserva de utilidades		Resultados no Asignados	Total PN atribuible a la participación controladora	Total patrimonio neto al 31/03/2019
	En circulación	Primas de emisión de acciones	Diferencia de cambio por conversión de estados financieros	Revaluación Propiedad, Planta y Equipo	Resultados acumulados por instrumentos financieros a VR c/cambios en ORI	Legal	Otras			
Saldo al comienzo del período	719.145	217.191	180.067	3.664.657	(109.940)	3.252.830	5.189.194	5.180.076	18.293.220	18.293.220
Resultado del período	-	-	-	-	-	-	-	2.617.010	2.617.010	2.617.010
Otro Resultado Integral del período	-	-	44.365	-	73.533	-	-	-	117.898	117.898
Saldos al cierre del período	719.145	217.191	224.432	3.664.657	(36.407)	3.252.830	5.189.194	7.797.086	21.028.128	21.028.128

Al 31 de marzo de 2018 (cifras expresadas en miles de Pesos):

Movimientos	Capital Social	Aportes no capitalizados	Otros Resultados Integrales			Reserva de utilidades		Resultados no Asignados	Total PN atribuible a la participación controladora	Total patrimonio neto al 31/03/2018
	En circulación	Primas de emisión de acciones	Diferencia de cambio por conversión de estados financieros	Revaluación Propiedad, Planta y Equipo	Resultados acumulados por instrumentos financieros a VR c/cambios en ORI	Legal	Otras			
Saldo al comienzo del período	719.145	217.191	27.031	1.411.184	39.695	2.541.788	4.122.631	3.384.617	12.463.282	12.463.282
Resultado del período	-	-	-	-	-	-	-	990.278	990.278	990.278
Otro Resultado Integral del período	-	-	12.402	-	(36.175)	-	-	-	(23.773)	(23.773)
Saldos al cierre del período	719.145	217.191	39.433	1.411.184	3.520	2.541.788	4.122.631	4.374.895	13.429.787	13.429.787

4. Estado de Flujo de Efectivo

	Periodo de 3 meses finalizado el 31 de marzo de		Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de	
	2019	2018	2018	2017
(cifras expresadas en miles de Pesos)				
Flujos de efectivo de las actividades operativas				
Resultado del período/ejercicio antes del Impuesto a las Ganancias	3.835.747	1.468.292	8.005.302	5.186.555
Ajustes para obtener los flujos provenientes de actividades operativas:	(3.332.276)	(396.641)	(3.935.583)	(3.053.659)
Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes	114.797	48.107	202.130	165.187
Cargo por incobrabilidad	1.658.906	220.993	2.409.842	792.132
Otros ajustes	(5.105.979)	(665.741)	(6.547.555)	(4.010.978)
(Disminuciones) / aumentos netos proveniente de activos operativos:	(12.613.884)	4.107.523	(75.085.175)	(13.621.371)
Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados	158.979	(446.277)	63.772	39.707
Instrumentos derivados	141.216	(7.526)	(114.787)	(23.889)
Operaciones de pase	(503.762)	147.626	289.415	(498.949)
Préstamos y otras financiaciones	8.860.457	3.347.690	(58.095.392)	(9.308.324)
Sector Público no Financiero	11.328	28.257	(36.299)	(63.076)
Otras Entidades financieras	399.662	60.947	(1.315.402)	(299.054)
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior	8.449.467	3.258.486	(56.743.691)	(8.946.194)
Otros Títulos de Deuda	(21.905.453)	2.452.578	(14.340.891)	(1.660.368)
Activos financieros entregados en garantía	(273.732)	(129.870)	(1.061.038)	(622.554)
Inversión en Instrumentos de Patrimonio	(213.934)	3.318	7.326	(10.221)
Otros activos	1.122.345	(1.260.016)	(1.833.580)	(1.536.773)

Aumentos / (disminuciones) netos provenientes de pasivos operativos:	13.124.174	(6.889.581)	117.781.444	14.426.150
Depósitos	9.927.794	(7.287.755)	95.638.352	11.492.949
Sector Público no Financiero	1.111.478	(341.907)	5.002.575	703.698
Sector Financiero	4.580	(4.386)	13.844	1.752
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior	8.811.736	(6.941.462)	90.621.933	10.787.499
Pasivos a valor razonable con cambios en resultados	128.078	38.904	(124.934)	124.934
Instrumentos derivados	43.307	(4.563)	60.273	2.452
Operaciones de pase	3.041.570	(352.254)	(941.070)	1.721.842
Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras	1.631.392	183.872	20.738.859	(702.026)
Otros pasivos	(1.647.967)	532.215	2.409.964	1.785.999
Pagos por Impuesto a las Ganancias	(182.025)	(351.921)	(1.895.735)	(1.557.272)
TOTAL DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS (A)	831.736	(2.062.328)	44.870.253	1.380.403
Flujos de efectivo de las actividades de inversión				
Pagos:				
Compra de PPE, activos intangibles y otros activos	(600.721)	(139.993)	(293.802)	(190.171)
Cobros:				
Venta de PPE, activos intangibles y otros activos	241.710	204.972	128.853	238.205
TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (B)	(359.011)	64.979	(164.949)	48.034
Flujos de efectivo de las actividades de financiación				
Pagos:				
Obligaciones negociables no subordinadas	(656.090)	(337.170)	(2.214.615)	(1.610.697)
Financiaciones de entidades financieras locales	(243.688)	(72.432)	(191.721)	(11.497)
Arrendamientos	(57.519)	-	-	-
Cobros:				
Obligaciones negociables no subordinadas	497.548	497.724	945.640	1.826.181
TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (C)	(459.749)	88.122	(1.460.696)	203.987
EFFECTO DE LAS VARIACIONES DEL TIPO DE CAMBIO (D)	1.689.746	572.641	(22.726.401)	1.904.778
TOTAL DE LA VARIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO				
AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1.702.722	(1.336.586)	20.518.207	3.537.202
(A + B + C + D)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO / EJERCICIO	34.940.609	14.422.402	14.422.402	10.885.200
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERÍODO / EJERCICIO	36.643.331	13.085.816	34.940.609	14.422.402

**SEGÚN NORMAS DEL BCRA PREVIAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO
NORMATIVO BASADO EN NIIF**

Variaciones del efectivo y sus equivalentes

Efectivo al inicio del ejercicio	9.266.803
Efectivo al cierre del ejercicio	10.665.233
Aumento neto del efectivo	1.398.430

Causas de las variaciones del efectivo y sus equivalentes

Actividades operativas

Cobros netos por:	
Títulos Públicos y Privados	608.489
Préstamos	356.355
- Al sector financiero	(396.976)
- Al sector público no financiero	(3.816)
- Al sector privado no financiero y residentes en el exterior	757.147
Otros Créditos por Intermediación Financiera	2.363.738
Créditos por Arrendamientos Financieros	127.710

Depósitos	4.048.213
- Del sector financiero	3.732
- Del sector público no financiero	505.721
- Del sector privado no financiero y residentes en el exterior	3.538.760
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera	(458.154)
- Financiaciones del sector financiero o interfinancieros (call recibidos)	(2.221)
- Otras (excepto las obligaciones incluidas en Actividades de Financiación)	(455.933)
Cobros vinculados con ingresos por servicios	3.255.357
Pagos vinculados con egresos por servicios	(1.107.270)
Gastos de administración pagados	(4.581.115)
Pagos por gastos de organización y desarrollo	(60.587)
Cobros netos por intereses punitivos	16.861
Cobros de dividendos de otras sociedades	45.750
Otros Cobros vinculados con utilidades y pérdidas diversas	3.969
Pagos netos por otras actividades operativas	(693.805)
Pago del impuesto a las ganancias	(849.176)
Flujo neto generado por las actividades operativas	3.076.335
Actividades de inversión	
Pagos netos por bienes de uso	(308.067)
Cobros netos por bienes diversos	16.089
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión	(291.978)
Actividades de financiación	
Cobros netos por:	
Obligaciones Negociables no Subordinadas	(94.113)
Banco Central de la República Argentina	(10.000)
Bancos y Organismos Internacionales	(580.381)
Financiaciones recibidas de entidades financieras locales	160.000
Pago de dividendos	(1.715.261)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación	(2.239.755)
Resultados financieros y por tenencia del efectivo y sus equivalentes	853.828
(incluyendo intereses y resultado monetario)	
Aumento neto del efectivo	1.398.430

b) Indicadores Financieros

	Periodo de 3 meses finalizado el 31 de marzo de		Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de	
	2019	2018	2018	2017
	(cifras en miles de Pesos)			
Índices de Rentabilidad				
Retorno sobre activo promedio (1)	5,4%	4,7%	4,8%	3,7%
Retorno sobre patrimonio neto promedio (2)	44,4%	31,7%	38,2%	26,9%
Índices de Margen por Intereses y Comisiones				
Margen financiero total (Resultado neto por intereses / Activo Promedio)	13,9%	12,2%	11,7%	10,2%
Margen por servicios netos (Resultado total por comisiones / Activo Promedio)	2,6%	3,7%	3,1%	3,4%
Margen total (Ingresos totales netos / Activo Promedio) (3)	16,5%	15,9%	14,8%	13,6%
Resultado neto por comisiones sobre ingresos totales netos (4)	15,7%	23,3%	20,7%	25,1%
Índices de Patrimonio Neto				
Patrimonio neto sobre total de activo	12,1%	14,1%	11,8%	12,8%
Solvencia (patrimonio neto sobre pasivo total)	13,7%	16,4%	13,4%	14,7%
Pasivo total como múltiplo del Patrimonio Neto	7,3	6,1	7,5	6,8
RPC sobre Activos Ponderados por Riesgo (APR) (5)	15,2%	13,4%	12,5%	12,2%
Índices de Calidad de Cartera				
Cartera irregular sobre financiaciones (antes de provisiones) (6)	3,1%	1,6%	2,1%	2,0%
Provisiones sobre cartera irregular de financiaciones (6)	183,3%	203,3%	207,2%	237,7%
Cost of Risk (7)	9,1%	1,4%	3,2%	1,3%
Índices de Eficiencia				

Gastos totales sobre ingresos totales netos	39,2%	52,0%	47,0%	52,9%
Resultado neto por comisiones sobre gastos de administración	40,1%	44,9%	44,1%	47,5%

Índices de Liquidez

Activos líquidos sobre depósitos (8)	67,9%	39,0%	53,9%	40,6%
Préstamos (netos de provisiones) sobre activos	45,1%	64,1%	53,4%	63,3%
Depósitos sobre pasivos	79,4%	79,3%	80,1%	81,4%
Préstamos sobre depósitos	64,6%	94,1%	75,7%	89,2%
Inmovilización (9)	28,3%	19,0%	30,4%	21,2%

- (1) Definido como el cociente entre el resultado neto del período anualizado y el activo promedio.
(2) Definido como el cociente entre el resultado neto del período anualizado y el patrimonio neto promedio.
(3) Resultado total por comisiones definido como el resultado neto por comisiones más los resultados por comisiones incluidos en otros ingresos operativos y otros gastos operativos.
(4) Ingresos totales netos definido como la suma de los resultados netos por intereses y el resultado total por comisiones.
(5) RPC significa Responsabilidad Patrimonial Computable.
(6) Cartera irregular definida como las financiaci3nes clasificadas en situaci3n 3 - 4 - 5 y 6.de acuerdo a la normativa del BCRA.
(7) Definido como el cociente entre Cargo por incobrabilidad anualizado y cartera de préstamos promedio sin provisiones.
(8) Definido como la sumatoria de efectivo y depósitos en bancos, títulos de deuda e inversiones en instrumentos de patrimonio dividido por el total de depósitos.
(9) Definido como el cociente entre la sumatoria propiedad, planta y equipo y activos intangibles sobre el patrimonio neto.

c) Capitalización y Endeudamiento

	Al 31 de marzo de 2019 (En miles de pesos)
Endeudamiento	
Depósitos a corto plazo	121.760.706
Depósitos garantizados (1)	38.404.212
Depósitos no garantizados	83.356.494
Depósitos a largo plazo	1.400
Depósitos garantizados	-
Depósitos no garantizados	1.400
Otros pasivos	31.636.021
Deuda a corto plazo garantizada	-
Deuda a corto plazo no garantizada	28.600.737
Deuda a largo plazo garantizada	-
Deuda a largo plazo no garantizada	3.035.284
Total del Pasivo	153.398.127
Patrimonio Neto	21.028.128
Total de Capitalización y Endeudamiento	174.426.255

d) Capital Social

El capital social del Banco es representado por 719.145.237 acciones, de las cuales 22.768.818 son de Clase “A” y 696.376.419 son de Clase “B”. Conforme a lo dispuesto por el artículo 6 del Estatuto Social, las acciones clase A han sido suscriptas e integradas por la Provincia de Río Negro. Las acciones clase A y clase B otorgan derecho a un voto por acción. Todas las acciones son de valor nominal un peso cada una. Las acciones clase A tienen derecho a elegir un director siempre y cuando la Provincia de Río Negro retenga al menos una acción. Dichas acciones clase A se convertirán automáticamente en acciones clase B al ser transferidas a un titular que no sea la provincia de Río Negro.

El capital social se encuentra totalmente emitido e integrado a la fecha del presente. Para mayor información, véase “ESTRUCTURA DE LA EMISORA, ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS”.

Forma y transferencia

Según lo establecido por el artículo 6 del estatuto social, el capital social del Banco está representado por acciones escriturales. Los accionistas deben mantener sus tenencias en el Banco a través de asientos contables realizados directamente por Caja de Valores en el registro de accionistas del Banco llevado por Caja de Valores o a través de asientos contables en cuentas de corredores bursátiles, bancos u otras entidades autorizadas por la CNV para operar en Caja de Valores y que son denominados depositantes en Caja de Valores. Caja de Valores tiene a su cargo el mantenimiento del registro de accionistas en representación del Banco basándose en información recibida de (i) los accionistas que optan por mantener sus acciones directamente a través de dicho registro y (ii) los depositantes en Caja de Valores. De acuerdo con la ley argentina, únicamente aquellos

tenedores inscriptos en el registro de accionistas directamente o a través de depositantes en Caja de Valores serán reconocidos como accionistas del Banco. Las acciones mantenidas por los depositantes en Caja de Valores tendrán los mismos derechos que las acciones registradas directamente en el registro de accionistas del Banco.

e) Cambios Significativos

No han ocurrido cambios significativos adicionales a los ya mencionados en el Prospecto desde la fecha de los estados financieros del Banco al 31 de marzo de 2019, excepto por lo siguiente:

- Con fecha 30 de mayo de 2019, el Directorio del Banco resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 15 de julio de 2019, a los fines de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Desafectación parcial de Reserva Facultativa para Futura Distribución de Resultados constituida con anterioridad al ejercicio 2018 para aplicar al pago de Dividendos en Efectivo por \$ 442.322.500.- 3) Designación de Directores. 4) Autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea.

f) Reseña y perspectiva operativa financiera

Esta sección contiene declaraciones a futuro que involucran riesgos e incertidumbres. Los resultados reales del Banco pueden diferir sustancialmente de los comentados como consecuencia de distintos factores, incluyendo en particular, los mencionados en las secciones “*Avisos a los Inversores -Nota especial referida a las declaraciones sobre el futuro*”, “*Factores de Riesgo*” y, en general, los comentados en las restantes secciones del Prospecto.

El siguiente análisis se basa en la información que surge de los estados financieros del Banco y las notas pertinentes incluidas en otra parte de este Prospecto, y también de la sección “*Antecedentes Financieros*” y con la restante información financiera que figura en otras partes de este Prospecto.

La información que se incluye a continuación presenta datos financieros consolidados del Banco con sus sociedades controladas: Patagonia Valores S.A., Patagonia Inversora S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión y Banco Patagonia (Uruguay) S.A. I.F.E. y con GPAT Compañía Financiera S.A.U.

Información general

El Banco cuenta con una extensa red de sucursales en todo el país y ofrece una amplia gama de productos, servicios financieros y de mercado de capitales a sus clientes. Se destaca por su sólida posición financiera, su rentabilidad y por ser una de las entidades líderes en el servicio de acreditación de haberes (Plan Sueldo). En relación con su estrategia en materia de productos activos, el Banco se ha concentrado en el otorgamiento de facilidades crediticias a individuos de ingresos medios y medio bajos provenientes de su cartera de clientes de Plan Sueldo y a micro, pequeñas y medianas empresas, segmentos que según entiende el Banco, ofrecen significativas oportunidades de crecimiento a sus negocios. A partir del ingreso de Banco do Brasil como nuevo accionista controlante en 2011, continúa consolidándose en el segmento de grandes empresas, en particular de origen brasileño que operan en el país y las empresas multinacionales de origen argentino con vínculo comercial con Brasil. Para mayor información sobre el negocio del Banco y los productos que ofrece el Banco, véase la sección “*INFORMACIÓN DEL EMISOR - RESEÑA HISTÓRICA*”.

Los resultados netos del Banco por los períodos de tres meses finalizados el 31 de marzo de 2019 y 2018 ascendieron a Ps. 2.617,0 millones y Ps. 990,3 millones, respectivamente, y por los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, Ps. 5.350,7 millones y Ps. 3.117,8 millones respectivamente, lo que representa una rentabilidad interanual sobre el patrimonio neto (“ROE”) de 44,4%, 35,5%, 38,2% y 26,9% respectivamente, y una rentabilidad sobre activos (resultado neto del ejercicio sobre activos totales promedios, “ROA”) de 5,4%, 4,7%, 4,8%, y 3,7% respectivamente.

Políticas contables

Los estados financieros consolidados condensados correspondientes a los períodos de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2019 y 2018 y por los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, han sido preparados de acuerdo con lo expuesto en la nota 2 de dichos estados financieros. La normativa del BCRA establece que las entidades bajo su supervisión presenten estados financieros preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de

Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés), salvo por las siguientes excepciones que serán aplicables para los ejercicios económicos que se inicien a partir del 1° de enero de 2020:

- a) Aplicación del modelo de deterioro de la sección 5.5 “Deterioro de valor” de la NIIF 9 “Instrumentos financieros” aplicable para las “Previsiones por Riesgo de Incobrabilidad”. Con fecha 14 de diciembre de 2018, la Entidad presentó al BCRA el modelo de deterioro a aplicar en el marco de NIIF 9 a partir del 1° de enero de 2020.
- b) Aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 29 (NIC 29) “Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias” en función de la vigencia de la Comunicación “A” 6651 del BCRA.

Las excepciones descriptas constituyen apartamientos a las NIIF.

Asimismo, el BCRA mediante las Comunicaciones “A” 6323 y “A” 6324 estableció los lineamientos para la elaboración y presentación de los estados financieros de las entidades, incluyendo los requerimientos adicionales de información, así como la información a ser presentada en forma de Anexos.

Con respecto a la NIC 29 sobre “Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias”, en virtud de la Comunicación “A” 6651 del BCRA emitida con fecha 22 de febrero de 2019 que estableció la adaptación de la dicha norma para los ejercicios que inicien a partir del 1 de enero de 2020, el Banco no ha aplicado mecanismos de reexpresión de estados financieros para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 ni para el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2019.

La dirección del Banco estima que el patrimonio y los resultados del Banco podrían diferir significativamente en caso de aplicar las normas contables sobre la materia. Aún cuando el Banco no ha cuantificado los efectos que sobre los estados financieros tendría su reexpresión en moneda homogénea, la existencia de un contexto inflacionario afecta la situación financiera y los resultados del Banco, y, por ende, el impacto de la inflación puede distorsionar la información contable y debe ser tenido en cuenta en la interpretación que se realice de la información que el Banco brinda en el presente Prospecto y en los estados financieros sobre su situación financiera, sus resultados integrales y los flujos de su efectivo.

Para una mayor comprensión del marco contable aplicado, además de la nota mencionada, remitirse a las notas 3, 4 y 5 de los estados financieros.

RESULTADO OPERATIVO

La siguiente reseña de los resultados de las operaciones son realizadas sobre el Banco como un todo. El Banco utiliza un sistema de control de gestión para evaluar rentabilidad que está segmentado por categoría de clientes y dentro de esos segmentos por sucursales. Véase la sección “*INFORMACIÓN DEL EMISOR - RESEÑA HISTÓRICA*”.

	Periodo de 3 meses finalizado el 31 de marzo		Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de	
	2019	2018	2018	2017
	(cifras expresadas en miles de Pesos)			
Ingresos por intereses	10.328.656	4.045.658	25.306.178	13.769.091
Egresos por intereses	(4.819.193)	(1.471.119)	(11.629.570)	(5.100.636)
Resultado neto por intereses	5.509.463	2.574.539	13.676.608	8.668.455
Ingresos por comisiones	1.440.970	1.066.311	4.138.135	3.164.532
Egresos por comisiones	(182.912)	(106.000)	(497.648)	(366.752)
Resultado neto por comisiones	1.258.058	960.311	3.640.487	2.797.780
Resultado neto por medición de instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	51.262	246.372	1.278.077	1.024.439
Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera	441.743	6.492	1.064.621	345.871
Otros ingresos operativos	1.876.679	269.394	1.979.598	1.504.074
Cargo por incobrabilidad	(1.658.906)	(220.993)	(2.409.842)	(792.132)
Ingreso operativo neto	7.478.299	3.836.115	19.229.549	13.548.487

Beneficios al personal	(1.501.105)	(1.068.300)	(4.668.876)	(3.576.778)
Gastos de administración	(944.810)	(629.341)	(3.240.171)	(2.383.573)
Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes	(114.797)	(48.107)	(202.130)	(165.187)
Otros gastos operativos	(1.122.658)	(670.779)	(3.486.102)	(2.405.565)
Resultado Operativo	3.794.929	1.419.588	7.632.270	5.017.384
Resultado por asociadas y negocios conjuntos	40.818	48.704	373.032	169.171
Resultado antes de impuesto de las actividades que continúan	3.835.747	1.468.292	8.005.302	5.186.555
Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan	(1.218.737)	(478.014)	(2.654.632)	(2.068.758)
Resultado neto de las actividades que continúan	2.617.010	990.278	5.350.670	3.117.797
RESULTADO NETO DEL PERÍODO/EJERCICIO	2.617.010	990.278	5.350.670	3.117.797

El siguiente cuadro presenta determinados componentes de los estados financieros del Banco para los períodos de tres meses finalizados al 31 de marzo de 2019 y 2018 y para los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

	Saldo 31.03.2019	Tasa nominal promedio	Saldo 31.03.18	Tasa nominal promedio	Saldo 31.12.2018	Tasa nominal promedio	Saldo 31.12.2017	Tasa nominal promedio
Títulos Públicos y Privados	46.012.148	47,9%	12.184.483	30,5%	23.838.339	40,2%	13.636.420	23,0%
Préstamos Sector Privado (neto de provisiones)	75.282.888	30,9%	59.146.025	22,1%	78.710.234	27,3%	59.033.809	21,4%
Préstamos Sector Financiero	4.437.318	40,6%	2.164.677	23,4%	4.280.680	35,9%	3.092.101	25,9%
Otros activos	5.642.175	379,4%	5.138.793	19,0%	6.324.444	37,1%	4.101.209	52,7%
Total de activos que devengan intereses	131.374.529	41,5%	78.633.978	23,4%	113.153.697	30,3%	79.863.539	22,6%
Total de activos que no devengan intereses	43.051.726		16.454.666		41.341.309		17.456.629	
Total activos	174.426.255		95.088.644		154.495.006		97.320.168	
Depósitos en cajas de ahorro	48.718.962	2,2%	25.486.078	0,9%	44.273.423	3,0%	30.054.516	0,8%
Depósitos a plazo fijo	45.871.302	33,8%	22.697.133	18,2%	37.935.565	26,8%	22.519.622	18,0%
Préstamos de otras entidades financieras.	5.859.073	48,1%	3.465.838	22,0%	2.393.794	35,7%	3.609.275	25,8%
Obligaciones negociables no subordinadas	1.663.740	37,3%	2.541.324	17,3%	1.678.055	30,1%	2.231.014	24,6%
Otros pasivos	23.640.555	3,7%	13.906.334	2,3%	24.775.003	2,9%	12.975.945	1,3%
Total de pasivos que devengan intereses	125.753.632	18,4%	68.096.707	9,7%	111.055.840	15,3%	71.390.372	10,1%
Depósitos en cuentas corrientes	10.353.341		8.595.265		10.149.168		9.178.556	
Otros pasivos	17.291.154		4.966.885		14.996.778		4.287.958	
Total de pasivos que no devengan intereses	27.644.495		13.562.150		25.145.946		13.466.514	
Total pasivos	153.398.127		81.658.857		136.201.786		84.856.886	
Patrimonio neto	21.028.128		13.429.787		18.293.220		12.463.282	

Período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2019, comparado con el mismo período del 2018.

Ingresos por Intereses

El cuadro que sigue muestra los componentes de los ingresos por intereses del Banco por los períodos especificados:

	Período finalizado el 31 de marzo de		
	2019	2018	2019/2018 % variación
Títulos Públicos a VR con cambios en ORI	4.244.992	636.106	567,3%
Documentos	1.605.930	760.770	111,1%
Préstamos Personales	1.041.670	806.999	29,1%
Tarjetas de Crédito	1.001.897	365.173	174,4%
Adelantos	964.881	557.265	73,2%
Otros Préstamos	400.051	322.487	24,1%
Préstamos Prendarios	290.944	325.389	(10,6%)
Préstamos al Sector Financiero	225.655	104.323	116,3%
Otros	552.636	167.146	230,6%
Total	10.328.656	4.045.658	155,3%

Los ingresos por intereses al 31 de marzo de 2019 totalizaron Ps. 10.328,7 millones, incrementándose 155,3% (Ps. 6.283,0 millones) con respecto al 31 de marzo de 2018 (Ps. 4.045,7 millones).

La principal variación está dada por el resultado del rubro títulos públicos a valor razonable con cambios en otros resultados integrales (ORI) que totalizó Ps. 4.245,0 millones aumentando 567,3% (Ps. 3.608,9 millones) con respecto al 31 de marzo de 2018 (Ps. 636,1 millones), producto del incremento de la cartera de instrumentos emitidos por el BCRA (Leliq) y al aumento de la tasa de interés de los mismos, producto de la política monetaria implementada por el BCRA.

Los intereses por préstamos otorgados al sector privado no financiero totalizaron Ps. 5.380,3 millones, incrementándose 67,4% (Ps. 2.166,9 millones) respecto al 31 de marzo de 2018 (Ps. 3.213,4 millones) como consecuencia del incremento de la tasa promedio de interés anual en 880 bps que pasó de TNA 22,1% al TNA 30,9% y al incremento del total de la cartera en Ps. 16.136,9 millones (Ps. 75.282,9 millones Vs. Ps. 59.146,0 millones).

Las líneas que más se incrementaron fueron las vinculadas con la asistencia financiera a empresas a través de documentos Ps. 845,1 MM (Ps. 1.605,9 vs. Ps. 760,8 MM) y adelantos por Ps. 407,6 millones (Ps. 964,9 millones vs. 557,3 millones).

En la cartera de consumo, se destacan los incrementos en las líneas de tarjetas de crédito por Ps. 636,7 millones (Ps. 1.001,9 vs. Ps. 365,2 millones) y de préstamos personales por Ps. 234,7 millones (Ps. 1.041,7 millones vs. 807,0 millones).

Egresos por Intereses

El cuadro que sigue muestra los componentes de los egresos por intereses del Banco por los períodos especificados:

	Período finalizado el 31 de marzo de		
	2019	2018	2019/2018 % variación
Depósitos a Plazo Fijo	3.765.272	1.076.512	249,8%
Depósitos en Caja de Ahorros	207.271	45.791	352,7%
Financiaciones recibidas de entidades financieras	176.329	62.359	182,8%
Primas por pases pasivos con el sector financiero	166.243	38.827	328,2%
Obligaciones Negociables	144.227	149.756	(3,7%)
Otras Financiaciones recibidas de entidades financieras	27.970	21.367	30,9%
Otros	331.881	76.507	333,8%
Total	4.819.193	1.471.119	227,6%

Los egresos por intereses alcanzaron al 31 de marzo de 2019 Ps. 4.819,2 millones, incrementándose 227,6% (Ps. 3.348,1 millones) con respecto al 31 de marzo de 2018 (Ps. 1.471,1 millones).

La principal variación se debe al incremento de los intereses de la cartera de depósitos en 249,8% (Ps. 2.688,8 millones) como consecuencia del incremento de la tasa de interés pasiva promedio anual que pasó de TNA 18,2% a 33,8% y del crecimiento de la cartera en 102,1% (Ps. 23.174,2 millones).

Por otra parte los intereses por depósitos en cajas de ahorro se incrementaron 352,7% (Ps. 161,5 millones) como consecuencia del mayor volumen generado por las cuentas especiales remuneradas.

Margen bruto de intermediación

	Período finalizado el 31 de marzo de		
	2019	2018	2019/2018 % variación
Ingresos por Intereses	10.328.656	4.045.658	155,3%
Egresos por Intereses	4.819.193	1.471.119	227,6%
Resultado Neto por Intereses	5.509.463	2.574.539	114,0%

Resultado por Comisiones

	Período finalizado el 31 de marzo de		
	2019	2018	2019/2018 % variación
Depósitos	410.783	288.407	42,4%
Tarjetas de Débito y Crédito	369.567	303.293	21,9%
Paquetes de Productos	221.276	154.630	43,1%
Seguros	209.210	168.981	23,8%
Recaudaciones	119.913	61.682	94,4%
Comercio Exterior	63.998	39.504	62,0%
Préstamos	17.614	25.489	(30,9%)
Títulos Valores	10.241	11.651	(12,1%)
Otros	18.368	12.674	44,9%
Ingresos por Comisiones	1.440.970	1.066.311	35,1%
Egresos por Comisiones	182.912	106.000	72,6%
Total	1.258.058	960.311	31,0%

Los resultados netos por comisiones al 31 de marzo de 2019 alcanzaron Ps. 1.258,1 millones incrementándose 31,0% (Ps. 297,8 millones) con respecto al 31 de marzo de 2018 (Ps. 960,3 millones).

Los ingresos por comisiones alcanzaron Ps. 1.441,0 millones incrementándose 35,1% (Ps. 374,7 millones) con respecto al 31 de marzo de 2018 (Ps. 1.066,3 millones), debido principalmente al aumento de las comisiones vinculadas con depósitos (Ps. 122,4 millones), paquetes de productos (Ps. 66,7 millones) y tarjetas de débito y crédito (Ps. 66,3 millones).

Por su parte, los egresos por comisiones totalizaron al 31 de marzo de 2019 Ps. 182,9 millones incrementándose 72,6% (Ps. 76,9 millones) con respecto al 31 de marzo de 2018 (Ps. 106,0 millones).

Otros Ingresos Operativos

	Período finalizado el 31 de marzo de		
	2019	2018	2019/2018 % variación
Rdo. venta de activos mantenidos para la venta	1.434.097	-	-
Créditos recuperados	75.369	13.960	439,9%
Comisiones por alquileres de cajas de seguridad	58.849	58.244	1,0%
Vinculados con otras comisiones	53.910	38.228	41,0%
Intereses punitivos	30.307	10.525	188,0%
Utilidades por venta de propiedad, planta y equipo	52.905	16.141	227,8%
Otros	171.242	132.296	29,4%
Total	1.876.679	269.394	596,6%

Los resultados por otros ingresos operativos totalizaron Ps. 1.876,7 millones al 31 de marzo de 2019, incrementándose 596,6% (Ps. 1.607,3 millones) con respecto al 31 de marzo de 2018 (Ps. 269,4 millones).

La principal variación corresponde al resultado por la venta del 51% de la participación accionaria en Prisma Medios de Pago S.A. por Ps. 1.434,1 millones.

Cargo por incobrabilidad

	Período finalizado el 31 de marzo de		
	2019	2018	2019/2018 % variación
Cargos netos por provisiones de Financiaciones	1.658.906	220.993	650,7%
Total	1.658.906	220.993	650,7%

Al 31 de marzo de 2019 el cargo por incobrabilidad fue de Ps. 1.658,9 millones incrementándose 650,7% (Ps. 1.437,9 millones) con respecto al 31 de marzo de 2018 (Ps. 221,0 millones), generados por un mayor deterioro de la cartera y la constitución de provisiones adicionales a las mínimas requeridas por el BCRA. Asimismo, en este rubro se contabilizaron Ps. 594,0 millones correspondientes a la previsión técnica constituida por la parte financiada (40% del total de la transacción) de la venta de la participación en Prisma Medios de Pago S.A.

Al 31 de marzo de 2019 el indicador de cartera irregular sobre financiaciones fue de 3,1% y el de cobertura de cartera irregular con provisiones alcanzó 183,3%.

Gastos de administración

	Período finalizado el 31 de marzo de		
	2019	2018	2019/2018 % variación
Beneficios al Personal	1.501.105	1.068.300	40,5%
Gastos de administración (Operativos)	944.810	629.341	50,1%
Gastos de mantenimiento, conservación y reparaciones	204.497	104.496	95,7%
Impuestos	175.311	116.199	50,9%
Propaganda y publicidad	123.087	60.107	104,8%
Transporte de valores diversos	73.263	55.741	31,4%
Electricidad y comunicaciones	73.236	35.817	104,5%
Servicios de seguridad	64.439	42.876	50,3%
Honorarios	63.628	41.974	51,6%
Alquileres	12.803	50.902	(74,9%)
Otros	154.546	121.229	27,5%
Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes	114.797	48.107	138,6%
Total	2.560.712	1.745.748	46,7%

Los gastos de administración (incluyendo Beneficios al Personal y Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes) totalizaron al 31 de marzo de 2019 Ps. 2.560,7 millones, aumentando 46,7% (Ps. 815,0 millones) con respecto al 31 de marzo de 2018 (Ps. 1.745,7 millones).

Los beneficios al personal totalizaron al 31 de marzo de 2019 Ps. 1.501,1 millones, aumentando 40,5% (Ps. 432,8 millones) con respecto al 31 de marzo de 2018 (Ps. 1.068,3 millones) principalmente en el rubro gastos en personal como consecuencia de los incrementos salariales acordados para la actividad bancaria.

Los gastos de administración (Operativos) totalizaron Ps. 944,8 millones, incrementándose de 50,1% (Ps. 315,5 millones) con respecto al 31 de marzo de 2018 (Ps. 629,3 millones), debido principalmente al incremento en los gastos en mantenimiento, conservación y reparaciones (Ps. 100,0 millones), propaganda y publicidad (Ps. 63,0 millones) e impuestos (Ps. 59,1 millones).

Las depreciaciones y desvalorizaciones de bienes se incrementaron 138,6% (Ps. 66,7 M), principalmente por la registración del derecho de uso de los inmuebles alquilados como consecuencia de la entrada en vigencia de la NIIF 16 con aplicación prospectiva a partir del 1° de enero de 2019 y por la mayor depreciación de inmuebles como consecuencia del revalúo efectuado el 31 de diciembre de 2018.

Al 31 de marzo de 2019, el ratio de cobertura que vincula gastos de administración con ingresos por comisiones netos fue de 40,1% y el ratio de eficiencia, medido como el cociente entre los gastos de administración y los ingresos totales netos, fue de 39,2%.

Otros Gastos Operativos

	Período finalizado el 31 de marzo de		
	2019	2018	2019/2018 % variación
Otros Gastos Operativos			
Impuesto sobre los ingresos brutos	618.734	350.380	76,6%
Vinculados con otras comisiones	259.128	229.447	12,9%
Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos	47.464	28.734	65,2%
Cargo por otras previsiones	23.582	13.636	72,9%
Otros	173.750	48.582	257,6%
Total	1.122.658	670.779	67,4%

Al 31 de marzo de 2019 Otros gastos operativos totalizaron Ps. 1.122,7 millones, incrementándose 67,4% (Ps. 451,9 millones) respecto del 31 de marzo de 2018 (Ps. 670,8 millones), debido principalmente al incremento 76,6% (Ps. 268,3 millones) en el impuesto a los ingresos brutos sobre comisiones como consecuencia de los mayores ingresos por intereses y comisiones.

Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan

	Período finalizado el 31 de marzo de		
	2019	2018	2019/2018 % variación
Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan	1.218.737	478.014	155,0%

El Banco devengó Ps. 1.218,7 millones en concepto de impuesto a las ganancias al 31 de marzo 2019 frente a Ps. 478,0 millones correspondientes al 31 de marzo 2018, registrando un aumento del 155,0% (Ps. 740,7 millones) acompañando el crecimiento de los resultados del Banco.

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, comparado con el ejercicio anterior.

Ingresos por Intereses

El cuadro que sigue muestra los componentes de los ingresos por intereses del Banco por los ejercicios especificados:

	Ejercicio finalizado el 31 de diciembre		
	2018	2017	2018/2017 % variación
Títulos Públicos a VR con cambios en ORI	5.659.400	1.616.036	250,2%
Documentos	4.653.382	2.678.796	73,7%
Adelantos	4.105.932	1.613.491	154,5%
Préstamos Personales	3.606.390	2.611.764	38,1%
Tarjetas de Crédito	2.426.856	1.536.152	58,0%
Otros Préstamos	1.499.425	731.252	105,0%
Préstamos Prendarios	1.340.995	1.300.824	3,1%
Préstamos al Sector Financiero	697.162	338.751	105,8%
Otros	1.316.636	1.342.025	(1,9%)
Total	25.306.178	13.769.091	83,8%

Al 31 de diciembre de 2018 los ingresos por intereses totalizaron a Ps. 25.306,2 millones con un aumento de 83,8% (Ps. 11.537,1 millones) respecto al 31 de diciembre de 2017 (Ps. 13.769,1 millones), generado principalmente por el mayor devengamiento de intereses de préstamos al sector privado no financiero como consecuencia del incremento del total de la cartera en Ps. 19.676,4 millones (Ps. 78.710,2 millones vs. Ps. 59.033,8 millones) y por el incremento de la tasa promedio de interés anual que pasó de TNA 21,4% a TNA 27,3%.

Las líneas que verificaron un mayor incremento fueron las vinculadas con la asistencia financiera a empresas a través de adelantos por Ps. 2.492,4 millones (Ps. 4.105,9 millones vs. 1.613,5 millones) y documentos Ps. 1.974,6 millones (Ps. 4.653,4 millones vs. Ps. 2.678,8 millones).

En la cartera de consumo, se destacan los incrementos en las líneas de préstamos personales por Ps. 994,6 millones (Ps. 3.606,4 millones vs. Ps. 2.611,8 millones) y tarjetas de crédito por Ps. 890,7 millones (2.426,9 millones vs. 1.536,2 millones).

Asimismo, los intereses de la cartera de títulos medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral (ORI) se incrementaron en Ps. 4.043,4 millones (Ps. 5.659,4 millones vs. Ps. 1.616,0 millones) producto del incremento de la cartera de instrumentos emitidos por el BCRA (Lebac y Leliq) y del aumento de la tasa de interés de los mismos, producto de la política monetaria implementada por el BCRA.

Egresos por Intereses

El cuadro que sigue muestra los componentes de los Egresos por intereses del Banco por los ejercicios especificados:

	Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de		
	2018	2017	2018/2017 % variación
Depósitos a Plazo Fijo	8.583.886	3.866.253	122,0%
Depósitos en Caja de Ahorros	863.954	158.803	444,0%
Obligaciones Negociables	716.016	434.632	64,7%
Financiaciones recibidas de entidades financieras	369.718	241.201	53,3%
Primas por pases pasivos con el sector financiero	224.505	143.323	56,6%
Otras Financiaciones recibidas de entidades financieras	98.748	74.975	31,7%

Otros	772.743	181.449	325,9%
Total	11.629.570	5.100.636	128,0%

Al 31 de diciembre de 2018 los egresos por intereses totalizaron Ps. 11.629,6 millones con un incremento de 128,0% (Ps. 6.528,9 millones) respecto del ejercicio anterior (Ps. 5.100,6 millones), principalmente por un mayor devengamiento de intereses de depósitos a plazo fijo por Ps. 4.717,6 millones (Ps. 8.583,9 vs. Ps. 3.866,3 millones), como consecuencia del incremento de la tasa de interés pasiva promedio anual para este tipo de depósitos que pasó del TNA 18,0% a TNA 26,8% y del crecimiento de la cartera en Ps. 21.179,6 millones (Ps. 45.929,2 millones vs. Ps. 24.749,6 millones).

Por otra parte, los intereses por depósitos en cajas de ahorro se incrementaron 444,0% (Ps. 705,2 millones) como consecuencia del mayor volumen de las cuentas especiales remuneradas.

Margen bruto de intermediación

	Período finalizado el 31 de diciembre de		
	2018	2017	2018/2017 % variación
Ingresos por Intereses	25.306.178	13.769.091	83,8%
Egresos por Intereses	11.629.570	5.100.636	128,0%
Resultado Neto por Intereses	13.676.608	8.668.455	57,8%

Resultado por Comisiones

	Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de		
	2018	2017	2018/2017 % variación
Depósitos	1.382.812	988.848	39,8%
Tarjetas de Débito y Crédito	1.143.255	1.018.397	12,3%
Paquetes de Productos	749.905	522.967	43,4%
Recaudaciones	341.466	221.201	54,4%
Comercio Exterior	221.479	154.693	43,2%
Seguros	130.110	107.446	21,1%
Títulos Valores	62.650	31.527	98,7%
Préstamos	45.916	93.736	(51,0%)
Otros	60.542	25.717	135,4%
Ingreso por Comisiones	4.138.135	3.164.532	30,8%
Egresos por Comisiones	497.648	366.752	35,7%
Total	3.640.487	2.797.780	30,1%

El resultado neto por comisiones alcanzó Ps. 3.640,5 millones con un incremento de 30,1% (Ps. 842,7 millones) respecto del ejercicio anterior (Ps. 2.797,8 millones).

Los ingresos por comisiones totalizaron Ps. 4.138,1 millones, aumentando 30,8% (Ps. 973,6 millones) respecto del ejercicio anterior (Ps. 3.164,5 millones) debido principalmente al incremento de las comisiones vinculadas con depósitos por Ps. 394,0 millones, paquetes de productos por Ps. 226,9 millones, tarjetas de crédito y débito por Ps. 124,9 millones y recaudaciones por Ps. 120,3 millones.

Por su parte, los egresos por comisiones totalizaron al 31 de diciembre de 2018 Ps. 497,6 millones incrementándose 35,7% (Ps. 130,8 millones) con respecto al 31 de diciembre de 2017 (Ps. 366,8 millones).

Otros Ingresos Operativos

	Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de		
	2018	2017	2018/2017 % variación
Vinculados con otras comisiones	811.028	728.206	11,4%
Comisiones por alquileres de cajas de seguridad	207.734	167.577	24,0%
Créditos recuperados	130.094	64.052	103,1%
Utilidades por venta de propiedad, planta y equipo	97.448	8.134	1.098,0%
Intereses punitivos	73.769	40.237	83,3%
Otros	659.525	495.868	33,0%
Total	1.979.598	1.504.074	31,6%

Los resultados por otros ingresos operativos totalizaron Ps. 1.979,6 millones al 31 de diciembre de 2018, incrementándose 31,6% (Ps. 475,5 millones) con respecto al 31 de marzo de 2018 (Ps. 1.504,1 millones).

Las principales variaciones se generaron fundamentalmente por las utilidades generadas por la venta de inmuebles por Ps. 89,3 millones, por ingresos vinculados por comisiones por Ps. 82,8 millones, créditos recuperados por Ps. 66,0 millones y comisiones vinculadas con cajas de seguridad por Ps. 40,2 millones.

Cargo por incobrabilidad

	Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de		
	2018	2017	2018/2017 % variación
Cargos netos por provisiones de Financiaciones	2.409.842	792.132	204,2%
Total	2.409.842	792.132	204,2%

Al 31 de diciembre de 2018 el cargo por incobrabilidad totalizó Ps. 2.409,8 millones con respecto al 31 de diciembre de 2017 (Ps. 792,1 millones), incrementándose 204,2% (Ps. 1.617,7 millones), generado principalmente por el aumento de la cartera de préstamos y otras financiaciones. También se observa un aumento en el índice de morosidad que pasó del 1,2% en 2017 a 2,1% en 2018 y la constitución de provisiones adicionales a las técnicas establecidas por el BCRA.

La cobertura de provisiones sobre la cartera irregular al 31 de diciembre de 2018 fue de 207,2%.

Gastos de administración

	Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de		
	2018	2017	2018/2017 % variación
Beneficios al Personal	4.668.876	3.576.778	30,5%
Gastos de administración (Operativos)	3.240.171	2.383.573	35,9%
Gastos de mantenimiento, conservación y reparaciones	629.799	352.776	78,5%
Impuestos	549.030	403.674	36,0%
Honorarios	277.379	226.317	22,6%
Propaganda y publicidad	265.803	161.778	64,3%
Transporte de valores diversos	272.371	252.044	8,1%
Alquileres	236.119	182.953	29,1%
Electricidad y comunicaciones	229.215	138.454	65,6%
Servicios de seguridad	207.975	211.146	(1,5%)
Otros	572.480	454.431	26,0%
Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes	202.130	165.187	22,4%
Total	8.111.177	6.125.538	32,4%

Los gastos de administración (incluyendo Beneficios al Personal y Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes) totalizaron al 31 de diciembre de 2018 Ps. 8.111,2 millones, aumentando 32,4% (Ps. 1.985,7 millones) con respecto al 31 de diciembre de 2017 (Ps. 6.125,5 millones).

Los beneficios al personal totalizaron al 31 de diciembre de 2018 Ps. 4.668,9 millones, con una variación de 30,5% (Ps. 1.092,1 millones) respecto al 31 de diciembre de 2017 (Ps. 3.576,8 millones) generados principalmente en los gastos en personal como consecuencia de los incrementos salariales acordados para la actividad bancaria.

Los gastos de administración (Operativos) alcanzaron Ps. 3.240,2 millones con una variación de 35,9% (Ps. 856,6 millones) respecto del año anterior (Ps. 2.383,6 millones). Las principales variaciones se verificaron en los rubros de gastos de mantenimiento, conservación y reparaciones (Ps. 277,0 millones), impuestos (Ps. 145,3 millones) y propaganda y publicidad (Ps. 104,0 millones).

Las depreciaciones y desvalorizaciones de bienes totalizaron al 31 de diciembre de 2018 Ps. 202,1 millones incrementándose 22,4% (Ps. 36,9 millones) respecto al 31 de diciembre de 2017 (Ps. 165,2 millones).

Al 31 de diciembre de 2018, el ratio de cobertura que vincula gastos de administración con ingresos por comisiones netos fue de 44,1% y el ratio de eficiencia, medido como el cociente entre los gastos de administración y los ingresos totales netos, fue de 47,0%.

Otros Gastos Operativos

	Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de		
	2018	2017	2018/2017 % variación
Otros Gastos Operativos			
Impuesto sobre los ingresos brutos	1.913.501	1.159.566	65,0%
Vinculados con otras comisiones	938.676	808.385	16,1%

Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos	133.667	95.578	39,9%
Cargo por otras previsiones	209.397	104.611	100,2%
Otros	290.861	237.425	22,5%
Total	3.486.102	2.405.565	44,9%

Al 31 de diciembre de 2018 Otros gastos operativos ascendieron a Ps. 3.486,1 millones, incrementándose 44,9% (Ps. 1.080,5 millones) con respecto al 31 de diciembre de 2017 (Ps. 2.405,6 millones), debido principalmente al aumento del impuesto sobre los ingresos brutos (Ps. 753,9 millones) como consecuencia de los mayores ingresos por intereses y comisiones y al incremento del cargo por otras previsiones relacionadas con demandas judiciales (Ps. 104,8 millones).

Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan

	Período finalizado el 31 de diciembre de		
	2018	2017	2018/2017 % variación
Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan	2.654.632	2.068.758	28,3%

El Banco devengó Ps. 2.654,6 millones en concepto de impuesto a las ganancias al 31 de diciembre de 2018 frente a Ps. 2.068,8 millones correspondientes al 31 de diciembre de 2017, registrando un aumento del 28,3% (Ps. 585,8 millones) acompañando el crecimiento de los resultados contables impositivamente del Banco.

LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL

Liquidez y riesgos de liquidez

La principal fuente de liquidez del Banco son sus depósitos, que totalizaron Ps. 121.762,1 millones al 31 de marzo de 2019, comparados con Ps. 109.117,0 millones al 31 de diciembre de 2018. Estos depósitos comprenden los depósitos generados por la red de sucursales de Patagonia, de clientes institucionales y empresas, y depósitos del gobierno de la Provincia de Río Negro, para quien Patagonia se desempeña como agente financiero. El Banco considera que los depósitos generados por su red de sucursales y los depósitos provinciales son estables.

Además de los depósitos, el Banco financió sus operaciones con títulos de deuda emitidos en el mercado de capitales argentino, así como con préstamos bancarios. Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el Banco había emitido Ps. 1.663,7 millones y Ps. 1.678,1 millones, respectivamente, de títulos de deuda. Los préstamos recibidos de bancos y organismos internacionales fueron de Ps. 11.541,7 millones al 31 de marzo de 2019, en comparación con los Ps 9.358,0 millones al 31 de diciembre de 2018, representando un aumento del 23,3% (Ps 2.183,7).

El riesgo de liquidez se define como el riesgo de ocurrencia de desequilibrios entre activos y pasivos (“descalces” entre pagos y cobros) que puedan afectar la capacidad de cumplir con todos los compromisos financieros, presentes y futuros -dentro de diversos horizontes temporales-, tomando en consideración las diferentes monedas y plazos de liquidación de los derechos y obligaciones, sin incurrir en pérdidas significativas.

El Banco cuenta con políticas en materia de liquidez, las que tienen como objetivo administrar la misma en forma eficiente, optimizando el costo y la diversificación de las fuentes de fondeo, y maximizando la utilidad de las colocaciones mediante un manejo prudente que asegure los fondos necesarios para la continuidad de las operaciones y el cumplimiento de las regulaciones vigentes.

A fin de mitigar el riesgo de liquidez, el Banco mantiene una cartera de activos de alta liquidez y tiene como objetivo diversificar su estructura de pasivos, respecto a fuentes e instrumentos. En ese sentido, el objetivo es captar fondos con alto nivel de atomización en relación a clientes y volumen, ofreciendo la mayor diversidad de instrumentos financieros.

Asimismo, el Banco ha implementado una serie de herramientas de medición y control del riesgo, incluyendo el monitoreo regular de los gaps de liquidez, diferenciado por moneda, así como diversos ratios de liquidez, incluyendo el “ratio de cobertura de liquidez” (LCR, por sus siglas en inglés) y el “ratio de Fondeo Estable Neto” (NSFR, por sus siglas en inglés).

La Gerencia de Riesgos Financieros monitorea en forma periódica el cumplimiento de los diversos límites establecidos por el Directorio para gestionar el riesgo de liquidez, los que contemplan, entre otros, niveles

mínimos admisibles para los stocks de liquidez y niveles máximos de concentración por producto, cliente y segmento. Al igual que para el resto de los riesgos, el Banco cuenta con procesos de planificación para la contingencia.

Recursos de capital

El Banco Central dispone que las entidades financieras deben mantener niveles mínimos de capital que son definidos en función del riesgo de crédito, riesgo operacional y riesgo de mercado de los activos de la entidad financiera. Para mayor información sobre la normativa del Banco Central, véase la sección “*INFORMACIÓN DEL EMISOR - Marco Regulatorio del Sistema Financiero Argentino – Requisitos de solvencia*”.

Finalmente, el Banco considera que cuenta con el capital adecuado para cumplir con sus necesidades actuales y razonablemente previsibles. Al 31 de marzo de 2019 el Banco tenía un excedente de capital respecto del mínimo establecido de acuerdo con las normas del Banco Central de Ps. 8.610,4 millones (85,8 % del requisito de capital mínimo).

El Banco presenta respecto de este requerimiento un excedente (que representa el monto en exceso de la reserva mínima obligatoria fijada por el Banco Central) que se detalla en el siguiente cuadro:

	31 de marzo		31 de diciembre	
	2019	2018	2018	2017
	(En millones de pesos)			
Cálculo del excedente de capital				
Riesgo de Crédito	7.567,4	5.506,1	7.659,2	5.551,9
Riesgo de Mercado - Títulos	71,2	79,5	68,5	35,9
Riesgo de Mercado - Monedas	160,0	88,2	113,7	46,6
Riesgo Operacional	2.238,7	1.554,6	1.963,1	1.465,5
Exigencia de Capital Mínimo	10.037,3	7.228,4	9.804,5	7.099,9
Capital Ordinario Nivel 1	19.501,3	12.179,2	16.110,6	10.640,1
Conceptos deducibles	(1.625,4)	(982,0)	(1.673,3)	(162,2)
Capital Ordinario Nivel 2	771,5	607,3	821,2	617,6
Responsabilidad Patrimonial Computable	18.647,4	11.804,5	15.258,5	11.095,5
Excedente de Capital	8.610,1	4.576,1	5.454,0	3.995,6
Ratios seleccionados patrimonio y liquidez				
Responsabilidad Patrimonial Computable /Activos de riesgo ponderados	15,2%	13,4%	12,7%	12,7%
Patrimonio Neto como porcentaje del total de Activos	12,1%	14,1%	11,8%	12,8%
Pasivo total como múltiplo del Patrimonio Neto total	7,3	6,1	7,5	6,8
Activos Líquidos como porcentaje del total de Depósitos	67,9%	39,0%	53,9%	40,6%
Préstamos como porcentaje del total de Activos	45,1%	64,1%	53,4%	63,3%

Obligaciones contractuales

El siguiente cuadro representa las obligaciones contractuales y los compromisos del Banco al 31 de marzo de 2019:

	Pagos adeudados por período				
	Total	Menos de 1 año	1-3 años	3-5 años	Más de 5 años
	(En miles de pesos)				
Depósitos					
Sector Público no Financiero	11.153.624	11.153.115	509	-	-
Sector Financiero	62.949	62.949	-	-	-
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior	111.936.722	111.700.227	236.495	-	-
Pasivos a valor razonable con cambios en resultados	128.078	128.078	-	-	-
Instrumentos derivados	117.638	117.638	-	-	-
Operaciones de pase	3.957.580	3.957.580	-	-	-
Otros pasivos financieros	7.903.136	7.903.136	-	-	-
Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras	12.319.964	8.133.852	3.582.592	169.987	433.533
Obligaciones negociables emitidas	2.222.531	334.692	1.887.839	-	-

Total obligaciones contractuales	149.802.222	143.491.267	5.707.435	169.987	433.533
Garantías	191.630	153.938	37.367	-	325
Cartas de crédito contingentes	877.584	844.035	-	-	33.549
Total compromisos comerciales (1)	1.069.214	997.973	37.367	-	33.874

(1) La información del cuadro es interna del Banco y no surge de sus estados financieros.

Riesgo de mercado

Riesgo de mercado es el riesgo de pérdida que surge de fluctuaciones adversas en los precios de mercado de diversos activos. Este riesgo es consecuencia de sus operaciones de préstamo, comercio exterior e inversiones.

A efectos de medir este riesgo, el Banco utiliza la metodología de valor a riesgo (“VaR”) conforme a lo establecido en la normativa del Banco Central para la determinación de la exigencia de capital mínimo por riesgo de mercado para aquellos activos negociados habitualmente en mercados institucionalizados.

En virtud de la normativa aplicable, el Banco Central exige requerimientos de capital para cubrir la pérdida esperada determinada conforme a la metodología descrita en forma diaria. El VaR de la Entidad varía en función de la composición de la cartera de activos expuestos al riesgo de mercado.

Esta metodología se basa en métodos estadísticos que toman en cuenta aquellas variables que pueden provocar un cambio en el valor de las carteras del Banco, como ser, tipos de cambio, cotización de los títulos y volatilidad. El VaR es una estimación de las posibles pérdidas que podrían surgir de cambios adversos razonablemente probables en las condiciones de mercado. Expresa el monto máximo de pérdida esperada (dado un intervalo de confianza del 99%) en un período de tiempo especificado u “horizonte de tiempo” (establecido en 5 días), si esa cartera se mantuviera invariable durante ese lapso, considerando a esos efectos las volatilidades determinadas por el Banco Central para cada activo informadas mensualmente.

El Var del Banco varía en función de la composición de la cartera de activos expuestos al riesgo de mercado, cuyo riesgo puede incrementarse en algunas situaciones con el fin de aprovechar buenas oportunidades de negocios y también en función del incremento sistémico de la volatilidad registrada en los precios de estos activos.

Riesgo de tasa de interés

El Banco cuenta con un Comité de Finanzas que tiene a su cargo los asuntos concernientes al gerenciamiento de los activos y pasivos financieros del Banco. Entre los aspectos tratados en las reuniones de dicho comité, se revisa el análisis de sensibilidad con respecto a oscilaciones en el nivel de tasas de interés que se realiza tomando las posiciones que el Banco mantiene en activos y pasivos que devengan tasas de interés considerando a esos efectos el segmento de pesos, pesos ajustables por el CER y moneda extranjera.

El riesgo de tasa de interés está definido como la posibilidad de que se produzcan cambios en la condición financiera de la entidad producto de fluctuaciones en las tasas de interés con consecuencias adversas en los ingresos financieros netos y en su valor económico. El Banco revisa periódicamente el análisis de sensibilidad con respecto a oscilaciones en el nivel de tasas de interés realizado tomando las posiciones que se mantienen en activos y pasivos que devengan tasas de interés considerando a esos efectos el segmento de moneda local y moneda extranjera.

El Banco calcula el riesgo por descalce de tasa de interés, realizando un análisis de sensibilidad que permite apreciar cual es el cambio del su valor patrimonial ante una suba de un punto en la tasa de interés. A esos fines, se determina la pérdida potencial máxima en el valor neto económico de la cartera de activos y pasivos considerando un horizonte de tiempo de tres meses con 99% de grado de confianza y utilizando el modelo y los demás parámetros establecidos por el BCRA para la determinación del requerimiento de capital mínimo por riesgo de tasa de interés. La cuantificación se hace teniendo en cuenta dicha variación de la tasa de intereses y los descalses en pesos y en dólares por separado, teniendo en cuenta los siguientes tramos: hasta 30 días, de 30 a 90 días (tramos mensuales), de 90 a 180 días, de 181 días a 1 año y desde 1 año en adelante.

El Banco entiende que una medición apropiada del riesgo de tasa de interés permite aprovechar los cambios en las tasas de interés en el corto plazo y paralelamente no incurrir en descalses excesivos que puedan comprometer sus resultados.

La posición neta que el Banco mantiene entre los activos y pasivos que devengan intereses se describe en el siguiente cuadro:

	Vencimientos a partir del 31 de marzo de 2019				
	Menos de 1	1-5 Años	5-10 Años	Más de 10 Años	Total
	Año				
	(En miles de pesos, excepto los porcentajes)				
Activos que devengan intereses					
Títulos públicos y privados	41.269.441	4.733.289	8.781	637	46.012.148
Préstamos al sector privado (neto de provisiones)	62.742.736	11.196.087	364.038	980.027	75.282.888
Préstamos al sector financiero	4.188.870	248.448	-	-	4.437.318
Otros activos	5.642.064	111	-	-	5.642.175
Total de activos que devengan intereses	113.843.111	16.177.935	372.819	980.664	131.374.529
Pasivos que devengan intereses					
Depósitos en cajas de ahorro sector privado	48.718.962	-	-	-	48.718.962
Depósitos a plazo fijo sector privado	45.870.887	415	-	-	45.871.302
Préstamos de Otras Entidades Financieras	5.589.978	269.095	-	-	5.859.073
Obligaciones negociables no subordinadas	1.167.954	495.786	-	-	1.663.740
Otros pasivos	23.517.502	121.281	1.772	-	23.640.555
Total de pasivos que devengan intereses	124.865.283	886.577	1.772	-	125.753.632
Brecha sensibilidad	(11.022.172)	15.291.358	371.047	980.664	5.620.897
Brecha activos acumulados - pasivos acumulados	(11.022.172)	4.269.186	4.640.233	5.620.897	11.241.794
Brecha sensibilidad acumulada como porcentaje de Total de activos que devengan intereses	-8,4%	11,6%	0,3%	0,7%	4,3%

Nota: la información del cuadro es interna del Banco y no surge de sus estados financieros.

El siguiente cuadro presenta en detalle el riesgo del Banco frente a descalses en activos y pasivos a tasa de interés en pesos al 31 de marzo de 2019.

	Vencimientos a partir del 31 de marzo de 2019				
	Menos de 1	1-5 Años	5-10 Años	Más de 10 Años	Total
	Año				
	(En miles de pesos, excepto los porcentajes)				
Activos que devengan intereses en moneda nacional					
Títulos públicos y privados	38.778.496	4.185.299	2.666	-	42.966.461
Préstamos al sector privado (neto de provisiones)	34.662.997	9.391.709	328.180	978.596	45.361.482
Préstamos al sector financiero	3.442.973	248.448	-	-	3.691.421
Otros activos	4.006.976	111	-	-	4.007.087
Total de activos que devengan intereses	80.891.442	13.825.567	330.846	978.596	96.026.451
Pasivos que devengan interés en moneda nacional					
Depósitos en cajas de ahorro sector privado	19.479.106	-	-	-	19.479.106
Depósitos a plazo fijo sector privado	36.718.725	256	-	-	36.718.981
Préstamos de Otras Entidades Financieras	5.077.040	269.095	-	-	5.346.135
Obligaciones negociables no subordinadas	1.167.954	495.786	-	-	1.663.740
Otros Pasivos	17.943.957	121.281	1.772	-	18.067.010
Total de pasivos que devengan intereses	80.386.782	886.418	1.772	-	81.274.972
Brecha sensibilidad	504.660	12.939.149	329.074	978.596	14.751.479
Brecha activos acumulados - pasivos acumulados	504.660	13.443.809	13.772.883	14.751.479	29.502.958
Brecha sensibilidad acumulada como porcentaje de total de activos que devengan intereses	0,5%	13,5%	0,3%	1,0%	15,4%

Nota: la información del cuadro es interna del Banco y no surge de sus estados financieros.

El siguiente cuadro presenta el riesgo de exposición del Banco frente a descalces entre activos y pasivos a tasa de interés en moneda extranjera al 31 de marzo de 2019:

Vencimientos a partir del 31 de marzo de 2019					
	Menos de 1 Año	1-5 Años	5-10 Años	Más de 10 Años	Total
(En miles de pesos, excepto los porcentajes)					
Activos que devengan intereses en moneda extranjera					
Títulos públicos y privados	2.490.945	547.990	6.115	637	3.045.687
Préstamos al sector privado (neto de provisiones)	28.079.739	1.804.378	35.858	1.431	29.921.406
Préstamos al sector financiero	745.897				745.897
Otros activos	1.635.088				1.635.088
Total de activos que devengan intereses	32.951.669	2.352.368	41.973	2.068	35.348.078
Pasivos que devengan intereses en moneda extranjera					
Depósitos en cajas de ahorro sector privado	29.239.856	-	-	-	29.239.856
Depósitos a plazo fijo sector privado	9.152.162	159	-	-	9.152.321
Préstamos de Otras Entidades Financieras	512.938	-	-	-	512.938
Obligaciones negociables no subordinadas	-	-	-	-	-
Otros pasivos	5.573.545		-	-	5.573.545
Total de pasivos que devengan intereses	44.478.501	159	-	-	44.478.660
Brecha sensibilidad	(11.526.832)	2.352.209	41.973	2.068	(9.130.582)
Brecha activos acumulados - pasivos acumulados	(11.526.832)	(9.174.623)	(9.132.650)	(9.130.582)	(18.261.164)
Brecha sensibilidad acumulada como porcentaje de Total de activos que devengan intereses	-32,6%	6,7%	0,1%	0,0%	-25,8%

Nota: la información del cuadro es interna del Banco y no surge de sus estados financieros.

Riesgo de tipo de cambio

Al 31 de marzo de 2019, el total de la posición neta de activos en moneda extranjera del Banco era de US\$ 16.5 millones.

El siguiente cuadro presenta el riesgo de exposición del Banco frente a descalces entre activos y pasivos a tasa de interés en moneda extranjera al 31 de marzo de 2019, al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016:

Activo	Periodo de 3 meses			
	finalizado el 31 de marzo de		Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de	
	2019	2018	2017	2016
(En miles de pesos)				
Efectivo y Depósitos en Bancos	19.245.423	16.9	57.0	6.11
		27	8	4.640.889
Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados	17.514	116.614	8.90	276.971
Otros activos financieros	145.353	37.070	167.114	6.322
Préstamos y otras financiaciones	31.023.712	25.696.487	10.714.0	8.501.346
Sector Público no Financiero	-	-	90.203	-
Otras Entidades financieras	752.424	440.780	266.044	110.986
Sector Privado no Financiero y Res. Exterior	30.271.288	25.255.707	10.357.831	8.390.360

Otros Títulos de Deuda	3.027.275	2.36 1.73 6	2.12 8.90 1	2.249.9 99
Activos financieros entregados en garantía	1.491.002	1.30 2.25 1	25.4 40	16.009
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	4.489	3.41 1	410	340
Totales	54.954.768	46.4 74.5 96	19.1 56.9 20	15.691. 876

Pasivo

Depósitos	41.006.922	34.4 33.7 55	15.7 93.3 94	11.350. 153
Sector Público no Financiero	481.174	427. 716	142. 197	90.641
Sector Financiero	71	62	31	38
Sector Privado no Financiero y Res. Exterior	40.525.677	34.0 05.9 77	15.6 51.1 66	11.259. 474
Operaciones de pase	-	-	4.55 1	-
Otros pasivos financieros	2.969.656	3.68 7.77 2	1.58 5.72 4	622.383
Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras	10.235.077	8.32 8.98 8	1.18 5.70 4	1.843.9 68
Otros pasivos no financieros	29.514	56.4 46	77.0 24	8.872
Totales	54.241.169	46.5 06.9 61	18.6 46.3 97	13.825. 376

Gestión de riesgos crediticios

Política crediticia

El directorio aprueba la política crediticia y de evaluación de crédito del Banco a fin de proveer un marco para la generación de negocios tendiente a lograr una relación adecuada entre el riesgo asumido y la rentabilidad. El Banco cuenta con manuales de procedimientos que contienen los lineamientos en la materia aprobados por el directorio que persiguen los objetivos que se mencionan a continuación:

- Lograr una adecuada segmentación de la cartera, por tipo de cliente y sección económica;
- Potenciar la utilización de herramientas de análisis y evaluación del riesgo que mejor se adecuen al perfil del cliente;
- Establecer pautas homogéneas para el otorgamiento de préstamos siguiendo parámetros conservadores basados en la solvencia del cliente, su flujo de fondos y su rentabilidad para el caso de las empresas, y los ingresos y patrimonio para el caso de individuos;
- Establecer límites a las facultades individuales para el otorgamiento de créditos de acuerdo a su monto, propendiendo a la existencia de comités específicos, que según su ámbito de influencia, serán los responsables de definir los niveles de asistencia;
- Optimizar la calidad del riesgo asumido, contando con garantías adecuadas de acuerdo con el plazo del préstamo y el nivel de riesgo involucrado; y
- Monitorear permanentemente la cartera de créditos y el nivel cumplimiento de los clientes.

Procedimiento para la solicitud de préstamos

En el caso de la cartera comercial, el Banco establece contacto con los solicitantes a través de un oficial de negocios quien se encarga de reunir la información y documentación necesaria, evaluar si se encuadra dentro del perfil buscado por el Banco, indagar sobre las razones de la solicitud del crédito y formular una evaluación inicial de dicha solicitud. La propuesta de préstamo es luego analizada por un gerente y, en caso de adecuarse a la política crediticia del Banco, es remitida a la gerencia de análisis de riesgo crediticio a fin de que elabore un

informe de riesgo. Sobre la base del informe de riesgo, el oficial de negocios elabora una propuesta de calificación crediticia del cliente (“propuesta de calificación”) que es enviada al comité de crédito encargado de analizarla y de otorgar el préstamo.

Según el monto y tipo del préstamo, uno de los cinco tipos de comités de crédito que actúan bajo la supervisión del directorio del Banco será responsable de analizar y determinar si se debe aprobar el préstamo: el comité de crédito senior, el comité de negocios de Empresas, alguno de los comités de crédito zonales o los comités virtuales de PyME. El comité de crédito senior, responsable del análisis de las asistencias de mayor monto, está compuesto por miembros de la gerencia superior del Banco del área de Empresas y de Riesgos, incluyendo al Superintendente a cargo del Área Empresas, y evalúa las propuestas de préstamos que excedan los Ps. 6 millones.

Las políticas crediticias para los clientes minoristas, es decir los créditos destinados al consumo o vivienda, se establecen en función del perfil del cliente diferenciando los que provienen del mercado abierto de aquellos pertenecientes a los planes de sueldo, es decir que cobran sus haberes mediante la acreditación en cuentas abiertas en el Banco (Plan Sueldo). Las personas humanas no comprendidas en el Plan Sueldo, deben reunir las siguientes condiciones para ser clientes del banco: desarrollar actividades en las que pueda detectarse ingresos regulares y estables, preferentemente poseer propiedades libres de gravámenes e inexistencia de antecedentes desfavorables conforme a la información provista por bases de datos internas (historia crediticia en el banco) o externas (de agencias de credit bureau o de la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central). Además, las políticas en materia de crédito establecidas por el Banco también se determinan en función de las distintas líneas de productos aplicables, incluidas tarjetas de crédito, adelantos en cuenta corriente, anticipos de haberes para clientes pertenecientes a planes de sueldo, préstamos personales, préstamos hipotecarios y prendarios, disponiendo plazos permitidos, montos máximos disponibles y tasas de interés.

Riesgo crediticio

A fin de evaluar el riesgo crediticio, el sector de análisis de empresas de la Gerencia de Créditos Empresas, que reporta a la Gerencia Ejecutiva de Créditos, sobre la base de la propuesta y recomendación crediticia elaboradas por el oficial de negocios, analiza la capacidad crediticia y de repago del cliente y emite un informe en el que, entre otros aspectos, detalla los principales riesgos a los que está expuesto la empresa que pueden comprometer su capacidad de pago y observaciones que pueda presentar respecto de litigios originados en las disposiciones legales del sistema financiero o derivados de la actividad comercial, tales como inhabilitaciones, pedidos de quiebras, juicios en curso, etc.

A efectos de que el comité respectivo analice la propuesta de calificación del cliente, el oficial de negocios, en función de las líneas con las cuales la empresa desee operar, califica además al crédito, asignándole niveles de 1 al 5 en función de las garantías o los mecanismos de mitigación del riesgo crediticio que se propone instrumentar, siendo 1 el riesgo menor y 5 el mayor.

Los clientes del Área Minorista son calificados mediante un sistema de scoring, dentro de la Gerencia de Análisis de Créditos Personas. Las políticas del Banco en la materia establecen que únicamente casos especiales pueden ser calificados mediante la utilización de medios no automáticos, requiriéndose la intervención de distintos niveles de aprobación en función del monto de la asistencia a acordar.

Una vez otorgado el préstamo, cada cliente es clasificado según un mismo patrón. La clasificación se refiere a la calidad de los clientes y se vincula con lo establecido por la normativa del Banco Central sobre “Clasificación de deudores y provisiones mínimas por riesgo de incobrabilidad”. La clasificación se establece en grados (de “1” a “6”) y se relaciona con la capacidad que tiene el cliente de atender sus obligaciones financieras. Para una mayor explicación respecto de la normativa aplicable del Banco Central, véase la sección “*INFORMACIÓN DEL EMISOR - Marco Regulatorio del Sistema Financiero Argentino – Clasificación de deudores y provisiones por riesgo de incobrabilidad*”.

Se señala la diferencia entre el significado de “Clasificación” y el de “Calificación”. El primer concepto implica ubicar al cliente dentro de alguno de los tramos definidos por el Banco Central y refleja la situación del deudor de acuerdo con su cumplimiento. El segundo concepto representa el proceso de asignación de un margen de crédito para el cliente.

Más allá de aspectos normativos establecidos por el Banco Central, la clasificación y seguimiento periódico de los clientes permite mantener a buen resguardo la calidad de los activos y tomar con anticipación acciones

correctivas que conserven el patrimonio del Banco. Los clientes, para su clasificación, se dividen en función del Área a la que pertenecen y al monto de su financiación, formando diversas carteras de crédito.

Seguimiento y revisión del préstamo

La verificación de los aspectos formales de la solicitud, de la instrumentación de las garantías correspondientes y el seguimiento del cumplimiento en el pago de las cuotas forma parte del proceso de seguimiento del préstamo.

El manual de procedimientos elaborado por el Banco establece en forma muy detallada las pautas a seguir por parte de los oficiales de negocios para el armado del legajo del crédito a fin de asegurar la adecuada instrumentación de la operación y de reunir la documentación necesaria sobre el cliente a efectos de facilitar, en caso de mora, el recupero del crédito. El Banco ha estandarizado las etapas iniciales del proceso de cobro a través de diferentes medidas (contactos telefónicos, cartas, telegramas, etc.), estando a cargo de la sucursal correspondiente el primer contacto con el cliente.

En los casos de clientes del Área Minorista, una vez transcurridos dieciséis días y hasta los noventa días desde que se configuró el atraso en el pago, la gestión de cobro está a cargo del área de créditos, quienes, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, deben enviar las notificaciones y demás gestiones previstas en los procedimientos para el recupero del crédito.

En caso de no lograrse este objetivo, el crédito pasa a la etapa de “pre-legal” en la cual Gerencia de Recupero, dentro de la Gerencia Ejecutiva de Créditos del Banco intensifica las gestiones de recupero a los fines de obtener promesas de pago de los clientes o proponer refinanciaciones acordes con su capacidad de pago. Una vez transcurrida esta etapa sin que se obtengan resultados positivos se encargará la cobranza del préstamo a la Gerencia de Asuntos Legales del Banco quienes según el monto y las garantías del préstamo decidirán la utilización de procedimientos judiciales o extrajudiciales.

Instrumentos financieros derivados

El cuadro a continuación presenta el volumen de operaciones con instrumentos financieros derivados al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016

Instrumentos financieros derivados					Periodo de 3 meses finalizado el 31 de marzo de	Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de		
Tipo de contrato	Objetivo de las operaciones	Activo subyacente	Tipo de liquidación	Ámbito de negociación o contraparte	2019	2018	2017	2016
Futuros	Intermediación por cuenta propia	Moneda extranjera	Diaria de diferencias	MAE	-	79.320	-	1.138.329
Futuros	Intermediación cuenta propia	Moneda extranjera	Diaria de diferencias	ROFEX	1.966.415	2.992.139	942.344	1.831.484
Forwards	Intermediación cuenta propia	Moneda extranjera	Al vencimiento de diferencias	Negociación entre partes - Residentes en el País - Sector No Financiero	2.261.154	2.697.602	961.795	1.206.574
Operaciones de Pases	Intermediación cuenta propia	Títulos públicos nacionales e instrumentos emitidos por el BCRA	Con entrega del subyacente	MAE	5.694.350	1.740.392	3.100.909	645.459

DE LA OFERTA Y DEL LISTADO PARA LA NEGOCIACIÓN

Generalidades

A continuación se detallan los términos y condiciones generales de las Obligaciones Negociables que el Banco podrá emitir en el marco del Programa, los cuales serán complementados y/o modificados por los términos y condiciones específicos de cada Clase y/o Serie que se detalle en el Suplemento de Precio relativo a la Clase y/o Serie en cuestión. Cada Suplemento de Precio describirá los términos y condiciones específicos de cada Clase y/o Serie de los Títulos que se emitan bajo el Programa, que podrán complementar y/o modificar los términos y condiciones contenidos en este Prospecto, pero en el caso de realizarse modificaciones no podrán éstas resultar menos favorables para los inversores que los términos y condiciones establecidos en el Prospecto.

Por asamblea ordinaria de accionistas del Banco de 26 de abril de 2012 se aprobó la creación del Programa y sus términos y condiciones. Por asamblea ordinaria de accionistas del Banco de 26 de abril de 2017 se aprobó la ampliación del monto y la prórroga del plazo del Programa, y la delegación en el directorio del Banco (con facultades a su vez de subdelegar) de los restantes términos y condiciones del Programa y de cada Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables a emitirse bajo el mismo. Por resolución de directorio de fecha 27 de marzo de 2018 se aprobó la actualización del Prospecto del Programa.

Los Títulos que se emitan constituirán obligaciones negociables de conformidad con la Ley de Obligaciones Negociables, tendrán derecho a los beneficios allí estipulados y estarán sujetos a los requisitos de procedimientos de dicha norma. Las Obligaciones Negociables que se emitan se colocarán conforme a la Ley de Mercado de Capitales y a las pautas y exigencias dispuestas en el Capítulo IV, Título VI de las Normas CNV, y cualquier otra ley y/o reglamentación aplicable.

Los tenedores de las Obligaciones Negociables tendrán los beneficios de, estarán obligados a, y se considerarán que han tomado conocimiento de, todas las disposiciones de este Prospecto y de las Obligaciones Negociables.

Monto

El monto nominal máximo en circulación en cualquier momento de las Obligaciones Negociables que oportunamente se emitan en el marco del Programa no podrá exceder la suma de US\$ 500.000.000 (dólares estadounidenses quinientos millones) o su equivalente en pesos o en otras monedas.

Clases y/o Series

Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas en diversas Clases, con derechos diferentes entre las Obligaciones Negociables de distintas Clases, pero las Obligaciones Negociables de una misma Clase siempre tendrán los mismos derechos entre sí. Asimismo, las Obligaciones Negociables de una Clase podrán ser emitidas en diversas Series, con los mismos derechos que las demás Obligaciones Negociables de la misma Clase. Sin perjuicio de ello, las Obligaciones Negociables de distintas Series pueden tener diferentes fechas de emisión, fecha de vencimiento, tasas de interés o precios de emisión.

Forma

Las Obligaciones Negociables serán obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, y podrán ser garantizadas o subordinadas, según se especifique en el respectivo Suplemento de Precio y cumplirán con los requisitos establecidos por el artículo 7 de la Ley de Obligaciones Negociables, y toda otra disposición aplicable de acuerdo con la normativa vigente al momento de emisión de cada Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables. Las Obligaciones Negociables estarán numeradas en forma correlativa, marcadas con letras o identificadas de otro modo conforme lo determinen los miembros del directorio y de la comisión fiscalizadora del Banco que firmen las Obligaciones Negociables.

Las Obligaciones Negociables de cada Clase y/o Serie podrán estar representadas por títulos nominativos no endosables cartulares o ser emitidas en forma escritural, de acuerdo al artículo 31 de la Ley de Obligaciones Negociables. De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 24.587 las sociedades argentinas no pueden emitir títulos valores privados al portador. Conforme a ello, y en la medida en que dicha ley esté vigente, el Banco sólo emitirá bajo el Programa, Obligaciones Negociables nominativas no endosables o escriturales. Las Obligaciones Negociables representadas en títulos globales o emitidas en forma escritural, podrán ser depositadas y/o registradas en sistemas de depósito colectivo aceptados por la CNV.

Si se produce y subsiste un Supuesto de Incumplimiento (como se define más adelante) (previstos en este Prospecto y los que puedan preverse en un Suplemento de Precio aplicable) y resulta exigible un pago bajo las Obligaciones Negociables no abonado en tiempo, los tenedores de Obligaciones Negociables representadas por títulos globales depositados y/o registrados en sistemas de depósito colectivo y los tenedores de Obligaciones Negociables emitidas en forma escritural, podrán solicitar directamente al Agente de Registro el correspondiente comprobante del saldo de cuenta previsto en el inciso e) del artículo 129 de la Ley de Mercado de Capitales (con bloqueo de la cuenta) a efectos de efectuar cualquier tipo de reclamo.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley de Mercado de Capitales, los comprobantes del saldo de cuenta podrán ser emitidos por la entidad que administre el sistema de depósito colectivo en el cual se encuentren inscriptos los certificados globales, o bien por la entidad administradora de sistemas de depósito colectivo que tenga participaciones en el certificado global inscripto en un sistema de depósito colectivo administrado por otra entidad.

Monedas

Los Títulos podrán estar denominados en pesos o la moneda de curso legal que la reemplace, dólares estadounidenses, o cualquier otra moneda, incluyendo el euro, o unidades de moneda, según se prevea en el Suplemento de Precio respectivo, sujeto al cumplimiento de todos los requisitos legales y regulatorios aplicables.

Vencimientos

Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas con el plazo de amortización mínimo y máximo que se determine en el Suplemento de Precio correspondiente, sujeto a cualquier requisito legal o regulatorio aplicable.

Duración del Programa, denominación y precio de la emisión

Duración del Programa

De acuerdo con la normativa vigente, toda emisión y/o reemisión de Clases y/o Series de Obligaciones Negociables deberá efectuarse en el plazo de cinco años a computar a partir de la fecha de vencimiento del plazo original del Programa y sus sucesivas prórrogas autorizadas por CNV, terminando por lo tanto el Programa el 25 de octubre de 2022.

Denominación

Las Obligaciones Negociables de cada Clase y/o Serie serán emitidas en las denominaciones que se determinen en el Suplemento de Precio aplicable, pudiendo tener el valor nominal unitario mínimo que permitan las normas.

Precio de emisión

Las Obligaciones Negociables de cualquier Clase y/o Serie podrán ser emitidas a la par o con un descuento o una prima sobre el valor par, en la medida que sea permitido por la ley aplicable y según se determine en el Suplemento de Precio aplicable.

Rango

Las Obligaciones Negociables podrán ser obligaciones directas, no subordinadas del Emisor y calificarán en todo momento y en todos los aspectos, *pari passu*, sin ninguna preferencia entre ellas, con relación a todas las demás deudas no subordinadas del Emisor, presentes o futuras, salvo aquellas que gozan de privilegio en virtud de disposiciones legales o contractuales. Las Obligaciones Negociables podrán ser subordinadas o estar garantizadas o avaladas en cualquiera de las formas permitidas por las disposiciones aplicables del Banco Central, y según se especifique para cada Clase y/o Serie en el Suplemento de Precio.

En virtud de la Ley de Entidades Financieras y sus modificatorias, los depositantes del Banco y el Banco Central gozan de ciertos privilegios para el cobro de sus acreencias, en la medida descripta en la sección “*INFORMACIÓN DEL EMISOR - Marco Regulatorio del Sistema Bancario Argentino - Privilegios de los depositantes*”. Las Obligaciones Negociables se encuentran excluidas del sistema de seguro de garantía de los depósitos establecido bajo la Ley N° 24.485 y del régimen exclusivo y excluyente de privilegios de los depósitos

previsto en el inciso e) del artículo 49 y en el inciso c) del artículo 53 de la Ley de Entidades Financieras y sus modificatorias. Véase sección “*INFORMACIÓN DEL EMISOR - Marco Regulatorio del Sistema Bancario Argentino - Sistema obligatorio de seguro de garantía de los depósitos*”.

Contrato de fideicomiso

No existirá contrato de fideicomiso correspondiente al Programa, pudiendo preverse un contrato de fideicomiso en el Suplemento de Precio de una Serie.

Titularidad, registro y transferencia

Titularidad

Obligaciones Negociables nominativas. La titularidad de las Obligaciones Negociables nominativas se transferirá mediante la inscripción de dicha transferencia en el libro de registro (el “Registro”) que lleve el Emisor o el Agente de Registro para la Clase o Serie de que se trate, según sea designado por el Emisor. El Emisor y el Agente de Pago podrán considerar y tratar al tenedor de cualquier Obligación Negociable, registrado en el Registro de conformidad con las normas y procedimientos aplicables, como su titular absoluto.

Obligaciones Negociables al portador. La titularidad de las Obligaciones Negociables al portador se transmite por su simple tradición. El Emisor y el Agente de Pago podrán considerar y tratar al tenedor de cualquier Obligación Negociable al portador como el propietario absoluto de la misma. Se emitirán Obligaciones Negociables al portador siempre que las leyes argentinas lo permitan.

Obligaciones Negociables globales o escriturales. En el supuesto que las Obligaciones Negociables nominativas o al portador, éstas últimas si fueran permitidas por la ley aplicable, (i) estén representadas en títulos globales, o (ii) sean llevadas en forma escritural, las mismas podrán ser depositadas y/o registradas en los siguientes sistemas de depósito colectivo: Caja de Valores S.A., Clearstream, Euroclear Operations Centre, The Depository Trust Company o cualquier otro sistema de depósito colectivo que la CNV oportunamente autorice y según lo determine el Suplemento de Precio aplicable.

Registro

El Emisor o cualquier entidad que éste designe a tal efecto como Agente de Registro, mantendrá el Registro con respecto a las Obligaciones Negociables de acuerdo con la normativa vigente aplicable. De conformidad con este Prospecto, el tenedor de una Obligación Negociable nominativa significa la persona a cuyo nombre esa Obligación Negociable nominativa aparece en un momento determinado inscrita en el Registro. En el caso que las Obligaciones Negociables estén representadas por títulos globales o sean emitidas en forma escritural, y las mismas sean depositadas y/o registradas en la Caja de Valores S.A., de conformidad al régimen de depósito colectivo establecido por la Ley N° 20.643 y el Reglamento Operativo de la Caja de Valores S.A., el Registro de dichas Obligaciones Negociables será llevado por dicha Caja de Valores S.A.

Transferencia

Las Obligaciones Negociables nominativas se transferirán mediante la entrega de la Obligación Negociable nominativa correspondiente, en la oficina que establezca el Emisor oportunamente en el Suplemento de Precio respectivo y la inscripción prevista en el Registro que se lleva a tal efecto. Las Obligaciones Negociables nominativas podrán transferirse únicamente en múltiplos integrales según las denominaciones autorizadas de cada Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables. Cuando se encuentre inscrita en el Registro cualquier prenda, carga o gravamen con respecto a una Obligación Negociable nominativa (véase la sección “*Gravámenes*” bajo el presente título) y dicha Obligación Negociable nominativa se transfiera, dicha transferencia quedará sujeta a esa prenda, carga o gravamen (que permanecerá en el Registro respecto de dicha Obligación Negociable nominativa), y figurará en el reverso de dicha Obligación Negociable nominativa, salvo que, o hasta tanto, un tribunal competente o el beneficiario de dicha prenda, carga o gravamen instruya u ordene lo contrario.

En los casos en que las Obligaciones Negociables nominativas estén representadas en certificados globales o sean llevadas en forma escritural y se encuentren depositadas y/o registradas en los siguientes sistemas de depósito colectivo: Caja de Valores S.A., Clearstream, Euroclear Operations Centre, The Depository Trust Company o cualquier otro sistema de depósito colectivo que la CNV oportunamente autorice y según se

determine en el Suplemento de Precio, la transferencia de la titularidad de dichas Obligaciones Negociables se efectuará de conformidad con los procedimientos aplicables del sistema en el cual las Obligaciones Negociables se encuentren depositadas y/o registradas.

Todo trámite relativo a las Obligaciones Negociables nominativas para su registro o transferencia se efectuará sin cargo alguno por o en nombre del Emisor o cualquier otra entidad que éste designe a tal efecto, pero el tenedor de la Obligación Negociable nominativa deberá efectuar el pago al Emisor o a la entidad que éste designe a tal efecto, o reembolsar el monto que hubieran pagado con respecto a cualquier impuesto u otras cargas gubernamentales con que pueda haberse gravado dicho trámite, canje o transferencia.

Gravámenes

El Emisor o cualquier otra persona encargada del Registro, anotará en el Registro correspondiente y al dorso de la Obligación Negociable Nominativa en el espacio previsto a ese fin, en este último caso, en el supuesto de títulos cartulares definitivos, toda prenda, carga o gravamen de acuerdo con cualquier notificación por escrito o instrucción recibida del tenedor de dicha Obligación Negociable u ordenada por un tribunal competente.

Capital e intereses

Capital

El capital de cada Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables se amortizará de la manera y en las fechas de pago que se estipulen en el Suplemento de Precio aplicable. Todos los pagos de capital sobre las Obligaciones Negociables de cualquier Clase y/o Serie se distribuirán en forma proporcional entre todas las Obligaciones Negociables de cada Clase y/o Serie en circulación, sin preferencia ni prioridad de ningún tipo entre las Obligaciones Negociables de esa Clase y/o Serie, excepto que se disponga lo contrario en el Suplemento de Precio respectivo.

Intereses

Las Obligaciones Negociables podrán (i) devengar intereses a tasa fija o flotante; (ii) ser emitidas con un descuento de emisión; (iii) devengar intereses a una tasa ajustable; (iv) devengar intereses a una tasa ajustable en función de la evolución de activos financieros, acciones, futuros, opciones de cualquier tipo y naturaleza u otros activos, inversiones e índices, sujeto a lo dispuesto por la ley aplicable; (v) devengar intereses adicionales consistentes en una participación en las ganancias del Emisor o en la apreciación o incremento de valor de activos pertenecientes al Emisor, según se especifique en el Suplemento de Precio aplicable, o (vi) devengar intereses de otra manera, conforme lo establezca el Suplemento de Precio aplicable.

En todos los casos, las Obligaciones Negociables devengarán los intereses desde la fecha de emisión o la fecha de comienzo de pago de intereses, según lo determine el Suplemento de Precio aplicable y dicho interés será pagadero en cada fecha de pago estipuladas y en la fecha de vencimiento, y se calcularán y computarán de la manera que lo establezca el Suplemento de Precio correspondiente.

Intereses punitorios

Todo importe correspondiente a intereses, no abonado puntualmente y en la forma establecida, devengará intereses punitorios sobre los montos impagos desde la fecha de su vencimiento y hasta la fecha de su efectiva puesta a disposición del tenedor de las Obligaciones Negociables, a la tasa de interés correspondiente incrementada de acuerdo a lo que determine el Suplemento de Precio aplicable.

Moneda de pago

Todos los pagos que el Banco deba realizar en virtud de las Obligaciones Negociables se efectuarán en la moneda o unidad de moneda prevista en el Suplemento de Precio aplicable. En el supuesto que en la fecha de pago estipulada de cualquier Obligación Negociable denominada en una moneda o unidad de moneda que no sea pesos o la moneda de curso legal que la reemplace, por disposiciones gubernamentales o cambiarias del gobierno argentino, no resultare posible efectuar el pago de las Obligaciones Negociables o resultare prohibida la transferencia de dicha moneda fuera de la Argentina, dicho pago será efectuado a opción del Emisor por el/los medios que prevea/n el/los respectivo/s Suplemento/s de Precio y al tipo de cambio previsto en tal/es suplemento/s.

Fechas de pago

El capital de las Obligaciones Negociables de cada Clase y/o Serie, los intereses y Montos Adicionales (según se definen más adelante), si existieren, deberán ser pagados en las fechas de pago que estipule cada Suplemento de Precio aplicable. Si la fecha de pago estipulada no fuere un día hábil bancario, el pago será efectuado el primer día hábil bancario siguiente. En tal supuesto, la cuota respectiva no generará intereses durante el período comprendido entre la fecha de pago estipulada y el día hábil bancario siguiente. Se considerará día hábil bancario, en el caso de Obligaciones Negociables denominadas en pesos o en dólares estadounidenses, respectivamente, cuando en los bancos de la ciudad de Buenos Aires o en la ciudad de Nueva York, hubiere actividad bancaria y cambiaria, y ésta fuese normal o, en caso de Obligaciones Negociables denominadas en una moneda o unidad de moneda que no sea el dólar estadounidense o el peso, se considerará día hábil bancario cuando en los bancos del principal centro financiero del país de la moneda o de la unidad de moneda de que se trate, hubiera actividad cambiaria o bancaria y ésta fuese normal. Sin perjuicio de lo expuesto, la definición de día hábil podrá ser definida en cada Suplemento de Precio respectivo.

Procedimiento de pago

El Agente de Pago solamente efectuará cualquier pago bajo las Obligaciones Negociables en el supuesto que previamente el Emisor le haya provisto de los fondos suficientes al efecto, en la moneda de que se trate. El Agente de Pago no asume frente a los tenedores ninguna responsabilidad por el pago puntual de cualquier importe bajo las Obligaciones Negociables que no le haya sido provisto previamente por el Emisor.

Pagos relativos a Obligaciones Negociables nominativas

Excepto que se establezca lo contrario en el Suplemento de Precio aplicable, el pago de capital, intereses y Montos Adicionales, si existieren, en la fecha de pago estipulada con respecto a cualquier Obligación Negociable nominativa de cada Clase y/o Serie, será efectuado al tenedor de Obligaciones Negociables nominativas registrado en el Registro el día inmediato anterior a la respectiva fecha de pago de intereses. Lo hará mediante cheque o transferencia cablegráfica o mediante acreditación de las sumas en cuentas de los tenedores, en tanto el tenedor de dicha Obligación Negociable Nominativa elija esta última opción y lo comunique mediante notificación escrita a tal efecto en la que designe la cuenta a la cual deban ser transferidos los fondos correspondientes, y el Agente de Pago reciba dicha notificación antes del día inmediato anterior a la respectiva fecha de pago estipulada. Los pagos finales de capital sobre cualquier Obligación Negociable nominativa de cada Clase y/o Serie se efectuarán al tenedor registrado en el Registro pero únicamente contra presentación y entrega de esa Obligación Negociable nominativa en la oficina del Agente de Pago, sujeto a cualquier ley o reglamentación impositiva o de otro tipo aplicable. Si las Obligaciones Negociables están registradas en sistemas de depósito colectivo los pagos se realizarán conforme a los procedimientos establecidos por dicho sistema.

Pagos relativos a Obligaciones Negociables al portador

Excepto que se establezca lo contrario en el Suplemento de Precio aplicable, el pago de capital, intereses y Montos Adicionales, si existieren, sobre la Obligación Negociable al portador de cada Clase y/o Serie serán pagaderos contra presentación del cupón de esa Obligación Negociable al portador entre el noveno y el quinto día hábil bancario anterior a la respectiva fecha de pago estipulada. En el caso de pagos finales, se realizará contra entrega de la Obligación Negociable al portador entre el noveno y el quinto día hábil bancario anterior a la respectiva fecha de pago estipulada en la oficina principal del Agente de Pago. Todo pago respecto de una Obligación Negociable al portador se efectuará mediante cheque o transferencia a una cuenta que mantenga el tenedor de la misma. Si los tenedores de Obligaciones Negociables no realizaran la antes mencionada presentación entre el noveno y quinto día hábil bancario anterior a la fecha de pago estipulada, recibirán el pago el día hábil bancario posterior a aquél en el cual efectuasen la presentación, posterior a la fecha de pago estipulada de que se trate.

Prescripción

Los reclamos contra el Banco por el pago de capital o intereses relacionados con los Títulos prescribirán a los cinco y dos años, respectivamente, de la fecha de vencimiento de pago de dicho capital e intereses, sujeto a las normas aplicables.

Compra o adquisición de Obligaciones Negociables por parte del Emisor

El Emisor o cualquier de sus sociedades vinculadas podrá, de acuerdo con la ley aplicable, en cualquier momento y de cualquier forma, comprar o de cualquier forma adquirir Obligaciones Negociables de cualquier Clase y/o Serie en circulación, y realizar con respecto a ellas, cualquier acto jurídico legalmente permitido, pudiendo en tal caso el Emisor o cualquier de sus sociedades vinculadas, según corresponda, sin carácter limitativo, mantener en cartera, transferir a terceros o cancelar tales Obligaciones Negociables.

Rescate

Las Obligaciones Negociables sólo serán rescatables a opción del Emisor o del tenedor de Obligaciones Negociables de conformidad con lo dispuesto en el Suplemento de Precio aplicable y de conformidad con este Prospecto, sujeto al cumplimiento de las normas aplicables y aprobaciones correspondientes, y en todos los casos manteniendo la igualdad de tratamiento entre obligacionistas de una misma Serie.

Rescate a opción del Emisor

El Emisor podrá, mediante notificación previa, de acuerdo a lo previsto en este Prospecto bajo el título "Notificaciones" en esta sección, rescatar la totalidad o parte de las Obligaciones Negociables de una o más Series en circulación en cualquier momento, excepto disposición en contrario en el respectivo Suplemento de Precio y en todos los casos manteniendo la igualdad de tratamiento entre obligacionistas de la misma Serie, a la par o por cualquier otro monto de acuerdo con lo detallado en el Suplemento de Precio, en cada caso sujeto a las leyes y reglamentaciones en vigencia.

Rescate por razones impositivas

En caso que, como resultado de cualquier cambio o modificación de las leyes o reglamentaciones vigentes en Argentina o en cualquier subdivisión política o autoridad de la Argentina o existente en ella con facultad para establecer impuestos, o como resultado de cualquier cambio en la aplicación o interpretación oficial de dichas leyes o reglamentaciones, los cuales entrasen en vigencia con posterioridad a la fecha de emisión, el Emisor se viera obligado a pagar Montos Adicionales (según se define más adelante) de acuerdo con lo dispuesto en el título "Montos Adicionales" en esta sección, sin poder liberarse de dicha obligación tomando todas las medidas razonables disponibles al efecto, las Obligaciones Negociables podrán ser rescatadas en cualquier momento, a opción del Emisor, en su totalidad mediante previa notificación de acuerdo a lo previsto en este Prospecto, excepto disposición en contrario en el respectivo Suplemento de Precio, al precio de rescate de dichas Obligaciones Negociables a la fecha de rescate, equivalente al monto de capital pendiente de pago bajo las mismas, junto con los intereses devengados hasta la fecha de rescate y los Montos Adicionales, en su caso.

Con el objeto de hacer efectivo el rescate de Obligaciones Negociables en los términos del presente párrafo, el Emisor deberá entregar al Agente de Pago con una anticipación mínima de 20 días a la fecha de rescate (i) un certificado firmado por dos funcionarios del Emisor donde conste que el mismo que está obligado a abonar dichos Montos Adicionales, sin que pueda excusarse de ello tomando todas las medidas razonables disponibles al efecto y (ii) la opinión de asesores legales o impositivos independientes de reconocido prestigio, en el sentido de que el Emisor ha quedado o quedará obligado a abonar dichos Montos Adicionales como resultado de dicho cambio o modificación y que todas las aprobaciones gubernamentales necesarias para que el Emisor efectúe dicho rescate han sido obtenidas o lo serán al momento del rescate.

Aviso de rescate

Excepto que se establezca lo contrario en el Suplemento de Precio aplicable, el aviso de rescate a los tenedores de Obligaciones Negociables de la Serie a ser rescatada en forma total o parcial, será dado a esos tenedores, a la CNV, y a las entidades autorreguladas en las cuales las Obligaciones Negociables coticen cuando fuera aplicable, según lo dispuesto en este Prospecto bajo el título "Notificaciones" de esta sección. Dicho aviso indicará la disposición conforme a la cual se realiza el rescate, el monto de capital de cada Obligación Negociable a ser rescatada en la fecha fijada para el rescate, el precio de rescate, el lugar o lugares de pago, que los intereses devengados hasta la fecha fijada para el rescate y los Montos Adicionales serán pagados según lo especificado en dicho aviso, y que en esa fecha y después de la misma dejarán de devengarse intereses sobre las Obligaciones Negociables o parte de las mismas a ser rescatadas, así como todo otro asunto que la legislación o reglamentación aplicable exija deba incluirse en el aviso.

Excepto que se establezca lo contrario en el Suplemento de Precio aplicable, por lo menos un día hábil antes de la fecha de rescate especificada en el aviso de rescate notificado de conformidad con lo que aquí se establece, el

Emisor depositará en el Agente de Pago una suma de dinero que sea suficiente para rescatar, en la fecha de rescate, las Obligaciones Negociables de dicha Serie a ser rescatadas, al monto de rescate respectivo, junto con los intereses devengados hasta la fecha fijada para el rescate y todo Monto Adicional que corresponda.

Montos Adicionales

Excepto que se disponga lo contrario en el Suplemento de Precio aplicable, todos los impuestos, aranceles, tasas, contribuciones, retenciones, gastos de transferencia, cargas y/o gravámenes (“Impuestos”) que pudieran recaer sobre los actos, contratos y operaciones relacionados con la emisión, suscripción, colocación y cumplimiento de las Obligaciones Negociables de cada Clase y/o Serie estarán íntegra y exclusivamente a cargo del Emisor. El Emisor abonará los intereses bajo las Obligaciones Negociables sin deducción ni retención de ningún importe en concepto de Impuestos vigentes a la fecha de suscripción o que en el futuro fueran establecidos y cualquiera que fuera el origen o causa de los mismos, excepto a aquellos sujetos que practiquen ajuste por inflación impositiva - de conformidad al Título VI de la ley de impuesto a las ganancias- a los cuales se les practicarán las retenciones establecidas por la normativa vigente (las “Retenciones Admitidas”). Si por disposiciones legales o reglamentarias el Emisor debiera pagar o retener tales importes, el Emisor se obliga a pagar (a su íntegro y exclusivo costo) los montos adicionales (“Montos Adicionales”) que sean necesarios para efectuar el ingreso de las deducciones o retenciones en cuestión. De tal forma, una vez realizadas tales deducciones o retenciones, los tenedores recibirán el pago de los intereses bajo las Obligaciones Negociables libres y netos de Impuestos como si tales deducciones o retenciones no hubiesen sido realizadas, con excepción de las Retenciones Admitidas.

Los Montos Adicionales se considerarán, a todos los efectos, como una suma pagadera bajo las Obligaciones Negociables, con la salvedad de que no se pagarán Montos Adicionales sobre pagos adeudados respecto de ninguna de las Obligaciones Negociables en los siguientes casos: (i) cuando los Impuestos no se habrían aplicado de no haber sido por existir una relación entre el tenedor de la Obligación Negociable y la Argentina distinta de la mera tenencia de esa Obligación Negociable y percepción de pagos sobre la misma; o (ii) cuando los Impuestos no habrían sido aplicados de no haber sido por el incumplimiento de los requisitos de certificación, información o provisión de información respecto de la nacionalidad, residencia o identidad del tenedor de la Obligación Negociable o titular de una participación en esas Obligaciones Negociables, exigidos por el Emisor con, por lo menos, treinta (30) días de anticipación a la fecha de pago de intereses o a la fecha de pago de capital aplicable, según corresponda, si dicho cumplimiento fuera exigido por ley o reglamentación de la Argentina o cualquier subdivisión política o autoridad impositiva de la misma como una condición previa a la desgravación fiscal o exención de esos Impuestos; (iii) respecto de cualquier impuesto sucesorio, a los activos, a las herencias, a las donaciones, a las ventas, a la transferencia o sobre los bienes personales o cualquier impuesto, contribución o carga gubernamental similar; (iv) a un tenedor o titular beneficiario de una Obligación Negociable, o a su representante, en relación con impuestos argentinos pagaderos de otro modo que mediante retención efectuada sobre el pago del capital, la prima, si la hubiera, o los intereses sobre las Obligaciones Negociables; (v) cuando haya Impuestos sobre una Obligación Negociable presentada para el pago más de treinta (30) días después de la fecha en que dicho pago se hizo exigible o de la fecha en que se disponga debidamente y se notifique el pago de la misma a los tenedores de las Obligaciones Negociables, lo que ocurra en último lugar, salvo en la medida en que el tenedor de esa Obligación Negociable hubiera tenido derecho a esos Montos Adicionales contra presentación de la misma para el pago en cualquier fecha durante tal período de treinta (30) días; o (vi) cualquier combinación de las situaciones (i) a (v) descriptas precedentemente, ni tampoco se pagarán Montos Adicionales en relación con el pago del capital, cualquier prima, si la hubiere, o los intereses sobre Obligaciones Negociables a ningún tenedor o titular beneficiario de una Obligación Negociable que sea un fiduciario o una sociedad de personas o una sociedad de responsabilidad limitada o tuviera un carácter distinto al de exclusivo titular beneficiario de dicho pago, en la medida en que fuera obligatorio, de conformidad con las leyes de Argentina, incluir dicho pago en los ingresos a efectos impositivos de un beneficiario o fiduciante en relación con dicho fideicomiso o de un socio en relación con dicha sociedad de personas, sociedad de responsabilidad limitada o titular beneficiario, siempre que tales sujetos no hubieran tenido derecho a recibir dichos Montos Adicionales si hubieran sido los tenedores de las Obligaciones Negociables.

Obligaciones del Banco

De acuerdo a los términos de las Obligaciones Negociables y sin perjuicio de otras obligaciones que pudiese prever cada Suplemento de Precio, el Banco se comprometerá y acordará que en tanto cualquiera de las Obligaciones Negociables continúe en circulación:

(a) Estados contables

El Banco suministrará por los medios informativos habituales permitidos por la legislación aplicable la información contable y financiera requerida por las normas y regulaciones correspondientes.

(b) Seguros

El Banco asegurará y hará que cada una de sus Subsidiarias Significativas aseguren en compañías aseguradoras de primera línea, los montos pertinentes, cubriendo los riesgos que normalmente cubren las compañías que desarrollan negocios similares y que son titulares y/u operan bienes similares a los que poseen y/u operan el Banco o dichas Subsidiarias Significativas, según el caso, en las mismas áreas en las que el Banco o dichas subsidiarias poseen y/u operan sus bienes.

“Subsidiaria” significa, respecto de cualquier Persona, toda sociedad, asociación u otra entidad comercial cuya mayoría de derechos de voto de su capital social fuera en ese momento de titularidad o estuviera controlado, directa o indirectamente por dicha Persona o una o más de las Subsidiarias de dicha Persona o por una combinación de ellas. A los efectos de dicha definición, se entenderá por “Persona” a cualquier persona humana, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de personas, unión transitoria de empresas, asociación, sociedad por acciones, fideicomiso, asociación sin personería jurídica u otra entidad o gobierno o cualquier repartición o subdivisión política correspondiente.

“Subsidiaria Significativa” significa una Subsidiaria del Banco que es sustancial para la situación, financiera o de otra índole, o para las ganancias, operaciones o negocios del Banco o de sus Subsidiarias tomadas en conjunto.

(c) Personería jurídica

El Banco, debiendo procurar que sus Subsidiarias Significativas así lo hagan, deberá (i) mantener vigente su personería jurídica (incluyendo la autorización del Banco Central para dedicarse a las actividades bancarias), así como todos los registros; (ii) realizar todos los actos que fueran razonables para mantener todos los derechos, preferencias, titularidad de sus bienes (entendiéndose por “bienes” cualquier activo, ingresos o cualquier otro bien, tangible o intangible, mueble o inmueble, incluyendo, entre otros, cualquier derecho a percibir ganancias), licencias y derechos similares, necesarios o convenientes para el normal desarrollo de sus actividades, negocios u operaciones, excepto por aquéllos cuya falta de mantenimiento y/o renovación no pudieran causar un efecto material adverso en los negocios, operaciones o condición financiera del Banco y/o en la capacidad del Banco de cumplir sus obligaciones en relación con las Obligaciones Negociables; y (iii) mantener la totalidad de sus bienes en buen estado de uso y conservación, excepto por aquellos bienes que no resultasen esenciales para el normal desarrollo de los negocios y/u operaciones del Banco. El Banco no estará obligado en virtud de esta obligación a mantener dichos derechos, preferencias, titularidad sobre los bienes o licencias o a conservar la personería jurídica de cualquiera de sus Subsidiarias Significativas, en caso de que el directorio decidiera que ya no resulta conveniente dicho mantenimiento o conservación para el manejo de las actividades del Banco y sus Subsidiarias Significativas tomadas en conjunto, y que su pérdida no afecta ni afectará en forma sustancial a los tenedores de las Obligaciones Negociables.

(d) Cumplimiento de las leyes y otros acuerdos

El Banco cumplirá, y hará que cada una de sus Subsidiarias Significativas cumpla, con todas las leyes, normas, reglamentaciones, resoluciones y directivas de cualquier Organismo Gubernamental (como se lo define más abajo) aplicables a la emisión, y cumplimiento de las obligaciones del Banco bajo, las Obligaciones Negociables, salvo en el caso de un incumplimiento que no tuviera un efecto sustancial adverso sobre la situación, financiera o de otro tipo, o sobre las ganancias, operaciones, negocios o proyectos del Banco y sus Subsidiarias Significativas consideradas en conjunto.

“Organismo Gubernamental” significa la entidad o agencia pública, creada por el gobierno argentino o federal, provincial o de los estados o municipal, o cualquier otra entidad jurídica presente o futura, o que actualmente o en el futuro estuviera controlada directa o indirectamente por cualquier entidad o agencia pública de la Argentina (incluyendo el Banco Central).

(e) Libros y registros

El Banco, disponiendo que sus Subsidiarias Significativas actúen en consecuencia, llevará libros, cuentas y registros de acuerdo con las Normas Contables Profesionales y las Normas Contables del Banco Central, que resulten aplicables.

Supuestos de Incumplimiento

Mientras las Obligaciones Negociables de una Clase y/o Serie se encuentren en circulación, y a menos que se disponga de otro modo y/o lo contrario en el Suplemento de Precio aplicable, cualquiera de los supuestos detallados a continuación será un “Supuesto de Incumplimiento” de las Obligaciones Negociables:

(i) si el Banco no paga cualquier monto en concepto de capital o intereses (o Montos Adicionales, en su caso) respecto de las Obligaciones Negociables de esa Clase y/o Serie en la fecha de vencimiento para su pago de acuerdo con sus términos y dicho incumplimiento continúa por un período de siete (7) días hábiles;

(ii) si el Banco no cumple u observa debidamente cualquier otro compromiso u obligación correspondiente a dicha Clase y/o Serie conforme al Suplemento de Precio aplicable, y dicho incumplimiento continúa por un período de 30 días hábiles (o aquella fecha distinta que se indique en el Suplemento de Precio pertinente), luego de recibir el Banco y el fiduciario –en aquellos casos en que se hubiera celebrado un convenio de fideicomiso- notificación escrita al efecto de los tenedores de por lo menos el 25% del monto total de capital de las Obligaciones Negociables en circulación de dicha Clase y/o Serie;

(iii) si el Banco o cualquiera de sus Subsidiarias Significativas no paga a su vencimiento los intereses o el capital de cualquier Deuda (como se define al final de este título) del mismo o de dichas Subsidiarias Significativas (fuera de Deuda pendiente en la fecha de emisión) por un monto total de capital adeudado de por lo menos US\$ 50 millones (o su equivalente al momento de la determinación) y dicho incumplimiento continúa luego del período de gracia, en su caso, aplicable a ella; o si se produce cualquier otro supuesto de incumplimiento en virtud de cualquier convenio o instrumento relativo a cualquier Deuda por un monto total de capital adeudado de por lo menos US\$ 50 millones (o su equivalente en otras monedas) y ello resulta en la caducidad de los plazos de la misma;

(iv) si se dictan contra el Banco o cualquiera de sus Subsidiarias Significativas una o más sentencias definitivas para el pago de dinero por un monto superior en total a US\$ 50 millones (o su equivalente al momento de la determinación) en cada caso, en la medida en que no estuvieran cubiertas por seguros o auto-seguros) y las mismas no son cumplidas y, en el caso de dicha sentencia o decreto, o bien (a) se haya iniciado un procedimiento de ejecución por cualquier acreedor en virtud de dicha sentencia o decreto y el mismo no sea rechazado dentro de los 30 días siguientes desde el inicio de dichos procedimientos de ejecución o (b) transcurre un período de 60 días luego de la sentencia en el que dicha sentencia o decreto no es cumplido, dispensado o su ejecución suspendida;

(v) (a) si un tribunal competente dicta un decreto u orden que (x) haga lugar a la presentación de un plan de regularización y saneamiento del Banco o cualquiera de sus Subsidiarias Significativas en un procedimiento conforme a la Ley de Entidades Financieras, la Ley N° 24.522, con sus modificaciones (la “Ley de Concursos y Quiebras”) o cualquier otra ley de quiebras, concurso o ley similar aplicable que se encuentre en vigencia actualmente o en el futuro o (y) la designación de un administrador, síndico o interventor para el Banco o cualquiera de sus Subsidiarias Significativas respecto de la totalidad o sustancialmente la totalidad de los bienes del Banco y, en cada caso, dicho decreto u orden no es suspendido y se mantiene en vigencia por un período de sesenta (60) días hábiles o (b) si el Banco Central (x) inicia un procedimiento conforme a los artículos 34, 35 o 35(bis) de la Ley de Entidades Financieras, solicitando al Banco que presente un plan conforme a dicho artículo, o (y) ordena una suspensión temporaria, total o parcial de cualquiera de sus actividades conforme al artículo 49 de la carta orgánica del Banco Central;

(vi) si el Banco o cualquiera de sus Subsidiarias Significativas (a) inicia un procedimiento de regularización y saneamiento conforme a la Ley de Entidades Financieras, la Ley de Concursos y Quiebras o cualquier otra ley de quiebras, concurso o ley similar aplicable, ya sea que se encuentre en vigencia actualmente o que se introduzca en el futuro, (b) consiente a la designación o toma de posesión por parte de un administrador, síndico o interventor para el Banco respecto de la totalidad o sustancialmente la totalidad de sus bienes, o (c) realiza una cesión general para beneficio de sus acreedores;

(vii) si el directorio del Banco o sus accionistas emiten o adoptan una resolución, o el Banco Central emite una orden, o un ente gubernamental o tribunal competente dicta un fallo o sentencia para la

disolución o liquidación del Banco (cuando ello no sea en con motivo de una fusión propiamente dicha, fusión por absorción o combinación, u otra operación permitida en este último caso por una disposición que para cada Clase y/o Serie en particular se indique bajo cada convenio de fideicomiso, si hubiere);

(viii) si se torna ilegal para el Banco cumplir con cualquiera de sus obligaciones de pago en virtud de las Obligaciones Negociables de esa Clase y/o Serie;

Si se produce y subsiste uno o más Supuestos de Incumplimiento (salvo un Supuesto de Incumplimiento del tipo descrito en los incisos (v), (vi), (vii) y/o (viii) precedentes) los tenedores de Obligaciones Negociables de una misma Clase y/o Serie en circulación que representen como mínimo el veinticinco por ciento (25%) del monto total del valor nominal en circulación de las Obligaciones Negociables de dicha Clase y/o Serie, mediante notificación escrita al Banco, podrán declarar la caducidad de los plazos para el pago de capital, intereses, Montos Adicionales y/o cualquier otro monto bajo las Obligaciones Negociables correspondientes a dicha Clase y/o Serie en circulación, deviniendo la totalidad de tales montos exigibles y pagaderos en forma inmediata. Si se produce un Supuesto de Incumplimiento del tipo descrito en los incisos (v), (vi), (vii) y/o (viii) precedentes, la caducidad de los plazos para el pago de capital, intereses, Montos Adicionales y/o cualquier otro monto bajo las Obligaciones Negociables en circulación se producirá en forma automática sin necesidad de notificación al Banco, deviniendo la totalidad de tales montos exigibles y pagaderos en forma inmediata.

Sin perjuicio de lo dispuesto más adelante en este párrafo para el Supuesto de Incumplimiento del inciso (iii), en cualquier caso en el cual se hubiera producido la caducidad de los plazos para el pago de capital, intereses, Montos Adicionales, y/o cualquier otro monto bajo las Obligaciones Negociables, los tenedores de Obligaciones Negociables de una misma Clase y/o Serie en circulación que representen como mínimo la mayoría absoluta del monto total del valor nominal en circulación de las Obligaciones Negociables de dicha Clase y/o Serie en circulación podrán, mediante notificación escrita al Banco y/o al fiduciario –si lo hubiere–, dejar sin efecto la caducidad de los plazos para el pago de capital, intereses, Montos Adicionales y/o cualquier otro monto bajo las Obligaciones Negociables correspondientes a dicha Clase y/o Serie, siempre y cuando la totalidad de los Supuestos de Incumplimiento en cuestión hubieran sido subsanados y/o dispensados. En caso de producirse y persistir un Supuesto de Incumplimiento del tipo indicado en el inciso (iii) precedente respecto de las Obligaciones Negociables de cualquier Clase y/o Serie, dicho Supuesto de Incumplimiento quedará automáticamente cancelado y anulado una vez que el incumplimiento o falta de pago que dio lugar a dicho Supuesto de Incumplimiento conforme al inciso (iii) sea subsanado o rectificado por el Banco y/o la Subsidiaria pertinente, y/o dicho Supuesto de Incumplimiento haya sido dispensado por los tenedores de la Deuda correspondiente. La cancelación o anulación no afectarán ningún Supuesto de Incumplimiento posterior ni afectarán ningún derecho derivado de ello.

Las disposiciones anteriores se aplicarán sin perjuicio de los derechos de cada tenedor individual de Obligaciones Negociables de iniciar una acción contra el Banco por el pago de capital, intereses, Montos Adicionales y/o cualquier otro monto vencido e impago bajo las Obligaciones Negociables.

“Deuda” significa, respecto de cualquier persona, sin duplicación: (a) todas las obligaciones de dicha persona por dinero tomado en préstamos; (b) todas las obligaciones de dicha persona instrumentadas mediante bonos, debentures, obligaciones negociables u otros instrumentos similares; (c) todas las obligaciones de dicha persona en virtud de cualquier arrendamiento que deban ser clasificadas y contabilizadas como obligaciones por arrendamiento financiero de acuerdo con las Normas del Banco Central; (d) todas las obligaciones de dicha persona emitidas o asumidas como el precio de compra diferido de bienes o servicios, todas las obligaciones de venta condicional y todas las obligaciones bajo cualquier convenio de retención de titularidad (pero excluyendo deudas comerciales y otros pasivos devengados que surjan en el curso ordinario de los negocios); (e) todas las cartas de crédito, aceptaciones bancarias u operaciones de crédito similares, incluyendo obligaciones de reembolso respecto de ellas; (f) garantías y otras obligaciones contingentes de dicha persona respecto de la Deuda indicada en los incisos (a) a (e) precedentes y el inciso (h) más abajo; (g) toda la Deuda de cualquier otra persona del tipo indicado en los incisos (a) a (f) que sea garantizada por un gravamen sobre cualquier bien o activo de dicha persona; y (h) todas las obligaciones exigibles y pagaderas en virtud de obligaciones de cobertura de dicha Persona; estipulándose, no obstante, que el término “Deuda” no incluirá ninguno de los siguientes pasivos u obligaciones incurridos por el Banco o cualquiera de sus Subsidiarias Significativas en el curso ordinario de los negocios: (1) cualquier depósito en o fondos cobrados por el Banco o cualquiera de sus Subsidiarias Significativas (pero no fondos tomados en préstamo u obtenidos por el Banco o cualquiera de sus Subsidiarias Significativa como préstamo), (2) cualquier cheque, pagaré, certificado de depósito, giro o letra de cambio emitido, aceptado o endosado por el Banco o cualquiera de sus Subsidiarias Significativas, (3) cualquier

operación en la que el Banco o cualquiera de sus Subsidiarias Significativas actúa únicamente en carácter de representante o apoderado, (4) cualquier convenio para comprar o recomprar títulos valores o préstamos o moneda o para participar en préstamos y (5) cartas de crédito, aceptaciones bancarias o cualquier otra transacción crediticia similar hasta el monto por el cual hubieran sido emitidas por el Banco o cualquiera de sus Subsidiarias Significativas.

Asambleas de tenedores; modificaciones, dispensas y enmiendas

Asambleas de tenedores

El Banco podrá en cualquier momento, cuando lo crea conveniente, pero deberá, cuando así lo soliciten los tenedores de Obligaciones Negociables que sean titulares de no menos del 5% del capital de los Títulos en ese momento en circulación o de los Títulos de una Serie o Clase en ese momento en circulación, convocar a una asamblea de tenedores de Obligaciones Negociables o de tenedores de los Títulos de una Serie o Clase en cualquier oportunidad, para otorgar, dar o ejecutar cualquier requerimiento, solicitud, autorización, directiva, notificación, dispensa o cualquier otro acto que, según los Títulos o por los Títulos de una Serie o Clase deba ser otorgado, dado o aprobado por los tenedores de dichos Títulos, incluyendo la modificación de cualquiera de las condiciones establecidas en el presente. Las asambleas tendrán lugar en la ciudad de Buenos Aires, en la fecha y lugar que el Banco determine. Si una asamblea es convocada a solicitud de los Tenedores, el orden del día para la asamblea será el que se determine en la solicitud, y esta asamblea deberá ser convocada dentro de los 40 días de la fecha en que la solicitud fuera recibida por el Banco. La convocatoria a cualquier asamblea de tenedores de Obligaciones Negociables o de tenedores de los Títulos de una Serie (que incluirá la fecha, lugar y hora de la asamblea, el orden del día, y los requisitos para estar presente) se efectuará con no menos de diez días ni más de treinta días de anticipación a la fecha fijada para la asamblea en el Boletín Oficial de Argentina y también del modo previsto bajo el título “*Notificaciones*” de esta sección y las publicaciones de convocatoria deberán efectuarse por cinco días hábiles consecutivos. Las asambleas de tenedores de Obligaciones Negociables se regirán por las disposiciones de la Ley de Obligaciones Negociables, en todo lo que no hubiera sido expresamente previsto en este Prospecto. A los efectos de cualquier asamblea de tenedores de Obligaciones Negociables la posesión de cada Obligación Negociable dará derecho a un voto.

Modificaciones y dispensas

Cuando la asamblea de tenedores de Obligaciones Negociables sea convocada para tratar temas que impliquen modificar los términos y condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables correspondiente a una Clase o Serie respectiva, ésta se constituirá válidamente en primera convocatoria con la presencia de tenedores que representen más del 60% (sesenta por ciento) del valor nominal de las Obligaciones Negociables en circulación correspondiente a dicha Clase o Serie respectiva, y en segunda convocatoria con la presencia de tenedores que representen más del 30% (treinta por ciento) del valor nominal de las Obligaciones Negociables en circulación de dicha Clase o Serie. En ambos casos las modificaciones a los términos y condiciones de emisión deberán ser aprobadas por el voto de tenedores que representen el 60% (sesenta por ciento) del valor nominal de las Obligaciones Negociables de dicha Clase o Serie presentes en la asamblea.

Se requerirá el voto unánime de los tenedores que representen el 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables correspondiente a una Clase o Serie respectiva, para resolver sobre las siguientes materias: (i) cambio del vencimiento establecido del capital o de una cuota de intereses de las Obligaciones Negociables de esa Clase y/o Serie; (ii) modificación de las tasas de interés aplicables; (iii) reducción del monto de capital o de la tasa de interés pagaderos respecto de las Obligaciones Negociables de esa Clase y/o Serie; (iv) cambio de lugar o moneda de pago de capital o intereses sobre las Obligaciones Negociables de esa Clase y/o Serie; (v) reducción del porcentaje del valor nominal de las Obligaciones Negociables de dicha Clase y/o Serie en circulación necesario para modificar o enmendar las Obligaciones Negociables de dicha Clase y/o Serie, o para prestar su consentimiento a una renuncia bajo las Obligaciones Negociables de dicha Clase y/o Serie, cuando sea aplicable a las Obligaciones Negociables de dicha Clase y/o Serie, o reducir los requisitos para votar a constituir quórum descriptos anteriormente, y (vi) modificación de los requisitos anteriores o reducción del porcentaje del monto de capital de las Obligaciones Negociables de esa Clase y/o Serie en circulación necesario para dispensar un incumplimiento o Causales de Incumplimiento anterior. Excepto por lo previsto en este párrafo, cualquier modificación, enmienda o dispensa a los términos y condiciones de los Títulos será concluyente y vinculante para todos los tenedores o para todos los tenedores de los Títulos de una Serie, según sea el caso, independientemente de que hubieran o no prestado su consentimiento o estado presentes en cualquier asamblea, y de que se hubiera o no tomado nota de la modificación, enmienda o dispensa sobre los Títulos o sobre los

Títulos de una Serie, en caso de que hubieran sido debidamente aprobadas en una asamblea convocada y celebrada de conformidad con lo previsto en el presente.

Notificaciones

Excepto lo que pueda establecerse en el Suplemento de Precio respectivo, y lo previsto en este Prospecto respecto de la convocatoria a asambleas de tenedores, todas las notificaciones a los tenedores de Obligaciones Negociables se considerarán debidamente efectuadas si se publican por 1 (un) día en el Boletín Diario de la BCBA, mientras las Obligaciones Negociables de cualquier Clase y/o Serie coticen en dicha bolsa, o en el órgano informativo correspondiente de la bolsa o mercado autorregulado donde coticen, y, en la medida en que sea requerido por ley, en el Boletín Oficial de la República Argentina (el “Boletín Oficial”). En el caso en que las Obligaciones Negociables de cualquier Clase y/o Serie no tuvieran cotización podrá notificarse a sus tenedores, a opción del Emisor, mediante publicación por un (1) día en un diario de amplia circulación de la jurisdicción de que se trate o, en el caso en que no correspondiere notificar a la totalidad de los tenedores, en forma individual a los domicilios que figuren en el Registro correspondiente a la Clase y/o Serie de que se trate. Cualquier notificación de la forma indicada se considerará efectuada el día siguiente al día en que se realizó la última publicación y/o recepción. El costo de cualquier publicación y/o notificación estará a cargo del Emisor.

Ley aplicable

La Ley de Obligaciones Negociables regirá los requisitos necesarios para que las Obligaciones Negociables califiquen como tales. Asimismo, la Ley General de Sociedades y sus modificatorias con la Ley de Obligaciones Negociables y la Ley de Entidades Financieras y demás normas aplicables argentinas regirán la capacidad del Emisor para emitir las Obligaciones Negociables y la autorización de creación del Programa y la autorización de oferta pública del mismo en la Argentina por la CNV. Todo otro aspecto vinculado con las Obligaciones Negociables podrá regirse por, e interpretarse de conformidad con, las leyes de otras jurisdicciones, según se indicará en el Suplemento de Precio aplicable. En tal sentido, todo juicio, acción o procedimiento contra el Emisor o sus bienes, activos o utilidades respecto de las Obligaciones Negociables deberán ser entablados ante los tribunales competentes de la jurisdicción que se especifique en el respectivo Suplemento de Precio, en el cual asimismo se detallará el correspondiente agente de notificaciones.

Acción ejecutiva

En el supuesto de incumplimiento por parte del Banco en el pago del capital, prima, Montos Adicionales (si hubiera) o intereses a su vencimiento, cualquier tenedor de un Título podrá iniciar una acción ejecutiva directamente contra el Banco ante tribunales competentes de la Argentina para reclamar el pago de los montos adeudados por el Emisor, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Obligaciones Negociables.

Agente de Pago

Será el designado en cada emisión de una Clase y/o Serie mediante la firma del respectivo contrato, según conste en el Suplemento de Precio aplicable.

Colocación

Las Obligaciones Negociables serán suscriptas y colocadas, según se determine en el Suplemento de Precio aplicable. Todo Colocador pertinente convendrá que los Títulos no serán ofrecidos en forma directa al público en Argentina excepto a través del Banco o de personas humanas o entidades autorizadas por las leyes y las reglamentaciones vigentes en Argentina, para hacer oferta pública o vender los Títulos en forma directa al público en Argentina.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Capítulo IV, Título VI de las Normas de la CNV, para la colocación primaria de las Obligaciones Negociables podrá optarse por los mecanismos de: a) formación de libro o b) subasta o licitación pública. En cualquier caso, el procedimiento de colocación deberá asegurar la plena transparencia y quedar definido y hacerse público en todos sus extremos antes de proceder al inicio del mismo. La colocación primaria de las Obligaciones Negociables deberá ser llevada a cabo a través de sistemas informáticos presentados por los Mercados autorizados por la CNV, previo cumplimiento de los requisitos dispuestos en las Normas aplicables a los Mercados. El mecanismo de formación de libro podrá estar a cargo de agentes colocadores en el exterior cuando la colocación de las Obligaciones Negociables esté también prevista en otro u otros países, siempre que se trate de países con exigencias regulatorias que cumplan -a criterio de la

CNV con estándares internacionalmente reconocidos en la materia y aseguren el cumplimiento de las disposiciones de dicho capítulo en lo que resulte de aplicación. El agente colocador en el exterior deberá designar como su representante en el país a un agente de negociación y/o agente de liquidación y compensación registrado en la CNV, a los fines del ingreso de las manifestaciones de interés locales. El prospecto o suplemento de prospecto y el aviso de suscripción a publicar deberán incluir la mención del sistema de colocación a utilizar, así como los parámetros para la determinación del precio (u otra variable financiera) y las pautas para la adjudicación de las Obligaciones Negociables.

Destino de los fondos

En los Suplementos correspondientes se especificará el destino que el Banco dará a los fondos netos que reciba en virtud de la colocación de las Obligaciones Negociables, el cual será uno o más de los siguientes destinos previstos en el Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables: (i) inversiones en activos físicos y bienes de capital situados en el país, (ii) adquisición de fondos de comercio situados en el país; (iii) integración de capital de trabajo en el país, (iv) refinanciación de pasivos, (v) integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas, a la adquisición de participaciones sociales y/o financiamiento del giro comercial de su negocio, cuyo producido se aplique exclusivamente a los destinos antes especificados, según se haya establecido en la resolución que disponga la emisión, y dado a conocer al público inversor a través del prospecto y/o (v) otorgamiento de préstamos a los que los prestatarios deberán dar alguno de los destinos a los que se refieren los puntos anteriores de éste párrafo, conforme a las reglamentaciones que a ese efecto dicte el Banco Central y acreditando el destino final de los fondos en la forma determinada por la CNV.

Listado y negociación

El Banco podrá solicitar la autorización de listado y de negociación de las Obligaciones Negociables de una Clase y/o Serie en una o más bolsas y/o mercados bursátiles y/o extrabursátiles del país y/o del exterior, tales como listar en BYMA a través de la BCBA en virtud del ejercicio de la facultad delegada por la primera a la segunda, conforme lo dispuesto por la Resolución N° 18.629 de la CNV, y negociar en el MAE, según se especifique en el Suplemento de Precio aplicable.

Jurisdicción y arbitraje

Todo juicio, acción o procedimiento que se suscite entre el Emisor, los tenedores, cualquier persona que intervenga en cualquier carácter en cualquiera de las Clases y/o Series que se emitan bajo el Programa y cualquier tercero con relación a lo previsto en este Prospecto y/o cualquier Suplemento de Precio aplicable, se resolverá en forma inapelable por el Tribunal de Arbitraje General de la BCBA (en virtud de la delegación de facultades otorgadas por BYMA a la BCBA en materia de constitución de tribunales arbitrales, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 18.629 de la CNV), y en consecuencia los tenedores renuncian a su derecho a apelar dicho laudo arbitral, salvo lo dispuesto, en caso de resultar aplicable, en el artículo 46 de la Ley de Mercado de Capitales relativo al derecho de los tenedores de optar por acudir a los tribunales judiciales competentes, y todo ello sin perjuicio del derecho de los tenedores de reclamar el cobro judicial de cualquier suma adeudada por el Emisor bajo las Obligaciones Negociables, acudiendo a los tribunales judiciales competentes.

Emisiones adicionales

El Banco podrá, periódicamente, sujeto a la autorización de la CNV, sin el consentimiento de los tenedores de cualquier Título o cupones (si los hubiera) en circulación que sean parte del mismo, constituir y emitir Títulos adicionales con los mismos términos y condiciones que los de los Títulos en circulación o que sean los mismos salvo en lo que hace a su fecha de emisión, fechas de inicio de intereses y/o precios de emisión (sin tener en cuenta en ambos casos si dichos Títulos se emiten como nominativos y/o al portador), en cuyo caso se podrán considerar parte de una única Clase junto con los Títulos en circulación.

Calificaciones de Riesgo

El presente Programa no cuenta con calificación de riesgo. Las calificaciones de riesgo serán solicitadas al momento de la emisión de cada Clase y/o Serie, según se determine en el Suplemento de Precio respectivo y conforme a lo que requieran las leyes y reglamentaciones aplicables.

INFORMACIÓN ADICIONAL

A continuación se presenta cierta información relacionada con el capital social del Banco, incluidos resúmenes de ciertas disposiciones de su estatuto social, de la Ley General de Sociedades y determinadas leyes y reglamentaciones de la Argentina; todo ello en vigencia a la fecha del presente Prospecto. La siguiente descripción del capital social del Banco no pretende ser completa y está condicionada en su totalidad por el estatuto social del Banco, la Ley General de Sociedades y las disposiciones de otras leyes y reglamentaciones argentinas aplicables, incluyendo las normas de la CNV y de la BCBA.

A) ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTO

En virtud de lo establecido por el artículo 2 del Estatuto Social, el Banco es una entidad financiera constituida como sociedad anónima el 4 de mayo de 1928 de acuerdo con las leyes de la República Argentina, y registrada el 18 de septiembre de 1928 ante el Registro Público de Comercio bajo el N° 13.424 del Libro N° 36 de Sociedades por Acciones. Con fecha 29 de agosto de 1939 y producto de una modificación en el Estatuto Social, inscripta bajo el número 89, tomo 38 del libro 45, tomo A de Estatutos Nacionales, el período de duración del Banco asciende a 99 años contados a partir de dicha fecha (vencimiento el 29 de agosto de 2038).

Disposiciones estatutarias respecto de los Directores

El Estatuto Social del Banco no contiene ninguna disposición relativa a la facultad de los directores de: (i) votar sobre una propuesta, convenio o contrato en el cual el director tenga un interés personal, (ii) a falta de quórum independiente, votar compensaciones para ellos o para cualquier miembro del órgano de dirección, y (iii) tomar préstamos. El Estatuto del Banco tampoco obliga a los directores a retirarse al cumplir una determinada edad ni obliga a que tengan una determinada cantidad de acciones para poder ser directores.

Objeto social

El Banco tiene por objeto, según se indica en el artículo 3 de su Estatuto, realizar todas las operaciones activas, pasivas y de servicios permitidas a los bancos comerciales por la Ley de Entidades Financieras, tales como: a) recibir depósitos a la vista, a plazos y en cajas de ahorro; b) emitir bonos, obligaciones negociables, certificados de participación en los préstamos que otorgue y otros instrumentos negociables en el mercado local o en el exterior, de acuerdo con la reglamentación que el Banco Central de la República Argentina establezca; c) conceder créditos a corto, mediano y largo plazo; d) otorgar avales, fianzas u otras garantías, aceptar, colocar y recolocar letras y pagarés de terceros, giros y otras libranzas, transferir fondos, emitir y aceptar cartas de crédito; e) realizar inversiones en valores mobiliarios, públicos y privados, vinculados con operaciones en que interviniera, prefinanciar sus emisiones, garantizarlos y colocarlos; f) actuar como fiduciario y depositario de fondos comunes de inversión u operaciones de financiación colectiva de bienes durables y viviendas, administrar carteras de valores mobiliarios y cumplir otros encargos fiduciarios; g) obtener créditos del exterior y actuar como intermediario de créditos obtenidos en moneda nacional o extranjera; h) realizar operaciones en moneda extranjera; i) dar bienes en locación financiera; j) cumplir mandatos y comisiones conexas con sus operaciones; k) conceder créditos para la compra o venta de bienes o servicios pagaderos en cuotas o a término y otros préstamos personales amortizables; l) otorgar anticipos sobre créditos provenientes de ventas, locaciones u otras operaciones, adquirirlos, asumir sus riesgos, gestionar sus cobros, o prestar asistencia técnica y administrativa; m) conceder créditos para la adquisición de viviendas y otros inmuebles y la sustitución de gravámenes hipotecarios constituidos con igual destino; n) recibir certificados de depósitos de participación en préstamos hipotecarios y en cuentas especiales; ñ) recibir depósitos en los cuales el ahorro sea la condición previa para el otorgamiento de un préstamo; o) descontar, comprar y vender letras, pagarés, cheques, giros, facturas conformadas y otros documentos negociables; p) operar en bonos, letras, obligaciones negociables, obligaciones hipotecarias y de otra naturaleza u otros instrumentos negociables en el mercado local o en el exterior; q) recibir valores en custodia y prestar servicios a fines de tal actividad; r) actuar como intermediario de la compraventa de títulos valores, agente pagador de dividendos, amortizaciones e intereses. En los casos en que resulte necesario se gestionará la previa aprobación de la autoridad de superintendencia financiera. Asimismo, podrá actuar bajo cualquier categoría de “Agente” con todas las facultades y atribuciones contempladas en la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales y su reglamentación, previo cumplimiento de los requisitos y exigencias que fije la Comisión Nacional de Valores. La enunciación precedente no es limitativa, teniendo la Sociedad plena capacidad jurídica para realizar actos, contratos y operaciones compatibles con su objeto, sometiéndose para ello a la legislación vigente y a las disposiciones que dicte el Banco Central de la República Argentina.

Dividendos

El artículo 20 del estatuto social contiene las disposiciones relativas a los dividendos. Véase también la sección “*POLÍTICAS DEL EMISOR - Política de Dividendos y Agentes Pagadores*”.

Derecho de voto

En virtud de lo establecido por el artículo 6 del estatuto del Banco, cada acción clase A o clase B otorga al tenedor de la misma un voto para cualquier asamblea de accionistas, para votar la aprobación de cualquier decisión. Las acciones clase A tienen derecho a elegir un director siempre y cuando la provincia de Río Negro retenga al menos una acción. La elección de directores por la clase B se podrá hacer por el sistema de voto plural, es decir por mayoría.

Asimismo, la Ley General de Sociedades reserva el derecho de voto acumulativo para elegir hasta un tercio de las vacantes a llenar en el directorio, compitiendo en dicho tercio con los candidatos votados por el sistema plural. El voto acumulativo es un sistema que constituye una garantía de protección de las minorías en las sociedades anónimas, ya que tiene por finalidad posibilitar –aunque no asegurar– a las minorías la designación de algunos de sus candidatos en los órganos colegiados. Este sistema consiste en multiplicar el número de los socios que se acojan a este procedimiento por el número de vacantes a contemplar, el cual no podrá exceder a un tercio de las vacantes. Uno de los aspectos a tener en cuenta en el voto acumulativo es que, cuanto mayor sea la cantidad de vacantes a cubrir, mayor serán las posibilidades de los accionistas o grupos minoritarios de acceder a cargos en el directorio. Sin embargo, la ley excluye el voto acumulativo en caso que existan diversas clase de acciones con derecho a elegir uno o más directores. Véase en esta sección “*Información Adicional - Descripción del capital social*”. Por lo tanto, en la medida que la provincia no venda sus acciones clase A, y por ende subsistan las clase A con las clase B, los accionistas no podrán votar mediante el sistema de voto acumulativo.

Además, conforme a la Ley General de Sociedades, mientras el Banco continúe siendo una sociedad que hace oferta pública de sus acciones no puede emitir nuevas acciones de capital de ninguna clase, que otorguen a su tenedor más de un voto por acción.

Por último, bajo la Ley General de Sociedades, las sociedades extranjeras que sean titulares de acciones en una sociedad argentina, deben registrarse ante la IGJ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha registración requiere la presentación de documentación societaria y contable con la finalidad de demostrar que la actividad principal de los accionistas mayoritarios de la sociedad extranjera tiene lugar fuera de la Argentina. La falta de cumplimiento de las formalidades de inscripción implican la suspensión del ejercicio de los derechos del socio, incluyendo, entre otros, los de voto, de suscripción preferente, de receso, a percibir dividendos y a la oposición e impugnación de decisiones de los órganos sociales.

Responsabilidad de los accionistas

La responsabilidad de los accionistas por las pérdidas de una sociedad se limita al valor de sus acciones en la misma. Sin embargo, en virtud de la Ley General de Sociedades, los accionistas que votaron a favor de una resolución que posteriormente fuera declarada nula por un tribunal por ser contraria a las leyes argentinas o a los estatutos de una sociedad (o reglamentaciones, si hubiere) pueden ser considerados, conjunta y mancomunadamente, responsables por daños y perjuicios ocasionados a dicha sociedad, otros accionistas o terceros, como consecuencia de dicha resolución.

Rescate y otras disposiciones

Las acciones del Banco están sujetas a rescate en relación con una reducción en el capital social dispuesta por el voto de una mayoría de los accionistas en una asamblea extraordinaria de accionistas. Todas las acciones rescatadas de ese modo pueden ser canceladas por el Banco.

Cabe destacar que el estatuto del Banco no contiene ninguna disposición relativa a: (i) fondo de rescate de acciones, (ii) responsabilidad por otras compras de acciones por parte del Banco, (iii) discriminación contra cualquier tenedor, futuro o actual, de tales acciones como resultado de la tenencia, por tal tenedor, de una cantidad sustancial de acciones, y (iv) medidas necesarias para cambiar los derechos de los accionistas.

Derecho de receso

Toda vez que los accionistas del Banco aprueben una escisión o una fusión en la que el Banco no sea la sociedad sobreviviente, el cambio de la personería jurídica del Banco, un cambio fundamental en su objeto social, un cambio en su domicilio que implique trasladarlo fuera de la Argentina, el retiro voluntario de la oferta pública o del listado en mercados autorregulados, la continuación del Banco en el caso de un retiro obligatorio o cancelación de la autorización de oferta pública, o una capitalización total o parcial después de una reducción obligatoria del capital social del Banco o liquidación, cualquier accionista que hubiera votado contra la aprobación de dicha resolución o no haya asistido a la asamblea en la cual dicha resolución haya sido aprobada puede retirarse y recibir el valor en libros de sus acciones, determinado en base al último balance general del Banco preparado, o que debería haber sido preparado de acuerdo con las leyes y reglamentaciones argentinas, siempre que dicho accionista ejerza su derecho de receso dentro de un período determinado.

Los derechos de receso deben ser ejercidos dentro de los cinco días posteriores a la finalización de la asamblea en que dicha resolución fuera adoptada, en el caso de que el accionista disidente hubiera votado en contra de dicha resolución, o dentro de los 15 días posteriores a dicha finalización si el accionista disidente no hubiera asistido a dicha reunión y pudiera probar que era accionista a la fecha de dicha reunión. En el caso de una fusión o escisión, los derechos de receso del accionista no pueden ser ejercidos si las acciones a recibir como consecuencia de dicha operación estuvieran autorizadas para la oferta pública o su listado admitido en un mercado autorregulado. El derecho de receso del accionista se extingue si la resolución que diera origen a dicho derecho fuera revocada en otra asamblea de accionistas celebrada dentro de los 75 días posteriores a la fecha de la asamblea en la que se aprobó la resolución.

El pago de los derechos de receso debe efectuarse dentro del año de la fecha de la asamblea de accionistas en la que se aprobara la resolución, excepto cuando la resolución fuera para retirar del listado la acción del Banco o para continuar después de un retiro del listado obligatorio, en cuyo caso el período de pago se reduce a 60 días desde la fecha de la resolución.

Derechos de suscripción preferente y de acrecer

En virtud de lo establecido por el artículo 6 del Estatuto Social, en el caso de un aumento de capital social, el tenedor de acciones ordinarias existentes de una determinada clase tiene un derecho a la suscripción preferente de una cantidad de acciones en dicha clase que sea suficiente para mantener la proporción existente de su tenencia de acciones de la misma clase. Si quedaren acciones clase A sin suscribir, éstas se transformarán automáticamente en acciones clase B y serán ofrecidas a los accionistas de este grupo en proporción a sus tenencias.

Además, los accionistas que hubiesen ejercido el derecho de suscripción preferente tienen derecho a suscribir sobre una base proporcional a las acciones suscriptas, las acciones no suscriptas que permanezcan al término de una oferta de derechos de suscripción preferente, lo que se conoce como derechos de acrecer.

Los derechos de suscripción preferente pueden ejercerse durante los 30 días posteriores a la fecha de la última notificación a los accionistas publicada en el Boletín Oficial de Argentina y en uno de los diarios de mayor circulación general en toda Argentina. De acuerdo con la Ley General de Sociedades, ese período de 30 días puede reducirse a un mínimo de 10 días en el caso de sociedades que hagan oferta pública de sus acciones, por una decisión de sus accionistas aprobada en una asamblea extraordinaria.

Las acciones no suscriptas por los accionistas clase B en virtud del ejercicio de sus derechos preferentes o de acrecer, pueden ser ofrecidas a terceros.

Los derechos de suscripción preferente también se aplican a la emisión de ciertas obligaciones negociables convertibles, pero no se aplican a la conversión de esos títulos y pueden aplicarse a la emisión de acciones preferidas si así lo decidiera la asamblea de accionistas pertinente.

Los tenedores de BDRs o ADRs ubicados fuera de Argentina podrían verse limitados en su capacidad para ejercer los derechos de suscripción preferente respecto de nuevas acciones por limitaciones a las leyes de títulos valores aplicables a otros países.

Derechos de liquidación

El estatuto social del Banco dispone que al finalizar el plazo para el que fue creada la sociedad, o en caso de disolución anticipada, la misma será liquidada conforme las disposiciones del título VII de la Ley de Entidades Financieras o conforme la normativa que en el futuro la reemplace.

Conforme a la Ley de Entidades Financieras, en el caso de su disolución o liquidación, el Banco deberá comunicarlo al Banco Central, quien podrá resolver la revocación de la autorización para funcionar de la entidad financiera y podrá disponer la autoliquidación de la entidad por sus autoridades, si así fuera solicitado por éstas, o la liquidación judicial de la misma, según corresponda por ley. Se aplicarán los activos al cumplimiento de las obligaciones pendientes y el remanente se distribuirá proporcionalmente primero entre los tenedores de acciones preferidas según sus términos, en su caso. Si quedara algún superávit, será distribuido proporcionalmente entre los tenedores de acciones ordinarias.

Asambleas ordinarias y extraordinarias

Las asambleas de accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias. El Banco está obligado a convocar y celebrar una asamblea ordinaria de accionistas dentro de los cuatro meses desde el cierre de cada ejercicio económico para considerar los asuntos especificados en los dos primeros apartados del artículo 234 de la Ley General de Sociedades, como ser la aprobación de los estados contables, la asignación del ingreso neto durante dicho ejercicio económico, aprobación de los informes del directorio y comisión fiscalizadora y elección y remuneración de los directores y miembros de la comisión fiscalizadora. Otras cuestiones que pueden ser consideradas en una asamblea ordinaria convocada y celebrada en cualquier momento incluyen la responsabilidad de los directores y miembros de la comisión fiscalizadora, aumentos de capital y la emisión de determinadas obligaciones negociables.

Adicionalmente, en virtud de lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Mercado de Capitales y al ser el Banco una sociedad admitida al régimen de oferta pública de sus acciones, corresponde a la asamblea ordinaria resolver, además de los asuntos mencionados precedentemente: (i) la disposición o gravamen de todo o parte sustancial de sus activos cuando ello no se realice en el curso ordinario de sus negocios y (ii) la celebración de contratos de administración o gerenciamiento. Lo mismo se aplica a la aprobación de cualquier otro pacto por el cual los bienes o servicios que reciba el Banco sean remunerados total o parcialmente con un porcentaje de los ingresos, resultados o ganancias del mismo, si el monto resultante es sustancial habida cuenta del giro de los negocios y del patrimonio social.

Las asambleas extraordinarias de accionistas pueden ser convocadas en cualquier momento para considerar asuntos que se encuentran fuera de la autoridad de la asamblea ordinaria, que incluyen la modificación de los estatutos, emisión de debentures, disolución anticipada, fusión por absorción, escisión, reducción del capital y rescate de acciones, transformación de un tipo de entidad en otra y limitación de los derechos de suscripción preferente de los accionistas.

Notificaciones de las asambleas

Las notificaciones de las asambleas de accionistas se rigen por las disposiciones de la Ley General de Sociedades y el artículo 70 de la Ley de Mercado de Capitales. La notificación de las asambleas de accionistas debe ser publicada durante cinco días en el Boletín Oficial de la Argentina, en un diario argentino de amplia circulación y en las publicaciones de las bolsas de valores y mercados de títulos en la Argentina donde se negocian las acciones, no menos de 20 ni más de 45 días antes de la fecha en la que se celebrará la asamblea. Dicha notificación debe incluir información respecto del tipo de asamblea a realizar, la fecha, lugar y hora de la asamblea y el orden del día. Si en la asamblea no se reuniera el quórum necesario, la notificación de una asamblea en segunda convocatoria que se celebrará dentro de los 30 días de la fecha de convocatoria de la primera asamblea, se publicará durante tres días, por lo menos ocho días antes de la fecha de la segunda asamblea. Las asambleas ordinarias podrán ser citadas en primera y segunda convocatoria simultáneamente. Las asambleas de accionistas se considerarán válidamente celebradas sin notificación previa si todas las acciones en circulación del capital del Banco se encuentran presentes y las resoluciones son aprobadas por el voto unánime de dichas acciones.

Quórum y condiciones de votación

Conforme el artículo 18 del estatuto social, el quórum en las asambleas ordinarias de accionistas en primera convocatoria estará constituido por una mayoría de las acciones con derecho de voto y las medidas deberán ser adoptadas por el voto afirmativo de una mayoría absoluta de las acciones presentes con derecho de voto sobre

dicha medida. Si no hubiera quórum presente en la primera asamblea, podrá celebrarse una asamblea en segunda convocatoria donde la medida podrá ser aprobada por los tenedores de una mayoría absoluta de las acciones presentes, sin considerar la cantidad de dichas acciones. El quórum para una asamblea extraordinaria de accionistas en primera convocatoria estará constituido por el 60% de las acciones con derecho de voto, y si dicho quórum no estuviera presente, podrá celebrarse una asamblea en segunda convocatoria, cuyo quórum estará constituido por el 30% de las acciones con derecho de voto.

Las medidas tratadas en una asamblea extraordinaria de accionistas pueden ser adoptadas por el voto afirmativo de una mayoría absoluta de las acciones presentes con derecho de voto sobre dicha medida, con excepción de: (i) la transferencia del domicilio del Banco fuera de la Argentina, (ii) un cambio fundamental en el objeto social establecido en los estatutos del Banco, (iii) la disolución anticipada del Banco, (iv) el rescate total o parcial de acciones, (v) la fusión o escisión del Banco, si éste no fuera la entidad resultante o, (vi) la transformación de la situación jurídica del Banco, requiriéndose en estos casos tanto en primera como en segunda convocatoria, la aprobación de una mayoría de las acciones con derecho de voto (para estos propósitos, las acciones preferidas sin derecho de voto tendrán derecho de voto), sin aplicarse el voto plural, en el caso de que existan acciones con voto plural.

Las asambleas de accionistas podrán ser convocadas por el directorio o los miembros de la comisión fiscalizadora toda vez que lo exija la ley o cuando se considere necesario. Del mismo modo, el directorio o los miembros de la comisión fiscalizadora deberán convocar a asambleas de accionistas ante el requerimiento de accionistas que representen en total no menos del cinco por ciento (5%) del capital social del Banco en circulación. Si el directorio o la comisión fiscalizadora no convocara una asamblea después de dicho requerimiento, la CNV o un tribunal podrán ordenarla.

Conforme a lo previsto en la Ley General de Sociedades, a los efectos de asistir a una asamblea, el accionista deberá solicitar a Caja de Valores un certificado de acciones escriturales acreditando su calidad de accionista y depositarlo en el Banco como mínimo tres días hábiles antes de la fecha de convocatoria de la asamblea para que los inscriba en el libro de asistencia. Si el accionista tuviera de ese modo derecho a asistir a la asamblea, podrá hacerse representar mediante carta-poder en instrumento privado con las firmas certificadas en forma judicial, notarial o bancaria. No pueden hacerse representar por los directores del Banco, los miembros de la comisión fiscalizadora, funcionarios o empleados.

Elección de directores

Actualmente, en virtud de lo establecido por el artículo 9 del Estatuto los accionistas presentes reunidos en asamblea ordinaria pueden determinar los miembros del directorio que compondrán el directorio, entre un mínimo de siete y un máximo de nueve miembros. Cualquier director designado de tal manera durará en sus funciones tres ejercicios fiscales. El directorio se integrará de la siguiente manera: (i) un director titular será designado por el titular de las acciones clase A, independientemente del capital social que represente esta clase de acciones, y (ii) los restantes directores titulares serán designados por los titulares de las acciones clase B. Constituida la asamblea de accionistas, los titulares de cada clase de acciones designarán los directores titulares y suplentes que les correspondan.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 12 del estatuto, los directores, en su primera reunión posterior a la asamblea, deberán designar un presidente, y cinco vicepresidentes de entre los directores designados por los accionistas titulares de las acciones ordinarias clase B. La representación de la sociedad y uso de la firma social, corresponde conjuntamente al presidente y a un vicepresidente; o también estará a cargo, en forma conjunta, de dos vicepresidentes.

Comité de auditoría

Sobre las disposiciones estatutarias relativas al Comité de Auditoría establecidas en el artículo 14 del estatuto, véase el capítulo I “*INFORMACIÓN SOBRE LOS DIRECTORES, GERENTES, MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA y COMITÉ DE AUDITORÍA (TITULARES Y SUPLENTE)*”.

Régimen de oferta pública de adquisición

Oferta pública de adquisición obligatoria en caso de cambio de control

Conforme lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Mercado de Capitales, quien con el fin de alcanzar el control, en forma directa o indirecta, de una sociedad cuyas acciones se encuentren admitidas al régimen de la oferta pública pretenda adquirir a título oneroso, actuando en forma individual o concertada con otras personas en un sólo acto o en actos sucesivos, una cantidad de acciones con derecho a voto, de derechos de suscripción u opciones sobre acciones, de títulos de deuda convertibles u otros valores negociables similares que directa o indirectamente puedan dar derecho a la suscripción, adquisición o conversión de o en acciones con derecho a voto, cualquiera sea su forma de instrumentación, que den derecho o que ejercidas den derecho, a una “participación significativa” en los términos que defina la reglamentación que deberá dictar la CNV, en el capital social y/o en los votos de una sociedad cuyas acciones se encuentren admitidas al régimen de la oferta pública, deberá promover previamente dentro del plazo que establezca la reglamentación una oferta pública obligatoria de adquisición o canje de valores negociables de acuerdo con el procedimiento establecido por la CNV.

Esta oferta estará dirigida a todos los titulares de valores negociables y se referirá como mínimo a las participaciones que establezca la reglamentación que deberá determinar la obligación de promover ofertas obligatorias totales o parciales y diferenciadas según el porcentaje del capital social y de los votos que se pretenda alcanzar. El precio de la oferta deberá ser equitativo determinado según las pautas establecidas en el artículo 98 de la Ley de Mercado de Capitales y las Normas de la CNV, con ciertas excepciones previstas en las Normas CNV.

Tal obligación comprende asimismo los supuestos en que se produzca un cambio de control como consecuencia de una fusión o toma de control de otra sociedad o entidad de acuerdo a los términos y casos definidos por las Normas CNV, pero no regirá en los supuestos en que la adquisición de la participación significativa no conlleve la adquisición del control de la sociedad cuyas acciones estén admitidas a negociación.

Concepto de “participación significativa”

La reglamentación determina la obligación de promover ofertas obligatorias totales o parciales y diferenciadas según el porcentaje del capital social y de los votos que se pretenda alcanzar. La reglamentación establece las siguientes obligaciones de OPA:

- Cuando se pretenda alcanzar una participación igual o superior al 35% del capital social con derecho a voto y/o de los votos de la sociedad, la oferta deberá realizarse sobre un número de valores que le permita al adquirente alcanzar, al menos, el 50% del capital con derecho a voto de la sociedad afectada.
- Cuando se pretenda alcanzar una participación superior al 50% del capital con derecho a voto y/o de los votos de la sociedad, la oferta deberá realizarse sobre un número de valores que le permita al adquirente alcanzar el 100% del capital con derecho a voto de la sociedad afectada. La aplicación del presente párrafo será preferente respecto a la establecida en el párrafo anterior.

Sanciones por incumplimiento

En los casos en que la participación señalada en el artículo 87 de la Ley de Mercado de Capitales se haya alcanzado sin el debido y previo cumplimiento de las condiciones fijadas para ello, la Comisión Nacional de Valores la declarará irregular e ineficaz a los efectos administrativos y dispondrá la subasta de las participaciones adquiridas en infracción, sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder.

Oferta pública de adquisición obligatoria en caso de retiro de los regímenes de oferta pública en Argentina

El artículo 97 de la Ley de Mercado de Capitales establece que cuando una sociedad, cuyas acciones se encuentren admitidas a los regímenes de oferta pública en Argentina, acuerde su retiro voluntario de cualquiera de los mismos deberá seguir el procedimiento que se establece en la reglamentación de la CNV y, asimismo, deberá promover obligatoriamente una OPA del total de sus acciones, de derechos de suscripción, obligaciones convertibles en acciones u opciones sobre acciones en los términos previstos en la reglamentación. No será preciso extender la oferta pública de adquisición a aquellos que hubieran votado a favor del retiro en la asamblea. La oferta pública solo podrá efectuarse como compraventa, debiendo consistir en dinero la totalidad de la contraprestación.

La adquisición de las propias acciones deberá efectuarse con ganancias realizadas y líquidas o con reservas libres, cuando estuvieran completamente integradas, y para su amortización o enajenación en el plazo del artículo 221 de la Ley General de Sociedades, debiendo la sociedad acreditar ante la CNV que cuenta con la liquidez necesaria y que el pago de las acciones no afecta la solvencia de la sociedad.

El precio ofrecido deberá ser un precio equitativo, pudiéndose ponderar para tal determinación, entre otros criterios aceptables, los que se indican a continuación:

- Valor patrimonial de las acciones, considerándose a ese fin un estado contable especial de retiro de oferta pública.
- Valor de la compañía valuada según criterios de flujos de fondos descontados y/o indicadores aplicables a compañías o negocios comparables.
- Valor de liquidación de la sociedad.
- Cotización media de los valores en las bolsas donde coticen los mismos durante el semestre inmediatamente anterior al del acuerdo de solicitud de retiro, cualquiera que sea el número de sesiones en que se hubieran negociado.
- Precio de la contraprestación ofrecida con anterioridad o de colocación de nuevas acciones, en el supuesto que se hubiese formulado alguna oferta pública de adquisición respecto de las mismas acciones o emitido nuevas acciones según corresponda, en el último año, a contar de la fecha del acuerdo de solicitud de retiro.

En ningún caso el precio ofrecido podrá ser inferior al que resulte del criterio de la cotización media indicado precedentemente en este párrafo.

Otras disposiciones

El estatuto del Banco no contiene disposición alguna (i) en razón de la cual esté obligado a revelar información sobre la propiedad de sus acciones, y (ii) que pueda causar la demora, diferimiento o prevención de un cambio de control, el cual sólo podría operar en caso de fusión, adquisición, reestructuración societaria u oferta pública de adquisición.

B) CONTRATOS IMPORTANTES

Ni el Banco ni su controlante Banco do Brasil tienen, a la fecha, contratos significativos ajenos a los que celebran en el curso ordinario de los negocios que debieran ser informados en el presente Prospecto.

C) CONTROLES DE CAMBIO

Tipo de cambio

El 6 de enero de 2002, el Congreso de la Nación promulgó una ley de emergencia pública, abandonando más de diez años de paridad fija peso-dólar estadounidense. Después de devaluar el peso y fijar el tipo de cambio oficial a Ps. 1,40 por US\$ 1, el 11 de febrero de 2002, el gobierno argentino permitió que el valor del peso fluctúe en el mercado de cambios según su oferta y demanda. La escasez de dólares estadounidenses y su mayor demanda hizo que el peso se devaluara significativamente durante el primer semestre de 2002. Desde el 30 de junio de 2002 el peso se ha devaluado en relación con el dólar estadounidense al pasar de un tipo de cambio de Ps. 3,8 por US\$ 1 en dicha fecha a un tipo de cambio de Ps. 37,80 por US\$ 1 al 31 de diciembre de 2018.

El siguiente cuadro presenta los tipos de cambio máximo, mínimo, promedio y final para los períodos indicados, expresados en pesos por dólar estadounidense. No se puede garantizar que el peso no se deprecie nuevamente en el futuro.

AÑO	TIPO DE CAMBIO (1)			
	MÁXIMO	MÍNIMO	PROMEDIO (2)	FINAL DEL PERÍODO
2013	6,52	4,92	5,48	6,52
2014	8,56	6,54	8,12	8,55
2015	13,76	8,55	9,27	13,01
2016	16,04	13,07	14,78	15,85
2017	18,83	15,17	16,57	18,77
2018	41,89	18,74	28,74	38,85

MES				
Enero 2019	38,74	38,03	38,43	38,28
Febrero 2019	40,71	38,25	39,43	40,14
Marzo 2019	44,92	40,84	42,54	44,40

- (1) Tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central.
(2) Basado en promedios mensuales.

Controles de cambio

En enero de 2002, con la sanción de la Ley de Emergencia Pública, Argentina declaraba la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria en Argentina y facultaba al Poder Ejecutivo Nacional a establecer un sistema para determinar el tipo de cambio entre el peso y las monedas extranjeras y dictar normas y regulaciones cambiarias. En tal contexto, el 8 de febrero de 2002 a través del Decreto N° 260/2002, el Poder Ejecutivo Nacional estableció (i) el MULC, a través del cual deben realizarse todas las operaciones de cambio en moneda extranjera, y (ii) que las operaciones de cambio en moneda extranjera deben ser realizadas al tipo de cambio libremente pactado entre partes contratantes, sujeto al cumplimiento de los requisitos y regulaciones que establezca el Banco Central.

Comunicación “A” 6244 emitida por el Banco Central

Con fecha 19 de mayo de 2017, el Banco Central dictó la Comunicación “A” 6244 que, con vigencia a partir del 1° de julio de 2017, modificó y flexibilizó significativamente todas las normas que reglamentaban la operatoria en el mercado de cambios.

De acuerdo con la Comunicación “A” 6244, todas las normas que reglamentaban la operatoria cambiaria, la posición general de cambios y las disposiciones adoptadas por el Decreto N° 616/05, fueron dejadas sin efecto. Esta norma también establece:

- De acuerdo con el punto 1.1 de la citada Comunicación, *“Todas las personas humanas o jurídicas, patrimonios y otras universalidades podrán operar libremente en el mercado de cambios”*.
- La obligación de llevar a cabo operaciones cambiarias a través de entidades autorizadas (punto 1.2).
- Se eliminó el horario de funcionamiento del mercado único y libre de cambios.
- Se mantiene la vigencia de las normas vinculadas con los regímenes de relevamiento de emisiones de títulos y de otras obligaciones externas del sector privado financiero y no financiero, y de relevamiento de inversiones directas, tal como se detallará más adelante.
- El punto 3 de la citada Comunicación establece las pautas operativas para las entidades autorizadas a operar en cambios.
- El punto 5 de la citada Comunicación incluye la normativa relacionada con las exportaciones argentinas de bienes. Se destaca que según lo establecido en el punto 5.1, se mantiene la obligación de ingreso y liquidación del contravalor en divisas de la exportación de productos nacionales.

Por último, el 28 de diciembre de 2017, en virtud de la Comunicación “A” 6401, el Banco Central reemplazó los regímenes de información establecidos por las Comunicaciones “A” 3602 y “A” 4237 con un nuevo régimen unificado para la información al 31 de diciembre de 2017. El régimen de información unificado incluye una declaración anual, cuya presentación será obligatoria para toda persona cuyo flujo total de fondos o saldo de activos y pasivos ascienda a US\$1 millón o más durante el año calendario anterior. Quienes están sujetos a la mencionada obligación de información deberán declarar los siguientes pasivos: (i) acciones y participaciones de capital; (ii) instrumentos de deuda no negociables; (iii) instrumentos de deuda negociables; (iv) derivados financieros y (v) estructuras y terrenos.

Adicionalmente, por medio del DNU 27/2018 y la Comunicación “A” 6436 de fecha 19 de enero de 2018, con el objetivo de brindar mayor flexibilidad al sistema financiero, favorecer la competencia, permitir el ingreso de nuevos operadores al mercado de cambios y reducir los costos que genera dicho sistema, se estableció el mercado libre de cambios (“MELI”), reemplazando la figura del MULC. A través del MELI se cursan las operaciones de cambio que fueran realizadas por entidades financieras y demás personas autorizadas por el Banco Central para dedicarse de manera permanente o habitual al comercio de la compra y venta de monedas y billetes extranjeros, oro amonedado o en barra de buena entrega y cheques de viajero, giros, transferencias u operaciones análogas en moneda extranjera.

Por otro lado, en virtud de la Comunicación “A” 6443 del Banco Central, con vigencia desde el 1 de marzo de 2018, las empresas de cualquier sector que operen de manera habitual en el MELI podrán funcionar como agencia de cambios con el único requisito de inscribirse en forma electrónica en el “Registro de operadores de cambio”.

Teniendo en cuenta lo anteriormente dispuesto, a la fecha del presente documento no existen restricciones para:

- realizar operaciones de arbitrajes y canjes en moneda extranjera con clientes (residentes y no residentes);
- realizar transferencias al exterior para el pago de servicios, intereses, utilidades y dividendos y adquisición de activos no financieros no producidos (se deberá presentar una declaración jurada anual de conformidad con la Comunicación “A” 6401);
- el acceso al MELI por parte de residentes para formar activos externos sin límite de monto;
- el acceso al MELI por parte de no residentes en concepto de repatriación de inversiones directas por venta de inversión directa, liquidación definitiva de la inversión directa, reducción de capital decidida por la sociedad local y devolución de aportes irrevocables;
- el acceso al MELI por parte de no residentes para el cobro de servicios o liquidación por venta de inversiones de portafolio (y sus rentas) lo que comprende, entre otras, inversiones en acciones, participaciones en empresas locales, inversiones en fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros, etc; y
- el acceso al MELI por parte de residentes para el pago de primas, constitución de garantías y cancelaciones que correspondan, operaciones de futuros, forwards, opciones y otros derivados que concierten en mercados institucionalizados del exterior o con contrapartes no residentes.

Para mayor aclaración acerca de las restricciones y controles de cambio para el ingresos de capitales vigentes a la fecha del presente, se recomienda a los inversores consultar con sus asesores legales y leer las normas del Banco Central, el Decreto N° 616/2005, la Resolución N° 3/2015 del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, las Comunicaciones “A” 6037, 6058, 6163, 6168, 6244 y 6443 del Banco Central y la Ley de Régimen Penal Cambiario N° 19.359 y normas complementarias, para lo cual las partes interesadas podrán consultar el sitio web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (<http://www.infoleg.gov.ar>) o del Banco Central (<http://www.bcra.gov.ar>).

D) CARGA TRIBUTARIA

Régimen impositivo argentino

El siguiente es un resumen al sólo efecto informativo de ciertas cuestiones relativas a la carga tributaria de las Obligaciones Negociables basado en las normas vigentes en la Argentina en la fecha de este Prospecto. Si bien se considera que este resumen constituye una correcta interpretación de las normas vigentes a la fecha de este Prospecto, no puede asegurarse que las autoridades gubernamentales o tribunales responsables de la aplicación de esas normas vigentes estarán de acuerdo con la interpretación contenida en él o que no habrá cambios en esas normas vigentes, inclusive con efectos retroactivos, o en su interpretación por parte de tales autoridades gubernamentales o tribunales. Se recomienda a los potenciales compradores de las Obligaciones Negociables consultar con sus propios asesores impositivos respecto de las consecuencias emanadas de las leyes impositivas del país del cual son residentes, de una inversión en las Obligaciones Negociables, incluyendo, entre otras, el cobro de intereses y la venta, rescate u otra forma de enajenación de las Obligaciones Negociables.

Impuesto a las Ganancias

En virtud de las modificaciones introducidas por la Ley 27.430 del 27 de diciembre de 2017 (la “Reforma Tributaria”), para los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2018, inclusive, la ganancia neta de fuente argentina de las personas humanas y de las sucesiones indivisas derivada de resultados en concepto de intereses y de operaciones de enajenación de ciertos valores, entre ellos las Obligaciones Negociables, se encuentran gravados por el Impuesto a las Ganancias a una alícuota del 5% en el caso de valores en moneda nacional sin cláusula de ajuste o del 15% en el caso de valores en moneda nacional con cláusula de ajuste o en moneda extranjera.

La ganancia bruta por la enajenación de las Obligaciones Negociables realizada por personas humanas residentes en Argentina y/o por sucesiones indivisas radicadas en Argentina se determina deduciendo del precio de transferencia el costo de adquisición. De tratarse de valores en moneda nacional con cláusula de ajuste o en

moneda extranjera, las actualizaciones y diferencias de cambio no son consideradas como integrantes de la ganancia bruta. Para la determinación de la ganancia bruta en el caso de Obligaciones Negociables cuyas ganancias por enajenación hubieran estado exentas o no gravadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Reforma Tributaria, el costo a computar es el último precio de adquisición o el último valor de cotización de los valores al 31 de diciembre de 2017, el que fuera mayor. Por su parte, el Decreto 1170/2018 ha establecido que, a estos efectos, podrá optarse por afectar los intereses o rendimientos del período fiscal 2018 al costo computable del título u obligación que los generó, en cuyo caso dicho costo deberá disminuirse en el importe del interés o rendimiento afectado.

En lo que refiere a los intereses y ganancias de capital que obtengan las sociedades de capital (en general: las sociedades anónimas), incluidas las sociedades anónimas unipersonales, las sociedades en comandita por acciones, en la parte que corresponda a los socios comanditarios, y las sociedades por acciones simplificadas del Título III de la Ley N° 27.349, constituidas en el país; las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en comandita simple y la parte correspondiente a los socios comanditados de las sociedades en comandita por acciones; las asociaciones, fundaciones, cooperativas y entidades civiles y mutualistas, constituidas en el país, en cuanto no corresponda por la ley de Impuesto a las Ganancias otro tratamiento impositivo; las sociedades de economía mixta, por la parte de las utilidades no exentas del impuesto; las entidades y organismos a que se refiere el Artículo 1 de la Ley N° 22.016; los fideicomisos constituidos en el país conforme a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, excepto aquéllos en los que el fiduciante posea la calidad de beneficiario; los fondos comunes de inversión constituidos en el país, no comprendidos en el primer párrafo del Artículo 1 de la Ley N° 24.083 y sus modificaciones y normas complementarias; las sociedades incluidas en el inciso b) del Artículo 49 y los fideicomisos comprendidos en el inciso c) del mismo artículo de la Ley de Impuesto a las Ganancias que opten por tributar conforme a las disposiciones aplicables a las sociedades de capital cumpliendo los requisitos exigidos para el ejercicio de esa opción (“Entidades Argentinas”), que sean tenedoras de Obligaciones Negociables, dichos intereses y/o resultados por operaciones de compra-venta, canje, permuta o enajenación de Obligaciones Negociables también estarán alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, a una alícuota del 30% para ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019, y del 25% para ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2020, así como también una retención adicional al momento en que dichas sociedades distribuyan dividendos o utilidades generados por ganancias obtenidas en ejercicios fiscales iniciadas a partir del 1 de enero de 2018.

La Reforma Tributaria establece normas específicas para la imputación de la ganancia proveniente de valores que devenguen intereses y rendimientos, y la existencia de quebrantos específicos por determinado tipo de inversiones y operaciones dependiendo del sujeto que las realice. En el caso de personas humanas y sucesiones indivisas residentes en Argentina, los quebrantos específicos pueden compensarse exclusivamente con ganancias futuras derivadas de la misma fuente y clase. Los inversores deberán considerar las disposiciones que les resulten aplicables según su caso concreto.

Por último, a partir del 1° de enero de 2018, tanto los intereses de las Obligaciones Negociables como sus rentas y resultados de operaciones de su enajenación, obtenidos por beneficiarios del exterior (comprendidos en el Título V de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que se refiere a personas humanas, sucesiones indivisas o personas ideales residentes en el extranjero que obtengan una renta de fuente argentina) (“Beneficiarios del Exterior”) se encuentran exentos del impuesto a las ganancias en virtud de lo dispuesto por el inciso w) del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, en la medida en que se trate de obligaciones negociables a las que se refiere el Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables y siempre que tales Beneficiarios del Exterior no residan en jurisdicciones no cooperantes o los fondos invertidos no provengan de jurisdicciones no cooperantes. En relación con esta exención se establece que la CNV está facultada a reglamentar y fiscalizar, en el ámbito de su competencia, las condiciones establecidas en el artículo 20 inciso w) de la Ley de Impuesto a las Ganancias de conformidad con la Ley de Mercado de Capitales.

Por su parte, el artículo 15.2 de la Ley de Impuesto a las Ganancias define a las “*jurisdicciones no cooperantes*” como aquellos países o jurisdicciones que no tengan vigente con Argentina un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula amplia de intercambio de información. Asimismo, considera como no cooperantes aquellos países que, teniendo vigente un acuerdo con los alcances antes definidos, no cumplan efectivamente con el intercambio de información. Además, los acuerdos y convenios aludidos deberán cumplir con los estándares internacionales de transparencia e intercambio de información en materia fiscal a los que se haya comprometido Argentina. Por último, ese artículo establece que el Poder Ejecutivo Nacional elaborará un listado de las jurisdicciones no

cooperantes con base en el criterio antes descripto.

Sin perjuicio de ello, el Poder Ejecutivo de la Nación emitió el Decreto N° 279/2018, cuyo artículo 7 establece que hasta tanto sea reglamentado el artículo 15.2 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, para determinar si una jurisdicción es cooperante se verificará si está incluida en el listado vigente publicado por la AFIP en el marco del Decreto N° 589 del 27 de mayo de 2013. La lista puede consultarse en <http://www.afip.gob.ar/jurisdiccionesCooperantes/#ver>.

El inciso w) del Artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias exime a los Beneficiarios del Exterior respecto de los intereses o rentas y/o ganancias de capital derivadas de la enajenación de Obligaciones Negociables en tanto las Obligaciones Negociables se emitan de acuerdo con la Ley de Obligaciones Negociables, y califiquen para la exención impositiva conforme al artículo 36 de dicha ley.

Conforme a ese artículo 36, los intereses sobre las Obligaciones Negociables estarán exentos si se cumplen las siguientes condiciones (las “Condiciones del Artículo 36”):

(a) las Obligaciones Negociables deben colocarse por medio de una oferta pública autorizada por la CNV en cumplimiento de la Resolución Conjunta;

(b) los fondos provenientes de la emisión de dichas Obligaciones Negociables deben destinarse, en virtud de resoluciones societarias que autorizan la oferta, a (i) inversiones en activos tangibles situados en la Argentina, (ii) financiamiento de capital de trabajo a ser utilizado en Argentina, (iii) refinanciación de pasivos, o (iv) financiamiento de aportes de capital a sociedades de propiedad del Emisor de las Obligaciones Negociables o vinculadas con ella, a condición de que dichas sociedades utilicen los fondos de dichos aportes para los fines especificados en los puntos (i), (ii) o (iii) de este párrafo (b);

(c) la emisora debe presentar pruebas a la CNV, en el tiempo y forma prescriptos por las reglamentaciones de que los fondos obtenidos de la emisión han sido utilizados para los fines descriptos en el punto (b); y

(d) el plazo mínimo de amortización total de las obligaciones no podrá ser inferior a los 2 años. Por otra parte, en caso de emitirse con cláusula de amortización parcial, se deberán cumplir con condiciones adicionales, a saber: (i) la primera amortización no podrá efectuarse hasta transcurridos 3 meses ni podrá ser superior al 25% de la emisión; (ii) la segunda amortización no se efectuará hasta transcurridos los 12 meses ni podrá superar el 25% de la emisión; (iii) el total a amortizar dentro de los primeros 18 meses no podrá exceder el 75% de la emisión.

Después de la emisión de las Obligaciones Negociables, la respectiva entidad debe presentar ante la CNV los documentos requeridos por la Resolución Conjunta. En oportunidad de la aprobación de esa presentación por la CNV, las Obligaciones Negociables gozarán del tratamiento de exención fiscal establecido en el artículo 36 bis de la Ley de Obligaciones Negociables, a condición de que se satisfagan las Condiciones del Artículo 36.

Sin embargo, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Obligaciones Negociables, si posteriormente se determinara que la entidad emisora ha violado las Condiciones del Artículo 36 o no ha cumplido con ellas, la responsabilidad por el pago de dichos impuestos respecto de los que habrían estado exentos los tenedores de las Obligaciones Negociables recaerá en dicha emisora. En consecuencia, independientemente de cualquier violación o incumplimiento posterior de cualquier emisora de las Condiciones del Artículo 36, los tenedores de las Obligaciones Negociables tendrán derecho a percibir el monto total adeudado como si no se hubiera requerido ninguna retención.

En caso que el Beneficiario del Exterior resida en una jurisdicción no cooperante o los fondos provengan de una jurisdicción no cooperante, tampoco aplica la exención prevista en el artículo 20, inciso w) de la Ley de Impuesto a las Ganancias y, por lo tanto, el impuesto correspondiente será ingresado vía retención con carácter de pago único y definitivo. En el caso de los intereses o rendimientos provenientes de las Obligaciones Negociables (cumplan o no las Requisitos del Art. 36) están sujetos a las siguientes alícuotas efectivas de retención (conforme arts. 4 del Decreto N° 279/2018 y 10 de la Resolución General (AFIP) N° 4227/2018): (a) del 15,05% cuando el beneficiario de los intereses sea una entidad bancaria o financiera sujeta a la supervisión del respectivo banco central u organismo equivalente, y siempre que: (i) no esté radicado en jurisdicciones consideradas de baja o nula tributación, o (ii) que esté radicado en una jurisdicción en que haya suscripto con Argentina un convenio de intercambio de información y además que, por aplicación de sus normas internas, no pueda alegarse secreto financiero, bursátil o de otro tipo, ante el pedido de información fiscal; o (b) al 35% en los demás casos. En el caso de los beneficios resultantes de la enajenación de las obligaciones negociables, los

misimos estarán sujetos a retención conforme a una alícuota efectiva del 31,5% (arts. 4 del Decreto N° 279/2018 y 10 de la Resolución General (AFIP) N° 4227/2018).

Con fecha 27 de diciembre de 2018, se publicó en el B.O. el Decreto N° 1170/2018, que modificó el Decreto Reglamentario de la Ley de Impuesto a Las Ganancias a fin de adecuarlo a las últimas modificaciones introducidas por la Reforma Tributaria.

Por un lado, establece respecto de la tributación de rentas que provengan de fondos comunes de inversión, fideicomisos y títulos valores, como las Obligaciones Negociables, entre otros, de personas humanas y sucesiones indivisas residentes o radicadas, respectivamente, en Argentina, que el gravamen regirá para los beneficios obtenidos a partir del 1 de enero de 2018, es decir que se tendrán en cuenta los ingresos obtenidos por todas operaciones realizadas durante el año 2018. Asimismo, establece el Decreto que a los efectos de lo dispuesto en relación al Capítulo II del Título IV de la ley, cuando se trate de títulos públicos y obligaciones negociables alcanzados por el impuesto a las alícuotas del 5%-15%, conforma se encuentren gravados en moneda nacional sin cláusula de ajuste o sea en moneda nacional con cláusula de ajuste o moneda extranjera, respectivamente, podrá optarse por afectar los intereses o rendimientos del período fiscal 2018 al costo computable del título u obligación que los generó, en cuyo caso el mencionado costo deberá disminuirse en el importe del interés o rendimiento afectado.

Entre otros aspectos la reglamentación, en concordancia con lo indicado en la Reforma Tributaria al definir a las “*jurisdicciones no cooperantes*” (i.e., aquellos países o jurisdicciones que no tengan vigente con la República Argentina un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula amplia de intercambio de información) se establece que se entenderá que los acuerdos y convenios cumplen con los estándares internacionales de transparencia e intercambio de información en materia fiscal, cuando las partes se comprometen a utilizar las facultades que tienen a su disposición para recabar la información solicitada sin que puedan negarse a proporcionarla por el mero hecho de que: (i) obre en poder de un banco u otra institución financiera, de un beneficiario u otra persona que actúe en calidad de agente o fiduciario, o; (ii) esa información se relacione con la participación en la titularidad de un sujeto no residente en el país.

Destacamos que las Resoluciones Generales (AFIP) 4394 y 4395 han dispuesto que las entidades financieras, los agentes registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV) y las sociedades depositarias de fondos comunes de inversión deberán informar a la AFIP las operaciones efectuadas por sus clientes, personas humanas y sucesiones indivisas, por las que se paguen o pongan a disposición intereses o rendimientos que puedan estar alcanzados por el Impuesto a las Ganancias; entre los cuales se encuentran incluidos los provenientes de títulos públicos, obligaciones negociables, cuotapartes de fondos comunes de inversión, títulos de deuda de fideicomisos financieros y contratos similares, bonos y demás valores. La información a suministrar por las mencionadas resoluciones es la correspondiente al año calendario 2018, mientras que a partir del año 2019, se encuentra vigente un régimen de información de similares características -dispuesto por la Resolución General G (AFIP) 4298-.

Impuesto sobre los Bienes Personales

A partir del 21 de diciembre de 2018, en virtud de las modificaciones introducidas en la ley 23.966 de Impuesto sobre los Bienes Personales por la Ley 27.480, las personas humanas y las sucesiones indivisas domiciliadas en el país o en el exterior que sean consideradas “tenedores directos” de Obligaciones Negociables están sujetos al Impuesto Sobre los Bienes Personales cuando el valor de dichos activos tomado en conjunto supere el monto total de \$2.000.000 (aplicable para el período fiscal 2019 en adelante).

En caso de que el valor en conjunto de los bienes existentes al 31 de diciembre exceda la suma mencionada en el párrafo anterior, el IBP aplicará exclusivamente sobre los montos que excedan dicha suma, calculándose el impuesto de la siguiente manera:

- (i) en los casos en que el valor de los activos supere \$2.000.000 y hasta el importe de \$3.000.000, se abonará un impuesto igual al 0,25% calculado sobre la totalidad del monto del activo;
- (ii) en los casos que el valor del activo sea de entre \$3.000.000 y \$18.000.000 se abonará un monto fijo de impuesto de \$ 7.500 más un monto igual al 0,50% sobre el valor del activo en exceso de \$ 3.000.000; y

(iii) finalmente para los casos en los que el valor del activo sea superior a \$18.000.000, se abonará un monto fijo de \$ 82.500 más el 0,75% sobre el valor en exceso de \$ 18.000.000.

Los fideicomisos no financieros, excepto cuando el fiduciante sea el Estado Nacional, provincial, municipal o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o aquéllos que se encuentren destinados al desarrollo de obras de infraestructura que constituyan un objetivo prioritario y de interés del Estado Nacional, estarán sujetos al Impuesto sobre los Bienes Personales que será liquidado e ingresado por quienes asuman la calidad de fiduciarios. El impuesto así ingresado tendrá el carácter de pago único y definitivo. En caso que el Estado Nacional, provincial, municipal o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires compartan la calidad de fiduciante con otros sujetos, el gravamen se determinará sobre la participación de estos últimos, excepto en los fideicomisos que desarrollen las obras de infraestructura a que se refiere este párrafo. Se presume sin admitir prueba en contrario, que los bienes que integran el fideicomiso pertenecen de manera directa o indirecta a sujetos pasivos del gravamen.

En cuanto a las personas físicas domiciliadas en el exterior y las sucesiones indivisas allí radicadas, tales sujetos están alcanzados por el IBP sobre el valor de los bienes de su titularidad situados en Argentina a una alícuota del 0,25% a partir del año 2018 y siguientes. No corresponde ingresar el impuesto cuando su importe resulte igual o inferior a \$250. El impuesto se aplica por referencia al valor de mercado de las Obligaciones Negociables (o los costos de adquisición, más los intereses y diferencias de cambio devengadas, en el caso de Obligaciones Negociables sin oferta pública) al 31 de diciembre de cada año calendario.

Si bien el Impuesto sobre los Bienes Personales grava solamente los títulos valores que se encuentran en poder de personas humanas o sucesiones indivisas, según lo descripto precedentemente, dicho impuesto establece una presunción legal que no admite prueba en contrario en virtud de la cual los títulos valores emitidos por emisoras privadas argentinas y cuya titularidad directa corresponda a una persona jurídica extranjera que (a) esté domiciliada en una jurisdicción que no requiere la nominatividad de las acciones o títulos privados, y (b) ya sea (i) de conformidad con sus estatutos o el régimen regulatorio aplicable a dicha persona jurídica extranjera, sólo puede realizar actividades de inversión fuera de la jurisdicción de su constitución, o (ii) no puede realizar ciertas operaciones autorizadas por sus estatutos o el régimen regulatorio aplicable en su jurisdicción de constitución, se consideran pertenecen a personas humanas domiciliadas o sucesiones indivisas situadas en Argentina y, por lo tanto, están sujetos al Impuesto sobre los Bienes Personales. En tal caso, la ley impone la obligación de pagar el Impuesto sobre los Bienes Personales, de acuerdo a las alícuotas indicadas en el segundo párrafo de esta sección, al emisor de los títulos valores correspondientes (el “Obligado Sustituto”). La normativa legal del impuesto autoriza asimismo al Obligado Sustituto a procurar el reintegro del monto pagado de esta manera, sin limitación, mediante retención o ejecución de los activos que dieron origen a dicho pago.

La presunción legal precedente no se aplica a las siguientes personas jurídicas extranjeras que sean titulares directas de títulos valores, tales como las Obligaciones Negociables: (a) compañías de seguros; (b) fondos comunes de inversión abiertos; (c) fondos de pensiones y jubilaciones; y (d) bancos o entidades financieras cuya casa central está constituida en un país cuyo banco central o autoridad equivalente ha adoptado las normas internacionales de supervisión establecidas por el Comité de Basilea.

Asimismo, el Decreto N° 812/96, de 24 de julio de 1996, dispone que la presunción legal analizada precedentemente no se aplicará a acciones y títulos privados relacionados con deuda, tales como las Obligaciones Negociables, cuya oferta pública hubiera sido autorizada por la CNV y que sean negociables en las bolsas de valores situadas en Argentina o en el extranjero. Con el objeto de garantizar que esta presunción legal no se aplicará a las Obligaciones Negociables y que las emisoras no serán responsables como Obligados Sustitutos por el Impuesto sobre los Bienes Personales, de conformidad con la Resolución N° 2.151 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, las emisoras deben conservar en sus registros una copia debidamente certificada de la resolución de la CNV que autoriza la oferta pública de las Obligaciones Negociables y constancias que verifiquen que dicho certificado o autorización estaba vigente al 31 de diciembre del año en que tuvo lugar la obligación tributaria.

Adicionalmente, la Ley N° 27.260 estableció en su artículo 63 que los contribuyentes que cumplieron con sus obligaciones tributarias correspondientes a los ejercicios fiscales inmediatamente anteriores a 2016 y que cumplen con el artículo 66 (en general, no poseer deudas pendientes con la AFIP y no haberse adherido al régimen de exteriorización voluntaria de los impuestos contemplados por la Ley N° 27.260) se beneficiarán de una exención en lo que respecta al Impuesto sobre los Bienes Personales para los períodos fiscales 2016, 2017 y 2018.

Impuesto al Valor Agregado

Los pagos de intereses efectuados respecto de las Obligaciones Negociables estarán exentos del pago del Impuesto al Valor Agregado en la medida en que las Obligaciones Negociables se emitan de conformidad con una oferta pública autorizada por la CNV.

Por otra parte, en tanto las Obligaciones Negociables cumplan las Condiciones del Artículo 36, los beneficios relacionados con la oferta, suscripción, colocación, transferencia, amortización o cancelación de las Obligaciones Negociables no estarán gravados por el Impuesto al Valor Agregado en Argentina.

Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta

El Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta grava el valor de activos tales como las Obligaciones Negociables en poder de sociedades y otras entidades residentes de Argentina. Las sociedades domiciliadas en Argentina, entre otras, están sujetas al pago del impuesto a una alícuota del 1% (0,20% en el caso de compañías de leasing, compañías de seguro o entidades financieras locales), en tanto el valor total de tales activos supere los \$ 200.000. Este impuesto sólo será pagadero por dicho contribuyente en la medida en que exceda el impuesto a las ganancias determinado para cualquier ejercicio económico. Cualquier Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta que se pague se aplicará como un crédito contra el Impuesto a las Ganancias que deba pagarse en los diez ejercicios económicos siguientes con sujeción a ciertas limitaciones.

El valor imponible de las Obligaciones Negociables se determinará de la siguiente manera: (i) si las Obligaciones Negociables están listadas en un mercado autorregulado, en base a la última cotización en la fecha de cierre del ejercicio económico correspondiente; y (ii) si las Obligaciones Negociables no están listadas en un mercado autorregulado, en base a su costo, incrementado, de corresponder, por el monto de intereses y diferencias de cambio devengadas en la fecha de cierre del ejercicio económico.

La ley que creó el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta entró en vigencia el 31 de diciembre de 1998 y dispuso su aplicación por el término de diez ejercicios anuales. La vigencia de este impuesto fue prorrogada hasta el 30 de diciembre de 2019 por la Ley N° 26.545. No obstante, en virtud de la Ley N° 27.260, se derogó el impuesto a la ganancia mínima presunta para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2019.

Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias

La Ley N° 25.413 (publicada en el Boletín Oficial el 26 de marzo de 2001), con sus modificaciones, establece, con ciertas excepciones, un impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas corrientes mantenidas en entidades financieras situadas en la Argentina y sobre otras operaciones que reemplacen el uso de cuentas corrientes bancarias. La alícuota general es del 0,6% en el caso de débitos y créditos (si bien, en ciertos casos, puede aplicarse una del 1,2% y/o una del 0,075%). El Decreto N° 534/04 (publicado en el Boletín Oficial el 3 de mayo de 2004) establece que el 34% del impuesto pagado sobre los créditos gravados a una alícuota del 0,6% y 17% del impuesto pagado sobre transacciones gravadas a una alícuota del 1,2% podrá utilizarse como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias e Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y/o a la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas.

La Reforma Tributaria estableció la prórroga de este impuesto hasta el 31 de diciembre del 2022, inclusive. Asimismo, dicha ley faculta al Poder Ejecutivo Nacional a aumentar el importe computable como pago a cuenta de otros impuestos en forma progresiva (20% anual) desde el 01/01/2018, hasta que en el año 2022, resulte computable íntegramente contra el Impuesto a las Ganancias.

Se encuentran exentos los movimientos registrados en cuentas corrientes especiales (Comunicación “A” 3250 del BCRA) en caso de que los tenedores de tales cuentas sean entidades extranjeras y las cuentas sean utilizadas exclusivamente en relación con inversiones financieras en Argentina (ver el Artículo 10, inciso (s) del Anexo del Decreto número 380/2001 y su decreto modificatorio N° 1364/04).

Mediante el Decreto Reglamentario Nro. 409/2018 (B.O. 07/05/2018) se modificó el porcentaje que los titulares de cuentas bancarias alcanzados por la tasa general del 0,6% podrán computar como crédito de impuestos o de la contribución especial sobre el capital de las cooperativas, el 33% de los importes pagados en concepto de este impuesto.

Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Los inversores que en forma regular participan, o que se presume participan, en actividades en cualquier jurisdicción en la que perciban ingresos de los intereses derivados de la tenencia de obligaciones negociables, o de su venta o transmisión, podrían estar sujetos al pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos según las alícuotas establecidas por las leyes específicas de cada provincia argentina, a menos que resulte aplicable una exención. Ciertas jurisdicciones como la Provincia de Santa Fe, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires eximen los intereses, actualizaciones devengadas y el valor de venta en caso de transferencia sobre las obligaciones negociables emitidas bajo la Ley de Obligaciones Negociables cuando estuvieran exentas del impuesto a las ganancias (es decir, se hayan cumplido los Requisitos y Condiciones de Exención).

Los potenciales adquirentes deberán considerar la posible incidencia del impuesto sobre los ingresos brutos considerando las disposiciones de la legislación aplicable que pudiera resultar relevante en función de su caso concreto.

Conforme las previsiones del Consenso Fiscal suscripto por el Poder Ejecutivo Nacional, los representantes de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 16 de noviembre de 2017 - aprobado por el Congreso Nacional el 21 de diciembre de 2017 (el “Consenso Fiscal”), las jurisdicciones locales asumieron diversos compromisos en relación con ciertos impuestos que se encuentran bajo su órbita. A la fecha de este Prospecto, los Poderes Legislativos de la mayoría de esas jurisdicciones han aprobado el Consenso Fiscal y, si bien se encuentran en vías de modificar las leyes necesarias para cumplirlo y autorizar a los respectivos Poderes Ejecutivos para dictar normas a tal fin, con fecha 13 de septiembre de 2018 se firmó el segundo Consenso Fiscal, también suscripto y ya aprobado por la mayoría de las jurisdicciones, por medio del cual se ha acordado suspender algunas medidas del primer Consenso Fiscal. El Consenso Fiscal producirá efectos sólo respecto de las jurisdicciones que lo aprueben por sus legislaturas y a partir de esa fecha. En lo que refiere al impacto del Consenso en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumieron el compromiso de establecer exenciones y aplicar alícuotas máximas para ciertas actividades y períodos.

Impuestos de Sellos

Los tenedores de las Obligaciones Negociables no deberán pagar ningún impuesto de sellos en relación con resoluciones, contratos y operaciones relacionados con la emisión, suscripción, colocación y transferencia de las Obligaciones Negociables en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (según el artículo 35 de la Ley de Obligaciones Negociables).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el art 430 inciso 48 del Código Fiscal se dispone que estarán exentos de impuesto de sellos los instrumentos, actos y operaciones de cualquier naturaleza, incluyendo entregas y recepciones de dinero, vinculados y/o necesarios para posibilitar la emisión de Obligaciones Negociables destinadas a la oferta pública en los términos de la Ley 17.811 por parte de sociedades o fideicomisos financieros debidamente autorizados por la CNV a hacer oferta pública de dichos títulos valores. Por su parte en el inciso 51 del art. 430 del Código de Enjuiciamiento Civil, se dispone que esta exención ampara los instrumentos, actos y operaciones de cualquier naturaleza, incluyendo entregas y recepciones de dinero, vinculados y/o necesarios para posibilitar la emisión de Obligaciones Negociables mencionada, sean aquéllos anteriores, simultáneos, posteriores o renovaciones de estos últimos. Estarán también exentos los actos y/o instrumentos relacionados con la negociación de las Obligaciones Negociables autorizadas para su oferta pública por la CNV.

Estas exenciones quedarán sin efecto si en un plazo de 90 días corridos no se solicita la autorización para oferta pública de las Obligaciones Negociables ante la CNV y/o si la colocación de los mismos no se realiza en un plazo de 180 días corridos a partir de ser concedida la autorización solicitada.

Producto del Consenso Fiscal, las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumieron el compromiso de establecer una alícuota máxima de Impuesto a los Sellos del 0,75% a partir del 1° de enero de 2019, 0,5% a partir del 2° de enero de 2020, 0,25% a partir del 1° de enero de 2021 y eliminarlo a partir del 1° de enero de 2022.

Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes

La Ley 14.044 de la Provincia de Buenos Aires estableció un Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, entre los cuales se encontrarían las Obligaciones Negociables, que aplica cuando el beneficiario esté domiciliado en la Provincia de Buenos Aires o los bienes transmitidos se encuentren en el territorio de la Provincia.

El art. 306 del Código Fiscal provincial establece la obligatoriedad de tributar dicho impuesto cuando se cumplan las condiciones citadas y siempre que superen los mínimos no imposables que determine anualmente la ley tarifaria.

Tasa de Justicia

En caso de que fuera necesario instituir procedimientos de ejecución en relación con las Obligaciones Negociables en Argentina, se aplicará una Tasa de Justicia del 3% sobre el monto de cualquier reclamo iniciado ante los tribunales argentinos con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Exenciones fiscales sobre la oferta pública de títulos valores

Respecto de la emisión de Obligaciones Negociables, la Administración Federal de Ingresos Públicos entendió en su Dictamen (D.A.T.) N° 16 del 25 de enero de 2002 que “el requisito de colocación por oferta pública no se encontrará cumplido con la simple autorización de emisión extendida por la CNV, sino que deben llevarse a cabo los procedimientos que exija a tal fin dicho organismo regulador -los que deberían garantizar, en principio, el acceso del público en general, a las obligaciones ofertadas-, circunstancia fáctica ella que debe ser merituada por el respectivo juez administrativo”.

De conformidad con ello, destacamos que no resulta suficiente la sola autorización de la CNV para gozar del tratamiento impositivo previsto en la ley de obligaciones negociables, sino que debe existir además una efectiva oferta pública.

En este sentido, el Colocador ofrecerá públicamente los títulos en los términos del artículo 16 de la Ley de Oferta Pública. No obstante ello, se insta a los inversores a consultar a sus propios asesores al respecto.

El 14 de septiembre de 2004, la Resolución Conjunta fue publicada en el Boletín Oficial. La Resolución Conjunta dispone, en ciertos casos, una interpretación de la “exención fiscal sobre la oferta pública”. A pesar de que la interpretación de la Resolución Conjunta no goza de total certeza, ha regulado muchos factores de la exención fiscal otorgada a la oferta pública de títulos valores. Los principales aspectos de la Resolución Conjunta son los siguientes:

- El carácter de “colocación por oferta pública” de títulos valores será interpretado exclusivamente por la ley argentina (artículo 16 de la Ley de Oferta Pública).
- Los actos de oferta pública deberán ser llevados a cabo adecuadamente y la documentación de tales actos deberá ser mantenida por la emisora. Las Obligaciones Negociables no serán consideradas exentas del pago de impuestos en virtud de la mera autorización de la CNV de una oferta pública.
- Los actos de oferta pública deberán ser realizados en Argentina y según el caso, en el exterior.
- Las ofertas podrán ser realizadas al “público en general” o a un “grupo específico de inversores” (tales como compradores institucionales calificados).

La oferta podrá ser colocada mediante un “contrato de colocación”. Las Obligaciones Negociables colocadas según un contrato de colocación serán consideradas una colocación por oferta pública en tanto el Colocador efectivamente lleve a cabo actos de oferta pública de acuerdo con la ley argentina.

Fondos originados en países de baja o nula tributación

El artículo 21.7 del Decreto N° 1.344/98 y sus modificaciones dispone que toda referencia efectuada a “países de baja o nula tributación”, deberá entenderse efectuada a países no considerados “cooperadores a los fines de la transparencia fiscal”.

Se consideran países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados o regímenes tributarios especiales cooperadores a los fines de la transparencia fiscal, aquellos que suscriban con el Gobierno de la República Argentina un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información amplio, siempre que se cumplimente el efectivo intercambio de información. Dicha condición quedará sin efecto en los casos en que el acuerdo o

convenio suscripto se denuncie, deje de tener aplicación por cualquier causal de nulidad o terminación que rigen los acuerdos internacionales, o cuando se verifique la falta de intercambio efectivo de información.

La consideración como país cooperador a los fines de la transparencia fiscal podrá ser reconocida también, en la medida en que el gobierno respectivo haya iniciado con el Gobierno de la República Argentina las negociaciones necesarias a los fines de suscribir un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información amplio.

Los acuerdos y convenios aludidos en el presente artículo deberán cumplir en lo posible con los estándares internacionales de transparencia adoptados por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal, de forma tal que por aplicación de las normas internas de los respectivos países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados o regímenes tributarios especiales con los cuales ellos se suscriban, no pueda alegarse secreto bancario, bursátil o de otro tipo, ante pedidos concretos de información que les realice la República Argentina.

La Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, establecerá los supuestos que se considerarán para determinar si existe o no intercambio efectivo de información y las condiciones necesarias para el inicio de las negociaciones tendientes a la suscripción de los acuerdos y convenios aludidos.

De conformidad con una presunción legal establecida en el artículo 18.1 de la Ley 11.683, toda transferencia de fondos proveniente de un país de baja o nula tributación estará gravada de la siguiente forma:

(a) El Banco deberá pagar un impuesto a las ganancias equivalente a una tasa del 3% (para períodos fiscales iniciados hasta el 31 de diciembre de 2019) y del 25% (para períodos fiscales iniciados a partir del 1 de enero de 2020) sobre la emisora calculado sobre 110% del monto de los fondos transferidos;

(b) más impuesto al valor agregado del 21% sobre el 110% del monto de la transferencia.

A pesar de que la cobertura del concepto “transferencia desde el exterior” no resulta clara, podría ser interpretado como cualquier transferencia de fondos:

(i) desde una cuenta en un país de baja o nula tributación o desde una cuenta bancaria abierta fuera de un país de baja o nula tributación pero de titularidad de una entidad ubicada en un país de baja o nula tributación;

(ii) a una cuenta bancaria ubicada en Argentina o a una cuenta bancaria abierta fuera de Argentina pero de titularidad de una residente sujeto a impuestos de Argentina.

El residente sujeto al pago de impuestos podrá rebatir esta presunción legal demostrando fehacientemente ante el fisco que los fondos provenientes de actividades efectivamente realizadas por el contribuyente o un tercero en dicha jurisdicción o que tales fondos fueron declarados con anterioridad.

Conforme el artículo 82 de la Reforma Tributaria, a los efectos previstos en las normas legales y reglamentarias, toda referencia efectuada a “países de baja o nula tributación” o “países no considerados ‘cooperadores a los fines de la transparencia fiscal’”, deberá entenderse que hace alusión a “jurisdicciones no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación”, en los términos dispuestos por los artículos segundo y tercero agregados a continuación del artículo 15 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.

Por su parte, el artículo sin número a continuación del artículo sin número agregado a continuación del artículo 15 de la Ley de Impuesto a las Ganancias define a las “jurisdicciones no cooperantes” como aquellos países o jurisdicciones que no tengan vigente con Argentina un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula amplia de intercambio de información. Asimismo, considera como no cooperantes aquellos países que, teniendo vigente un acuerdo con los alcances antes definidos, no cumplan efectivamente con el intercambio de información. Además, los acuerdos y convenios aludidos deberán cumplir con los estándares internacionales de transparencia e intercambio de información en materia fiscal a los que se haya comprometido Argentina. Por último, ese artículo establece que el Poder Ejecutivo Nacional elaborará un listado de las jurisdicciones no cooperantes con base en el criterio antes descripto. Por su parte, el Decreto 279/18 dispuso que hasta tanto dicho listado sea elaborado, a los fines de determinar si una jurisdicción es “cooperante” debe consultarse el listado elaborado y actualizado

por AFIP en el marco del Decreto 589/13 y que se encuentra publicada en su sitio web en el siguiente link: <http://www.afip.gob.ar/jurisdiccionesCooperantes>.

Con fecha 27 de diciembre de 2018, se publicó en el B.O. el Decreto N° 1170/2018, que modificó el Decreto Reglamentario de la Ley de Impuesto a Las Ganancias a fin de adecuarlo a las últimas modificaciones introducidas a la Ley de dicho tributo por la Reforma Tributaria. Entre otros aspectos la reglamentación, en concordancia con lo indicado en la Reforma Tributaria al definir a las “jurisdicciones no cooperantes” (i.e., aquellos países o jurisdicciones que no tengan vigente con la República Argentina un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula amplia de intercambio de información) establece que se entenderá que los acuerdos y convenios cumplen con los estándares internacionales de transparencia e intercambio de información en materia fiscal, cuando las partes se comprometen a utilizar las facultades que tienen a su disposición para recabar la información solicitada sin que puedan negarse a proporcionarla por el mero hecho de que: (i) obre en poder de un banco u otra institución financiera, de un beneficiario u otra persona que actúe en calidad de agente o fiduciario, o; (ii) esa información se relacione con la participación en la titularidad de un sujeto no residente en el país.

En cuanto a las jurisdicciones de baja o nula tributación, la Ley de Impuesto a las Ganancias las define como aquellos países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados o regímenes tributarios especiales que establezcan una tributación máxima a la renta empresaria inferior al sesenta por ciento (60%) de la alícuota contemplada en el inciso a) del artículo 69 de esa ley.

E) DOCUMENTOS A DISPOSICIÓN

Este Prospecto y los estados contables incluidos en el mismo se encuentran a disposición de los interesados en el domicilio del Banco, sito en Avenida de Mayo 701, Piso 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1084AAC), Argentina, teléfono +54 (11) 4132-6038 (oficina de “Relación con Inversores”), y en la Autopista de Información Financiera de la página web de la CNV (<http://www.cnv.gov.ar>) en el ítem: “Información Financiera” bajo el Emisor.

EMISOR Y ORGANIZADOR

Banco Patagonia S.A.
Avenida de Mayo 701, Piso 24
(C1084AAC)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

ASESORES LEGALES

EGFA - Errecondo, Gonzalez & Funes Abogados
Bouchard 680, Piso 14
(C1006ABH)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

AUDITORES

KPMG Sociedad Civil
(firma miembro de KPMG Internacional)
Bouchard 710
(C1106ABL)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina